TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Ref: VERBAL de ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA de CLODOVEO OLIVERIO MANCERA LEÓN contra CARLOS JULIO LUQUE GARZÓN y AURA INÉS ALBA CHISICA Exp. 015-2018-00549-01.

MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS.

Discutido y aprobado en Salas de Decisión del 1° y 15 de marzo del 2023.

Decide el Tribunal el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia dictada el 4 de marzo del 2022[1] *en el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá.*

I. ANTECEDENTES

1.- Clodoveo Oliverio Mancera León entabló demanda verbal contra Carlos Julio Luque Garzón y Aura Inés Alba Chisica con el propósito que se declare que los demandados se enriquecieron sin justa causa en cuantía de $162.730.200 por las mejoras y construcciones realizadas en el inmueble ubicado en la calle 57G sur No. 70 A-29 de la ciudad de Bogotá, en tanto que el demandante ha padecido un empobrecimiento correlativo; por ende, las convocadas deberán pagarle la referida suma, junto con la correspondiente corrección monetaria, más la suma de $21.000.000 por concepto de perjuicios (Pág. 67, derivado 01Demanda, exp. digital).

---

[1] *Remitida por el despacho a-quo solo hasta el 13 de febrero del 2023, y repartida al despacho del Magistrado Sustanciador el 14 de febrero siguiente.*

2.- Las súplicas se apoyan en los fundamentos fácticos que enseguida se sintetizan (págs. 65 a 67, ib):

2.1.- Entre demandante y demandados se acordó de manera verbal la venta futura del inmueble ubicado en la calle 57G sur No. 70 A-29. El día 4 de abril del 2004 los promitentes vendedores le hicieron entrega material del predio al actor quien tomó posesión del mismo.

2.2.-En esa condición de señor y dueño, el demandante inició la construcción de varias mejoras en el citado bien, adecuando los pisos 1°, 2°, 3° y 4° e instalando redes de gas y energía eléctrica. Tales construcciones se financiaron con los recursos del señor Mancera, como ahorros de cesantías, ingresos de su pensión, entre otros.

2.3.- Carlos Julio Luque y Aura Inés Alba, en una actuación de mala fe, desconocieron el acuerdo de venta y actualmente disfrutan de las mejoras realizadas por el actor.

2.4.- El demandante formuló demanda de cumplimiento de contrato de promesa de venta, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, estrado judicial que mediante fallo del 29 de enero del 2018 declaró nulo el negocio jurídico, sin embargo, nada manifestó respecto a las mejoras útiles y obras realizadas por el señor Mancera León.

3.- Los convocados se notificaron personalmente (pág. 108. Ib) y en tiempo contestaron el libelo; propusieron las excepciones de mérito que denominaron "cosa juzgada"; "inexistencia del acto jurídico" y "prescripción" (págs. 157 a 175, ej).

4.- Surtidas las etapas de rigor, se dictó sentencia que resolvió negar todas las pretensiones, providencia que no compartió el actor por lo que interpuso la alzada que ahora se resuelve.

II. PROVIDENCIA APELADA

5.- El Juez a quo, tras hacer alusión a los acostumbrados antecedentes, encontró reunidos los presupuestos procesales y enseguida, realizó un recuento del marco normativo y jurisprudencial que regula la figura del enriquecimiento sin causa, aspecto en el que resaltó los presupuestos axiológicos para la prosperidad de dicha acción, como lo son el enriquecimiento del demandado y empobrecimiento correlativo del demandante, la ausencia de causa legal que lo justifique y la imposibilidad

del empobrecido de ejercer otra acción judicial viable para procurar el restablecimiento patrimonial que persigue.

Para el caso concreto sostuvo que las pruebas dan cuenta que entre las partes se celebró un contrato de promesa de venta -negocio posteriormente declarado nulo por autoridad judicial-, el cual dio lugar a que el demandante, promitente comprador, construyera en el inmueble unas mejoras cuyo pago reclama a través de la acción de enriquecimiento sin causa, de tal modo, determinó que "no puede hablarse de un desplazamiento patrimonial" injustificado.

Agregó que, si bien el actor se abstuvo de reclamar las mejoras al interior del proceso que cursó entre las partes en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, aún cuenta con acción judicial para ello (proceso declarativo de reclamación de mejoras), diferente a la acá ejercida.

En definitiva, concluyó que no concurre el requisito de subsidiariedad para la prosperidad de la acción invocada, conllevando la negativa de lo pretendido.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

6.- Alegó el recurrente, en síntesis, que el juzgado a-quo erró en la valoración de las pruebas, pues de ellas puede extraerse que a pesar del negocio jurídico de promesa de compraventa el demandante fue afectado en su patrimonio, puesto que con él fueron financiadas las mejoras al predio prometido en venta, que ahora se encuentra en tenencia de los convocados.

Añadió que los demandados han actuado continuamente de mala fe lo que se reflejó en los interrogatorios de parte por ellos absuelto, en el que se nota cómo de manera engañosa e indolente despojaron al señor Mancera León de su patrimonio. En esa misma dirección, apuntó que la declaración de parte del actor hace ver con "inmensa claridad" la forma en la que invirtió su dinero en las mejoras del inmueble, circunstancia que hoy en día lo tiene totalmente empobrecido.

6.1.- Por auto adiado 24 de febrero de la presente anualidad se ordenó correr el traslado previsto en el inciso 3° del artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, a la parte activa para que sustente su alzada.

6.2.- A través de escrito enviado por correo electrónico a la Secretaría de este Tribunal la apelante -demandante- sustentó en debida forma sus reparos, frente al cual convocado guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, como son demanda en forma, capacidad para ser parte, comparecer y competencia concurren en la litis, además como no se observa causal de invalidez que anule la actuación se impone una decisión de mérito.

2.- Con miras a desatar la apelación formulada por el extremo demandante, debe decirse que este recurso se endereza a que el Superior revise la actuación del juzgador de primera instancia, pero inmerso siempre dentro del criterio dispositivo, por lo que es al apelante a quien le corresponde determinar el ámbito dentro del cual ha de moverse el ad-quem al momento de tomar la decisión.

3.- Desde esta perspectiva, se tiene que el problema jurídico a resolver consiste en determinar: i) si están demostrados los elementos axiológicos de la acción de enriquecimiento sin causa y ii) si se presentó una indebida valoración probatoria.

4.- Adviértase que toda obligación, sin excepción, responde a un motivo, una razón de ser (sine causa nulla obligatio); debe su vida, en una palabra, a cuando menos una de las fuentes de las obligaciones. Las personas resultan obligadas, ya porque contratan, ora porque manifiestan válidamente una declaración de voluntad, bien porque incurren en un hecho ilícito, entre otras, no obstante, la doctrina ha agregado otra especie: el enriquecimiento ilícito.

4.1.- Igualmente, se tiene que desde el derecho antiguo figuraba el principio de que nadie podía enriquecerse a expensas de otro injustamente. La ley romana ideó diversos medios para impedirlo, de los cuales fue la "actio in rem verso" la acción adoptada por la doctrina universal, coincidente por su origen y alcance con aquélla.

4.2.- Así mismo, la jurisprudencia de antaño ha sido uniforme al indicar que la teoría en estudio es aplicable a los litigios en los que se demuestre que el patrimonio de una de las partes sufrió mengua por la ejercicio ilegal o injusto de otro contratante o de un tercero que se

enriqueció a expensas suyas. Y desde esa época se sentó como principio orientador de la diferencia que existe entre esta acción de in rem verso con aquella establecida "para pedir la repetición del pago de lo no debido y a la que nace de los hechos ilícitos", de ahí que, presentado dicho fenómeno surge a favor de la persona empobrecida una pretensión restitutoria encaminada a restablecer la integridad de su patrimonio con referencia al de su contraparte.

De otra parte, en punto de la acción referida, tanto la jurisprudencia como la doctrina, uniformemente han señalado que ese remedio subsidiario constituye un recurso "in extremis" para afrontar un problema de justicia conmutativa atendida la circunstancia de mediar un personal empobrecimiento, habilitándose así la posibilidad de obtener la restitución de aquello en que el primero resultó enriquecido o expresado en otros términos, desplazamiento de valores que produzca un incremento patrimonial en determinado sujeto a costa del patrimonio de otro, consumado de una manera apenas en apariencia conforme a derecho, pero en el fondo desprovisto de justificación, que pueda servirle de base y que, por lo tanto, le atribuye al perjudicado la condigna acción de reembolso, a condición eso sí, de que se interponga en subsidio de toda otra acción (sentencia de junio 9 de 1971 C. S. J.).

En definitiva, para la prosperidad de la misma es menester la concurrencia de los siguientes supuestos axiológicos: ***a) que haya habido un enriquecimiento; b) un empobrecimiento correlativo; c) es preciso que ese enriquecimiento haya sido injusto o sin causa; d) es preciso que el enriquecimiento no haya tenido ningún otro medio para obtener satisfacción, puesto que la acción de in rem verso tiene un carácter esencialmente subsidiario; y e) por último esta acción no puede jamás ejercitarse contra una disposición imperativa de la ley*** *, la falta de uno de ellos da al traste con la acción.*

5.- Al amparo de la orientación que precede se adentrará la Sala en el estudio de los requisitos a los que se ha hecho alusión, con el propósito de determinar si están cumplidos los mismos y, por ende, la actio in rem verso se encuentra llamada a prosperar, dejando en claro que esos elementos, se itera, son concurrentes, es decir, que la ausencia de uno de ellos conlleva automáticamente a la negativa de las pretensiones de la demanda, sin que resulte necesario acometer el análisis de los demás.

5.1 En el presente litigio, el análisis de la demanda, la oposición y las pruebas recaudadas permiten constatar sin dificultad que el restablecimiento patrimonial que persigue el demandante se deriva de las sumas que habría pagado para construir varias mejoras en el inmueble ubicado en la calle 57G sur No. 70 A-29 de la ciudad de Bogotá, predio que

en el año 2006 fue objeto de un contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes y que se encontraba en la tenencia del actor, promitente comprador, desde el año 2004.

Puesto que el citado negocio jurídico fue declarado nulo absolutamente en la sentencia que emitió el 29 de enero del 2018 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, sin que en dicho fallo se hiciera alusión a las mejoras implantadas, como en principio lo hace perentorio el artículo 1746 del Código Civil, en consonancia con los artículos 966 y 967 ibídem (pág. 111 a 112, archivo 01Demanda), concluye la Sala que nada impide que el señor Clodoveo Mancera ejercite la acción declarativa correspondiente para el reconocimiento de las mejoras implantadas, lo que hace inviable la vía aquí iniciada, que se caracteriza por su carácter eminentemente subsidiario.

6.- En ese sentido, advierte la Sala igualmente que, contrario a lo asegurado por la censura, no se incurrió en una indebida valoración probatoria, comoquiera que, los testimonios de José Israel Monroy León, Alberto Ortiz Téllez y Luis Ismael Fernández Pineda se centraron en narrar detalles acerca de la construcción de las mejoras, así como sobre la calidad de dueño que mostraba el demandante quien los contrató para diferentes trabajos en el inmueble y otros aspectos como el precio que se pagó para la construcción obras en madera, ornamentación, entre otros, vicisitudes que tienen que ver con la controversia que de tiempo atrás tienen las partes sobre el frustrado contrato de promesa de venta y las restituciones mutuas que pretenden, pero que, en modo alguno, podrían soportar la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa, ya que, por el contrario, avalan la tesis atrás planteada sobre la existencia de otras vías para recobrar lo que se construyó.

Por su parte, los testigos Rocío Piñeros y Graciela Parada igualmente se limitaron a relatar que, desde su percepción, Carlos Julio Luque era el único dueño del bien prometido en venta y fue con su dinero que se pagaron las mejoras en discusión. No obstante, se itera, el objeto de este debate no es establecer tales aspectos, toda vez que tanto el dominio o la posesión del bien; así como la discusión sobre las construcciones deben ventilarse mediante los respectivos procesos que el legislador ha establecido.

Sobre el derecho que tiene el mejorista para obtener el reembolso de su inversión, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[2] ha establecido que: "la garantía propia del que edificó, plantó o sembró en heredad de otro origina, ante todo, un derecho de crédito que opera a favor suyo frente al titular del feudo, concerniente a las prestaciones

---

[2] *SC-4755-2018.*

mutuas propias de la acción dominical, ora al valor del edificio, plantación o sementera, y por ello sólo surge cuando el dueño del terreno busca por cualquier medio -jurídico o de facto- la recuperación del terreno y junto a él obtener la tenencia de los accesorios".

*Asegurando en otra oportunidad que: "**por regla general, quien plantó mejoras en suelo ajeno, no tiene acción directa para obtener del dueño de la tierra su valor o para obligarlo a venderle el predio**; y que, por excepción, **únicamente en aquellos casos en los que se ha materializado, por sentencia judicial o de facto, la recuperación del suelo por parte del titular dominio, aquél puede accionar para obtener de éste el valor de las mejoras** (Se resalta). (CSJ. SC10896-2015).*

Conforme con los lineamientos jurisprudenciales expuestos y aplicados al caso bajo estudio, puesto que el demandante ya no ostenta la posesión del inmueble por la orden de entrega que dispuso el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, se insiste, nada obsta para que pueda, por la vía indicada para tal fin (artículo 739 Código Civil) recobre lo que en su criterio le corresponde.

7.- Cabe añadir que si bien la declaración de parte del actor constituye un medio de prueba conforme el artículo 165 del Código General del Proceso, lo cierto es que tal relato a lo sumo da cuenta de las circunstancias que antecedieron a la promesa de venta, de los arreglos que se hicieron en los 4 pisos del inmueble y los gastos que incurrió el señor Mancera, que acreditarían el empobrecimiento que padeció, pero que no suplirían el requisito echado de menos conforme el cual el demandante debe de carecer de acciones judiciales aptas para restablecer su patrimonio, habida cuenta que, según la fuente invocada, esto es, la construcción de mejoras derivada de la posesión o tenencia contractual de un inmueble, cuenta con otros mecanismos de defensa.

*Recuérdese a riesgo de fatigar que: **"la naturaleza esencialmente subsidiaria de esta acción** no estriba en el hecho de que a ella pueda acudirse después de que han sido ejercidas infructuosamente las acciones con que contaba el afectado, sino que, en sentido contrario, **ella solamente puede ser empleada por quien no tiene a su disposición ninguna otra acción o medio que le permita remediar o subsanar una determinada situación patrimonial injusta**"[3] (resaltado fuera de texto).*

8.- En adición a lo expuesto, es preciso resaltar que pese a la anulación del contrato de promesa de venta, por la ausencia de requisitos propios de su esencia, para la Sala, al igual que lo halló acreditado la primera instancia, la referida situación sí tuvo una causa

---

[3] *CSJ. Sentencia 2 de octubre de 2008. Exp. 2002 0003401.*

jurídica, habida cuenta que entre los extremos de la litis se tuvo la intención inicial de pactar la venta futura del inmueble, lo cual derivó en la entrega material del predio y la posterior disposición del mismo por parte del actor.

De todos modos, la Sala advierte que la alzada lució desenfocada, pues ninguno de los reparos se dirigió contra los dos argumentos principales que se dieron en la sentencia para denegar lo pretendido: la ausencia del requisito de subsidiariedad y la existencia de una causa para el desplazamiento patrimonial. Por el contrario, la inconformidad expuesta por el demandante se limitó a insistir en la mala fe de los demandados para despojar al actor de su patrimonio.

9.- En ese orden de ideas, no concurren en el asunto los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción invocada de modo que los cuestionamientos presentados por la parte convocante no se encuentran llamados al éxito. Por ende, habrá de confirmarse la sentencia objeto de alzada con la consecuente condena en costas a la parte apelante ante la improsperidad de la apelación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

*1.- **CONFIRMAR,** por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia dictada el 4 de marzo del 2022 en el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas.*

*2.- **CONDENAR** en costas de esta instancia a la parte recurrente. Tásense.*

2.1.- De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5º del AcuerdoPSAA16-10554 de 2016, en la liquidación de costas causadas en segunda instancia, inclúyase como Agencias en Derecho el monto correspondiente a dos salarios mínimos legales de la anualidad que

avanza. Para la elaboración de la misma síganse las reglas previstas en dicha norma.

CÓPIESE Y NOTÍFIQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADA

MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **25e41c1479122188a3e5b4f3cd362ba187c3a597b47620ef55de3ff0d0da4d3a**
Documento generado en 28/04/2023 02:12:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Ponente
SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE	BANCOLOMBIA
DEMANDADO	BERNARDO ANIBAL GIL TORRES
RADICADO	11001310301520190004301
PROVIDENCIA	Interlocutorio nro. 9
DECISIÓN	**CONFIRMA**
FECHA	Veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto de fecha 06 de febrero de 2023, mediante el cual el Juzgado 02 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, negó la solicitud de nulidad impetrada por aquélla.

2. ANTECEDENTES

2.1. Solicitud de nulidad. Solicitó el apoderado judicial de la parte demandada que se declarara la nulidad de todo lo actuado con base en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso. Dicha petición, la fundó, en síntesis, en los siguientes argumentos:

Manifestó que sus poderdantes no recibieron las notificaciones de que trata el artículo 291 y 292 del Código General del Proceso. Sostuvo que si bien el citatorio y el aviso fueron allegados a la dirección del apartamento de los ejecutados el 05 y 15 de abril de 2019, respectivamente, lo

cierto es que tales documentos fueron recibidos por el vigilante del conjunto, pero no por sus prohijados. Adujo que el Juzgador olvidó dar aplicación al numeral 2 los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que no se remitieron las notificaciones del mandamiento de pago al correo electrónico de los demandados, a pesar de que la parte demandante tenía conocimiento de las direcciones del mismo.

2.2. Traslado de la nulidad. La apoderada judicial de Bancolombia S.A., se opuso a la prosperidad del incidente. Al respecto, manifestó que las notificaciones de los artículos 291 y 292, fueron recibidas por el celador de turno en el conjunto donde residen los demandados. Agregó que el señor Bernardo tenía conocimiento del presente proceso, como quiera que fue quien atendió la diligencia de secuestro el 01 de julio de 2021.

2.3. Auto recurrido. En proveído dictado en audiencia del 06 de febrero de 2023, el Juez denegó la solicitud de nulidad, tras considerar que no es de recibo el argumento de que era necesario hacer una notificación electrónica adicional a las regladas en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, como quiera que para esa data no se encontraba vigente la Ley 2213 de 2022. Aunado a ello, sostuvo que la parte demandada no logró acreditar que el administrador o los celadores del conjunto donde reside, impidieron el acceso a su correspondencia. Añadió que el numeral 3 del artículo 291, establece la validez y efectividad de las notificaciones que se entregan en la portería del conjunto de los demandados. Finalmente sostuvo que obran sendos memoriales de la parte demandante a lo largo del proceso, los cuales fueron remitidos con copia al correo electrónico de la demandada, sin que se

haya pronunciado al respecto, por lo que la nulidad, en caso de haberse configurado, se consideraría saneada.

2.3. El recurso de apelación. Inconforme con esa determinación, el apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación, exponiendo al efecto los siguientes argumentos:

Puso de presente que los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, obligan a la parte demandante a notificar a los demandados a su correo electrónico, en caso de que lo conozcan, y que, en el *sub judice*, a pesar de conocer tales datos, no se procedió de esa forma. Agregó que fácilmente los documentos de notificación pudieron *"terminar en la basura"* de la portería del conjunto. Resaltó que si la apoderada de la parte demandante, remitió sendos memoriales a la dirección de correo de los demandados, ¿por qué no remitió por ese medio la notificación del mandamiento de pago?.

2.4. Concede recurso de apelación. En auto de la misma fecha, previo traslado a la parte demandante, el Juzgado concedió el recurso de alzada, para que la pugna fuese resuelta por esta magistratura.

3. CONSIDERACIONES

3.1. El recurso de apelación, tal y como es menester de ley, tiene por objeto que el superior jerárquico examine la decisión tomada en primera instancia, con el fin de revocar o reformar dicha decisión, si es del caso, únicamente cimentado en aquellos reparos formulados por el apelante.

3.2. Como se colige de la impugnación, el debate se centra en establecer, bajo la revisión del auto apelado, si la providencia emitida por el *a quo,* mediante la cual negó la nulidad deprecada por la pasiva, se encuentra ajustada a la legalidad, lo cual conduciría a su confirmación o, por el contrario, se impone su revocatoria o su reforma total o parcial, o su aclaración en algunos aspectos, en caso de existir alguna deficiencia en la resolución impugnada.

3.3. Al tenor del numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, el proceso es nulo en todo o en parte *"cuando no se práctica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena (…)".*

Desde esta perspectiva, se logra establecer que el proceso es nulo cuando no se vincula en debida forma a las personas que deban ser citadas como parte dentro de la actuación, toda vez que la ausencia de dicha vinculación genera un detrimento y una grave violación a su derecho de defensa en caso de emitirse una decisión judicial por la autoridad competente.

3.4. Pues bien, delanteramente se advierte que la providencia recurrida será confirmada, por las consideraciones que a continuación se expondrán.

Sea lo primero resaltar que la parte demandada aduce que las notificaciones de que tratan los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, fueron remitidas al conjunto donde

efectivamente reside. Sin embargo, muestra su inconformismo respecto de su materialización, pues considera que tales documentos fueron recibidos por el portero de turno en la recepción de la copropiedad, y que, por lo tanto, nunca tuvo un enteramiento real del proceso.

A efectos de dar solución a la controversia, suficiente resulta con remitirnos al inciso tercero del numeral 3o del artículo 291 del Código General del Proceso, el cual consagra que; *"Cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción".* Y, al inciso tercero del artículo 292 del mismo estatuto, el cual reza que: *"El aviso será elaborado por el interesado, quien lo remitirá a través de servicio postal autorizado a la misma dirección a la que haya sido enviada la comunicación a que se refiere el numeral 3 del artículo anterior".*

Puestas así las cosas, es evidente que los argumentos del recurrente no tienen asidero jurídico, como quiera que la entrega del citatorio y del aviso, respectivamente, a la persona encargada de la portería o del sitio de entrada de un conjunto residencial, oficinas y en general de cualquier unidad a la que se impida el libre acceso, satisface a cabalidad las exigencias previstas en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso.

3.5. Ahora bien, con independencia de que la parte ejecutante hubiese tenido conocimiento del correo electrónico de los aquí demandados, se pone de presente que ese tipo de notificación es potestativo, mas no imperativo, al tenor del inciso sexto del numeral 3 del artículo 291 del Estatuto

Procesal, el cual señala que; *"cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación* ***podrá*** *remitirse por el secretario o el interesado por medio de correo electrónico".*

3.6. Así las cosas, ningún reproche puede merecer la negativa de la nulidad deprecada en este asunto. Por lo anterior, el proveído protestado será confirmado.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído impugnado, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: Oportunamente devuélvase lo actuado al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fe7502de4bc465dead706fbc79310854f09905466841776fa0c32a08e362d788**

Documento generado en 28/04/2023 04:44:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Ref. Proceso verbal de **LEONOR RAMÍREZ DE ZAMBRANO** y otros contra **NACIONAL CIA CAPITALIZACIÓN Y AHORRO S.A.**. (Apelación de Auto). **Rad.** 11001-3103-017-2021-00297-01.

I. ASUNTO A RESOLVER

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte reclamante en contra del auto proferido el 27 de mayo de 2022, por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, a través del cual se rechazó la demanda y la nulidad impetrada por ese extremo de la lid.

II. ANTECEDENTES

1. Mediante proveído del 13 de enero de 2022[1], fue inadmitido el libelo instaurado por Leonor Ramírez de Zambrano, Pedro Pablo, Olga Patricia, Carmen Amparo y Gerardo Augusto Zambrano Ramírez, frente a Nacional Cía Capitalización y Ahorro S.A.

2. El 4 de febrero de la calenda pasada, los promotores de la acción alegaron la nulidad de todo lo actuado, con base en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 133 del C.G.P y por desconocimiento del canon 29 de la Constitución Política.

En síntesis, su mandatario adujo que se transgredió el precepto 295 de esa Codificación, ya que la demanda fue instaurada por cinco personas, pero en

[1] Archivo *"007AutoInadmiteDemanda"* del *"01 C1era Instancia"*.

la notificación por estado del auto inadmisorio, se omitió indicar el segundo apellido de uno de ellos -*Gerardo Augusto Zambrano*- y la expresión *"y otros"*[2].

3. Mediante proveído del 27 de mayo pasado, se rechazó el escrito inaugural, al no ser subsanado, determinación de idéntico talante se adoptó frente a la invalidez alegada, indicando que los supuestos descritos no se enmarcan en la causal invocada[3].

4. En su contra, los demandantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando frente a la determinación contenida en el ordinal primero de ese pronunciamiento que su emisión se efectuó sin haber reconocido personería a su apoderado judicial, impidiéndole con ello controvertirla.

Reiteraron los razonamientos en torno a la irregularidad deprecada, añadiendo que, el incidente se propuso oportunamente y están legitimados, sumado a lo cual cumplieron con los requisitos previstos en el precepto 129 del C.G.P., al haber expuesto los hechos, pretensiones y relacionar las pruebas pedidas; además, manifestaron que, en torno a la notificación, se incurrió en el mismo yerro con el auto materia de reproche[4].

5. El 12 de octubre postrero, el *a quo* mantuvo la determinación cuestionada, al estimar que la inadmisión del libelo se publicitó en debida forma, a través del estado electrónico, incluyendo el número de proceso, nombre de las partes y link de acceso a la providencia, información que también reposa en el sistema de gestión "*Justicia Siglo XXI*". Finalmente, concedió la alzada subsidiariamente interpuesta[5]:

III. CONSIDERACIONES

La suscrita Magistrada es competente para resolver la apelación de la referencia, a tono con lo dispuesto en los artículos 31 (numeral 1)[6] y 35[7] del

---

[2] Archivo *"009MemorialSolicitudDeNulidad" ibídem.*
[3] Archivo *"013AutoRechazaDemandaVerbal" ibídem.*
[4] Archivo *"014RecursoReposiciónSubsidioApelación", ibídem.*
[5] Archivo *"016AutoDecideRecurso", ibídem.*
[6] *"Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil: 1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito".*
[7] *"El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión".*

C.G.P.; además, el proveído cuestionado es susceptible de ser discutido a través de ese recurso, según lo previsto en los numerales 1 y 6 del precepto 321 de esa misma obra[8].

Prontamente se advierte que el auto censurado debe ser confirmado, porque durante el término legal para subsanar el libelo, no fue allegado escrito alguno, pues ese lapso feneció en silencio.

En efecto, el precepto 90 de la Normatividad Adjetiva General establece en qué casos el juez declarará inadmisible la demanda, señalando los defectos de que adolezca, para que su promotor los subsane "*en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo".* Ese lapso es perentorio y se contabiliza a partir del siguiente a la notificación por estado de la providencia.

A su vez, el inciso primero de la regla117 *ejúsdem* expresa que los términos señalados para la realización de los actos procesales de las partes *"son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario"*. Indica lo anotado que en el proceso existen etapas dirigidas precisamente a los contendores o a terceros, bien para que dentro del lapso que les otorga la ley se pongan a derecho, impugnen una decisión a través de recursos o, como en el presente, enmienden los yerros que impidieron admitir el escrito inaugural.

Esos intervalos no pueden permanecer abiertos indefinidamente, sin límite alguno o sujeto al querer de los intervinientes en el litigio, porque entonces, los juicios se harían interminables, lo que es contrario al principio de eventualidad y economía procesal, exigiendo que exista orden, claridad y, fundamentalmente, rapidez en su trámite, única forma de garantizar los derechos de quienes participan en el asunto; además, la preclusión entendida como la *"pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal"*, imponía rechazar la demanda.

Así, por auto del 13 de enero de 2022[9], notificado por estado del día siguiente se inadmitió el libelo, ante lo cual el plazo de cinco días para

---

[8] "*Artículo 321. Procedencia. (…) También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:*
1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.
(…)
6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que lo resuelva".
[9] Archivo *"007 Auto Inadmite Demanda"* del *"01 C1era Instancia".*

enmendar el escrito inaugural transcurrió entre el 17 y el 21 de ese mes y anualidad; acto seguido, según informe secretarial del día 31, se dejó constancia que no se cumplió con esa carga[10], ante lo cual el 27 de mayo pasado, fue rechazado el libelo[11].

Entonces, es evidente que el plazo con el que contaban los accionantes para cumplir con la carga impuesta en el proveído inicialmente citado, venció en silencio, motivo por el cual se emitió el auto cuestionado.

Súmese a lo expuesto que, el inadmisorio no es susceptible de recurso alguno, a tono con lo previsto en el inciso tercero del canon 90 del C.G.P.; por lo tanto, el extremo activo, ningún reparo podía proponer en su contra, aunado a que, la circunstancia consistente en que no se le haya reconocido personería al profesional del derecho que lo representa, no le impedía actuar, así lo decantó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria:

> *"(...) los apoderamientos se perfeccionan con la escritura pública o escrito privado presentado en debida forma, esto es, presentado personalmente ante el despacho o presentado ante notario y entregado al despacho pertinente (arts. 65, inciso 2o., y 84 C.P.C.), sin que sea necesario el auto de reconocimiento de personería para su perfeccionamiento para adquirir y ejercer las facultades del poder. Porque si éste puede ejercerse antes del auto de reconocimiento y su 'ejercicio' debe dar lugar posteriormente a la expedición de dicho auto (art. 67 C.P.C.), es porque se trata de una decisión positiva de reconocimiento simplemente declarativa y no constitutiva, esto es, que solo admite el poder que se tiene, pero no es el que le da viabilidad a su ejercicio[12]"* (se resalta).

Entonces, no es dable revocar la decisión que rechazó la demanda, pues no fue subsanada oportunamente.

De otro lado, las nulidades adjetivas tienen su fundamento en el canon 29 de la Carta Política, pues con ellas se busca garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de quienes son partícipes en un litigio, en tanto que el trámite debe plegarse a las ritualidades previstas en las disposiciones legales pertinentes, debiendo sujetarse a ellas el funcionario judicial, las partes y demás intervinientes.

---

[10] Archivo "*008 Ingreso Despacho 31 Enero 2022", ibídem.*
[11] Archivo "*013 Auto Rechaza Demanda Verbal", ibídem.*
[12] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC14743-2018.

En sentido complementario, la regla 13 del C.G.P., dispone que las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento.

Ellas obedecen a la necesidad de proteger a quienes acuden al litigio, cuyo interés puede ser vulnerado o conculcado por causa de un vicio en el trámite, para hacer efectivas las memoradas prerrogativas.

Se rigen por los principios de especificidad, protección y convalidación, el primero exige que los motivos de invalidez estén establecidos de manera expresa en la ley; por ello, el artículo 135 (inciso 4) del C.G.P. señala que *"El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo*". Además, también es posible invocar la constitucional por transgresión al debido proceso.

El postulado de protección se refiere a la legitimidad y el interés que pueda tener el que alega el vicio, así el inciso primero de la norma citada enseña que quien la invoca *"deberá tener legitimación para proponerla"*, de tal suerte que, aunque se configure la causal, si ésta no lo perjudica, de nada sirve proponerla. Y el tercero, relacionado con la convalidación, corresponde a la posibilidad de saneamiento, expreso o tácito, al no ser formulado por la parte afectada.

Ahora, el inciso segundo, numeral 8 del precepto 133 del C.G.P. establece que "*cuando en el proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este Código"* (se destaca).

Sobre ese particular, la doctrina puntualizó lo siguiente:

> "*Los presupuestos para la procedencia de esta causal son los siguientes:*
> *a) Que se haya dejado de notificar o sea indebidamente notificada una providencia.*
> *b) Que la situación prevista en el aparte anterior se produzca con quien ya es parte en el proceso.*
> *c) Que la providencia se profiera en el curso del proceso, esto es, tras haberse trabado la relación jurídico procesal y antes de dictarse la sentencia o el auto que le dé fin. Se*

> *excluye, por tanto, la notificación del auto admisorio de la demanda y el que dispone la citación de un interviniente, que constituyen -como dijimos- causal propia"*[13].

De modo que, ante la inobservancia del último requisito anotado, no tiene acogida el incidente de nulidad promovido por el actor, pues el texto legal exige de manera tajante, tratándose del evento descrito en la norma cuyos apartes se transcribieron que esté "*en curso el proceso",* lo cual no acaece en el presente caso.

Respalda esa conclusión, lo expuesto por la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que sobre el tema bajo análisis precisó:

> *"Asimismo* ***se rechazará de plano el incidente de nulidad*** *formulado por Jairo Ruíz Quesedo en el memorial de folios 27 a 30, por estos motivos:*
> *a.-) El artículo 138 de la mencionada codificación dice que 'el juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código o por otra ley, los que se promuevan fuera de término y aquellos cuya solicitud no reúna los requisitos formales'.*
> *b.-)* ***Como acá no se ha dictado el auto admisorio, la solicitud incidental emerge manifiestamente prematura****, en tanto que por lo expuesto ni siquiera ha llegado la ocasión en que el extremo opositor podría ejercer su derecho a la defensa, acorde con las pertinentes disposiciones legales y constitucionales"*[14] (se resalta).

También sostienen los promotores del mecanismo vertical que el motivo de nulidad invocado es el contenido en el artículo 29 de la Constitución Política; el cual no tiene el alcance de cubrir cualquier irregularidad; en ese sentido, la citada Alta Corporación ha explicado:

> *"Menos aún sirve a los propósitos del peticionario la simple alusión a la existencia de una trasgresión al bien iusfundamental que consagra el artículo 29 de la Carta Política, pues la nulidad de linaje constitucional recae únicamente sobre la «prueba obtenida con violación del debido proceso», hipótesis totalmente ajena a los alegatos del solicitante"*[15].

Por lo tanto, como los hechos descritos, no permiten dar cabida a la invalidez con base en la norma constitucional, acertó el funcionario cognoscente al rechazarla, pues las circunstancias esbozadas no corresponden a alguno de los motivos de irregularidad planteados en la normatividad adjetiva civil, como tampoco en la supralegal

---

[13] Azula Camacho Jaime, Manual de Derecho Procesal, Tomo II, parte general, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2018, página 265.
[14] Corte Suprema de Justicia, 15 de junio de 2011, Rad. 11001-02-03-000-2010-01109-00.
[15] Corte Suprema de Justicia, AC485-2019.

En lo pertinente, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha destacado que:

> *"Si el que viene de reseñarse es el motivo de la nulidad que se reclama, la decisión adversa a tal pedimento se impone, porque lo alegado no se enmarca dentro de las hipótesis que estableció el legislador procesal como causantes de invalidación del rito, ni corresponde a la que fuera consagrada como de rango constitucional, vale decir, la invalidez planteada se fundó por el proponente en causa distinta de las determinadas legal y constitucionalmente"*[16].

Puestas de ese modo las cosas, se imponía el rechazo de plano de las nulidades planteadas, por desconocer el principio de especificidad, al sustentarse en causales distintas de las enlistadas en el artículo 133 del estatuto adjetivo, en concordancia con el inciso final del precepto 135 *ibídem* según el cual, *"[e]l Juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo"*.

En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada, sin que haya lugar a imponer condena en costas, al no aparecer causadas.

IV. DECISIÓN

Por lo expuesto, la suscrita Magistrada de la **SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**

RESUELVE

Primero. CONFIRMAR el auto proferido el 27 de mayo de 2022, por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esta urbe.

Segundo. Sin lugar a imponer condena en costas.

Tercero. ORDENAR devolver el expediente digital al juzgado de origen. Por la Secretaría ofíciese y déjense las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

---

[16] Corte Suprema de Justicia, ATC6234, 27 oct. 2015, rad. No. 2015-02180-00. Reiterada en CSJ ATC109-2021.

Firmado Por:

Aida Victoria Lozano Rico

Magistrada

Sala 016 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **928931b4272b3f09587441bb507b5fc730194325393bae74861b9c6b37d34811**

Documento generado en 28/04/2023 11:34:59 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16179

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

REF: PROCESO VERBAL DE RAÚL ENRIQUE ADAMES CARRILLO Y OTRO CONTRA CUMPLIMIENTO AL CIEN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S. Y OTRA.

RAD. 11001310301820190071101

Magistrada Sustanciadora: **STELLA MARÍA AYAZO PERNETH**

I. ASUNTO

Procede este despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto del 23 de enero de 2020[1] proferido por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso de la referencia, mediante el cual se ordenó la inscripción de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Los señores Raúl Enrique Adames Carrillo y Raúl Ernesto Adames Pedraza, iniciaron proceso verbal contra Cumplimiento al Cien Transporte y Logística S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A. para obtener la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de estas y su consecuente condena en perjuicios, como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 7 de diciembre de 2014, en el que perdieron la vida Ibeth

[1] Archivo: 01CuadernoPrincipal.pdf Fl. 125

Ziomara Adames Pedraza, Alejandra Adames Pedraza, Edwin Alexander Zamora Adames y Samuel Zamora Adames.

2. Mediante proveído del 23 de enero de 2020, el *a quo* concedió amparo de pobreza al extremo actor y ordenó la inscripción de la demanda en el registro del vehículo de placas USA 702 y del establecimiento de comercio denominado "CUMPLIMIENTO AL CIEN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S." con fundamento en lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso.

3. Contra la anterior determinación, la sociedad Cumplimiento al Cien Transporte y Logística S.A.S. recurrió en reposición y en subsidio apelación, argumentando que no debió decretarse la cautela, pues en su sentir, le podría ocasionar perjuicios pues: (i) *"estos automotores son objeto de prenda ante distintas entidades bancarias y ante los mismos clientes que contratan el servicio de carga con la compañía;"* (ii) *"la empresa cuenta con varios clientes algunos empresas de marcas internacionales, con quienes la seguridad debe ser extrema y en el caso tal de que se apliquen las medidas cautelares decretadas, existe un alto riesgo de perder los contratos suscritos;"* y (iii) *"al existir una inscripción de demanda sobre el establecimiento comercial es tomada por los clientes como señal de alerta e inseguridad de tal manera que no van a contratar ningún servicio con la empresa (…)."*

Por último, agregó que *"las pretensiones de la demandante son desaforadas toda vez que la empresa no suscribió contrato de transporte con las personas fallecidas"* y *"busca ejercer presión sobre la demandada para lograr una indemnización que a todas luces resulta injusta (…)."*[2]

4. El juez de primera instancia mantuvo inalterada su decisión y concedió la alzada, que es el caso resolver previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

Sabido es, que las medidas cautelares tienen por objeto garantizar la efectividad de una eventual sentencia que acceda a las pretensiones de la

[2] Archivo: 01CuadernoPrincipal.pdf Fl. 125

demanda, aludiendo al principio de que el patrimonio de una persona es garantía del cumplimiento de sus obligaciones.

Sobre las mismas, ha advertido la jurisprudencia que "*las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada.*"[3]

De entrada, se advierte el fracaso de la alzada, con fundamento en los siguientes argumentos:

La inscripción de la demanda es una medida cautelar por la cual quien adquiere un bien sujeto a registro con posterioridad a la adopción de esta medida, queda sujeto a los efectos de la sentencia que se dicte en el respectivo proceso.

Atendiendo a que con las pretensiones del libelo se persigue, entre otras, que se declare la responsabilidad civil extracontractual de las convocadas y su consecuente condena al pago de perjuicios, con ocasión del accidente de tránsito acaecido el 7 de diciembre de 2014, en el que perdieron la vida Ibeth Ziomara Adames Pedraza, Alejandra Adames Pedraza, Edwin Alexander Zamora Adames y Samuel Zamora Adames, resulta viable el registro de la demanda.

Lo anterior es así, con fundamento en el literal (b), numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso, según el cual, desde la presentación de la demanda y a petición de parte, el juez podrá decretar la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás, cuando se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil extracontractual, siendo precisamente la acción que se adelanta en el presente proceso.

---

[3] Corte Constitucional C-379 de 2004.

En ese orden de ideas, fluye evidente que, en el caso sometido a consideración de esta sede judicial, se cumplieron las prerrogativas definidas por el legislador para disponerse la inscripción de la demanda.

Obsérvese que, la sociedad Cumplimiento al Cien Transporte y Logística S.A.S. está convocada al presente juicio como demandada para que responda por los perjuicios causados a los demandantes derivados del accidente de tránsito mencionado, por lo que la medida que deprecó el extremo actor resultaba procedente.

Y no se diga que la posibilidad de perder clientes o causar un impacto negativo en los negocios de la empresa es razón suficiente para limitar la facultad del extremo actor de solicitar medidas cautelares previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos, pues en todo caso, la demandada cuenta con la prerrogativa de solicitar la fijación de caución en aras de procurar su levantamiento o impedir su práctica.

Frente al alegato según el cual Cumplimiento al Cien Transporte y Logística S.A.S. no suscribió contrato de transporte alguno con las víctimas y se trata de pretensiones *"desaforadas",* baste señalar que ello es lo que se busca dilucidar en el presente juicio, si le asiste o no responsabilidad civil extracontractual a las demandadas.

Por último, en relación con la la petición de la recurrente, en el sentido de fijar caución a fin de mitigar el impacto que pudiera generar la práctica de las cautelas, baste advertir que, así lo hizo del Juzgado 18 Civil del Circuito de esta ciudad, mediante proveído del 19 de enero de 2022,[4] en los términos del artículo 590 del Código General del Proceso, según el cual *"el demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad."*

Puestas, así las cosas, se impone la confirmación del auto apelado, como en efecto se dispondrá.

---

[4] Archivo: 01CuadernoPrincipal.pdf Fls. 419 y 420

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.- Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto del 23 de enero de 2020 proferido por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá D.C., por las razones anotadas en precedencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas en el recurso porque no aparecen causadas.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fa4fd6b8682f134161fcc03ebd3a52c61d349767ba99615e157a39ef8500766f**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-019-2019-00220-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Revisada las actuaciones en el expediente digital aportado, el Despacho **DISPONE:**

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de apoderado judicial, contra la sentencia proferida el 08 de marzo de 2023, por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad.

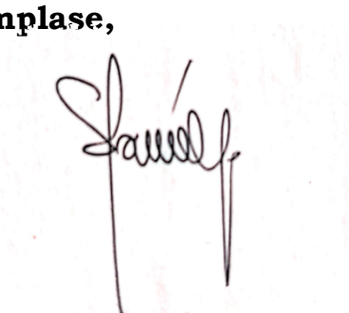
SEGUNDO: IMPRIMIR a este proceso el trámite consagrado en el artículo 12 de la ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la apelación instaurada contra el fallo de primer grado.

TERCERO: De conformidad con el inciso 2° del artículo 12 *ibídem,* se corre traslado por el término de cinco (5) días al apelante para que sustente los reparos que, de manera concreta formuló contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Una vez presentado el escrito, córrase traslado al extremo contrario por el término antes indicado.

CUARTO: Por secretaría, contrólese los mencionados términos, para que vencidos, se ingrese el expediente al Despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,



STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2031acad32d8df9ec7d4c3782e52e286a0ad55b2275f0f41be4c296a6f311388**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Ponente

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	VERBAL
DEMANDANTE	IGNACIO MORENO GOMEZ
DEMANDADO	DANIEL AUGUSTO NIGRITIS PRIETO
RADICADO	11001310301920230008701
PROVIDENCIA	Interlocutorio No. 11
DECISIÓN	**REVOCA**
FECHA	Veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 14 de marzo de 2023, mediante el cual el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, rechazó la demanda formulada.

2. ANTECEDENTES

2.1. En el proceso de la referencia, la parte actora solicitó como pretensión principal de su demanda que se declare *"la resolución del contrato de compraventa del vehículo automotor de placas SYQ399, por objeto ilícito entre los demandados señores DANIEL AUGUSTO NIGRINIS PRIETO Y PIEDAD MARTINEZ VALENCIA y el demandante señor IGNACIO MORENO GOMEZ".*

2.2. Repartidas las diligencias al Juzgado Cuarenta y Siete Municipal de Bogotá, previo auto de inadmisión y posterior subsanación, rechazó el conocimiento del libelo por tratarse de un proceso de mayor cuantía, por lo que ordenó la remisión del expediente a los Jueces de Categoría Circuito.

2.3. Asignado el proceso al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 03 de marzo de 2023 éste inadmitió la demanda a efectos de que se subsanara en los siguientes puntos:

> *"**1.** Toda vez que este asunto, se encamina a la resolución de contrato de compraventa de vehículo celebrado entre DANIEL AUGUSTO NIGRINIS PRIETO como vendedor e IGNACIO MORENO GOMEZ como comprador, deberá excluirse de la demanda a PIEDAR MARTINEZ VALENCIA, ya que esta persona no hace parte de la relación contractual**. 2.** Dese cabal cumplimiento a lo reseñado por el numeral 2º del art. 82 ibídem, indicando el domicilio del demandado DANIEL AUGUSTO NIGRINIS PRIETO. **3.** Alléguese el certificado de tradición del vehículo objeto del contrato, expedido con una antelación no superior a un mes. **4.** Preséntese debidamente integrada la demanda, teniéndose en cuenta el libelo genitor y el escrito de subsanación aportado al Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá. **5.** Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el art. 173 de nuestro ordenamiento jurídico procesal y como las pruebas deben allegarse conjuntamente con la demanda, deberá acreditarse que los documentos requeridos en el acápite de oficios, fueron solicitados a través de derecho de petición a la entidad allí mencionada".*

2.4. Auto recurrido. Dentro del término legal, la parte demandante presentó memorial subsanando los yerros en comento. Por su parte, en auto del 14 de marzo de 2023, el *a quo* rechazó la demanda, como quiera que al revisar el escrito subsanatorio advirtió que la demanda no fue subsanada en debida forma.

2.4. El recurso. Inconforme con esa determinación, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, al considerar que subsanó en forma correcta la demanda, dentro del término legal.

2.4. Concede recurso de apelación. En auto del 23 de marzo de 2023, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, mantuvo incólume su decisión y concedió el recurso de alzada, para que la pugna fuese resuelta por esta magistratura.

3. CONSIDERACIONES

3.1. El recurso de apelación, tal y como es menester de ley, tiene por objeto que el superior jerárquico examine la decisión adoptada en primera instancia, con el fin de revocar o reformar dicha decisión, si es el caso, únicamente cimentado en aquellos reparos formulados por el recurrente apelante.

Como se colige de la impugnación, el debate se centra en establecer, bajo la revisión del auto apelado, si el *a quo* decidió en forma legal en la providencia que rechazó la demanda, lo cual conduciría a su confirmación o, por el contrario, se imponga su revocatoria o su reforma total o parcial, o se aclare en algunos aspectos, en caso de existir alguna deficiencia en la resolución impugnada.

4.2. Recuérdese que, el artículo 82 del Código General del Proceso establece que, salvo disposición en contrario, toda demanda deberá contener los siguientes requisitos: *"1. La*

designación del juez a quien se dirija. 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT). 3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso. 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. 5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. 6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte. 7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario. 8. Los fundamentos de derecho. 9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. 10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales. 11. Los demás que exija la ley (…)".

Por su parte, el artículo el artículo 90 ibídem, dispone que la demanda será inadmitida cuando no reúna los requisitos formales, por lo que el juez deberá precisar los yerros que advirtió y otorgará cinco días para su corrección, so pena de rechazo.

4.3. En el *subjudice*, resulta evidente que la decisión opugnada será revocada ya que los argumentos esbozados

para el rechazo de la demanda, denotan un excesivo rigor formal por parte de la juez de primera instancia.

Pues bien, véase que la Juez de primer grado, fundamentó la inadmisión en cinco puntos, de los cuales los siguientes: "***1.*** *(…) deberá excluirse de la demanda a PIEDAR MARTINEZ VALENCIA, ya que esta persona no hace parte de la relación contractual*; ***3.*** *Alléguese el certificado de tradición del vehículo objeto del contrato, expedido con una antelación no superior a un mes.* ***4****. Preséntese debidamente integrada la demanda, teniéndose en cuenta el libelo genitor y el escrito de subsanación aportado al Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá.* ***5****. (…) deberá acreditarse que los documentos requeridos en el acápite de oficios, fueron solicitados a través de derecho de petición a la entidad allí mencionada*", no se encuentran enlistados en el artículo 82 del Código General del Proceso, por lo que no darían lugar al rechazo de la demanda, por tal motivo la Sala se releva de estudiar si fueron debidamente subsanados o no porque de no haberlo hecho no se configuraría esa consecuencia jurídica.

Al respecto, ha sostenido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que*, "(…) la inadmisión y el rechazo de la demanda sólo puede darse por las causales que taxativamente contempla el estatuto procesal, en tanto que la introducción de motivos ajenos a los allí dispuestos, en últimas, limita el derecho que tienen los coasociados a acceder a la administración de justicia (…)" (STC9594-2022).*

Bajo esta óptica, véase que la exclusión de la demandada resulta ser un asunto de legitimación, el cual es un tema de fondo que debe ser tratado por el Juez en etapas procesales posteriores, más no al momento de evaluar la admisión del libelo. Aunado a ello, es de relieve que poner de presente que

"el no haber integrado la subsanación y la demanda en un solo escrito; además de no ser una previsión legal, no impide, de ninguna manera, tener por subsanada en debida forma la demanda cuando se han satisfecho todos los puntos objeto de inadmisión"[1]. Ahora bien, respecto del requerimiento de acreditar que se solicitó por medio del derecho de petición los oficios ante el Ministerio de Transporte, es indispensable aclarar que ello es un requisito para decretar una prueba en los términos del artículo 173 del Código General del Proceso, más un defecto formal que deba ser subsanado por la parte para que la demanda sea admitida, como erradamente lo consideró la Juez de instancia.

Finalmente, respecto de la solicitud de allegar certificado de de tradición del vehículo objeto del contrato a resolver, advierte la Sala que dicha causal no encuentra sustento legal para que sea fundamento de inadmisión, teniendo en cuenta que el Código General del Proceso no exige dicho anexo. (artículo 26, 84, 85,89 y 206)

Y es que si bien, la Corte Suprema de Justicia, *"ha visto con buenos ojos la posibilidad de adelantar en esa etapa preliminar las "pesquisas necesarias" para "aclara[r] aspectos oscuros del libelo inicial", como una "expresión fiel de los deberes que como director del proceso le asisten [al] funcionario" (CSJ, STC16187-2018),* ***lo cierto es que tal privilegio no constituye una patente de cor[s]o para restringir la prerrogativa prevista en el canon 229 de la Constitución Política, menos aún, para comprometer el debido proceso de las personas que elevan sus súplicas ante la justicia con criterios puramente subjetivos de quienes están llamados a impulsarlas.*** (CSJ STC2718-2021,

[1] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. Auto 15 de marzo de 2023. MP. Ruth Helena Galvis,

mencionada en sentencias STC4698-2021, STC11678-2021 y STC1389-2022, entre otras)»

4.4. Hecha esta salvedad, respecto del numeral restante de inadmisión, el cuales se encuentra fundamentados en la normativa citada *ut supra*, advierte la Sala que aquel fue subsanado en debida forma, por lo cual no era dable ni acertado la decisión de rechazar la demanda.

Véase que, al respecto del requerimiento del domicilio del demandado DANIEL AUGUSTO NIGRINIS PRIETO, el demandante subsanó dicho yerro, en los siguientes términos: *"me permito aportar la dirección física del señor DANIEL AUGUSTO NIGRINIS PRIETO ASÍ: Carrera 2 No. 15-86 Torre 8 Apartamento 202, Barrio Maiporé, Bogotá D.C., Teléfono 3102126283 Correo electrónico nigri671@gmail.com o nigri611@hotmail.com".*

4.5. En este orden de ideas, las disquisiciones precedentes demuestran con suficiencia que resulta contraria a derecho la decisión del *a quo* de rechazar la demanda, motivo por el cual se revocará la decisión tal como se anticipó.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el proveído recurrido de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: En consecuencia, proveer nuevamente sobre la subsanación de la demanda, teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

TERCERO: oportunamente devuélvase lo actuado al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

Firmado Por:
Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **09c29e2a34ef1525d28907a53215ab5ed6487f3e3771e6b5e09f0cc3c00b6388**
Documento generado en 28/04/2023 04:47:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-021-2014-00646-02
Demandante: FESNEPONAL
Demandado: CLUB DE SUBOFICIALES POLICÍA NACIONAL

Se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por ambos extremos de la litis, contra la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá, en el efecto **suspensivo** (artículo 327 del Código General del Proceso).

Imprímasele a este asunto el trámite consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la alzada.

En firme este auto, la Secretaría **REINGRESE** el proceso al Despacho, con el fin de impartir el trámite que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

Radicado: 11001 31 03 022 2012 **00601** 02

El informe secretarial que antecede, de fecha 26 de abril de 2023, póngase en conocimiento de las partes.

De igual manera, téngase en cuenta: *i.* que el término de que trata el artículo 121 Cgp estuvo suspendido desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el 25 de junio del mismo año, en virtud de las disposiciones emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid19 (*v.gr.* Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11556, y Decreto 564 de 2020); y *ii.* que debido a la interpretación prejudicial solicitada y su tramitación, el presente proceso estuvo suspendido entre la fecha en que se profirió el auto elevando la petición ante el Tribunal de la Comunidad Andina (10 de agosto de 2020) y la data en que se emitió la providencia de reanudación (7 de marzo de 2023).

Así las cosas, en atención a los tiempos de suspensión descritos, se pone de presente que el lapso establecido en el citado canon 121 para la resolución de este grado jurisdiccional de apelación de sentencia aún no se ha vencido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
11001 31 03 022 2012 00601 02

Firmado Por:

German Valenzuela Valbuena

Magistrado

Sala 019 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ee23c7c8d548cfae5d992b131337b3f8d66981d55c15b79eef24673c4a56593**

Documento generado en 28/04/2023 03:05:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-023-2012-00537-01
Demandante: MERCEDES DEL CARMEN CASTILLEJO DE CARDOZA
Demandado: SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN y otros.

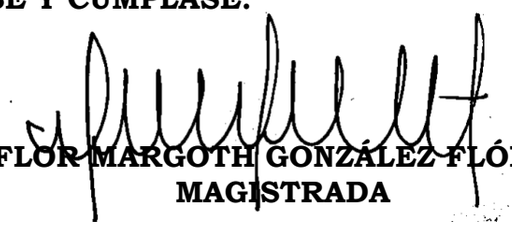
En atención al escrito que precede, se advierte que la parte apelante no aguardó el surtimiento de los tiempos previstos en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, pues se pronunció sobre la alzada que intentó de forma prematura. No obstante, en virtud del principio de economía de los actos, se **tendrá en cuenta** que el inconforme ya sustentó la apelación elevada contra el fallo de 13 de enero de 2023.

No obstante, pese a que de la radicación de los escritos se extrae que los argumentos fueron remitidos a sus oponentes, también se observa que el expediente ingresó al Despacho anticipadamente.

Por lo anterior, se ordena a la Secretaría a **PROCEDER** con el surtimiento íntegro del traslado al extremo contrario, conforme el inciso tercero del artículo 12 *ibídem*.

Cumplido lo anterior, reingresen las diligencias al despacho con el fin de proveer lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	:	INCODER actualmente AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
DEMANDADO	:	ÁNGELA MARÍA MEJÌA SANTAMARIA Y POLIGROW COLOMBIA LTDA.
CLASE DE PROCESO	:	NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO
MOTIVO DE ALZADA	:	APELACIÓN SENTENCIA

Se ADMITE en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante contra la sentencia que profirió el 10 de febrero de 2023, el Juzgado 50 Civil del Circuito, dentro del proceso de la referencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, la Secretaría procederá a contabilizar el término de cinco (5) días que la parte apelante tiene para sustentar su recurso, pues en caso de no hacerlo, se le declarará desierto; del escrito de sustentación que presente se correrá traslado a la parte contraria en la forma y términos previstos por el artículo 12, en concordancia con el 9, de la Ley 2213 de 2022.

La sustentación, como su réplica, se remitirán al correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cada parte, si es del caso, acreditará el envío del escrito a su contraparte para los efectos del artículo 3 y el parágrafo del artículo 9 de la Ley mencionada, lo cual deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría.

Notifíquese,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D. C., veintisiete de abril de dos mil veintitrés

11001 3103 024 2022 00188 01

Ref. Proceso declarativo especial de expropiación de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI frente a Wilmar de Jesús Santa Ruíz.

El suscrito Magistrado revocará el auto que el 9 de septiembre de 2022 profirió el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá (cuya alzada le correspondió por reparto a este despacho el 8 de marzo de 2023), con el que se rechazó la demanda de expropiación de la referencia.

EL AUTO APELADO. La juez de primera instancia sostuvo que la experticia alusiva al avalúo de los bienes que aquí interesan no suple la carga de información que establecen los numerales 4° al 9° del artículo 226 del C. G. del P.

Ya al resolver el recurso horizontal que de manera principal se presentó contra la misma providencia, agregó la misma falladora que se desatendió lo que ordenó subsanar, en el auto inadmisorio "en lo que tiene que ver con la idoneidad del trabajo pericial allegado y el cumplimiento de los formalismos" que establece el artículo 226 C. G. del P. Adicionó que tales exigencias eran necesarias con miras a "garantizar la idoneidad de quien lo rinde y por consiguiente la validez y eficacia del trabajo allegado" y señaló que la norma legal en cita prevalece sobre las múltiples resoluciones administrativas existentes en punto a esa tipología de avalúos inmobiliarios.

LA APELACIÓN. En síntesis, la inconforme insistió en que en que la legislación patria no condiciona la admisibilidad de la demanda de expropiación, a que el dictamen supla todos los requisitos del artículo 266 del C. G. del P.; pues nada de ella expresamente consagra el artículo 90, *ibidem.*

Para decidir según se anunció, bastan las siguientes **consideraciones**:

1. Sea lo primero advertir que la tesis en que sustentó el auto de rechazo de la demanda, en rigor, no encuentra soporte en los artículos 90, 226 y 399 del C. G. del P.

En efecto, en rigor, la ausencia de información que finalmente condujo al rechazo de la demanda de expropiación no está previsto como causal de inadmisión o de rechazo de la demanda.

Tal consecuencia no es factible deducirla a partir del contenido de los artículos 90 y 399 del C. G. del P., por cuya virtud, las causales de inadmisión y de rechazo son taxativas.

No en vano, a voces del artículo 90 del C. G. del P. prevé que "el juez declarará inadmisible la demanda **sólo en los siguientes casos**", a lo que se suma que tal mandato enlista en sus siete numerales los motivos que posibilitarían la inadmisión. Ninguno de ellos se adecua a las circunstancias que sirvieron de estribo al auto apelado.

No es en la fase primigenia de examen de la demanda la oportunidad para que la juez se interese, como se afirmó en la decisión recurrida, por la idoneidad del perito y la validez y eficacia del peritaje allegado, labor que corresponde a otro estanco procesal.

Sobre el tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que "conforme a lo establecido por la legislación adjetiva, la cual no contempla causales de inadmisión o rechazo temprano de la prueba pericial, **es la sentencia el escenario propicio para que el juez valore, de acuerdo a cada caso concreto, el apego del trabajo elaborado por un experto a los requisitos mencionados, pues de su cumplimiento, en mayor o menor medida, se edificará la fiabilidad y el mérito que será otorgado al medio suasorio y su incidencia para la solución de cada causa en particular**"(sent. STC de 24 de junio de 2021, exp. 2021 01718. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque).

2. Entonces, se revocará el auto impugnado, y, en su lugar, se ordenará a la juez de primera instancia resolver otra vez sobre la admisibilidad de la demanda en referencia, prescindiendo de lo que motivó su decisión.

Decisión. Así las cosas, el suscrito Magistrado REVOCA el auto de 9 de septiembre de 2022. En su lugar, ordena a la juez de primera instancia que resuelva nuevamente sobre la admisibilidad de la demanda en referencia, para lo cual observará lo que se consignó en las breves consideraciones de esta providencia.

Devuélvase el expediente a la oficina de origen. Sin costas de esta instancia, por no aparecer justificadas.

Notifíquese y cúmplase

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Magistrado

Oscar Fernando Yaya Peña

Firmado Por:

Magistrado

Sala 011 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **88def91682105829cca80b15b18f94b5546a5c9efad97bcb3af5c7de172430fe**

Documento generado en 27/04/2023 04:56:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Proceso N.°	11001310302520140034 1 01
Clase:	VERBAL – RCE
Demandantes:	ISRAEL BEJARANO CORTÉS, DORA INÉS VÁSQUEZ JIMÉNEZ y ÁNGELA SORAIDA y EDNA YARLENY BEJARANO VÁSQUEZ
Demandados:	GERMÁN ORLANDO PÁEZ GARZÓN, ARBEY GALLEGO CASTAÑEDA y COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

De acuerdo con la constancia secretarial de la fecha y comoquiera que los demandantes, dentro de la oportunidad que consagra el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 (cinco días siguientes a la ejecutoria del auto que admitió su alzamiento, cuyo plazo feneció el 25 de abril del año en curso, por su habilitación que tuvo lugar en proveído de 12 de ese mismo mes y año[1]), no sustentaron el recurso de apelación que interpusieron contra la sentencia escrita que el 13 de octubre de 2022 profirió el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá, se declara DESIERTO su alzamiento, de conformidad con la norma reseñada en precedencia[2], en concordancia con los artículos 322 (*in fine*[3]), 327 (inciso final) y 328 (inciso primero) del CGP y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias SU418 de 2019 y C-420 de 2020), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (sentencias STC12927-2022; STC705-2021; STC3472-2021; y STC13242-2017) y la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación (sentencias STL7274-2022, rad. 97805; STL16088-2022, rad. 100491; STL15350-2022, rad. 99817, entre otras).

Sin costas por no aparecer causadas (art. 365. 8, CGP).

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

---

[1] Notificado por estado electrónico E-61 de 13 de abril de 2023, consultable en los siguientes enlaces: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2233156/141693401/E-061+ESTADO+DEL+13+DE+ABRIL+DE+2023.pdf/7da339a9-08c4-4a2e-9c9d-e11a621c7a6c (pág. 2 del listado) y https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2233156/141693401/Providencias+estado+13+de+abril+de+2023.pdf/5998060b-9b17-4fb3-82d6-b0cc3f793d03 (págs. 54 a 55, *ib.*).

[2] Según la cual "**ejecutoriado el auto que admite el recurso** o el que niega la solicitud de pruebas, **el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes**. (…) **Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto**" (se subraya y resalta).

[3] Norma según la cual "**el juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado**". (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Firmado Por:

Manuel Alfonso Zamudio Mora

Magistrado

Sala 005 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b6fa3acb8107c80f8276516a67ee399a87693312acf1a3a93c08b135c3b1458f**

Documento generado en 28/04/2023 02:17:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-025-2014-00654-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Revisada las actuaciones en el expediente digital aportado, el Despacho **DISPONE:**

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de apoderado judicial, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022, por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad.

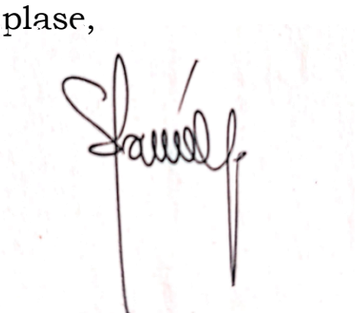
SEGUNDO: IMPRIMIR a este proceso el trámite consagrado en el artículo 12 de la ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la apelación instaurada contra el fallo de primer grado.

TERCERO: De conformidad con el inciso 2° del artículo 12 *ibídem*, se corre traslado por el término de cinco (5) días al apelante para que sustente los reparos que, de manera concreta formuló contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Una vez presentado el escrito, córrase traslado al extremo contrario por el término antes indicado.

CUARTO: Por secretaría, contrólese los mencionados términos, para que vencidos, se ingrese el expediente al Despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,



STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d05d9e1f381b1562ce0f888199562d8ee7ac00714d03fb3727bb553a9dd0157b**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16315

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-025-2020-00046-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **33bd610b22248fd4b2b1f6b2f5650a95d39a6a125ce2d4b51cf84dad5fa3caca**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16182

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

REF: PROCESO EJECUTIVO DE P.A. OPAIN S.A. -AEROPUERTO EL DORADO- CONTRA ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.

RAD. 11001310302520210036901

Magistrada Sustanciadora: **STELLA MARÍA AYAZO PERNETH**

I.- ASUNTO

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la providencia del 28 de octubre de 2021,[1] proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá D.C, mediante la cual negó mandamiento de pago, dentro del proceso de la referencia.

II.- ANTECEDENTES

1. La sociedad P.A. OPAIN -AEROPUERTO EL DORADO- instauró demanda ejecutiva en contra de ABC Aerolíneas S.A. de C.V. con el fin de obtener el recaudo del saldo insoluto, más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida desde la fecha de exigibilidad hasta que se produzca su pago, contenidos en las siguientes facturas de venta:

- LA 3210393 del 15 de febrero de 2020 por 232.932,10 USD.
- LA 3210468 del 29 de febrero de 2020 por 332.520,00 USD.
- LA 3210544 del 15 de marzo de 2020 por 289.520,00 USD.

[1] Archivo: 027AutoNiegaMandamientodePago.pdf

-LA 3210612 del 31 de marzo de 2020 por 86.480,00 USD.

2. El *a quo,* mediante auto del 28 de octubre de 2021,[2] negó la orden de pago impetrada, tras considerar que los documentos allegados no contienen la fecha en la cual fueron recibidas, ni el nombre, firma o identificación de su receptor así como la constancia del emisor vendedor del estado del pago del precio.

Agregó que *"carecen de la constancia del recibo de la mercancía o del servicio prestado por parte del comprador o beneficiario del servicio, omisión que, aunque realmente no afecta la calidad del título valor de las facturas, la falta del citado requisito especial de ese instrumento cambiario enerva su exigibilidad."*

3. Contra la anterior determinación, la parte demandante recurrió en apelación,[3] manifestando en síntesis que: (i) se equivoca el juzgador de instancia al afirmar que los títulos valores no contienen la firma del creador, en los términos del artículo 621 del Código General del Proceso, pues lo cierto es que contienen la firma digital de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 de 2020 de la DIAN; (ii) *"el artículo 774 del Código de Comercio no es la norma susceptible de ser aplicada en aquellos casos donde el título valor sea una factura electrónica de venta"* sino la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN; y que (iii) las facturas electrónicas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

III.- CONSIDERACIONES

El juicio ejecutivo ha sido definido como "*un procedimiento contencioso especial por medio del cual el acreedor exige el cumplimiento total o parcial de una obligación expresa, clara y exigible, que conste en un acto o documento proveniente del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial que deba cumplirse, y que el deudor no realizó en su debida oportunidad*"; de ahí que el procedimiento ejecutivo tendiente a la obtención del cumplimiento forzoso de una pretensión que

[2] Archivo: 027AutoNiegaMandamientodePago.pdf
[3] Archivo: 028RecursodeApelación.pdf

se adeuda y que resulta de un título que tiene fuerza por sí mismo de plena prueba, exige que los acreedores para poder hacer efectivas las obligaciones sobre el patrimonio del deudor, deben aportar un título que a su vez debe estar rodeado de determinadas calidades, pues debe ser contentivo de una obligación clara, expresa y exigible en contra del deudor demandado y a favor del acreedor demandante, reuniendo los requisitos determinados en el artículo 422 del Código General del Proceso.

En nuestra legislación positiva el cobro coercitivo de una obligación reclama como presupuesto básico la presencia de un *título ejecutivo*, el cual debe acreditar manifiesta y nítidamente la existencia de una obligación en contra del demandado en todo su contenido sustancial, sin necesidad de indagación preliminar ninguna. A la acción ejecutiva se acude entonces, cuando se está en posesión de un documento preconstituido, que de manera indiscutible demuestre la obligación en todos sus aspectos, hasta el punto de que ella surja claramente de su simple lectura sin necesidad de acudir a juicio mental alguno y exenta de toda duda sobre cualquiera de los elementos que la integran.

Dentro de las exigencias primeramente aludidas se encuentra la unidad jurídica del título, desde luego que el citado artículo 422 estatuye que: *"(…) Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción (…)"*.

Respecto a los requisitos que debe contener la factura, el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1° de la ley 1231 de 2008 indicó: *"(…) Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio.", exigencia que por supuesto se acompasa con las disposiciones que rigen la materia al paso de lo indicado en el artículo 625 ejusdem "toda obligación cambiaria deriva su*

eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación (…)".

A su turno el artículo 774 del evocado Código, modificado por el artículo 3° de la Ley 1231 de 2008 preceptúa: "*la factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621*[4] *del presente código, y 617 del estatuto tributario nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan*[5] *los siguientes: 1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendarios siguientes a la emisión. 2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley, momento en que el comprador o beneficiario del servicio tiene la oportunidad de aceptarla o rechazarla. 3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura."*

Y seguidamente señala la norma: "*no tendrá carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente capitulo".*

De igual forma, es preciso señalar que, según el numeral 1° del artículo 1.6.1.4.1.2 del Decreto 1625 de 2016, se entiende por factura electrónica, *"el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas*

---

[4] Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes:
1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y
2) La firma de quién lo crea.

[5] **Artículo 617. REQUISITOS DE LA FACTURA.** Modificado por el art. 42, Ley 49 de 1990, Modificado por el art. 40, Ley 223 de 1995, Reglamentado por el Decreto Nacional 1165 de 1996
Para efectos tributarios, las facturas a que se refiere el Artículo 615, deberán contener:
a) Apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio;
b) Número y fecha de la factura;
c) Descripción específica o genérica de los Artículos vendidos o servicios prestados;
d) Valor total de la operación.
j) Adicionado por el art. 5, Decreto Nacional 129 de 2010

computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen de la presente Sección en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación".

A su turno, el numeral 7° del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto 1074 de 2015, consagra que la factura electrónica como título valor, es aquella *"consistente en un mensaje de datos que evidencia una transacción de compraventa de bien(es) y/o servicio(s), aceptada tácita o expresamente por el adquirente, y que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio."*

Como segundo aspecto, el artículo 2.2.2.53.13 del Decreto 1074 de 2015 plantea que para el ejercicio de la acción cambiaria en este tipo de título valor desmaterializado, el emisor o tenedor legitimo (endosatario inscrito) *"tendrá derecho a solicitar al registro*[6] *la expedición de un título de cobro"*, que *"contendrá la información de las personas que, conforme a la circulación de la factura electrónica como título valor, se obligaron al pago de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Comercio"*, y además, *"un número único e irrepetible de identificación. En el título y en el registro se dejará constancia de la fecha y hora de su expedición y de su titular".*

El numeral 15 del artículo 2.2.2.53.2 ejusdem prevé: *"Es la representación documental de la factura electrónica como título valor, expedida por el registro, que podrá exigirse ejecutivamente mediante las acciones cambiarias incorporadas en el título valor electrónico, para hacer efectivo el derecho del tenedor legítimo."*

De acuerdo con el numeral 1° del artículo 2.2.2.53.2 ibíd., el administrador del registro de facturas electrónicas *"es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o el tercero que este contrate para prestar los servicios de registro electrónico de la factura electrónica como título*

---

[6] Decreto 1074 de 2015 (núm. 12, art. 2.2.2.53.2): "Es la plataforma electrónica que permite el registro de facturas electrónicas, a través de la cual el emisor o el tenedor legítimo realiza el endoso electrónico a efecto de permitir su circulación. El acceso a la información para la circulación de la factura electrónica como título valor es restringido y por tanto solo estará disponible para los usuarios. El registro estará facultado para emitir certificados de información y títulos de cobro"

valor, de información, de certificación, expedición de títulos de cobro y demás funciones contempladas en el artículo 2.2.2.53.11. de este Decreto."

De conformidad con los lineamientos expuestos, es claro entonces, que la acción cambiaria no se ejerce con base en la factura electrónica, sino con el título de cobro que expide el registro, el cual *"teniendo el carácter de título ejecutivo, le permita hacer efectivo su derecho de acudir a su ejecución ante la jurisdicción a través de las acciones cambiarias incorporadas en el título valor electrónico"* (artículo 2.2.2.53.13, Decreto 1349 de 2016). Sin embargo, en el caso *sub judice*, se encuentra que ninguna de las facturas base de la demanda ejecutiva reúne los condicionamientos señalados para que este tipo de instrumentos negociables desmaterializados puedan considerarse títulos valores, debido a no ser título de cobro.

Al respecto, ha decantado esta Corporación:

> *"(…) la acción cambiaria no se ejerce con la factura electrónica en sí misma considerada, sino con el título de cobro que expide el registro", de suerte que "los papeles aportados no pueden tildarse de títulos-valores, específicamente facturas, pues… no constituyen título de cobro."*[7]

Ahora bien, el artículo 31 de la Resolución 00015 de 2021 de la DIAN dicta "*El no registro de la factura electrónica de venta como título valor en el RADIAN no impide su constitución como título valor, siempre que se cumpla con los requisitos que la legislación comercial exige para tal efecto*". De esta forma se señala que, cabe la posibilidad de que la factura electrónica no registrada configure título valor, para lo cual tendrá que cumplir los requisitos dictados por la ley.

En el presente caso, los documentos arrimados no cumplen con los requisitos para que sean considerados como facturas a voces de los artículos 621 del Código de Comercio, 617 del Estatuto Tributario,

---

[7] Auto del 3 de septiembre de 2019, Rad. 024201900182 01. Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez.

1.6.1.4.8 del Decreto 358 de 2020 y el 2.2.2.53.6 del Decreto 1349 de 2016. Ello por cuanto se evidencia que las facturas aportadas (i) no se encuentran registradas como lo exige la norma para que sean exigibles y (ii) no cumplen con los elementos esenciales propios del título valor –tales como la firma y la identificación-.

Dicho de otro modo, bajo el hipotético de que las facturas no sean registradas, aun deberían cumplir con los requisitos que les dan exigibilidad. Por esta razón, no podría tenerse en cuenta el argumento del apoderado de la parte actora, debido a que son elementos esenciales que configuran la existencia de la factura independientemente del medio por el cual fue emitida.

Así las cosas, se confirmará la decisión objeto de alzada.

IV.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha del 28 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en el recurso porque no aparecen causadas.

TERCERO: Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen para lo de su trámite y competencia.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:

Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8ac093d158442e46e192ab4895116bcff50dfb85d9e1ad0441bffd9987522c86**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

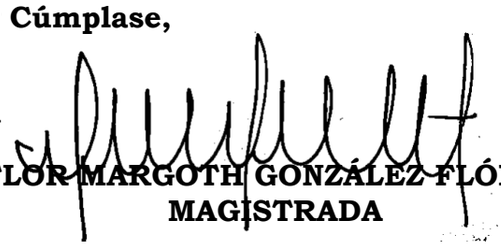
Expediente No. 11001-31-03-026-2017-00356-02
Demandante: FABER ENRIQUE MAZO GIRALDO y otro.
Demandado: INVERSIONES TRANSPORTES GONZÁLEZ y otros.

Se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por ambos extremos de la litis, contra la sentencia del 09 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, en el efecto **devolutivo** (artículo 327 del Código General del Proceso).

Imprímasele a este asunto el trámite consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la alzada.

En firme este auto, la Secretaría **REINGRESE** el proceso al Despacho, con el fin de impartir el trámite que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,



FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Verbal
Radicación N°: 11001310302720190050401
Demandantes: María Elizabeth Ramírez Bolaños y otros
Demandados: Nueva EPS y otro

ADMITIR el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2023 por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** al recurrente el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que proceda a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formuló ante el Juez *a quo*; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir al recurrente que, en ese **lapso y en esta instancia deberá sustentar los reparos concretos que formuló ante el *a quo*, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0362ba9374009a9287b69e049db4794b30b0dde10381b0aca84ba45eda6fab01**

Documento generado en 28/04/2023 04:33:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16323

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-027-2020-00186-02

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

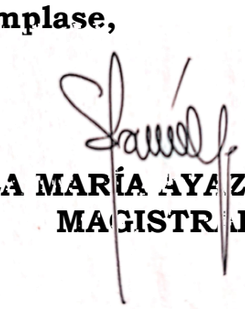
Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Finalmente, los escritos presentados por las partes apelantes se agregarán a los autos y se tendrá en cuenta en la oportunidad procesal correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7d25eb27e5f10e3d2ecf3cc2a73e79c6bf29968f00050f17f9b11cbde94d9156**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:25 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO: ACCIÓN DE GRUPO (EJECUTIVO A CONTINUACIÓN) DE LA SEÑORA LIGIA ISABEL ROJAS RODRIGUEZ Y OTROS CONTRA LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS.

Rad. 29 2012 00492 03

SE ADMITE en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del extremo demandado en el litigio ejecutivo contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá el 4 de agosto de 2022, adicionada, corregida y aclarada en proveído de 27 de octubre de 2022, dentro del presente asunto.

La parte apelante deberá tener en cuenta lo establecido en el inciso 3º del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes"*, vencidos los cuales la contraparte deberá descorrer, si a bien lo tiene, el correspondiente traslado; términos que comenzaran a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Concurrente con lo antes señalado, los profesionales del derecho deberán dar estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

A su turno, las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE este proveído en la forma establecida en el artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

Cumplido lo anterior, ingresen las presentes diligencias **inmediatamente** al despacho con informe pormenorizado de Secretaría, para proveer lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Magistrada

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a9ecd19880ffab76934c1828e514c2a04eb7fa9b447bc19c95415b8cc853da55**

Documento generado en 28/04/2023 10:11:42 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA SEXTA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D. C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés

11001 3103 029 2019 00362 01

Ref. Proceso verbal **de resolución contractual** promovido por Gloría María Acosta de Márquez y Enrique Alfonso Márquez Yáñez contra Rafael Antonio Cepeda Arbeláez

El suscrito Magistrado SE ABSTIENE DE CONCEDER el recurso de casación que formularon los demandantes contra la sentencia que el Tribunal profirió el 20 de febrero de 2023, en el proceso verbal de la referencia, por medio del cual se revocó el fallo que en forma favorable a los casacionistas profirió la juez *a quo.*

Para ello se considera:

1. Con el fallo de primera instancia se declaró resuelto el negocio jurídico celebrado por las partes, por incumplimiento del demandado, por no honrar los compromisos que, como potencial comprador adquirió según acuerdo incorporado en el documento que se intituló "contrato de promesa de compraventa" de 2 de 2015 y "acta de conciliación N° 09235" de 28 de octubre de 2017. En lo relevante, en punto a restituciones mutuas allí se condenó al señor Cepeda Arbeláez (único apelante) a pagar a su contraparte la suma capital de $99'476.372,26, junto con "los intereses civiles del 6% que hayan generado la suma de $375.000.000.oo desde el 7 de diciembre de 2017".

Con la sentencia de segunda instancia, se revocó el fallo impugnado (solo apeló la opositora) y se declaró, de oficio, la nulidad absoluta del negocio jurídico preliminar que arriba se mencionó. En lo que aquí interesa, esto es, para cuantificar el perjuicio patrimonial que el fallo de segundo grado podría haber irrogado a los recurrentes en casación, como restituciones mutuas, el Tribunal únicamente ordenó "a Gloría María Acosta de Márquez y a Alfonso Márquez Yáñez, restituir la suma de $499'130.953 a Rafael Antonio Cepeda Arbeláez".

2. Ahora, según el artículo 338 del C. G. del P., la cuantía del interés para acudir en casación ha de superar los 1000 SMMLV para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia, vale decir, $1.160’000.000[1], exigencia cuya verificación no se percibe.

En efecto, a partir de las cifras y conceptos reseñados en la consideración primera, acá no emerge, ni con mucho, que, como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del contrato preliminar, y con motivo de las restituciones ordenadas, la afectación económica de los demandantes derivada de lo resuelto en la sentencia impugnada en casación, supere los 1000 SMLMV.

No sobra añadir que los recurrentes en casación estimaron la cuantía de la demanda en la suma de $375’000.000 (fl. 58, cdno. 1), y que la parte actora no apeló el fallo que profirió el juez *a quo*.

Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Notifíquese

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

[1] De conformidad con el Decreto 2613 de 28 de diciembre de 2022, el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022, corresponde a $1’160.000.

Firmado Por:

Oscar Fernando Yaya Peña

Magistrado

Sala 011 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5db41a1070ba1fd250d701ac58addaa49b3786512c1be08c6b7c1b1ec8e7e44c**

Documento generado en 28/04/2023 12:39:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTES	Alfredo Buriticá Baena
DEMANDADOS	Arturo Palacio Buriticá y otro
RADICADO	110013103 029 2019 00643 01
INSTANCIA	Segunda
DECISIÓN	Declara Improcedente Recurso

Con referencia al recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, se expone:

1. De conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso, no resulta procedente el recurso de reposición que se plantea, porque conforme la norma referida *"[e]**l auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso**, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior…* (se destaca)".

Al efecto, ha de resaltarse que el auto que ahora se ataca no contiene puntos nuevos y el hecho de que se hubiese remitido nuevamente el expediente, ahora para la apelación de la sentencia no varía la situación pues examinado el infolio se advierte que las falencias en la integralidad de este persisten, pues siguen sin adjuntarse las capturas de pantalla que den cuenta de la fecha en la que se recepcionaron los memoriales allegados por las partes, pues ninguno de los archivos que contienen escritos enviados cuentan con la respectiva constancia del correo electrónico que permita

corroborar la fecha y hora en que estos fueron recibidos por parte de la agencia judicial, evidencia de suma importancia para establecer las datas en que se presentaron los escritos de las partes y se surtieron las actuaciones procesales.

En consecuencia, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, declara improcedente el recurso de reposición formulado por el apoderado de los demandados contra el auto proferido el 21 de febrero de 2023 por este Despacho, en el asunto en referencia.

2. Pese a lo dicho, no obsta insistir en que dentro del expediente remitido -incluso el contentivo de la apelación de sentencia- se echan de menos todas las capturas de pantalla que den cuenta de la fecha en la que se recepcionaron los memoriales allegados a lo largo del trámite, pues ninguno de los archivos que contienen escritos enviados por las partes cuentan con la respectiva constancia del correo electrónico que permita corroborar la fecha y hora en que estos fueron recibidos por parte de la agencia judicial, cuestión indispensable para la toma de las decisiones y que además compromete la integralidad del expediente.

De todas maneras, se le ordena a la Secretaría que le de cumplimiento inmediato a lo ordenado en ese proveído del 28 de octubre de 2022.

Una vez se establezca la integridad del expediente digital, se decidirá lo que se encuentre pendiente.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

Firmado Por:
Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2ad41ea513806905272220553603 1ef4adc9395bf44c197b59a7fbbec9deaabb**
Documento generado en 28/04/2023 04:32:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16327

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-029-2021-00085-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Finalmente, los escritos presentados por las partes apelantes se agregarán a los autos y se tendrá en cuenta en la oportunidad procesal correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3a5992d61cf42fa855011397929a776d03de709b52b121d6b828ab93acae765f**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Rad. No.110013103030**20190064**002

Visto en informe secretarial de ingreso, conforme a las documentales que obran y virtud al curso procesal, el Despacho DISPONE:

RESOLVER el recurso de apelación interpuesto por apoderado del ejecutado, en contra del auto de 07 de junio de 2022, a través del cual, el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogotá, decretó medidas cautelares en el proceso promovido por MASS DIGITAL S.A. y EDUARDO SUÁREZ PARDO en contra de FRANCISCO JOSÉ CABAL HURTADO.

I. ANTECEDENTES

1. Posterior a la sentencia proferida en el proceso ejecutivo, mediante auto de 7 de junio de 2022, en su numeral 4°, se decretaron como medidas cautelares, "[e]l embargo de los créditos u otro derecho semejante que tengan Colmédica Medicina Prepagada S.A., Axa Colpatria Medicina Prepagada S.A., Seguros Generales Suramericana S.A. y Aliansalud E.P.S.S.A. a favor del ejecutado (…)[y] El embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres de propiedad del ejecutado Francisco José Cabal Hurtado, con las exclusiones de ley, que se encuentren (…) Consultorio 202 de la Cínica del Country"[1].

2. El apoderado de la parte ejecutada interpuso recurso de reposición, y en subsidio el de apelación, solicitando que "se revoque el decreto de medidas cautelares contenidas en el Auto del 7 de junio de 2022"[2]. Los argumentos del recurso fueron:

2.1. **"**Los demandantes solicitaron el embargo y secuestro de las sumas de dinero depositadas en las cuentas corrientes, de ahorro y de cualquier título bancario o financiero que tuviese el demandado" en doce entidades financieras; además, "el embargo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y del remanente del producto de los embargos de procesos ejecutivos que cursan en contra"[3] del demandado, medidas que fueron decretaras. Así, afirma, la deuda ya fue garantizada "con el decreto de medidas cautelares concedida por el Juzgado el

[1] PDF.015 Auto Decreta Cautela, fl.1-2.
[2] PDF.017 Recurso Reposición, fl.4.
[3] PDF.017 Recurso Reposición, fl.2.

pasado 6 de noviembre de 2019, en donde accedió a amparar hasta $573.000.000 (…) los cuales corresponden a más del doble del valor adeudado"[4].

2.2. En ese sentido, el decreto de estas dos nuevas medidas "es a todas luces excesiv[a], por cuanto se está garantizando con estas medidas y las anteriormente decretadas mucho más del doble del valor contenido en el título valor objeto del presente proceso ejecutivo, además de realizar un bloqueo patrimonial"[5].

2.3. El embargo y secuestro de muebles y enseres del consultorio donde el ejecutado desempeña sus labores profesionales, resulta alejada del criterio de legalidad, pues se vale de todos los inmuebles y enseres que están allí para el ejercicio de su trabajo.

3. El apoderado ejecutante se pronunció respecto del recurso[6], frente al cual, en esencia, manifestó que no todas las medidas que se solicitaron han podido, y algunas ni podrán, ser materializadas, y que muchas de las decretadas no garantizan su efectividad. Además, en los argumentos del recurso no se tienen en cuenta los intereses moratorios y no existe prueba del valor real de los bienes.

4. La Jueza de primer grado resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión, al "mantener incólume el numeral 4° del auto del 7 de junio de 2022". Se concedió el recurso de apelación, y el apelante no agregó nuevos argumentos al recurso.

II. CONSIDERACIONES

1. A efectos de desatar el recurso, se hace necesario memorar que, el art.599 del Código General del Proceso, encargado de regular los criterios para el decreto y práctica de las medidas cautelares de embargo y secuestro en los procesos con pretensión ejecutiva, dispone en los incs.3° y 4° que "[e]l juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad"; y que al "el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia".

2. De los incisos de la disposición transcrita, resulta evidente que los regulados en uno y otro, son supuestos de hecho distintos. El primero de los apartes citados, regula el momento del decreto, dando la facultad al juez de limitarlos, pues el verbo utilizado es 'podrá'; posteriormente le da una regla imperativa, y es el monto que no puede exceder la cautela. El segundo de los incisos, regla el momento de la práctica del secuestro, donde impone un deber imperativo al juez, ya que el verbo utilizado es 'deberá'. En otras palabras, el primer supuesto es concomitante al decreto, y el segundo es al momento del secuestro. Incluso,

---

[4] PDF.017 Recurso Reposición, fl.3
[5] PDF.017 Recurso Reposición, fl.3
[6] PDF.018 Descorre recurso

la doctrina plantea que el deber de mesura en lo que al decreto de medidas cautelares se refiere, "se traslada al juez en dos instantes: el primero, cuando decreta la medida; y el segundo cuando la práctica"[7].

3. Hechas esas precisiones, procede advertir que no existe duda de que son sólo dos medidas decretadas en el auto impugnado, y que esa providencia únicamente las decretó. Tampoco se discute que, con anterioridad, fueron decretadas otras medidas. Ahora, respecto de la desproporción de las medidas decretadas e impugnadas, delanteramente se advierte que no es cierto lo afirmado por el recurrente, en el sentido de que el crédito del que se busca su ejecución ya se encuentre garantizado.

4. Debe tenerse en cuenta que la base para establecer el monto a garantizar, no es el contenido en el título ejecutivo, pues también hacen parte íntegra de la deuda los intereses moratorios por el impago del crédito; y deben tenerse en cuenta las costas procesales que se han causado en el curso del proceso. Nótese que el recurrente ninguna mención hizo sobre monto de los intereses, y tampoco relacionó las que serían las costas prudencialmente calculadas, que, dicho sea de paso, han aumentado en la fase de ejecución propiamente dicha.

5. Adicionalmente, se puede cotejar en el expediente que, efectivamente, muchas de las medidas cautelares que buscan el embargo de dineros depositados en cuentas bancarias, no se han hecho efectivas, bien sea porque los montos no superan los límites inembargables, porque el ejecutado no tiene productos financieros en los bancos oficiados, las cuentas se encuentran inactivas, o porque existen medidas cautelares anteriores[8].

6. Ahora, el hecho de que el demandado esté siendo pluriejecutado, da cuenta de la dificultad que existe para el cobro del presente crédito, por lo que en ninguna medida podría advertirse que su cumplimiento está garantizado, como lo quiere hacer ver el recurrente. De hecho, la existencia de otras ejecuciones es lo que obligó a que lo sometido a embargo, en algunos casos, fueran únicamente remanentes o que se persiga el bien eventualmente desembargo. Esa medida cautelar, si bien está decretada, es completamente aleatoria, pues no se ha determinado si lo inicialmente embargado en esos procesos, alcanza a cubrir el monto perseguido en estos.

7. Así que es imposible predicar que las dos medidas cautelares que hoy se impugnan sean desproporcionadas; máxime cuando, la primera de ellas, ni siquiera se decretó con la certeza de la existencia de un crédito a favor del ejecutado en las entidades oficiadas, pues en el mismo auto se advierte que primero deben informar si estos existen, por lo que, se insiste, es una medida con un componente de incertidumbre.

---

[7] Bejarano, Ramiro. *Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. 10° ed.* Bogotá, Temis, pág. 634.
[8] Cuaderno 2. PDF.01 Cautelares., fl. 72-87; PDF.02 Respuesta BBVA; PDF.04 Respuesta Mi Banco; PDF.05 Banco Pichincha; PDF.06 Respuesta Lulo Bank; PDF.07 Respuesta Banco CrediFinanciera; PDF.08 Respuesta Mundo Mujer; PDF.09 Banco Falabella.

8. Por otro lado, respecto de la medida cautelar de embargo de los muebles y enseres, es imposible en la etapa del decreto advertir que todo lo que allí se encuentre tenga la categoría de inembargable. Es por eso que en la decisión recurrida se advirtió que se deben aplicar las exclusiones de ley. En el caso de esos bienes, el perfeccionamiento del embargo y el secuestro son actos concomitantes, por lo que la eventual inembargabilidad es un asunto que, en principio, sólo podría advertirse en la respectiva diligencia.

9. Ahora, a pesar de todo lo expuesto, el ejecutado sigue contando con variadas garantías en caso de que efectivamente se acredite el supuesto de la desproporción de las medidas. Por un lado, como se ha reseñado, al momento del secuestro; por otro, eventualmente solicitando el levantamiento de las medidas efectivamente practicadas.

10. Ninguna desproporción se advierte en el decreto de las medidas cautelares en la providencia recurrida, pues, se itera, es imposible afirmar, como lo hizo el ejecutado, que el pago del crédito se encuentra garantizado. Con base en las consideraciones expuestas, es necesario concluir que el auto apelado debe ser confirmado.

La suscrita Magistrada, RESUELVE;

III. DECISIÓN

PRIMERO: **CONFIRMAR** el auto de 07 de junio de 2022, a través del cual, el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogotá, decretó medidas cautelares.

SEGUNDO: **CONDENAR** en costas en este trámite, y al efecto fijar como agencias en derecho la suma de $750.000.oo (art.365 del C.G.P).

TERCERO: **ORDENAR** que, por secretaría, se devuelvan las diligencias al despacho de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



LUZ STELLA AGRAY VARGAS
Magistrada

Firmado Por:

Luz Stella Agray Vargas

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7f24bdf306cc06a2f10aa75675a94d28c9fadc0d6e2deb81f6d0f8ca4e073f86**

Documento generado en 28/04/2023 04:27:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Radicación 110013103030 2020 00258 01

El artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, estipula que *"…Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado.* ***Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto...****".* -negrilla fuera del texto-.

En el *sub-examine*, el 19 de abril de 2023, se profirió el auto en virtud del cual se otorgó la oportunidad al apelante para que sustentara la alzada ante esta instancia, así como a su contradictor, con miras a replicar. **El pronunciamiento quedó en firme sin objeción de ninguna naturaleza.**

El proveído fue incluido en el registro de actuaciones del sistema de Gestión Judicial Siglo XXI y se notificó en el portal Web de la Rama Judicial de la Corporación, según Estado Electrónico el día siguiente.

En estas circunstancias, aunque la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022, por el Juzgado 30 Civil del Circuito de esta ciudad, es notorio que, atendiendo el informe secretarial precedente, el término de traslado venció en silencio para la inconforme. De esta forma, **no se cumplió la carga que impone la codificación adjetiva, atañedera a sustentar, ante esta instancia, la alzada,** por lo cual es pertinente

declararla desierta.

En mérito de lo expuesto, el despacho **RESUELVE:**

PRIMERO: DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022, por el Juzgado 30 Civil del Circuito de esta ciudad.

SEGUNDO: ORDENAR que en firme esta determinación vuelva el expediente al Estrado de origen.

NOTIFÍQUESE.

Firmado Por:
Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7bc9b2a74d57604e2091adc6317d39195aa5555d9a69e904b17a11aff75cad5c**
Documento generado en 28/04/2023 10:53:53 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL

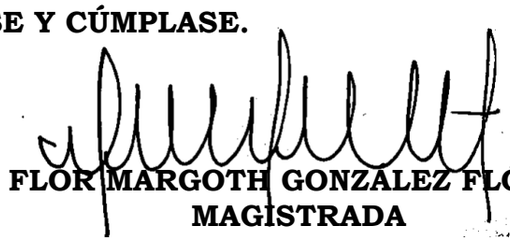
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-031-2021-00039-01
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Demandado: JOSÉ AGUSTIN ACUÑA CARMONA y otros.

De conformidad con lo normado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, y comoquiera que la parte apelante no sustentó el recurso dentro de los cinco días siguientes a la notificación por estado del auto de fecha 31 de marzo de 2023, se declara **DESIERTO** el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 15 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá.

Por Secretaría, **DEVUÉLVANSE** las presentes actuaciones a la dependencia de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Ref: TRÁMITE ESPECIAL DE IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE de GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. contra MONPEZA S.A.S. Exp. 032-2022-00312-01.

MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS.

Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 22 de marzo del 2023.

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 24 de agosto del 2022, pronunciada en el Juzgado 32 Civil del Circuito de la ciudad.

I. ANTECEDENTES

1.- La persona jurídica GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. mediante apoderado judicial entabló demanda de imposición de servidumbre de energía eléctrica con ocupación permanente contra Monpeza S.A.S. -titular del dominio- y BANCO DAVIVIENDA S.A. -acreedor hipotecario- para que se imponga la referida servidumbre, con los derechos que conlleva, sobre una franja de terreno de 35.600 metros cuadrados, que pertenecen al predio denominado "lote boca de monte tres", identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 170-19104, ubicado en la vereda La Cabrera del Municipio de Pacho, departamento de Cundinamarca, acto que deberá ser inscrito en el respectivo registro.

Así mismo, pidió autorizar la consignación de $51.279.764 como monto integral de la indemnización a favor de la demandada, sin que sobre esa suma se causen valores adicionales (Archivo EXPEDIENTE 2017-00075, C01, expediente digital).

2.- El petitum se edifica en los fundamentos fácticos que a continuación se sintetizan (ej):

2.1.- La demandante resultó seleccionada por parte de la UPME -Unidad de Planeación Minero-Energética- adscrita al Ministerio de Minas y Energía, para el diseño, adquisición de los suministros,

construcción, operación y mantenimiento de la subestación Norte-500kv (primer refuerzo 500kv área oriental) , proyecto que requiere pasar con una línea de transmisión eléctrica por la jurisdicción de varios municipios, entre ellos, la intervención parcial -ocupación permanente de 35.600 M2 del predio de propiedad de la demandada.

2.2.- Mediante estudio económico elaborado por la empresa, se realizó estimación del valor unitario a reconocer por la franja de terreno afectada, el valor de los sitios de torre y el valor de daños para las áreas unidades de uso e individuos aislados (bosque, árboles, pastos y rastrojo). El referido cálculo arrojó la suma de $51.279.764.

3.- La demandada Banco Davivienda se notificó personalmente (pág. 122, ib) y, en oportunidad, se opuso al monto ofrecido como indemnización para lo cual aseveró que el predio sirviente se encuentra avaluado en $2.691.738.000, es decir, un valor muy superior a lo referido por la demandante. Añadió que cuenta a su favor con una hipoteca abierta sin límite de cuantía, misma que respalda un préstamo que actualmente asciende a más de 3.000 millones de pesos (págs. 132 a 139. ej)

3.1.- Monpeza S.A.S. se notificó mediante aviso y en tiempo se opuso al valor de la indemnización, pues en su criterio, aquella "no corresponde con el valor real de daños y perjuicios materiales e inmateriales". Para soportar su defensa aportó dictamen pericial que calcula el rubro aludido en la suma de $1.235.274.400 (págs. 216 a 233, ib).

4.- Ante el desacuerdo de las partes en el reconocimiento pecuniario por la imposición de la servidumbre, en acatamiento a lo ordenado por la Ley 56 de 1981, en concordancia con el artículo 2.2.37.5.3 del Decreto 1073 del 2015 se designó a dos peritos para que en forma conjunta realicen el avalúo correspondiente.

5.- El proceso inicialmente fue tramitado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho- Cundinamarca, quien por auto del 12 de agosto del 2020 declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión a los juzgados civiles del circuito de Bogotá, correspondiéndole el reparto al 32 de esa categoría.

6.- Surtidos los trámites de rigor y una vez verificada la inspección judicial se dictó sentencia en audiencia pública que dispuso la imposición de la servidumbre y actualizó el monto de la indemnización, decisión que no compartieron parcialmente los demandados (archivo 55, expediente digital) y su contraparte.

II. ARGUMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

7.- Luego de sintetizar los antecedentes del proceso, la motivación para la imposición de la servidumbre eléctrica y reseñar algunos

aspectos normativos de este tipo de acciones, estimó la procedencia de la petición, pues se acreditó la realización del proyecto, la intervención del área que ocupará el mismo y en general todos aquellos requisitos que prevé la Ley 56 de 1981.

Enseguida, y puesto que la oposición se formuló contra el monto de la compensación señalando que no se compadece con la afectación que generaría la ocupación, procedió a analizar las circunstancias particulares del caso concreto, para ello, tomó como referencia las consideraciones de la sentencia C-832 del 2007 de la Corte Constitucional, en particular, en lo que refiere que la indemnización se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado, pero en todo caso, será justa.

En ese sentido, sostuvo que comoquiera que la normatividad no establece un criterio jurídico específico para proyectar el monto del resarcimiento, esta habrá de calcularse conforme el caso concreto, porque no siempre es posible imponer las reglas de cálculo de una expropiación para estos eventos. Para el estudiado, destacó algunos hechos relevantes como que el uso de la servidumbre no impedía hacer el pastoreo de ganado, ni despojaba del dominio a sus dueños.

De tal modo, en atención a las pruebas aportadas, especialmente los dictámenes periciales, por tratarse de un asunto técnico, estimó que el trabajo más adecuado, completo y veraz fue el rendido por los dos peritos designados por el juzgado, habida cuenta que las conclusiones allí vertidas resultaban más acordes con lo que reveló el proceso.

Así las cosas, descartó la experticia aportada con la demanda, toda vez que aquella perdió su vigencia, al paso que carece de un desarrollo detallado de las circunstancias del caso para una estimación justa. De igual forma, se apartó del dictamen que allegó Monpeza S.A. ya que, si bien el mismo es minucioso en cuanto a los aspectos de topografía de la zona entre otras, adolece de solidez en la metodología utilizada, contiene la cuantificación de daños futuros sin soporte alguno y aplica una técnica equivocada para establecer la depreciación del inmueble.

Ahora, en cuanto al dictamen que presentaron los dos peritos designados en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1073 del 2015, adujo que este se ajusta mejor a lo que debe tenerse en cuenta, pues tomó en consideración que la servidumbre no atraviesa el predio sino un lado del lindero norte. Así mismo, la exposición del trabajo fue sólida y la cuantificación consistente, por lo que acogió tal estimación para fijar el monto del resarcimiento en $122.661.606.

III. EL RECURSO

Parte demandante

8.- La inconformidad del demandante radica en la forma en la que se valoró el material probatorio aportado al expediente, en particular, las conclusiones a las que arribó el juzgador a-quo de cara a los dictámenes periciales aportados, frente a los cuales, asegura, "simplemente" indicó las razones por las que tales trabajos eran o no viables para tasar la indemnización, sin referirse a los demás elementos de convicción aportados por las partes para el debate.

En ese sentido, aseguró que el cálculo de la indemnización aportado con la demanda cumple con los requisitos de la norma especial (ley 56 de 1981) y del Decreto 1073 del 2015 y hace la descripción de los daños que se puedan causar con la imposición de la servidumbre.

No obstante lo anterior, reprochó que en el fallo se hubiese aceptado el dictamen elaborado en conjunto por dos peritos para imponer el valor del resarcimiento, porque frente al mismo se aportaron suficientes reparos para desvirtuar su idoneidad, mismos que ni siquiera fueron objeto de pronunciamiento por parte del a-quo y que se sintetizaron en: que la tasación se dio en función del valor de predio, cuando su cálculo debe realizarse de acuerdo con las afectaciones reales que la infraestructura causa en el mismo; que se pretendió avaluar la servidumbre cuando es claro que no existe un mercado inmobiliario de ese tipo; que no se expuso una metodología clara para la estimación del valor; que se tuvieron en cuenta valores del terreno actuales, y han debido adoptarse los del año en que se realizó la entrega de áreas; que los peritos no aplicaron el criterio de integridad y suficiencia, porque para la estimación de los supuestos daños de áreas de pasto y bosque no indicaron la fuente de tales montos; que los factores de afectación se sustentan el bibliografía que carece de sustento técnico.

Aunado a lo expuesto, este dictamen no cumplió con los presupuestos establecidos en la norma que regula la temática, esto es, efectuar un inventario de los daños con el estimativo en forma explicada y determinada.

En su criterio, lo que debió hacer el juez de primer grado, es "establecer los puntos de concurrencia entre los dictámenes" y con base en ellos estimar la indemnización de acuerdo con las circunstancias que evidencia y que fueran probadas.

Por todas esas situaciones, consideró que la sentencia transgredió los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva, ya que omitió la valoración conjunta de las pruebas conforme lo ordena el artículo 176 del Código General del Proceso.

Parte demandada Monpeza S.A.S.

9.- Refiere que el fallo lesiona los intereses de la propietaria del bien quien se ve afectada por la imposición de la servidumbre.

Agrega que el dictamen pericial acogido por la primera instancia fue "ineficaz" porque consta de varios errores, resaltándose aquellos de los fundamentos de las conclusiones, que no explican las razones de sus métodos, carecen de claridad y coherencia.

Así mismo, el cálculo aceptado desconoce los criterios de la jurisprudencia para la idoneidad de un trabajo técnico, tales como, que el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos; que el dictamen sea personal y contenga conceptos propios; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto; que no exista motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; que se haya dado la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción; que no exista retracto por parte del perito; que otras pruebas no lo desvirtúen y que sea claro, preciso y detallado.

9.1.- De otra parte, criticó la ausencia de valoración conjunta de todas pruebas aportadas, dejando de lado aquellas que allegó Monpeza S.A.S. y Davivienda, en lo relacionado con el avalúo y los daños causados por lucro cesante, daño emergente, pérdida de valor comercial y perjuicios inmateriales, ni se establecieron las áreas de terreno del predio de mayor extensión, de ocupación transitoria, que son aquellas que la demandante utilizará para acceder al área de servidumbre.

9.2.- Adiciona que no se tuvo en cuenta precedentes judiciales emitidos por Tribunales Superiores de diferentes distritos en los que se acogen dictámenes que establecen los conceptos a indemnizar que atrás se citaron.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

1.- Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, como son demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer y competencia concurren en la litis, además como no se observa causal de invalidez que anule la actuación se impone una decisión de mérito, con la consideración adicional referida a que en el evento de ser interpuesta la alzada por ambas partes, como es el caso de autos, la Sala está revestida de la competencia para resolver sin limitaciones, por así preverlo el inciso 2° del artículo 328 del Código General del Proceso.

2.- Ahora bien, con miras a desatar la apelación formulada por las partes, debe decirse que este recurso se endereza a que el Superior revise la actuación de primera instancia, pero inmerso siempre dentro del criterio dispositivo, por lo que es a la parte apelante a quien le corresponde determinar el ámbito dentro del cual ha de moverse el ad-quem al momento de tomar la decisión.

3.- Desde esta perspectiva el problema jurídico a resolver se contrae a determinar exclusivamente si la suma determinada como indemnización se encuentra ajustada o si, por el contrario, debe modificarse.

Servidumbre de conducción de energía eléctrica

4. Dispone la Ley 126 de 1938, "sobre suministro de luz y fuerza eléctrica a los Municipios, adquisición de empresas de energía eléctrica, de teléfonos y de acueductos e intervención del Estado en la prestación de los servicios de las mismas empresas" que la servidumbre de conducción de energía eléctrica es legal.

A su turno, la Ley 142 de 1994, artículo 117 faculta a las empresas de servicios públicos que tengan interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto,-como la aquí demandante- para solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, ***o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981****.*

Por su parte ésta última Ley, art. 16 declara de utilidad pública e interés social ***los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica****, acueductos, riego, regulación de ríos y caudales,* ***así como las zonas a ellos afectadas****.*

*El art. 25 de ley en comentario (56 de 1981) dispone que: "****La servidumbre pública de conducción de energía eléctrica*** *establecida por el artículo 18 de la Ley 126 de 1938,* ***supone para las entidades públicas que tienen a su cargo la construcción de centrales generadores, líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, la facultad de pasar por los predios afectados, por vía aérea, subterránea o superficial, las líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, ocupar las zonas objeto de la servidumbre, transitar por los mismos, adelantar las obras, ejercer la vigilancia, conservación y mantenimiento y emplear los demás medios necesarios para su ejercicio".***

Ahora bien, el procedimiento para la imposición de la referida servidumbre, actualmente, se encuentra recopilado en el Capítulo VII, Sección 5, del Decreto 1073 de 2015[1], y cuyo canon 2.2.3.7.5.3. reza:

[1] Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.

"Los procesos a que se refiere este Decreto seguirán el siguiente trámite:

"1. En el auto admisorio de la demanda se ordenará correr traslado de ella al demandado, por el término de tres (3) días y se ordenará la inscripción de la demanda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación del inmueble, si esta petición ha sido formulada por el demandante.

"2. Cuando el demandante haya manifestado en la demanda la imposibilidad de anexar el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos sobre propiedad y demás derechos reales principales, el juez ordenará, en el auto admisorio de la demanda, el emplazamiento de todas las personas que puedan tener derecho a intervenir en el proceso.

"En el edicto emplazatorio se expresará la naturaleza del proceso, el nombre del demandante, del demandado, si se conoce, o la indicación de que se trata de personas indeterminadas y la prevención de que se designará curador ad litem a los emplazados si no comparecen en oportunidad. El edicto se fijará por el término de un (1) mes en un lugar visible de la Secretaría y se publicará en un diario de amplia circulación en la localidad, por tres veces, durante el mismo término y por medio de la radiodifusora del lugar, si la hubiere, con intervalos no menores de cinco (5) días.

"Cuando el citado figure en el directorio técnico se enviará a la dirección que allí aparezca, copia del edicto por correo certificado, o con empleado del Juzgado que la entregará a cualquier persona que allí se encuentre o la fijará en la puerta de acceso, según las circunstancias, todo lo cual se hará constar en el expediente, al que se agregarán el edicto, sendos ejemplares del diario y certificación auténtica del administrador de la emisora. Transcurridos cinco (5) días a partir de la expiración del término de emplazamiento, el juez designará a los citados un curador ad litem, con quien se surtirá la notificación.

"3. Salvo lo dispuesto en el numeral anterior, si dos (2) días después de proferido el auto admisorio de la demanda no se hubiere podido notificar a todos los demandados, el juez de oficio los emplazará por edicto que durará fijado tres (3) días en la Secretaría y se publicará por una vez en un diario de amplia circulación en la localidad y por una radiodifusora si existiere allí, copia de aquél se fijará en la puerta de acceso al inmueble respectivo. Al demandado que no habite ni trabaje en dicho inmueble, pero figure en el directorio telefónico de la misma ciudad, se le remitirá copia del edicto al lugar en él consignado por correo certificado o con empleado del despacho. Cumplidas las anteriores formalidades sin que los demandados se presenten en los tres (3) días siguientes, se les designará un curador ad litem a quien se notificará el auto admisorio de la demanda.

"4. El juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la demanda, practicará una inspección judicial sobre el predio afectado, identificará el inmueble, hará un examen y reconocimiento de la zona objeto del gravamen y autorizará la ejecución de las obras que de acuerdo con el proyecto sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre.

"5. Si la parte demandada no estuviere conforme con el estimativo de los perjuicios, podrá pedir dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda que se practique un avalúo de los daños que se causen y se tase la indemnización a que haya lugar por la imposición de la servidumbre.

"El avalúo se practicará por dos peritos escogidos así: Uno de la lista de auxiliares del Tribunal Superior correspondiente y el otro de la lista suministrada con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En caso de desacuerdo en el dictamen, se designará un tercer perito escogido de la lista suministrada por el mencionado Instituto, quien dirimirá el asunto. Sólo podrán avaluarse las mejoras existentes al momento de notificarse el auto admisorio de la demanda y las efectuadas con posterioridad siempre y cuando sean necesarias para la conservación del inmueble.

"6. En estos procesos no pueden proponerse excepciones.

"7. Con base en los estimativos, avalúos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez dictará sentencia, señalará el monto de la indemnización y ordenará su pago. Las indemnizaciones que correspondan a titulares de derechos reales principales, debidamente registrados en el certificado de matrícula inmobiliaria, representados por curador, poseedores o tenedores, se entregarán por el juzgado cuando ellos comparezcan.

"8. Si en la sentencia se fija una indemnización mayor que la suma consignada, la entidad demandante deberá consignar la diferencia en favor de los titulares de derechos reales del predio, o de los poseedores. Desde la fecha que recibió la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocerá intereses sobre el valor de la diferencia, liquidados según la tasa de interés bancaria corriente en el momento de dictar la sentencia".

Sobre tal temática la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil expuso que: "(...) como el ejercicio de esas prerrogativas implica una intrusión (justificada) del Estado en la propiedad privada, la imposición de la servidumbre exige –por vía general– la mediación de los jueces, con el fin de que estos asignen el ius in re aliena a la entidad de derecho público y determinen, con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, una compensación razonable para el propietario del predio sirviente.

"Pero esa controversia no podría adelantarse por la senda de los procesos declarativos que entonces preveía el ordenamiento jurídico (ordinario, abreviado, verbal y verbal sumario), pues estos incluían una serie de etapas que, amén de innecesarias frente al restringido debate que se suscita en estos litigios, eran incompatibles con el vertiginoso avance que ameritan las obras públicas de infraestructura energética.

"(...) este proceso declarativo contiene una sistemática diferenciada respecto de los demás que prevé la codificación adjetiva civil; ello lo evidencia la reglamentación heterogénea de las formas de notificación, la necesaria realización de una inspección judicial dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la demanda, los breves términos de los traslados, la imposibilidad de presentar excepciones, y el método de fijación de la compensación correspondiente"[2]*.*

5.- Bajo tales postulados descendiendo al caso concreto, se tiene que el monto a pagar a favor del titular de dominio del predio dominante se ha categorizado como una "indemnización" y aquella será determinada por el juez "con base en los estimativos, avalúos, inventarios o pruebas que obren en el proceso", aspectos que conllevan a la Sala a determinar que el aparte censurado del fallo se confirmará.

Para convenir en lo anterior, ha de recordarse que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 2008 la valoración de los daños en ***cualquier proceso*** *que se surta ante la administración de justicia "...atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales".*

En tal sentido, cabe recordar que, al tener naturaleza indemnizatoria, la cuantía que se reconozca por la imposición de la servidumbre no puede, en modo alguno, constituir una fuente de enriquecimiento para el propietario afectado, de manera que su tasación se hará en forma reflexiva por el juzgador conforme los elementos de juicio que para tal fin se encuentren en el expediente.

Sobre la temática que se viene tratando, la Sentencia C-831 del 2007, señaló que: "los conflictos entre el interés público, representado en este caso en la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, y los intereses particulares del propietario o poseedor del predio, deben resolverse a favor de aquel, merced del carácter de utilidad pública que el legislador le ha conferido a los planes, proyectos y ejecución de obras destinadas a dicha transmisión (Ley 56/81, art. 16 y Ley 142/94, art. 56). De otro lado, una vez definida la necesidad de satisfacer ese interés social, los derechos de los particulares serán resarcidos a través de indemnización, la cual se fijará consultando los intereses de la comunidad y el afectado.

---

[2] *CSJ. SC 4658-2020. 30 de noviembre del 2020.*

"Las reglas dispuestas por el artículo 58 Superior, bajo esta perspectiva, restringen las pretensiones del propietario o poseedor del bien sirviente a la obtención de una indemnización justa[3] por los daños que se causen como consecuencia de la imposición de la servidumbre pública, monto que deberá compensar los perjuicios relacionados tanto con la limitación física de la propiedad como con la restricción a la explotación económica del predio, en los casos que tal desmejora se acredite. Así, ante la declaratoria de utilidad pública del proyecto de transmisión de energía eléctrica, los propietarios o poseedores de los inmuebles afectados sólo podrán exigir a la administración que reconozca el valor de los intereses susceptibles de indemnización".

6.- Para el caso de la imposición de servidumbre de energía eléctrica, la norma que regula la materia citado en precedencia -Decreto 1073 del 2015-, fijó la forma en la que ha de seguirse el trámite ante el desacuerdo de las partes en la tasación del monto de la indemnización, estableciendo que inicialmente corresponde a la demandante aportar "el inventario de los daños que se causaren, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, acompañado del acta elaborada al efecto". No obstante, si la convocada manifiesta inconformidad podrá "pedir" que se practique otro avalúo de los daños, el cual se realizará "por dos peritos escogidos así: Uno de la lista de auxiliares del Tribunal Superior correspondiente y el otro de la lista suministrada con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (…)".

Como puede verse, la aludida legislación prevé un procedimiento particular, de ahí que, no le estaba permitido a la demandada Monpeza S.A.S. aportar por su propia cuenta un avalúo con el fin de controvertir el inicialmente allegado, como ocurre en la mayoría de procesos

---

[3] *El concepto indemnización justa ha sido objeto de debate por la jurisprudencia constitucional. Así, la sentencia C-1074/02, antes reseñada, expuso las siguientes consideraciones sobre el tópico, que apuntan a ese carácter cualificado de la indemnización por afectación del derecho a la propiedad particular:*
¿Quiere decir lo anterior, que bajo los actuales parámetros constitucionales, la disminución del valor de la indemnización que se reconozca al particular expropiado, en aras de consultar los intereses de la comunidad, puede llegar a ser de tal magnitud que finalmente no se le reconozca ningún valor como indemnización? || La Corte considera que ello no es posible, pues luego de derogada la posibilidad de expropiación sin indemnización por el Acto Legislativo No. 1 de 1999, es claro que la limitación a la indemnización en caso de expropiación no puede llegar hasta el punto de no reconocer ningún valor al particular afectado. Indemnizaciones simbólicas o irrisorias no serían justas. || La referencia a los intereses de la comunidad y del particular afectado también resalta un cambio fundamental introducido por el Constituyente en 1991: la fijación del valor de la indemnización difícilmente puede hacerse de manera abstracta y general, sin tener en cuenta el contexto de cada caso, sino que requiere la ponderación de los intereses concretos presentes en cada situación, para que el valor de la indemnización corresponda en realidad a lo que es justo. Esta característica puede llevar a que el juez, luego de ponderar los intereses, en cada caso, establezca una indemnización inferior al total de los daños ocasionados por la expropiación, pero sin que pueda, dado que el Acto Legislativo No. 1 de 1999 excluyó la posibilidad de expropiación sin indemnización, llegar a la conclusión de que no hay lugar a indemnización adecuada, como ya se dijo. || La ponderación de los intereses enfrentados en cada caso la hace el juez. Se trata de un requisito que también impide que el monto de la indemnización finalmente fijado, y las condiciones de su pago, sean arbitrarios, por violar los parámetros legales, por obedecer a prejuicios o a un animus discriminatorio, por carecer de razonabilidad en las circunstancias en que colisionaron el interés del afectado y el interés de la comunidad, o por ser evidentemente desproporcionados.

tramitados con el Código General del Proceso a tono con el artículo 228, porque ante la disconformidad, el mandato impone que la nueva cuantificación se practique en la forma atrás citada. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que tales disposiciones se traducen como "formas propias"[4] de esta clase de trámites, entendidas como "las reglas que, de conformidad con la naturaleza de cada juicio, determinan cada una de las etapas propias de un proceso y que, a su vez, se constituyen en las garantías de defensa y de seguridad jurídica para los intervinientes en el respectivo litigio" (Sentencia C-140 de 1995).

Y frente al dictamen que se elabora siguiendo las reglas del ya citado decreto, es claro que, este sí está sometido a la contradicción conforme las reglas del artículo 228 del Código General del Proceso, pues así lo ha decantado la citada jurisprudencia. Empero en el caso que acá nos ocupa, únicamente la parte actora, en el término de traslado, solicitó la comparecencia de los peritos que elaboraron el avalúo para efectos de controvertirlo en audiencia, oportunidad en la que, valga resaltarlo, la demandada omitió hacer cualquier intervención (archivo 75, C02Juzgado32CivilCircuito_CERRADO, archivo 103 continuación C02).

En ese orden de ideas, aun cuando el juez a-quo apreció en la sentencia el avalúo aportado por Monpeza S.A.S. extrayendo de él las conclusiones que se reseñaron en líneas precedentes, lo cierto es que tal documento, no podría tenerse como dictamen pericial, ya que se aportó sin atender las reglas del procedimiento. En todo caso, las conclusiones allí vertidas y los soportes que lo acompañaron podrán valorarse como prueba documental, en la medida que su contenido contribuya de alguna manera al objeto del debate.

7.- Con las anteriores precisiones, la Sala resolverá en forma conjunta los recursos de apelación, puesto que aquellos se centran en similares reparos, atinentes, en lo medular, a la valoración probatoria y a la insuficiencia del avalúo elaborado por los peritos Stefannye Buitrago Marulanda y Antonio José Sánchez Zambrano, el cual obra en el archivo pdf. 61., del C02Juzgado32CivilCircuito_CERRADO.

Una vez analizado el mencionado trabajo, en conjunto con las demás pruebas recaudadas, los documentos que describen el inmueble, la destinación de la servidumbre y especialmente, con la inspección judicial que practicó por comisión el Juzgado Promiscuo Municipal de Pacho-Cundinamarca, concluye el Tribunal, al igual que lo encontró la primera instancia, que el mismo resulta idóneo para tasar la indemnización de daños, pues es claro, preciso, exhaustivo y detallado. Además, tiene en cuenta las circunstancias especiales del predio afectado, como la actividad económica desarrollada en el mismo.

---

[4] *CSJ. Sentencia SC-4658-2020.*

Asimismo, véase que, al inicio del trabajo, los peritos manifestaron no tener causal de impedimento y aseguraron actuar con imparcialidad, allegaron certificados de pertenecer al registro de avaluadores lo que los faculta para la labor encomendada, al paso que ninguna de las partes, en particular la demandada que atribuyó tales falencias, acreditó que los expertos estuvieran incursos en alguna causal que les impida ejercer el cargo conforme el artículo 17 de la Ley 1673 del 2013.

En esa dirección, los peritos también dieron cuenta de su experiencia profesional y los estudios que soportan su hoja de vida, en especial, Stefannye Buitrago Marulanda se destaca como Ingeniera Catastral especialista en avalúos rurales, al paso que Antonio José Sánchez Zambrano resaltó sus 25 años de experiencia en el oficio, trabajando para procesos contencioso administrativos. Y si bien, ambos aseguraron que es la primera vez que se les encomienda este tipo de estimaciones -para servidumbre- esa vicisitud ni le resta mérito al trabajo, ni es extraña, porque este tipo de debate no es, precisamente, el más demandado ante la administración de justicia.

Aunado a lo anterior, es relevante para esta Corporación que el trabajo se realizó atendiendo que la afectación del predio se da exclusivamente en una zona que únicamente constituye un porcentaje del 7.97% del total de la extensión, lo que motivó que se limitara la valoración a tal porción; que se estableció que la única actividad económica que ahí podría desarrollarse era la ganadería y además, se consignó que el área de la torre de energía ocuparía un espacio de 300 m2, en el que debía reconocerse la totalidad del valor del metro cuadrado por quedar inutilizada; por el contrario, en el terreno restante se adecuó un porcentaje del 70% porque sólo limita parcialmente el uso que ***actualmente*** *se le da.*

Igualmente, el citado documento, contrario a lo que alega la parte demandante, sí tuvo en cuenta las especies de árboles nativos afectados para la cuantificación, así como de pastos y bosque con la utilización de método de costo, precios de referencia para la zona y cantidad, listado que quedó en detalle consignado en las páginas 22 a 24 del citado archivo digital, y en el numeral 12.3. y 13 de la experticia.

Pero si fuera del caso exigir una explicación más exhaustiva de la cuantificación del inventario, por ejemplo, de árboles nativos, sorprende al Tribunal que el demandante desconozca que el avalúo que se aportó con la demanda (págs. 42 a 44, Cuaderno EXPEDIENTE-2019-00075) carece de esos detalles, en él, brilla por su ausencia la inclusión de fuentes, métodos de cuantificación y demás.

En adición, el dictamen estableció el "método comparativo" para cuantificar el área afectada, aspecto en el que vale resaltar que, no se trató de avaluar la servidumbre como lo entiende la censura, pues la lectura del instrumento permite concluir que la terminología utilizada hace referencia a <u>la franja de terreno</u>, temática en la que se resaltó que para este tipo de imposición no existe una reglamentación particular, por lo que debió

acudirse a bibliografía sobre el punto. Así se concluyó, de manera afortunada que, "la servidumbre genera limitación al dominio, pero no la pérdida de éste por lo tanto, la indemnización debe enfocarse en cuantificar la limitación que se genera, expresada en porcentaje respecto al valor comercial del terreno en el área intervenida del predio" y que: "la indemnización debe enfocarse en cuantificar la limitación que se genera, expresada en porcentaje respecto al valor comercial del terreno en el área intervenida del predio".

Y aunque el demandante se duele de la solidez de la bibliografía utilizada, tampoco aporta al debate elementos de juicio de los que se pueda extraer, por vía de ejemplo, que hay autores con mayor autoridad sobre el tema o que los mencionados por los peritos "Francisco Ochoa" y "Jerónimo Aznar Bellver, Ronny González Mora, Francisco Guijarro Martínez, Arturo A. López" no son expertos en tal contenido, eventualidad que le quita rigor a su alegato, pues no deja de tratarse de su mero dicho.

Así mismo, si se observa el cálculo de indemnización aportada por la demandante, en éste también se tuvo en cuenta el valor del metro cuadrado en la zona, de igual forma se incluyó en un ítem aparte la valoración del área de la torre de energía, no obstante, en esa tasación, como se dijo en la sentencia atacada, se echó de menos el método adoptado para fijar los rubros citados.

8.- En definitiva, la Sala observa que lo que anhelan las partes es que la sentencia se incline por uno u otro extremo, la demandante pretende que se tenga como definitiva la cuantificación que aportó con el libelo inicial, mientras que la convocada busca que se le reconozcan varios perjuicios hipotéticos y no ciertos, aspiraciones que no son admisibles.

Sobre este último aserto, se avizora que la demandada recurrente asegura que en la tasación ha debido incluirse las categorías de lucro cesante, daño emergente y perjuicio moral, empero, tales categorías de daño se derivan de especulaciones y no de una afectación real que ocurra como consecuencia de la imposición de la servidumbre. A manera de ejemplo, en la contestación al libelo se afirma que el lucro cesante consiste en una ganancia frustrada por el terreno que se perdería, en el que no sería posible el pastoreo de ganado. No obstante, ni en el avalúo que pretendió aportarse, ni la inspección judicial se comprobó que esa sea una práctica habitual en el lote, en esta última diligencia quedó constancia en la grabación que en la zona de intervención no existen ni construcciones, ni semovientes, solo pasto y algunos árboles nativos. Recuérdese que, es regla general que para que el daño sea objeto de reparación debe ser cierto y no hipotético.

Se agrega a lo expuesto que el avalúo conjunto al que se ha hecho alusión, contrario a lo que alega el extremo demandado, sí tuvo en cuenta la afectación del pasto, arrojando un resultando de $2.750.880, así como la devaluación que podría tener el predio, precisamente en esa dirección se estimó que en la zona de la torre debía compensarse en un 100% por su

inutilización y en el resto en un 70%, porque podría continuarse con el desarrollo de la actividad económica.

En consonancia con lo ya dicho, ningún medio de convicción se aportó para demostrar los perjuicios morales que reclama Monpeza S.A.S. en cuantía de 100 smlmv, al paso que en la oposición se asegura que aquellos se derivan hacía personas naturales por el dolor de soportar las instalaciones de torres "que afectan el paisaje", vicisitud que carece de lógica, ya que la propietaria es una persona jurídica y en la inspección judicial quedó en evidencia que la construcción del inmueble queda muy retirada de la zona de servidumbre.

9.- Ahora bien, ninguna irregularidad se advierte en el hecho que el peritaje conjunto hubiese avaluado los daños con montos para el año actual y no aquel en el que se presentó la demanda, comoquiera que por razones de equidad, atendiendo la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, no resulta extraño, ni contrario al ordenamiento jurídico tal actualización a favor de la titular del bien dominante, al fin y al cabo, esa corrección no implica una nueva sanción. Memórese que:

"el agregado de la actualización, por supuesto, no tiene la condición de perjuicio. Se trata de la misma suma, en su valor real. (…) Al fin de cuentas, una suma nominal, pagada a valor presente, es la misma cantidad, solo que actualizada"[5]*.*

10.- De otra parte, en torno a los fallos que en su alzada cita el apoderado de la demandada de otros Tribunales Superiores, basta señalar que por expresa disposición del artículo 230 de la Constitución Nacional, "los jueces, en sus providencias, ***sólo están sometidos al imperio de la ley****. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina* ***son criterios auxiliares de la actividad judicial****", debiéndose añadir que, tales precedentes horizontales no constituyen doctrina probable en los términos de la ley 169 de 1896 (artículo 4°), únicos con fuerza vinculante para los jueces de instancia.*

11.- En el escenario así descrito, se colige que la valoración probatoria efectuada por la primera instancia, así como sus razonamientos sobre la finalidad de la servidumbre y la necesidad de una indemnización justa y adecuada a las circunstancias del caso concreto fueron atinadas, sin que en esa labor se hubiesen desconocido los principios probatorios de la apreciación conjunta de los elementos de juicio, ni los derechos y garantías de defensa de las partes.

12.- En síntesis, comoquiera que, en el asunto sometido a consideración de la Sala, los recurrentes no lograron restarle fuerza a los argumentos expuestos por el Juez de primer grado para disponer la indemnización, la consecuencia lógica no puede ser otra que la confirmación

---

[5] *CSJ. SC 4703-2021. 22 de octubre del 2021.*

de la sentencia impugnada, sin condena en costas de esta instancia por haber resultado desfavorables los recursos de ambos extremos.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

***1.- CONFIRMAR** la sentencia del 24 de agosto del 2022, pronunciada en el Juzgado 32 Civil del Circuito de la ciudad.*

***2.-** Sin **CONDENA** en costas por no aparecer causadas.*

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADO

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a65fbeb5a19182a12d2d56d715640d115c25233c0b47759c772b0e391a5c0ce2**
Documento generado en 28/04/2023 02:12:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16306

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-032-2021-00041-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0ceb9744b18943c98e46f49bc35a3aa8437a99c92e94b2185e9001d4628a20ba**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto. Proceso Verbal (Simulación Absoluta) promovido por el señor Manuel Esteban Montenegro Tovar contra la Fundación Hospital de la Misericordia y el Banco Caja Social S.A.

Rad. 35 2019 00256 02

Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, cuyo proyecto se discutió y aprobó en sesión de Sala del 15 de marzo de 2023, según Acta 9 de la misma fecha.

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la apoderada del extremo demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá el 29 de noviembre de 2022.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Manuel Esteban Montenegro Tovar (q.e.p.d.), a través de apoderada judicial, formuló demanda contra la Fundación Hospital de la Misericordia y el Banco Caja Social S.A. para que se declare la simulación absoluta de la Escritura Pública N°6916 de 10 de octubre de 2014, otorgada en la Notaría 53 de Bogotá; así mismo que se ordene la cancelación de su registro en el folio de matrícula inmobiliaria N°50C-20305291 y se condene en costas a los demandados.

2. Como sustento de lo anterior, adujo que mediante el citado instrumento, las demandadas protocolizaron la *"aclaración a las escrituras públicas Nº10954 de 29 de octubre de 1997 y 12808 del 22 de diciembre de 1197 otorgadas en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá",* sin embargo, ello no se le informó ni se le puso en conocimiento pues para ese momento, el señor Montenegro ya ejercía posesión y había efectuado mejoras sobre una extensión de *"648 metros cuadrados en el predio de mayor extensión".* Aseguró que la escritura pretende aclarar que el LOTE C cuenta con un área de 1.505 metros, cuando en realidad tiene 1.500, circunstancia que se debe establecer a partir de una *"decisión judicial"* y no, a través de la aludida aclaración.

Agregó, que sobre el inmueble construyó una casa de habitación y que acreditó el local comercial denominado *"Ornamentación Esteban"* con todos los documentos de funcionamiento en regla; que los demandados aprovecharon su ausencia y suscribieron la escritura ya aludida, no solo a sabiendas que los linderos a aclarar son *"irreales",* sino con el fin de desconocer la situación real del inmueble ante la posesión que ejerce y detenta desde el 2002 y el impago de la suma de $100 millones que le prometieron en el 2010, a cambio que permitiera construir a la fundación demandada una cancha de *"basquetbol".*

Agregó que la aclaración de linderos tampoco cumple con los presupuestos de los artículos 1494, 1495, 1524, 1766 y 1849 del Código Civil.

3. Admitida la demanda y notificada personalmente, a través de apoderados judiciales, el extremo demandado se opuso a las pretensiones y formuló las siguientes excepciones de mérito:

3.1. La Fundación Hospital de la Misericordia:

i) "Falta de legitimación en la causa por activa", habida cuenta que el demandante no es titular de ningún derecho del inmueble sobre el cual recae el instrumento público del que pretende se declare la simulación, porque además que es un mero tenedor, el predio sobre el que ejerce tal

tenencia es de *"uso público"* y por tanto, imprescriptible. Agregó que el acto jurídico obedeció a la voluntad contractual y a que los linderos de los inmuebles que compró en el 2011 al Banco Caja Social no corresponden a la realidad ni a lo plasmado en los planos, por ende, no le irrogan ningún perjuicio al demandante.

También resaltó que nunca existió una negociación de 100 millones de pesos, en razón a que además que para el año 2010 su representada no fungía como titular del derecho de dominio ni tenía vínculo alguno con el inmueble, la porción sobre la cual ejerce la tenencia *"fue cedida al distrito para la construcción de la cancha y zona de control ambiental".*

ii) "Falta de presupuestos para la procedencia de la simulación", por cuanto no demostró una diferencia entre la voluntad declarada por los intervinientes y la real, como tampoco la intención de engañar a terceros. Además, tampoco probó que se trate de un objeto o causa ilícita, o que el negocio allí plasmado sea inexistente.

Agregó que en virtud de la tenencia que ejerce sobre la porción de uso público, se encuentra en curso una acción policiva por esos hechos desde el año 2004.

iii) "Inexistencia de la Simulación", porque no se aportaron elementos probatorios que enseñen que el contrato a que se refiere el demandante es simulado *"ya sea de forma absoluta o relativa"* y que el instrumento tiene plena presunción de autenticidad conforme al artículo 244 del Estatuto Procesal.

3.2. El apoderado judicial del Banco Saja Social S.A.:

i) "No configuración de los presupuestos de la simulación", toda vez que las manifestaciones del demandante resultan insuficientes y desacertadas para pretender que se declare una *"supuesta simulación"* o para que siquiera se advierta la existencia de tal fenómeno jurídico.

ii) "El instrumento público atacado no contiene un negocio jurídico que pueda ser objeto de simulación", pues lo que allí se

protocolizó fue la aclaración de determinados linderos, en aras de precisar el área restante de un lote de mayor extensión.

iii) "Prescripción", la cual pidió se declare en caso de encontrarse probada.

iv) "La escritura pública atacada fue otorgada en ejecución de actos administrativos que gozan de presunción de legalidad", si se tiene en cuenta que dicho instrumento tuvo como fundamento la Resolución 1561 de 1995, mediante la cual se expidió la Licencia de Desarrollo Integral para la Urbanización Alameda de San Antonio, donde se determinaron algunas *"áreas de cesión gratuitas al Distrito Capital".*

v) "Genérica", que solicitó se declare en el evento que se configure cualquier otra excepción *"que se encuentre probada durante el trámite del presente proceso".*

4. Agotado el trámite respectivo, la instancia culminó con sentencia donde la jueza de conocimiento: ***i)*** declaró probadas todas las excepciones propuestas por los demandados*;* ***ii)*** negó las pretensiones de la demanda y, ***iv)*** en consecuencia, condenó en costas al demandante.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

De manera inicial refirió los presupuestos de la acción simulatoria, tanto absoluta como relativa, conforme a la normatividad y la jurisprudencia y seguido, hizo alusión a la legitimación en la causa por activa de quien la promueve.

Aseguró que en el sub judice ninguno de los presupuestos necesarios se encuentra acreditado, en razón a que el demandante se reputó poseedor y en esa calidad promovió una acción de pertenencia de la cual conoce otro despacho judicial, y no se advierte un menoscabo sobre la posesión que dice ejercer con la protocolización del instrumento público del que se duele.

Dijo que a partir del propio dicho del demandante, en comunicación dirigida a la demandada, Hospital de la Misericordia, se reconoció su calidad de mero tenedor, habida cuenta que allí le puso en conocimiento que residía en el predio y pidió autorización para continuar haciéndolo sin pedir un reconocimiento económico.

Por consiguiente, aseguró que la posesión irregular tampoco se probó, sino que por el contrario, el demandante reconoció el dominio ajeno en cabeza de la fundación titular, esto, aunado a que los testigos desconocen sobre las circunstancias del negocio que asegura fue simulado. Entonces, dijo que aun cuando el demandante puede tener interés en el asunto, no tiene legitimación en la causa por activa para promoverlo aunado a que no hay prueba que permita colegir una simulación absoluta o relativa del negocio a que hizo referencia.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante interpuso recurso de apelación y para ello empezó por asegurar que la sentencia carece de *"consonancia, coherencia y congruencia",* habida cuenta que desconoció las pretensiones debidamente soportadas en los hechos que además se demostraron con las pruebas allegadas y, en cambio, solo acogió los argumentos insostenibles de la defensa.

Agregó que la jueza de conocimiento desconoció el contenido del artículo 281 del Código General del Proceso, por cuanto resolvió reconocer todas las excepciones propuestas, y aun cuando se refirió al proceso de pertenencia que cursa en el Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá, afirmó que su prohijado no cumple los presupuestos para promover la acción simulatoria, cuando lo cierto es que la verdadera intención de los demandados con la celebración de la escritura pública es desconocer la calidad de poseedor del demandante a través de una manifestación errada sobre los linderos.

Señaló que en este caso se aparentó lo último para desconocer *"el pago de lo pactado en una extensión parcial del mismo"* y los derechos de

posesión que el demandante adquirió del señor Alberto Hernández el 20 de diciembre de 2002 en una extensión de 648 metros cuadrados.

Aseguró que el *"derecho de petición"* que la jueza consideró aislada y que demuestra la mera tenencia de su prohijado, se trata de una apreciación infundada, toda vez que fue la Fundación demandada quien la consideró argumento suficiente para asegurar que existe una falta de legitimación en la causa, bajo una *"infundada calificación de mero tenedor",* pues al contestar la demanda dijo que, para esa fecha, su representada no ostentaba la titularidad del dominio.

Por todo lo anterior, es evidente que el acto escriturario sí le causó un perjuicio directo, por ende, tiene legitimación para actuar y agregó que tampoco se tuvieron en cuenta los testimonios ni el anexo referido en los alegatos de conclusión *"como la reserva vial registrada en el SINUPOT".*

En similar sentido, en esta instancia, sustentó el recurso de apelación.

IV. CONSIDERACIONES

1. No hay duda de la configuración de los presupuestos procesales que permiten, no solamente dar inicio al proceso, sino también que culmine con una sentencia que resuelva sobre el fondo.

En efecto, se cumple con la jurisdicción y competencia en cabeza de los jueces civiles del circuito en primera instancia, tratándose de la acción de simulación; capacidad de los intervinientes para ser parte y comparecer al litigio y la demanda en forma. Además, no se observa vicio con identidad anulatoria, lo que admite proferir la decisión que de la segunda instancia se reclama.

2. Para resolver los reparos que a la sentencia se le hacen, resulta pertinente recordar que la simulación corresponde a un fenómeno de creación jurisprudencial, desarrollado a partir del artículo 1766 del Código Civil, a cuyo tenor *"las escrituras privadas, hechas por los contratantes para*

alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efectos contra terceros. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero".

Sobre esa figura, recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que ella *"(…) en la esfera de los contratos, supone que los extremos de un negocio bilateral (o plurilateral), concertadamente, hagan una declaración de voluntad fingida, con el propósito de mostrarla frente a otros como su verdadera intención. Esa discordancia entre la voluntad y su exteriorización implica que, para los contratantes –sabedores de la farsa- la declaración (i) no está orientada a producir efectos reales (simulación absoluta), o (ii) simplemente disfraza un acuerdo subyacente con el ropaje de una tipología o configuración negocial distinta (simulación relativa)"*[1]

En ese orden, los presupuestos de toda acción de simulación, sea relativa o absoluta, última que se invocó en las pretensiones de la demanda[2], conforme a la jurisprudencia, se han reducido a tres: ***i)*** que el contrato tildado de simulado esté probado; ***ii)*** que quien demanda esté legitimado para hacerlo; y ***iii)*** que se demuestre plenamente la existencia de la simulación.

3. Con relación al primero, hay que decir que se encuentra cabalmente establecido, pues además que al proceso se aportó la copia de la escritura pública N°6916 de 10 de octubre de 2014, otorgada en la Notaría 53 del Círculo de Bogotá[3], contentiva de *"Aclaración a las escrituras públicas Nº10954 del 29 de octubre de 1997 y 12808 del 22 de diciembre de 1997 otorgadas en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá D.C. Sin Cuantía",* respecto de la matrícula inmobiliaria **50N-455402 en *"mayor extensión"* y segregadas *"LOTE B 50N-20228254, LOTE C 50N-20305291, LOTE D 50N-20305292 y área restante del lote de mayor extensión"***, inscrito en el correspondiente folio, según consta de la anotación N°8 el 14 de febrero de 2014 con la especificación: *"0901 aclaración EP 10954 Fecha 29-10-1997 NOT 29 BTA; EP 12808 22-12-1997 NOT 29 BTA en cuanto a las áreas lotes*

---

[1] *C.S.J. SC3598-2020 Exp. 06-2011-00139-01 Sentencia de 28 de septiembre de 2020.*
[2] *Folio 45 (001CuadernoPrincipalFl.1al242.pdf)*
[3] *Folios 21 a 41 (001CuadernoPrincipalFl.1al242.pdf)*

torre B; A y C y el área restante del FMI Mayor Ext 50N-455402 2613.87 M2 (otro)"[4], tal documento cumple a cabalidad con los presupuestos para su validez, como pasa a verse.

En el citado instrumento intervinieron, de un lado, el Banco Caja Social S.A. representado por Myriam Cristina Acelas García y, del otro, la Fundación Hospital de la Misericordia representada por Luz Amparo Chirivi Pinzón, donde manifestaron:

"(...) SEGUNDO: Que FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA, es propietaria inscrita de los Lotes B, ***C*** *y D inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20228254,* ***50N-20305291*** *y 50N-20305292, respectivamente.*

TERCERO: Que por este acto y por medio de éste público instrumento los comparecientes proceden a aclarar las escrituras públicas que adelante se mencionan, para señalar que se omitió por error involuntario, en el área real restante del Lote identificado con matrícula inmobiliaria Nº50N-455402 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y que como consecuencia de esta aclaración ratificar el área de los lotes segregados de este de mayor extensión como son: LOTE B..., LOTE C identificado con matrícula inmobiliaria Nº50N-20305291..., LOTE D... y el área restante del Lote de Mayor Extensión todos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

(...) Quinto: Que la Fundación Hospital de la Misericordia, adquirió los predios: ***LOTE C con un área de Mil quinientos metros cuadrados (1.500Mtrs)*** *y LOTE D con un área de Mil ochocientos veintitrés metros cuadrados (1.823 Mtrs), identificados con Matrículas Inmobiliarias Nº50N-20305291 y 50N-20305292 respectivamente,... mediante Escritura Pública... (2735) del veinte (20) de diciembre del año dos mil once (2011) otorgada en la Notaría Cuarenta y Cinco (45) del Círculo de Bogotá, a título de compraventa hecha por el BCSC S.A.*

Sexto: Que mediante escritura... (2993) del 28 de octubre de 2004 otorgada en la Notaria 47 del Círculo de Bogotá, el Distrito capital de Bogotá, realizó la cesión obligatoria de Zonas con destino a uso público por medio del cual se abrieron del Folio de mayor extensión 50N-455402 las siguientes matrículas con las respectivas áreas así: (...)
Posteriormente el Distrito Capital de Bogotá, por escritura pública... (3199) de 27 de octubre de 2005..., rescilió la escritura pública... (2993) de 28 de octubre de 2004, como consecuencia de esta escritura pública se cerraron los folios anteriormente citados regresando cada una de estas áreas citadas al folio de mayor extensión 50N-455402.

Séptimo: Que como consecuencia de los antecedentes ya mencionados y teniendo en cuenta las áreas reales de cada uno de los inmuebles ya mencionados las partes solicitan a la oficina de registro de instrumentos públicos tenerlos en cuenta para que se realice la siguiente aclaración y se declare la parte restante del Folio de MAYOR EXTENSIÓN.

ACLARACIÓN

(...) Que luego de las segregaciones descritas anteriormente estos inmuebles se identifican con el área y los siguientes linderos: (...)

---

[4] *Folios 53 a 56 (001CuadernoPrincipalFl.1al242.pdf)*

4. LOTE C, ubicado en la Diagonal 182 Nº19-76 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Matrícula Inmobiliaria número 50N-20305291 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., - Zona Norte, cuya área y linderos corresponden a lo previsto en la Escritura Pública número diez mil novecientos cincuenta y cuatro (10.954) del veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997) otorgada en la Notaría Veintinueve (29) de Bogotá, así: ***Cuenta con un área aproximada de mil quinientos cinco metros cuadrados (1.505m2)****, alinderado así: POR EL NORTE: del punto B al punto D, pasando por el punto C, en líneas rectas sucesivas de 37.68 mtrs., y 14.87 mtrs. POR EL ORIENTE: del punto D al punto E en línea recta de 23.94 mtrs. POR EL SUR: del punto E al punto A, pasando por el punto P en líneas rectas sucesivas de 40.00 mtrs, y 11.25 mtrs. POR EL OCCIDENTE: del punto A en línea recta hasta encontrar el mojón original distinguido con la letra B, en una longitud de 25.00 mtrs (limitando con la calle 183) y encierra.(...)"*

Acá, es importante reseñar que conforme lo autoriza el Estatuto de Notariado, Decreto 960 de 1970, la corrección de las escrituras públicas procede antes o después de su firma. En caso de presentarse lo último, el artículo 102 de ese compendio prevé que se podrá hacer cualquiera que quieran los otorgantes y que, *"deberá consignarse en instrumentos separados con todas las formalidades necesarias y por todas las personas que intervinieron en el instrumento corregido, debiéndose tomar nota en éste de la escritura de corrección."* De igual manera, en los artículos siguientes, 103 y 104, se dispuso que si se trata de errores en la nomenclatura, denominación, descripción del inmueble o en la cita de la cédula o registro catastral, se *"podrá corregir mediante el otorgamiento de escritura aclaratoria suscrita por el actual titular del derecho, si de los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y de los títulos antecedentes apareciere el de manifiesto."* y que de la misma manera se podrá corregir el error *"en la cita de los títulos antecedentes y sus inscripciones en el Registro, si fuere posible establecerlo con precisión mediante certificado actual del Registrador y éste se protocoliza."*

Así, en concordancia con las últimas disposiciones, el artículo 49 del Decreto 2148 de 1983, por el cual se reglamentaron los Decretos Leyes 960 y 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973, compilado por el Decreto 1069 de 2015, prevé que *"(...) El error en los linderos que no figure cambio en el objeto del contrato, se aclarará únicamente con fundamento en los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y en los títulos antecedentes en que apareciere el de manifiesto, mediante escritura que podrá ser suscrita por el actual titular del derecho. Si el error no apareciere de manifiesto, la*

escritura de aclaración debe ser suscrita por todos los otorgantes de la que se corrige." (se subraya)

4. En lo que respecta al segundo de los presupuestos, ha de verse que sobre la legitimación en la causa o el interés para obrar, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, tiene sentado que dicha calidad en un contrato, *"se encuentra radicada no sólo en cabeza de las partes contratantes, y en sus herederos, según el caso, lo cual es apenas comprensible, sino también en los terceros, pero sólo cuando el negocio fingido les irroga a éstos, al igual que a aquéllos, un perjuicio serio, cierto y actual, porque de aceptarse una total libertad, en lugar de crearse certeza y confianza en el tráfico jurídico, ello generaría caos e inseguridad"*[5].

Por consiguiente, es necesario que tal interés afecte al tercero que no fue parte del negocio para que le asista la facultad de reclamar la simulación, es decir, es preciso que demuestre que existe un eventual beneficio o perjuicio como consecuencia del acto jurídico en el que no participó y que es lo que conlleva a demandarlo como medio de defensa. Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que:

> *"…, en todo caso, se debe atender que la legitimación de los terceros es "eminentemente restringida, puesto que el contrato no puede quedar expuesto a que cualquier persona que tuviera conocimiento del acto, pudiera asistirle interés para hacer prevalecer la verdad" (CSJ SC. 5 Sep. 2001, Rad.5865), de ahí que en cada controversia debe evaluarse "a la luz de las particulares circunstancias en que dicho negocio se haya verificado y en que, respecto de él, se encuentre el tercero demandante" (CSJ SC, 30 nov. 2011, Rad. 2000-00229-01), toda vez que para que surja es éste "el interés que lo habilite para demandar la simulación, "es necesario que sea actualmente titular de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la conservación de ese acto le cause un perjuicio" (G.J. tomo CXIX pág.149)" (CSJ SC, 30 nov. 2011, Rad. 2000-00229-01), de ahí que dicho presupuesto "debe analizarse para cada caso especial sobre las circunstancias y modalidades de la relación procesal que se trate, porque es ésta(sic.) un conflicto de intereses jurídicamente regulado y no pudiendo haber interés sin interesado, se impone la consideración personal del actor, su posición jurídica, para poder determinar, singularizándolo con respecto a él, el interés que legitima su acción" (G.J. LXXIII, pág.212)"*[6]

---

[5] *C.S.J. Cas. Civ. SC11003-2014 Exp. 01-2004-00307-01*
[6] *C.S.J. SC16669-2016, 18 noviembre de 2016, reiterada en SC3598-2020, Sentencia de 28 de septiembre de 2020*

Por consiguiente, no basta que el tercero alegue genéricamente tal afectación, sino que es necesario que el interés que le asiste sea concreto y se deduzca de las circunstancias de cada caso en especial y, se pueda traducir en un eventual beneficio o perjuicio actual, es decir, al momento en que se promueva la demanda.

Para el caso, observa la Sala que el citado presupuesto confluye en el señor Manuel Esteban Montenegro, porque al margen que el instrumento público corresponda a una aclaración o corrección de linderos de varios lotes que hacen parte de uno de mayor extensión, lo cierto es que, sobre uno de ellos el demandante detenta la declaración de pertenencia que ya promovió y que cursa en el Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá, de donde surge el interés para promover la acción de este asunto.

5. En lo que corresponde propiamente a la prueba de la simulación, tercer y último presupuesto, la Sala abordará su análisis con detenimiento al tratar casi todos los reparos formulados por la apoderada del demandante contra la sentencia de primer grado, en la medida que convergen en cuestionar la apreciación de las pruebas adosadas y practicadas. Todo ello, en punto a determinar si existe yerro o no en la labor que en tal sentido realizó la sentenciadora de primer grado.

Para tal propósito, recuerda el Tribunal que también la Jurisprudencia ha dejado sentado que "*'en ese complicado proceso de desentrañar la verdad escondida tras los velos de la apariencia, todo conduce inicialmente a señalar que aquello que se expresó, corresponde a la realidad; en principio, entonces, lo exterior coincide con lo interior y de ese supuesto es necesario partir' '[a]nte lo cual anotó todavía cómo en la labor investigativa atinente a la simulación surgen hechos de todas las especies que refuerzan unos la apariencia demandada, que la develan los otros; y es entonces cuando el fallador, sopesando esas circunstancias, haciendo uso de la autonomía que le asiste, opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen; de allí que, una vez tomada la decisión, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por sí mismos motivo bastante para quebrantar la conclusión del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio lógico – crítico desprecia las señales que le envían*

algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los demás' (Cas. Civ. febrero 26 de 2001, exp. 6048)' (cas. julio 16/2001, exp. 6362)[7].

Entonces, tratándose de la prueba de la simulación y ante la ausencia frecuente de documentos secretos provenientes de las partes en los que aparezca manifiesta la verdadera intención de los contratantes, la jurisprudencia ha enunciado una serie de indicios determinantes para arribar a la certeza de que el negocio es simulado, entre los cuales se destacan *"el parentesco, (…) la falta de capacidad económica del adquirente, la retención de la posesión del bien por parte del enajenante, (…) el comportamiento de las partes al efectuar el negocio, el precio exiguo, la carencia de necesidad en el vendedor para disponer de sus bienes, la forma de pago, etc. "6. Mas como acontece que la habilidad de los contratantes ha originado nuevas formas de matices de simular, esto ha dado lugar para sostener que en materia indiciaria, respecto de tal fenómeno, es imposible formular un catálogo de indicios, porque a medida que se avanza en el ocultamiento de la simulación, paralelamente van tomando cuerpo otros indicios. Es por ello que hoy se suma al cortejo de tal prueba indirecta,* ***el móvil para simular*** *(causa simulandi), (…) la ausencia de movimientos en las cuentas bancarias, el precio no entregado de presente (pretium confessus), (…) la no justificación dada al precio recibido (inversión), etc."*[8]

Por tanto, como en este caso no existen contradocumentos secretos, ni documento escrito que emane de las partes y que sumado a otras pruebas permitan establecer concretamente la existencia de la simulación, necesariamente debe acudir la Sala a la prueba indiciaria, cuya apreciación *"comprende una actividad múltiple, que consiste por un lado, en el examen de los hechos indicadores que brotan de los medios de prueba, y, por el otro, en la deducción o inferencia que con base en ellos permite arribar a otros hechos indicados, como fruto de una operación mental lógica del juzgador de instancia",* toda vez que no son suficientes las meras sospechas o especulaciones que nacen de *"la aprehensión maliciosa del acto dubitado o de la consideración aislada de los diferentes medios de prueba"*[9].

---

[7] *Sent. Cas. Civil Nov 3/2010 exp. 0320070010001*
[8] *C.S.J. Cas. Civ. CSJ. Sent. Jul.14/ 1975.*
[9] *C. S. J., sentencia de 17 de julio de 2006 Exp. 0315-01*

Con relación a las pruebas documentales, ha de verse que de ninguna de ellas se logra concluir la voluntad maliciosa o real de los demandados en protocolizar la escritura objeto del litigio diferente a la estampada en el instrumento, con el fin de engañar o confabular en contra del demandante para desconocer sus derechos como poseedor o el supuesto compromiso que una de las demandadas adquirió al prometerle el pago de $100 millones, pues de lo último no se trajo prueba alguna.

De igual manera, y con relación a los dictámenes elaborados, ha de verse que al margen de las conclusiones, lo cierto es que tales aspectos con relación a las características del predio resultan inútiles para establecer la esencia o punto fundamental de la acción de simulación, por cuanto sí el demandante ejerce posesión sobre un área de terreno de uso público o susceptible de adquirir por prescripción, o si el plano de mayor extensión concuerda con los linderos en cada uno de los lotes segregados, tales consideraciones le competen al juez de que conoce del proceso de pertenencia a la hora de resolver sobre las pretensiones que allá se invocaron.

Y no diferente es la suerte de las manifestaciones efectuadas en el interrogatorio de parte y al absolver los testimonios, habida cuenta que de ninguno de esos medios probatorios se logra establecer ese concierto simulatorio de los demandados y que resulta un requisito *sine qua non* para acceder a las pretensiones del demandante.

En efecto, ha de verse que al preguntársele al convocante, señor Manuel Estaban Montenegro (q.e.p.d.), sobre cuáles son los motivos para considerar que con el instrumento público los demandados lo engañaron, de forma determinante dijo: *"es que ellos no tuvieron en cuenta mis derechos que yo tengo sobre el predio, yo soy el poseedor, yo soy el propietario de este predio, tengo la posesión real, material, pacífica y publica desde el año 2002..., ellos hicieron una simulación de linderos sin tenerme en cuenta a mí, sin decirme nada, hicieron las cosas a escondidas; no sé en qué fecha lo hicieron, no sé cómo lo hicieron porque no me di cuenta..."*.

De igual manera, lo manifestado por la señora Miryam Paredes, quien fue compañera permanente del demandante, se dirigió a establecer

circunstancias y hechos sobre la posesión del demandante, porque además que dijo reconocer como propietario a *"Esteban Montenegro Tovar, porque él fue el que compró acá y todo ha sido a nombre de nosotros, de Esteban..., cuando llegamos todo era en latas, hoy día tenemos apartamentos, tenemos encerrado, tenemos edificaciones... acá vivimos..., apartamentos tengo cuatro locales, 5 apartamentos..."*, dijo no saber sobre el acto jurídico objeto de simulación.

De igual manera, los señores Alejandro Flórez Martínez y Dagoberto Montenegro, tampoco dijeron conocer sobre tales circunstancias, sino que únicamente se refirieron a la descripción del inmueble y circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la posesión que dijo ejercer el demandante.

6. Por consiguiente, es evidente que si bien las pretensiones de la demanda se dirigieron a que se declare una simulación absoluta, en razón a que se afirma que la escritura pública objeto del litigio se celebró para defraudar los derechos del demandante en su calidad de poseedor, lo cierto es que a pesar de la plena libertad probatoria, los medios utilizados no se dirigieron a demostrar que tal acto fue simulado, sino a establecer circunstancias propias del litigio de pertenencia que, se itera, cursa actualmente en otro despacho judicial y no es materia de pronunciamiento en la acción de simulación.

Entonces, como aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que toda duda debe resolverse en favor del negocio jurídico, el que se encuentra prevalido de la presunción de veracidad, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, al indicar que: *"…todo negocio jurídico se estima verdadero y por eso mismo capaz de producir la plenitud de sus efectos, mientras no se demuestre de modo concluyente la ficción de la que fue producto. De ahí que quien aspire a restarle eficacia o a lograr que de él se predique una distinta de la que corresponde, dada la apariencia externa que ofrece, argumentando en uno y otro caso que fueron fruto de la simulación, está obligado a demostrar el hecho anormal de la discordancia entre la voluntad interna y su declaración, de manera completa y segura, ya que de quedar alguna duda, debe estarse a la realidad de aquello que se hizo público"*[10]; resulta evidente que en este asunto no se demostró el hecho

[10] *C.S.J. Sentencia de 24 de junio de 1992*

anormal aludido, luego entonces, se debe estar a la realidad de lo que los intervinientes en el referido negocio jurídico hicieron público.

7. En conclusión, como el acervo probatorio no demuestra el concierto simulatorio de las partes que intervinieron en el contrato y por ende, la simulación del negocio jurídico en ellos contenido, al no evidenciar la Sala en qué consiste la omisión y error de apreciación probatoria alegada, se impone confirmar la sentencia impugnada con la consecuente condena en costas a cargo del extremo actor, propósito para el que la Magistrada Sustanciadora señala la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º, artículo 5º, del Acuerdo No. PSAA-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **CONFIRMAR** la sentencia que profirió el Juzgado 35 Civil del Circuito de esta ciudad el 29 de noviembre de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: **CONDENAR** en costas de esta instancia a la parte demandante (recurrente). Liquídense en la forma prevista en el artículo 366 del C.G.P., e inclúyase como agencias en derecho de segundo grado el equivalente a dos (2) SMLMV.

NOTIFIQUESE,

Los Magistrados,

MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS

RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b7e7f11838d11adfb2aa54cb66b5897d5f053542efe338f1427bfec6b75181b6**
Documento generado en 28/04/2023 03:13:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto. Proceso Verbal (Responsabilidad Civil Extracontractual) promovido por los señores María Emilia Suárez Molina, Soledad Molina Molina y Aníbal Suárez García contra Jhon Fredy López Orozco, Uriel Antonio Marín Rivera y Allianz Seguros S.A.

Rad. 35 2019 00309 01

Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Se resuelve el recurso de apelación que interpusieron los apoderados judiciales del extremo demandante y del demandado Uriel Marín contra la sentencia que profirió el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá el 23 de noviembre de 2022.

I. ANTECEDENTES

1. Los señores María Emilia Suárez Molina, Soledad Molina Molina y Aníbal Suárez García, a través de apoderado judicial, formularon demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Jhon Fredy López Orozco, Uriel Antonio Marín Rivera y Allianz Seguros S.A.

Pretenden los demandantes, que se declare que los convocados son civil y solidariamente responsables por los perjuicios que sufrieron con

ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 21 de julio de 2015, en el que resultó lesionada María Emilia Suárez Molina.

En consecuencia, pidieron que se condene a los demandados a pagar:

i) en favor de María Emilia Suárez Molina, la suma de $14.519.839 por concepto de daño emergente pasado, $1.568.478 y $97.893.922 por lucro cesante pasado y futuro, respectivamente; cincuenta (50) salarios mínimos por concepto de perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, correspondientes al *"daño moral",* y la suma correspondiente a 50 SMMLV por concepto de *"daño a la vida en relación".*

i) en favor de los señores Soledad Molina Molina y Aníbal Suárez García la suma correspondiente a cincuenta (50) salarios mínimos por concepto de perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, correspondientes al *"daño moral",* para cada uno, en su calidad de padres de María Emilia.

2. Como circunstancias relativas al hecho dañoso y la culpa, refirieron que el 21 de julio de 2015, en la Vía Bogotá – Los Alpes, en el Kilómetro 17-376, Vereda El Corzo, en el municipio de Madrid (Cundinamarca), la señora María Emilia Suarez viajaba como pasajera en el bus, vehículo de uso público, de placas SQX-505, no obstante, colisionó contra el automotor tipo camión de placas USC-039, conducido por el señor Jhon Fredy López Orozco y de propiedad de Uriel Antonio Marín Rivera, quien se desplazaba en contravía, conforme quedó en el informe de policía.

Agregaron que por las lesiones ocasionadas, el Instituto de Medicina Legal dictaminó una incapacidad de 55 días y secuelas de *"deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente"; "perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente"; "perturbación funcional de órgano de la aprehensión".* Así mismo, afirmaron que la Junta Regional de Invalidez, mediante dictamen pericial de 21 de diciembre de 2017, estableció una pérdida de capacidad laboral del *"53.78% con fecha de estructuración el día del accidente".*

Manifestaron que para la fecha del accidente María Emilia contaba con 30 años de edad, gozaba de buena salud y tenía un trabajo estable, sin

embargo, desde ese acontecimiento está incapacitada y no percibe ingresos para su familia, lo que generó no sólo un sufrimiento en todos los aspectos de su vida, sino en todo su entorno familiar.

3. Admitida la demanda y notificados los demandados se opusieron a la totalidad de las pretensiones de la demanda, por vía de las defensas de mérito, así:

3.1. Por parte de la sociedad Allianz Seguros S.A.:

3.1.1. ***"Ausencia de responsabilidad civil extracontractual del demandado – ausencia de los elementos fundantes de la responsabilidad civil extracontractual",*** en razón a la ausencia de culpa en cabeza del propietario y conductor del vehículo asegurado, pues no se desatendió ninguna señal de tránsito al momento del siniestro.

3.1.2. ***"Ausencia de obligación – inexistencia de responsabilidad en cabeza de Jhon Fredy López Orozco y Uriel Antonio Marín Rueda, y por ende, de siniestro para la Póliza de Auto Pesado Nº021301604",*** por cuanto no les resulta imputable las causas del daño porque no incurrieron en culpa alguna, luego su responsabilidad es inexistente.

3.1.3. ***"Ausencia de la obligación – configuración de una causal de exclusión aplicable al amparo de responsabilidad civil extracontractual",*** en la medida que se presentó una causal de exclusión para el cubrimiento del siniestro, si se tiene en cuenta que el conductor del vehículo asegurado no contaba con una licencia vigente al momento del accidente.

3.1.4. ***"Ausencia de prueba e inexistencia de los presuntos perjuicios sufridos por la parte demandante y/o subsidiariamente tasación excesiva de los mismos",*** con fundamento en que no basta la simple afirmación del extremo demandante ni se puede presumir su existencia, sino que por el contrario debe estar probado en el expediente.

3.1.5. ***"Ausencia de solidaridad entre Allianz Seguros S.A. y los demás demandados",*** pues si bien existe un contrato de seguro, el mismo

no contempla solidaridad alguna con el tomador y autorizado para conducir el vehículo amparado.

3.1.6. ***"Subsidiaria sujeción a los términos, límites, exclusiones y condiciones previstos en la Póliza de Auto Pesado Nº021301604",*** pues en el hipotético caso que prosperen las pretensiones de la demandante es preciso dar aplicación a los límites pactados en el contrato de seguro, sin perjuicio de los demás medios exceptivos.

3.2. Uriel Antonio Marín Rivera, propietario del vehículo de placas USC-039:

3.2.1. ***"Ausencia de la prueba de la responsabilidad de la demandada",*** habida cuenta que no existe prueba que demuestre que el vehículo de su propiedad, al momento del accidente, transitaba en contravía y que, debido a que la demandante era pasajera de un bus de servicio público, resultaba procedente reclamar los perjuicios en virtud de la prestación del servicio.

3.2.2. ***"Ausencia de la prueba de los perjuicios reclamados",*** porque las pruebas aportadas no resultan suficientes para probar la cuantía de los perjuicios reclamados, sin que la mera enunciación sea suficiente para acceder a su reconocimiento.

3.2.3. ***"La genérica",*** que no argumentó y que refirió a la que encuentre probada el despacho.

3.3. El demandado Jhon Fredy López Orozco no dio contestación a la demanda.

4. Agotado el trámite respectivo, la instancia culminó con sentencia donde la jueza de conocimiento: ***i)*** declaró probada la excepción que propuso Allianz Seguros S.A. y que denominó *"ausencia de obligación – configuración de una causal de exclusión aplicable al amparo de responsabilidad civil extracontractual";* ***ii)*** declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado Uriel Antonio Marín; ***iii)*** declaró civil, solidaria y extracontractualmente responsables a los demandados

Jhon Fredy López Orozco y Uriel Antonio Marín Rivera por los daños y perjuicios con ocasión del accidente acaecido el 21 de julio de 2015 y, ***iv)*** en consecuencia, los condenó a pagar las siguientes sumas de dinero, además de la condena en costas en favor de los demandantes:

> *"4.1. Por Daño Patrimonial, esto es, Daño Emergente, Lucro Cesante Consolidado y Lucro Cesante Futuro, en favor de María Emilia Suarez Molina, la suma de $55´374.959,38.*
>
> *4.2. Por daño a la Vida en Relación en favor de María Emilia Suarez Molina, el equivalente a 14 SMLMV.*
>
> *4.3. Por Daño Moral Subjetivo en favor de María Emilia Suarez Molina, el equivalente a 14 SMLMV.*
>
> *4.4. Por Daño Moral Subjetivo en favor de Soledad Molina Molina y Aníbal Suarez García, el equivalente a 8 SMLMV, para cada uno."*

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

De manera inicial refirió los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual tanto normativas como jurisprudenciales, así como la concurrencia de culpas y peligrosidad al desempeñar ciertas actividades, como la de conducir vehículos automotores.

Para declarar la prosperidad de la excepción propuesta por la aseguradora demandada indicó que se presentó una causa de exclusión para el amparo de la póliza, habida cuenta que para el momento del accidente, quien lo conducía, el señor Jhon Fredy López no contaba con la licencia de conducción vigente para el vehículo tipo camión de placas USC-039.

Con relación al accidente, luego de indicar apartes de los testimonios y hacer énfasis en otras pruebas, aseguró que si bien se trató de actividades peligrosas, y que ambos vehículos incurrieron en faltas que desconocen las normas de tránsito como el exceso de velocidad, no se puede desconocer el daño causado a la demandante, como tampoco el reconocimiento de los perjuicios reclamados.

En cuanto al reconocimiento de los perjuicios deprecados dijo que no hay lugar a conceder la totalidad de los pretendido, habida cuenta que conforme la demandante promovió demanda de responsabilidad contractual del transportador contra la Aseguradora QBE, el conductor y propietario del bus en el que se desplazaba, donde el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá decretó la terminación del litigio porque se conciliaron la totalidad de pretensiones por valor de $80 millones.

Por consiguiente, determinó que la incidencia causal porcentualmente *"se discernirá en un 60% a cargo del bus y en un 40% a cargo del camión de placas USC-039",* y por ende, el extremo aquí demandante sólo puede aspirar al 40% de sus pretensiones en contra de los aquí demandados para obtener el total del 100% de la indemnización de perjuicios.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Inconforme con la anterior decisión, los apoderados del extremo demandante y del demandado, señor Uriel Marín, interpusieron recurso de apelación.

1.1. De un lado, el demandante aseguró no estar de acuerdo con la prosperidad de la excepción propuesta por la demandada Allianz Seguros S.A. para exonerarla del pago de perjuicios; con la manera en que la jueza de conocimiento compensó las culpas por la conducta de los conductores del camión y de la buseta involucrados y los porcentajes, ni la forma en que tasó el lucro cesante y los daños morales de su representada.

En segunda instancia, y en extenso escrito, reparó en que resulta inadecuado exonerar a Allianz Seguros S.A. por la razón que arguyó la jueza *a quo,* puesto que las autoridades que atendieron el accidente no reprocharon la licencia de conducción que presentó el conductor del camión involucrado ni se ha declarado su falsedad. Además, de acuerdo con las condiciones particulares de la póliza *"amparo patrimonial"* sí debió amparar el siniestro y, en tal medida, reconocer la indemnización reclamada por la demandante.

Agregó que es improcedente la compensación de culpas que de manera oficiosa estimó la jueza de conocimiento entre los conductores de los vehículos involucrados, habida cuenta que la demanda se dirigió sólo contra el propietario, conductor y empresa aseguradora de uno de ellos, de placas USC-039. Y si alguno de los demandados consideraba la *"culpa de un tercero"* debieron promover los mecanismos que para tal efecto estableció el legislador.

Y por las mismas razones es que no está de acuerdo con los porcentajes que determinó, porque además de que no se probó el exceso de velocidad a la que transitaba el bus, la decisión de la funcionaria se basó en manifestaciones de personas *"que ni siquiera sabemos si al menos saben conducir".*

Finalmente, aseguró no estar de acuerdo con la tasación de los perjuicios por concepto de lucro cesante, daño moral y daño a la vida en relación, por cuanto desconoce lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el hecho del desenlace fatídico por las graves lesiones que sufrió su representada, habida que *"prácticamente perdió un brazo, dejándola incapacitada para el resto de su vida".*

1.2. Por su parte, el apoderado judicial del demandado Uriel Marín indicó que la jueza de conocimiento desconoció *"la confesión de parte"* de la demandante en el escrito de demanda que promovió contra el conductor del bus de servicio público, en donde aseguró que *"fue ese conductor, el único responsable del accidente";* también indicó que tuvo por probada la responsabilidad de transitar en contravía, cuando tal circunstancia no fue suficientemente demostrada. Finalmente, excluyó de toda responsabilidad a la aseguradora demandada con base en una causal de exclusión que no está suficientemente acreditada.

En esta instancia, resaltó que la demandante promovió dos demandas respecto del mismo accidente, de un lado, el asunto de la referencia, y del otro, contra el propietario, conductor y empresa de transportes afiliadora del bus en el que se desplazaba, donde confesó que la culpa del accidente la tuvo el conductor del bus.

También indicó que la jueza afirmó que el conductor del vehículo iba en contravía, no obstante, tal aseveración solo la fundamentó en *"la causal insertada por el agente de tránsito en el informe policial del accidente",* sin que existe ninguna otra prueba que confirme ello como un dictamen de reconstrucción del suceso, ni siquiera en la prueba trasladada referida a la investigación que cursa en la fiscalía general de la Nación.

Por último, indicó que no había lugar a exonerar a la aseguradora demandada, habida cuenta que, al momento del accidente, el conductor presentó *"una licencia de conducción vigente... que se presume auténtico mientras no obre sentencia judicial que declare la existencia de la falsedad".* Además, aseguró que la cláusula de exclusión no aparece en la primera página de la póliza, conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley 45 de 1999 y el artículo 184 del Estatuto Orgánico Financiero, por ende, se trata de una cláusula ineficaz.

IV. CONSIDERACIONES

1. No hay duda de la configuración de los presupuestos procesales que permiten, no solamente dar inicio al proceso, sino también que culmine con una sentencia que resuelva sobre el fondo.

En efecto, se cumple con la jurisdicción y competencia en cabeza de los jueces civiles del circuito en primera instancia, tratándose de la responsabilidad civil extracontractual de mayor cuantía; capacidad de los intervinientes para ser parte y comparecer al litigio y la demanda en forma. Además, no se observa vicio con identidad anulatoria, lo que admite proferir la decisión que de la segunda instancia se reclama.

Para tal propósito se tendrá en cuenta que los apoderados de las partes formularon el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, circunstancia que torna aplicable el artículo 328 del Código General del Proceso en cuanto prevé que *"…cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones"*.

2. En procura de resolver los reparos efectuados a la sentencia, como primera consideración, es preciso reseñar que como la libertad y el libre albedrio son elementos esenciales del derecho natural, es de ellos mismos que nace el principio de la atribución de la responsabilidad ante la producción de una conducta que genere daño a otro individuo, y que da lugar a la acción reparatoria en contra de quien lo produjo, a menos que se demuestre la existencia de una razón jurídica para que lo acaecido sea atribuible a una causa extraña o a un tercero. En tal medida, la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual que, si bien persiguen la indemnización al afectado, tienen un origen diferente. La primera, establecida en el artículo 1602 del Código Civil que se origina en un contrato donde una de las partes incumplió con una o varias de sus obligaciones causándole perjuicio o daño a la otra.

A diferencia, la extracontractual definida en los artículos 2341 y siguientes *ibidem*, no tiene origen en contrato alguno, sino que se configura a partir de un acontecimiento, donde un individuo causa daño a otro que lo sufre, circunstancia de donde surge la obligación al generador del agravio la obligación de indemnizar, empero, siempre y cuando esté demostrada la culpa o el dolo, diferente cuando provenga de un hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Sobre los presupuestos para su viabilidad, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que son *"a) La comisión de un hecho dañino; b) La culpa del sujeto agente y, c) La existencia de la causalidad entre uno y otro"*[1].

Así, la Corte Constitucional en sentencia C-1008 de 2010, puntualizó que "en *el orden jurídico colombiano es clara la existencia de una concepción dualista de la responsabilidad civil, por lo que no se puede confundir el tratamiento de una y otra responsabilidad, las cuales están reguladas de manera autónoma e independiente en capítulos distintos del Código Civil, se originan en causas o fuentes diversas y sus prescripciones en materia de reparación no son coincidentes".*

Y es que si bien son dos acciones diferentes, el legislador no prohibió ni de ninguna norma se advierte que quien resulte perjudicado no pueda

[1] *C.S.J. Cas. Civ. SC5170-2018 Sent. de 3 de diciembre de 2018 Exp.20-2006-00497-01*

promover las dos frente a los mismos hechos, porque aunque un solo daño, éste, frente a los responsables, se itera, tiene orígenes diferentes. Al respecto, jurisprudencia de la citada Corporación también ha dicho que:

> *"Lo que puede acontecer es que hay hechos que además de tener la calidad de culposos con relación a determinado contrato, por su propia mesmedad jurídica, independientemente de todo arrimo contractual, pueden constituir así mismo fuente de responsabilidad como culpa delictual, dando así origen y posibilidad a dos acciones que pueden ejercitarse independientemente pero que no son susceptibles de acumulación, porque se llegaría así a una injusta e injurídica dualidad en la reparación del perjuicio"*[2]

> *"En el derecho contemporáneo es claro, asimismo, que el comportamiento de quien reclama la reparación de los daños no sólo tiene trascendencia en materia de responsabilidad civil extracontractual, sino que el mismo es igualmente relevante cuando se reclama la indemnización de los daños producidos por el incumplimiento contractual. (...)"*[3]

Lo anterior, para significar que si se tienen en cuenta los hechos en que fundamentó las pretensiones la aquí demandante y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente en el que resultó lesionada, en efecto, la acción viable aquí es la responsabilidad civil extracontractual al margen que sobre el mismo acontecer ya cursó y culminó una de carácter contractual, soportada en el contrato de transporte, contra el propietario, conductor, empresa de transportes y aseguradora a la que se encontraba afiliado el bus de servicio público en el que se transportaba la señora María Emilia como pasajera y donde se concilió la totalidad de las pretensiones por un total de $80 millones de pesos.

3. Por su parte, la acción que acá se invocó, responsabilidad civil extracontractual originada a partir del accidente de tránsito en conducción de automotores, considerada como actividad peligrosa y sobre la cual la Corte Suprema puntualizó que si bien *"se inscribe en un régimen de "presunción de culpa" o "culpa presunta", realmente se enmarca en un sistema objetivo, porque en ninguna de tales hipótesis el agente se exime probando diligencia o cuidado, sino cuando demuestra causa extraña; como en otras ocasiones también lo ha sostenido la Corte, en el sentido de imponer a quien ha causado el daño el deber de indemnizar, todo, en consonancia con la doctrina moderna, y atendiendo a ciertos criterios del riesgo involucrado. Entre ellos, la anormalidad de la conducta, entendida, en términos simples,*

---

[2] *C.S.J. G.J. XLVII, pág. 454; XLIX, pág. 625; reiterada en sentencia de 31 de julio de 2000 Exp.5774*

[3] *C.S.J. SC Exp. 1989-00042-01 Sentencia de 16 de diciembre de 2010*

como el peligro o riesgo creado por la cosa o actividad, el cual debe ser extraordinario "respecto del que normalmente supone para uno mismo y para los demás cualquier cosa o actividad."[4]

4. Dentro de este juicio, de acuerdo con el informe policial de accidente de tránsito Nº C-00814[5] resultaron 20 personas heridas y una fallecida y el vehículo de placas SQX-505, donde se desplazaba la pasajera, aquí demandante, tuvo daños en la parte *"frontal, lateral y posterior"* al sufrir volcamiento al colisionar con el camión de placas OSC-039 por la parte *"lateral izquierda del vehículo"*; allí se describe una vía recta, plana con berma, de doble sentido, en buen estado, seca, con líneas de borde blanca y amarilla y con línea central amarilla segmentada.

En el mismo documento, en el campo *"hipótesis del accidente de tránsito"* se plasmaron las siguientes: para el vehículo Nº1 (bus de servicio público) la *"120[6]"*, que corresponde a *"Pasajeros obstruyendo el conductor o sobrecupo. Cuando se transportan usuarios en áreas aledañas al conductor o en número superior a la capacidad señalada en la Licencia de Tránsito o Tarjeta de Operación, obstruyendo su visual o dificultando su maniobra"*, y para el automotor Nº2 (camión conducido por Jhon Fredy López) la *"127"*, relativo a *"Transitar en contravía. Transitar por una vía en sentido contrario de circulación"*.

Y es que si bien, el citado documento no constituye un dictamen o informe pericial sino una descripción de los hechos, por cuanto contiene criterios de evaluación y una descripción gráfica del acontecimiento, y en tal medida, conforme lo dan a entender los recurrentes, no se puede tomar como una prueba reina o definitiva, tampoco debe ser descartado, toda vez que lo contrario, a la postre, desconoce la apreciación racional de las pruebas y que dota al juez de libertad para apreciar los diversos medios probatorios y definir su poder de convicción, eso si, *"con un criterio sistemático, razonado y lógico, orientado por las reglas del sentido común, la ciencia y las máximas de la experiencia, evaluación que desde luego tiene el deber de justificar, para observar los requisitos de publicidad y contradicción, pilares fundamentales de los derechos al debido proceso y a la defensa"* (CSJ

---

[4] C.S.J. SC211-2021 Exp.01-2011-00106-01 Sentencia de 2 de junio de 2021
[5] Folios 6 y ss (Cuaderno Principal)
[6] Resolución 11268 de 2012. Manual de Diligenciamiento Informe Policial de Accidente de Tránsito - IPAT

SC de 25 de abril de 2005, Rad. 0989, reiterada CSJ SC de 27 de agosto de 2014, Rad. 2006-00439-01).

En efecto, para corroborar las circunstancias allá planteadas, la demandante al absolver el interrogatorio de parte manifestó que *"en la buseta iban como 15 o 20 pasajeros"* e *"iban como 4 o 5 personas de pie"* y a indagársele al testigo, patrullero Jonathan Guzmán de la Policía Nacional, y quien atendió el accidente, sobre la razón por la cual se indicó la hipótesis *"127"* dijo: *"se puede evidenciar en el bosquejo topográfico... que el vehículo camión es el que invade el carril, viene en contravía, chocando a la buseta por la parte lateral..., el impacto es en el carril izquierdo por donde venía la buseta..."* y sobre la hipótesis del sobre cupo del bus que no le permitió maniobrarlo, indicó que obedeció a *"la cantidad de heridos que salieron."*

Y, con relación a la velocidad del bus, resulta evidente que no es necesario que alguien sepa conducir para advertir que un vehículo automotor transita con exceso de velocidad, como lo señala uno de los recurrentes, luego las manifestaciones al respecto y el hecho del volcamiento de la buseta al colisionar con el camión involucrado enseñan que la buseta excedía la velocidad al momento del choque y tal circunstancia también influyó en la gravedad del accidente y, por ende, las lesiones que sufrió la demandante.

Frente a dicho medio de prueba la Corte Constitucional en la sentencia C-429 de 2003, aun cuando en vigencia del artículo 251 del C.P.C. hoy 423 del C.G.P., afirmó que: *"un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público y como tal se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo…"*.

Y respecto a la fuerza probatoria de tales informes, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, señaló que: *"…basta advertir que el precepto invocado* –refiriéndose al art. 2º de la Ley 769 de 2002- *no contempla una restricción al valor probatorio que pueda surgir del "croquis" o*

del "informe de tránsito", y menos fija una tarifa legal que imponga que para la acreditación de los hechos que envuelven un accidente de tránsito se requiera, amén de ese instrumento, otro adicional.

El canon en cuestión ofrece sí la definición de distintos términos, pero con el propósito explicitado por el propio legislador de servir "Para la aplicación e interpretación" del Código Nacional de Tránsito Terrestre, y no de limitar la eficacia demostrativa de documentos, como el croquis, el cual lo considera como "Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde resulten daños a las personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad competente".

Por tanto, con independencia de que la demandante lesionada haya acudido a las dos acciones a través de diferentes procesos, ello no implica que acá el juez no pueda recurrir al informe de tránsito y desconocer la evidencia que de él surge, que muestra que los dos vehículos, en efecto, desarrollaban actividades peligrosas y de ahí mismo derivar las consecuencias, en especial, lo que corresponde al daño y a su indemnización que invocaron los demandantes.

5. Para el caso, no hay duda que concurren los elementos que configuran la responsabilidad civil extracontractual de quien conducía no solo el bus de servicio público, sino del camión de placas USC-039 al momento en que ocurrió el siniestro vial. En efecto, ha de verse que ***i)*** existió una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica, por cuanto los dos automotores, sin asomo de duda, infringieron normas de tránsito que contribuyeron a configurar un daño y, ***ii)*** con ello se presentó un daño o perjuicio, es decir, un detrimento, menoscabo o deterioro que afectó los bienes o intereses de los demandantes. Por lo tanto, no erró la jueza en determinar que los involucrados aportaron elementos de riesgo y peligrosidad al incumplir las normas.

5.1 No obstante lo anterior, en lo que se refiere al porcentaje que refirió la jueza de conocimiento para la compensación de culpas, en el sentido se señalar un 60% de responsabilidad para el bus, en gran medida por el provecho económico porque se trató de la prestación de un servicio

público, y el 40% para el camión, considera la Sala que, para el caso, tal ponderación resulta improcedente, habida cuenta que si bien estuvieron involucrados los dos automotores, lo cierto es que al margen del porcentaje de culpa o responsabilidad de cada uno de ellos, la señora María Emilia, quien resultó lesionada, está exenta de culpa, por cuanto es evidente que frente al accidente es un tercero ajeno a las condiciones que rodearon el siniestro, habida cuenta que además que no desplegaba ninguna actividad peligrosa su actuar como pasajera, es decir, una *"espectadora"* que se desplazaba en uno de los vehículos en nada influyó, luego no podría enrostrársele ni acarrear con la culpa de quienes conducían los automotores, sus guardianes y/o empresa afiliadora.

En un caso similar al de este proceso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que:

> *"De ahí que si con motivo de un choque de vehículos resulta perjudicado o lesionado uno de los pasajeros, en orden a determinar la responsabilidad civil, en estrictez, "no cabe hablar de colisión de actividades peligrosas y, en tal virtud, la víctima puede utilizar a su favor –como bien lo ha predicado la doctrina- las presunciones del artículo 2356 del Código Civil"[7]. El pasajero u ocupante, a no dudarlo, en su condición de tal, no despliega –por regla general- comportamiento alguno que pueda calificarse como peligroso. Su actividad, en relación con el automotor que lo transporta, de ordinario es típicamente pasiva y, por tanto, incapaz de generar un riesgo de cara a la conducción material del aquel. Muy por el contrario, está sometido a uno de ellos: el que emerge de la prenotada conducción vehicular. Mutatis mutandis, el ocupante, en dichas condiciones, no es más que un mero espectador; un sujeto neutro enteramente ajeno a la explotación o ejecución de la actividad catalogada como peligrosa o riesgosa. Se trata, pues, de una "víctima, ajena en un todo a la actividad peligrosa que se predica del propietario del otro vehículo, a quien demanda, participante en el accidente"*[8]

En esas condiciones, es evidente que le asiste razón a la parte demandante en su reparo, quien cuestiona las disminución del monto del perjuicio por la participación que en el accidente tuvo el vehículo de servicio público donde ella se desplazaba.

6. Por tanto, se recuerda que quien ha padecido un daño se encuentra facultado para reclamar la indemnización de los perjuicios bien de índole material ya moral, siempre que se honre el postulado del *onus probandi*, es decir, que se acrediten, como lo ha sostenido la Corte al decir que*"(...) le corresponde al que busca el resarcimiento aducir la prueba de los*

---

[7] *Javier Tamayo Jaramillo. De la Responsabilidad Civil. Temis. Bogotá. 1999. T. II. Pág., 392.*
[8] *C.S.J. Cas Civ. Exp.6171 de 7 de septiembre de 2001, reiterada en Exp. 6315 de 23 de octubre de 2001.*

factores constitutivos de responsabilidad extracontractual, como son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad o dependencia que lógicamente debe existir entre los dos primeros elementos enunciados, estando desde luego el demandado en posibilidad de exonerarse de la obligación de que se trata si demuestra un hecho exonerativo de responsabilidad"[9]

6.1. En cuanto al perjuicio, memórese que éste puede ser patrimonial y/o extrapatrimonial; el primero, definido como el daño material que se divide en *"daño emergente"* y *"lucro cesante",* y el segundo que suele clasificarse en *"daño moral", "daño objetivo objetivado",* –hoy en día considerado como perjuicio patrimonial-, *"daño a la vida en relación",* entre otros.

Para esos efectos, en el expediente, de un lado, obra informe pericial de clínica forense (fl.20,21) practicado a la señora María Emilia en la Unidad Básica de Facatativá – Cundinamarca del Instituto de Medicina Legal el 26 de mayo de 2016 donde se concluyó como SECUELAS MÉDICO LEGALES: *"Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; Perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente; Perturbación funcional de órgano de la aprehensión de carácter por definir; Para determinar el carácter de la Secuela Médico Legal, se requiere nueva valoración AL TERMINO DEL TRATAMIENTO POR PARTE DE CIRUGIA DE MANO..."* y, del otro, el Dictamen de Determinación de Origen y/o Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 21 de diciembre de 2017 (fl.23-35), donde se dictaminó una *"pérdida de la capacidad laboral y ocupacional"* de *"53.78%"* con fecha de estructuración el *"21/07/2015",* día del accidente. Por consiguiente, fácil es colegir que, como producto de las lesiones y con apoyo también en las fotografías aportadas, la señora María Emilia quedó con una limitación funcional y permanente en su brazo izquierdo.

6.2. En lo que corresponde al daño emergente, en la demanda se estableció, para julio de 2015, en la suma de $10 millones y actualizada en $14.519.839, por concepto de gastos hospitalarios, rehabilitación, personas que le ayudaran en los oficios, desplazamiento en transporte especial,

[9] *C.S.J., Cas. Civ. Sent. feb/9 de 1976.*

pasajes, citaciones, autenticaciones, pasajes, entre otros, y para demostrarlo se aportaron los siguientes documentos:

- Constancia firmada por el señor José García en donde señala que transportó a la demandante de Madrid-Facatativá y viceversa para asistir a los controles médicos *"desde el día 24 de agosto de 2015 hasta el 21 de septiembre de 2015 con un costo de Treinta y Cinco Mil pesos por cada cita de control"* (fl.43), sin embargo, de su contenido no se advierte el número de citas a las que asistió. No obstante, con relación a ello la jueza de conocimiento reconoció **$70.000** por ese concepto, en razón a que sólo obra en el expediente prueba que fue a controles de ortopedia el 24 de agosto y para *"rx de antebrazo izquierdo y húmero"* el 10 de septiembre de 2015, conforme se advierte del dictamen de calificación de pérdida laboral.

- Certificación que enseña que María Emilia pagó (1) un SMMLV a Idalu Vargas por los cuidados en su incapacidad desde el *"24 de agosto de 2015 hasta abril de 2016"* (fl.44) y sí lo expuso en su interrogatorio al afirmar que *"mientras me estuvieron pagando las incapacidades, yo podía sacar plata de ahí para pagar la enfermera",* pero que resulta contradictorio conforme lo consideró la jueza *a quo,* en la medida que las incapacidades se liquidaron solamente con base en un salario mensual vigente, que era lo que percibía como sueldo.

- Igual acontece con la certificación donde informa que pagó a Evelia Suarez *"$200.000 quincenales, desde el 24 de agosto de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016",* por cuanto *"le hacía absolutamente todo",* pues además de lo dicho, también manifestó que fueron sus padres y hermanos quienes le colaboraron en su recuperación.

Y no distinta suerte tienen las demás pruebas documentales para reclamar el daño emergente, como el recibo de caja de fecha 6/10/2018 del Hospital de Facatativá por $43.300, habida cuenta que corresponde al costo de las copias del historial médico que fueron aportadas al expediente que cursó en el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, así como los gastos en que incurrió para la expedición de diferentes documentos como certificados de tradición, citaciones y notificaciones judiciales, entre otros.

6.3. En lo que atañe al *"lucro cesante",* para probar su causación, la convocante trajo una certificación expedida por la Directora de Recursos Humanos de GEOflora que enseña que María Emilia laboró allí del 18 de marzo de 2015 al 30 de septiembre de 2018 en el cargo de *"operario(a)",* con un salario de *"$828.116".*

7. Con fundamento en lo anterior, surge la necesidad de modificar los valores reconocidos, primero, porque como ya se explicó no hay lugar a reducir el monto del perjuicio en el 60%, sino que, por el contrario, se le debe reconocer el 100% del daño sufrido y demostrado; y, del otro, porque auscultadas las fórmulas que implementó para liquidar el lucro cesante y los valores e información que utilizó para reemplazar la ecuación, la jueza *a quo* incurrió en varias imprecisiones como el número de meses a reconocer por lucro cesante, circunstancia que permite de una vez actualizar los valores conforme lo dispone el artículo 283 del Código General del Proceso, a cuyo tenor: *"El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado".*

7.1. En tal contexto, y para obtener el valor por concepto de lucro cesante pasado, tenemos que la demandante quedó con una pérdida del 53.78% de su capacidad laboral, luego será tal porcentaje del salario que devengaba, $828.116, el que se considere para liquidar el lucro mencionado.

$828.116 x 53.78% = $445.360,78

En ese orden, tenemos que la fórmula para actualizar el anterior valor es la siguiente:

$$VP = VA \times \frac{IPC\ Final\ (febrero\ 2023)}{IPC\ inicial\ (julio\ 2015)}$$

Donde: VP = valor presente; VA = valor actualizado

Así, para el caso que ocupa la atención de la Sala tenemos que:

$$VP = \frac{\$445.360,78 \times 130.40}{85,37}$$

VP = **$680.274,63**

Entonces, será el valor resaltado que deberán reconocer los demandados desde la fecha del accidente 21 de julio de 2015 hasta la fecha de esta sentencia, es decir, 92 meses como *"lucro cesante pasado",* incluido el interés del 6% anual, así:

$$VA = LCM \times Sn$$

Donde ***i)*** **VA** corresponde al valor actual del lucro cesante, incluidos los intereses del 6% anual; ***ii)*** **LCM** el lucro cesante mensual actualizado; ***iii)*** **Sn** el valor acumulado de la renta periódica de un peso pagado **n** veces a una tasa de interés **i** por periodo. De igual manera, para hallar **Sn**, tenemos que su fórmula es $Sn = (1 + i)^n - 1$, donde ***i*** = a la tasa de interés por periodo y, ***n*** **=** el número de meses a liquidar. Así tenemos que:

LCM = 680.274,63

$$\textbf{Sn} = \frac{(1 + 0.005)^{92} - 1}{0.005}$$

n = 116.45
VA = $680.274,63 x 116.45
VA = **$79.217.980,7 valor a pagar por concepto de *"lucro cesante pasado"***.

7.2. Ahora, para efectos de cuantificar el *"lucro cesante futuro",* deviene importante recordar que para ello resulta pertinente considerar el tiempo de vida probable de la lesionada de acuerdo con las tablas de supervivencia o vida probable de la Superintendencia Financiera en la Resolución 110 de 2014, *"por la cual se adoptan las tablas de mortalidad para la población del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS".*

Si ello es así, se ha de tener en cuenta que ***i)*** la demandante nació el 8 de agosto de 1984 (fl.36 Cuadernoprincipal.pdf); ***ii)*** para la fecha del accidente -21 de julio de 2015- contaba con casi 31 años, lo que significa que, de acuerdo con el contenido de la citada resolución, su vida probable -

para la fecha de los hechos- era de 52.8 años, es decir, 633.6 meses y, ***iii)*** que el ingreso base mensual de su salario, luego de actualizar y reducir los valores ya explicados, tal como se explicó en líneas anteriores, es de $680.274,63.

Entonces, tenemos a que a partir de la fecha de liquidación y por la vida probable de la demandante, deberá reconocérsele los valores ya explicados, eso sí, descontando los intereses y los 92 meses por los cuales se calculó el lucro cesante pasado. Por consiguiente, se deberá liquidar la indemnización así:

$$VA = LCM \times Ra$$

Donde ***i)*** **VA** corresponde al valor del lucro cesante futuro; ***ii)*** **LCM** el lucro cesante mensual y, ***iii)*** **Ra** el descuento por pago anticipado. De igual manera, para hallar **Ra**, tenemos que su fórmula es $Ra = (1+i)^n - 1 \ / \ 1(1+i)^n$ donde ***i*** = tasa de interés por periodo y, ***n*** **=** el número de meses a liquidar (633.6 – 92). Así tenemos que:

LCM = 680.274,63

$$\textbf{Ra} = \frac{(1 + 0.005)^{541.6} - 1}{0.005\ (1+0.005)^{541.6}}$$

n = 191.62
VA = $680.274,63 x 191.62
VA = **$130.354.225, valor que corresponde a la suma a pagar por concepto de *"lucro cesante futuro"***.

8. En lo que corresponde al reparo respecto a que los montos establecidos por el perjuicio extra patrimonial no se avienen a la dimensión de las aflicciones y el impacto emocional y psicológico de la actora y sus padres, se ha dicho que los perjuicios extrapatrimoniales se suelen clasificar, como arriba se dijo, en *"daño moral", "daño moral objetivado"* y, entre otros, *"daño a la vida en relación".*

8.1. En cuanto al "*daño a la vida de relación*", la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 20 de enero de 2009[10], en lo pertinente sostuvo: "*La Corte a tono con los postulados constitucionales vigentes y con la realidad jurídica y social, retomó el tema del 'daño a la vida de relación', en el fallo emitido el 13 de mayo de 2008 —Exp. Nº 1997 09327 01—, en el que reparó tanto en la doctrina foránea como en la jurisprudencia patria para concluir que es de completo recibo en nuestro ordenamiento como una especie de daño extrapatrimonial, incluso precisó que era distinto al de índole moral —también inmaterial—; y, por tanto, su protección se impone en los casos en que esté cabalmente acreditado*".

De igual modo, clarificó que el daño a la vida de relación y el moral son distintos, habida cuenta que "*el primero se refleja sobre la esfera externa del individuo, es decir, tiene que ver con las afectaciones que inciden en forma negativa en su vida exterior, concretamente, alrededor de su actividad social no patrimonial, mientras que el segundo recae sobre la parte afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc.*"[11].

Para el caso, en la sentencia apelada se consideró que, en efecto, existe una necesidad de indemnización a la demandante por los daños extrapatrimoniales ocasionados con ocasión a la pérdida de funcionalidad de su brazo izquierdo, conforme se desprende del dictamen que emitió la Junta Regional de Calificación de Invalidez con fecha de estructuración del día del accidente y que calculó en 53.6% su pérdida de capacidad laboral, pues de acuerdo a los testimonios recaudados y el propio dicho de los demandantes, es evidente el sufrimiento emocional y moral causado por la pérdida de movilidad de una de sus extremidades superiores y la vergüenza que refleja al cubrirlo, pues hasta cambió su forma de vestir y desenvolvimiento en la sociedad al preferir quedarse resguardada casi siempre en casa.

Por consiguiente, como a pesar de que la jueza *a quo* por *"daño moral"* y *"daño a la vida en relación"* reconoció 50 SMMLV por cada concepto para la demandante María Emilia y 20 SMMLV por concepto de *"daño moral*

---

[10] Exp. 000125 Citada en la sentencia SC5050-2014 de abril 28 de 2014. M.P. Dra. Ruth Marian Díaz Rueda.
[11] Ibídem

subjetivo" para cada uno de sus padres, descontó también de ellos el 60% ya referido, por ende, también habrá lugar a modificar tal valor.

Y con relación a la solicitud del apoderado del dicho extremo de establecer uno superior, se debe poner de presente que si bien le asiste razón cuando aseguró que nada impide que tal monto puede ser mayor debido a la discapacidad con la que quedó su representada y porque así lo ha efectuado la Corte Suprema de Justicia en otros casos, lo cierto es que esta Sala de Decisión encuentra que los valores así concedidos por *"daño moral"* y *"daño a la vida en relación"* a los demandantes, resultan consecuentes no solo con lo solicitado, como ya se explicó, sino con lo que se demostró en el plenario, pues sin desconocer el grado de desasosiego y congoja de la demandante y sus familiares, aquí demandantes, por la pérdida de funcionalidad de uno de sus brazos, conforme lo ha dicho la jurisprudencia de la citada Corporación, al juez tampoco le está autorizado desconocer los topes con relación a tales conceptos de indemnización.

> *"Precisamente, una de esas pautas es el señalamiento de techos o límites máximos indemnizatorios referentes al perjuicio moral, de modo que a los jueces de instancia no les está autorizado desconocerlos. En consecuencia, se les impone el acatamiento de los montos fijados por la Sala, en la medida que aquella estimación tiene efectos normativos en los casos ulteriores donde deban proveer sobre la compensación del comentado daño, y es bajo el marco de los aludidos topes, que se considera admisible el ejercicio del prudente arbitrio judicial."*[12]

9. Finalmente, y para resolver el reparo restante de ambos recurrentes contra la sentencia de primera instancia, relativo a la exoneración de la aseguradora demandada, es necesario relievar que si bien el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero prevé que uno de los requisitos de las pólizas de seguro, es que *"los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza",* con relación a ello, la Superintendencia Financiera puntualizó en la Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014, que *"los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada..." (se subraya)*

[12] *C.S.J. Cas. Civ. SC3728-2021 Exp.07-2005-00175-01 Sentencia de 26 de agosto de 2021*

Precisamente, sobre lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento[13], consideró que:

> *"Con apoyo en los elementos hermenéuticos antes señalados, considera la Corte que una adecuada interpretación del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero exige su análisis armónico con la normativa que ha proferido la Superintendencia Financiera «para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el artículo 184 numeral 2° EOSF» y concretamente, la exigencia de la CE 029 de 2014 respecto a la ubicación de los amparos y exclusiones a partir de la primera página de la póliza, interpretación que no sólo permite cumplir con las exigencias de información y conocimiento del tomador sino también atender el principio general de prevalencia de la voluntad de las partes contratantes.*
>
> *A juicio de la Sala, esta intelección se corresponde en mejor medida con las condiciones actuales del mercado asegurador, en el que se ha llegado a un grado de detalle en la delimitación del riesgo que, por lo general, haría imposible la inclusión de todas las coberturas y exclusiones únicamente en la primera página de la póliza –al menos en un formato legible, como es de rigor.*
>
> *Sostener una interpretación contraria, es decir, exigir la consignación forzosa y exclusiva de las exclusiones en la primera página de la póliza, podría cercenar o restar efectos a la facultad de delimitación de riesgos legalmente otorgada al asegurador, en tanto castigaría con ineficacia las exclusiones consignadas de manera clara e ininterrumpida a partir de la primera página.*
>
> *Considera la Sala que la intención del legislador de garantizar la correcta y suficiente información del asegurado y su conocimiento de las coberturas y exclusiones del amparo contratado se cumple a cabalidad cuando éstas se consagran de forma continua, ininterrumpida y con caracteres destacados a partir de la primera página de la póliza, lo que permite una redacción clara y detallada que, a su vez, redunda en la adecuada comprensión que busca el artículo 184 del EOSF."*

Si ello es así, ha de verse que la *"póliza de auto pesado"*[14] que tomó el demandado Uriel Antonio Marín sobre el vehículo de su propiedad, de placas USC-039, Marca Chevrolet, modelo 2007, clase *"camión",* con uso *"pesado transporte mercancía de terceros",* fue por un valor asegurado de $82 millones y con vigencia *"desde 01/06/2015 hasta 31/05/2016"*.

De su contenido se advierte que de la página 7 a 10 se encuentran las *"condiciones particulares",* donde se plasmaron los datos y características del vehículo asegurado y el tomador, y de la página 11 a 40, es decir, "*en forma continua a partir de la primera página de la póliza*" se plasmaron las *"condiciones generales";* en el Capítulo II, dentro de las *"Exclusiones para el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual",* entre las cuales se

---

[13] *CSJ Cas Civ. SC2879-2022 Sentencia de 27 de septiembre de 2022*
[14] *Folios 174 y ss (001CuadernoPrincipal.pdf)*

encuentra en negrilla: *"**11. Cuando el conductor nunca hubiese tenido licencia de conducción, o habiéndola tenido se encontrare suspendida o cancelada de acuerdo con las normas vigentes, o ésta fuere falsa al momento de la ocurrencia del siniestro, o no fuere apta para conducir vehículos de la clase y condiciones estipuladas en la presente póliza, de acuerdo a la categoría establecida en la licencia por el Ministerio de Transporte**"*[15], luego resulta diáfano que las exclusiones y las condiciones del amparo cumplen con los requisitos anteriores.

Ahora, con relación a la idoneidad de la licencia, se ha de advertir que si bien al momento del siniestro, el conductor del camión, señor John Fredy López, presentó su licencia de conducción N°15991473 con *"categoría C-2"* a las autoridades que atendieron el accidente, y en el informe policial no se hizo ninguna manifestación con respecto a su idoneidad o legitimidad, lo cierto es que al margen de ello, de la documentación que presentó la aseguradora al contestar la demanda se advierte que conforme a la consulta en el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT[16], para la fecha del accidente, 21 de julio de 2015, el conductor no contaba con una licencia de conducción vigente, pues solo fue hasta el 5 de octubre del mismo año que solicitó la recategorización de dicho documento.

Y si a lo anterior se suman las manifestaciones al respecto, de un lado, del demandado Uriel Antonio Marín, que al preguntársele sobre si al contratar al conductor, Jhon Fredy López, verificó sus documentos como la cédula de ciudadanía y la licencia de conducción, manifestó que: *"yo nunca verifique nada porque él acá en Mazanares – Caldas era camionero, era volquetero, manejaba toda clase de vehículos aquí, entonces yo por eso me llene de confianza que él tenía sus papeles en regla..."*. y, del otro, al indagársele al patrullero Jonathan Guzmán, quien atendió el siniestro, acerca de si tuvo en su poder los documentos de los conductores, manifestó que *"sí"*, pero que si en su entender, alguno de ellos le hubiere presentado una licencia de conducción falsa, se hubiere percatado de ello, manifestó *"la verdad si era falsa, de pronto no me di cuenta porque estábamos con accidente de tránsito, si era falsa no sabría."*

---

[15] *Folio 191 (001CuadernoPrincipal.pdf)*
[16] *Folio 244 (001CuadernoPrincipal.pdf)*

Por consiguiente, se advierte que no erró la jueza de primera instancia al declarar próspera la excepción propuesta por la aseguradora demandada en virtud de la exclusión de la póliza.

10. De conformidad con lo decantado en precedencia, se impone la modificación de la sentencia recurrida por las partes, únicamente, del numeral **CUARTO**, así:

> *"A consecuencia, CONDENAR a los demandados Jhon Fredy López Orozco y Uriel Antonio Marín Rivera a pagar, solidariamente, a los demandantes, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, so pena interés civil moratorio, las siguientes sumas de dinero:*
>
> *4.1. Por Daño Patrimonial, esto es, Daño Emergente **($70.000)**, Lucro Cesante Consolidado **($79.217.980,7)** y Lucro Cesante Futuro **($130.354.225)**, en favor de María Emilia Suarez Molina, **para un total de $209.642.206.***
>
> *4.2. Por daño a la Vida en Relación en favor de María Emilia Suarez Molina, el equivalente a **50 SMMLV**.*
>
> *4.3. Por Daño Moral Subjetivo en favor de María Emilia Suarez Molina, el equivalente a **50 SMMLV**.*
>
> *4.4. Por Daño Moral Subjetivo en favor de Soledad Molina Molina y Anibal Suarez García, el equivalente a **20 SMMLV**, para cada uno."*

11. Finalmente, y como visto está que progresa parcialmente la alzada que promovió el extremo demandante, sólo se condenará en costas a la parte demandada, también recurrente, propósito para el que la Magistrada Sustanciadora fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente S.M.L.M.V., atendiendo lo previsto por el artículo 5º, numeral 1º, del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, del Consejo Superior de la Judicatura, en favor de la parte demandante.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **MODIFICAR**, únicamente, el numeral **CUARTO** de la sentencia que profirió el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá el 23 de noviembre de 2022, así:

> *"A consecuencia, CONDENAR a los demandados Jhon Fredy López Orozco y Uriel Antonio Marín Rivera a pagar, solidariamente, a los demandantes, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, so pena interés civil moratorio, las siguientes sumas de dinero:*
>
> *4.1. Por Daño Patrimonial, esto es, Daño Emergente* ***($70.000)****, Lucro Cesante Consolidado* ***($79.217.980,7)*** *y Lucro Cesante Futuro* ***($130.354.225)****, en favor de María Emilia Suarez Molina,* ***para un total de $209.642.206.***
>
> *4.2. Por daño a la Vida en Relación en favor de María Emilia Suarez Molina, el equivalente a* ***50 SMMLV****.*
>
> *4.3. Por Daño Moral Subjetivo en favor de María Emilia Suarez Molina, el equivalente a* ***50 SMMLV****.*
>
> *4.4. Por Daño Moral Subjetivo en favor de Soledad Molina Molina y Anibal Suarez García, el equivalente a* ***20 SMMLV****, para cada uno."*

SEGUNDO: **CONFIRMAR** en lo demás la sentencia de fecha y procedencia antes anotadas, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: **CONDENAR** en costas de esta instancia a la parte demandada. Se señalan como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) S.M.M.L.V. El Juzgado de primer grado proceda a su liquidación de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,

MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS

RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **683c3f1324194129f3ed41359d2daeef097591688ce6a8e36daf6f32a3a3bc4d**
Documento generado en 28/04/2023 03:14:02 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16319

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
SALA CIVIL DE DECISIÓN
Rad. 11001-31-03-035-2019-00665-02

Bogotá D.C. veintiocho (28) de abril del año dos mil veintitrés (2023)

REF. PROCESO DECLARATIVO DE MILLERED VALENCIA GARCÍA CONTRA ILUMINACIONES TEQUENDAMA S.A.

Atendiendo a la solicitud de pruebas solicitadas por la parte demandante-apelante[1], se advierte que la misma no serán decretadas, por las razones que a continuación se exponen:

Es del caso recordar que el legislador dispuso el decreto de pruebas en el trámite de segunda instancia, únicamente en los eventos definidos en el artículo 327 del C. G. del P., siempre y cuando se encuentre en cualquiera de los siguientes casos: *"1.- Cuando las partes las pidan de común acuerdo; 2.- Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió; 3.- cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos; 4.- cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria; y, 5.- si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior*".

En el presente caso, la parte demandante solicitó *"(…) i) Carpeta laboral integral del Trabajador ANDRES DAVID BARRERA HERNANDEZ C.C. 17.675.967 que contenga como mínimo contrato laboral o Certificación de la*

[1] Archivo denominado *"07. SolicitudPruebas"* ubicado en la carpeta *"CuadernoTribunal"* del expediente digital.

fecha de Ingreso, Pagos Realizados y Conceptos y los periodos de pago, Afiliaciones a Seguridad Social; ii) Certificación de la Revisoría Fiscal de ITESA SAS. Referente a los pagos y conceptos y periodos de pago, pagados al señor ANDRES DAVID BARRERA HERNÁNDEZ (…)". Alegando para ello las causales 3 y 4 de la norma antes citada.

Sin embargo, más allá de la enunciación de las causales que pretende hacer actuar, no indicó cuales son los hechos ocurridos después de la oportunidad para pedir las pruebas en primera instancia que se generaron y que sean relevantes para esta *litis*, aunado, tampoco indicó cual fue ese caso fortuito o fuerza mayor para que la documental aquí solicitada no hubieran podido presentarse ante el *a quo*, máxime que en el escrito petitorio se mencionó que lo que pretende probar, es la relación laboral, lo que fue estudiado en el auto que resolvió las excepciones previas y, contra la cual no se interpuso recurso alguno[2].

Por tanto, al no advertirse que la solicitud encaje en los precisos supuestos de la normativa en cita se hace perentoria su negativa.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el decreto de la prueba pedida por el extremo demandante, por las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. En firme ingrese.

Notifíquese y Cúmplase.

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

[2] *Archivo "003AutoResuelveExcepciones" de la carpeta "C02ExcepcionesPrevias" de la carpeta "01PrimeraInstancia" del proceso digital.*

Firmado Por:

Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7a7c1f5f034de2d53acf1dcd3b6e7d0c428b5edd8408fa61c5b9bfebee1354f5**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

DEMANDANTE	:	YAKELINE CASTRO MALDONADO en nombre propio y en representación de JAIDER ANDRÉS y DANNA ISABELLA VELASCO CASTRO.
DEMANDADO	:	CLÍNICA FUNDACIÓN ABOOT SHAIO
CLASE DE PROCESO	:	RESPONSABILIDAD MÉDICA
MOTIVO DE ALZADA	:	APELACIÓN SENTENCIA

El inciso 3° del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, que rige el trámite de la segunda instancia, establece que "ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes... Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto".

Por lo tanto, para verificar si la alzada fue sustentada oportunamente se tiene que se admitió por auto del 15 de febrero de 2023, notificado por estado del día 16 siguiente a las partes, por lo que los tres días de ejecutoria de la citada providencia fueron 17, 20 y 21 de febrero; los 5 para sustentar transcurrieron el 22, 23, 24, 25 y 27 siguientes, sin que la parte apelante presentara escrito alguno en este Tribunal desarrollando los argumentos del recurso.

En aplicación de los principios de preclusión y eventualidad se declarará desierta la apelación, toda vez que "de los recursos únicamente podrá hacerse uso «dentro del marco temporal que les concede el ordenamiento jurídico, lo que impide la dilación injustificada de los pleitos y permite la ejecutoria de las providencias» (AC, 10 sep. 2013, rad. n° 2011-00111-01)"[1].

Estos principios tienen arraigo en los artículos 228 de la Constitución Política que establece que "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado" y el 117 del Código General del Proceso, según el cual «[l]os términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes… son perentorios e improrrogables».

[1] CSJ. SC. Auto del 27 de junio de 2017. AC4028-2017. Radicación nº 23001-31-10-003-2012-00348-01. Magistrado sustanciador: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

Sobre el punto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil[2] ha sostenido que “el legislador previó como sanción la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisión, al momento de presentar la impugnación en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia y (ii) cuando no se presente la sustentación de los mencionados reparos ante el superior.” -se subraya- . Aún más, la Corte Constitucional haciendo referencia al fallo anterior, afirmó *“En suma, la declaratoria de desierto del recurso surge como un castigo impuesto al apelante por no cumplir con una carga procesal de vital importancia, lo que trae como consecuencia no dar trámite al recurso vertical impidiéndose el conocimiento del asunto en segunda instancia”*[3]. Esto, claro está, sin perjuicio del deber del juez de interpretar la ley en el sentido más favorable con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia, en la medida que surjan dudas en la interpretación de las normas del código (art. 11 C.G.P.) y o cualquier vacío que deba suplirse con las que regulan casos análogos (art. 12 ib), situación que no se predica de la modificación introducida por el Decreto 806 de 2020 y ahora por la Ley 2213 de 2022, bajo la cual se debe surtir el trámite de la alzada en este caso concreto, pues claramente su artículo 12, para el evento específico de apelación de sentencias, impone el deber de presentar una sustentación como hecho habilitante de la competencia del Tribunal porque, sin convocar a audiencia para ese fin, "vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita”.

Ante la solicitud de la parte recurrente de tener la “alegación de sustentación que registr[ó] ante la primera instancia como el argumento de la apelación”, se le pone de presente que, pese a que, en pronunciamiento del 14 de octubre de 2021, la misma Sala, en sede de tutela, consideró que “aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentación del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que señala el canon 14 del citado decreto [actualmente artículo 12 de la Ley 2213 de 2022], no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelación, por lo tanto, resulta improcedente que se imponga como sanción la deserción del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la pérdida del derecho constitucional a impugnar la decisión que concluyó la primera instancia”, tal argumentación fue derruida por la Sala Laboral, en decisión reciente del 18 de enero de 2023 CSJ STL 0028-2023, reiterando las sentencias anteriores STL7317-2021, STL-11190-2022 STL12646-2022, STL12574-2022, al constituirse en juez de segunda instancia de tutela, donde afirmó: *“Adviértase como el fallador convocado empezó por indicar que el Decreto 806 de 2020 impone a la parte recurrente el deber de sustentar el recurso de apelación*

---

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC11058-2016 de 11 de agosto de 2016, radicado 11001020300020l6-02143-00

[3] C. Const. T-195 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

ante el juzgador de segundo grado, una vez ejecutoriado el auto que admitió la alzada. La omisión de dicha carga conlleva a la declaratoria de desierto, normativa que «guarda relación con el precepto 322 del CGP, eso sí, estructurándose ahora un trámite escritural en el evento de no ser necesario el decreto de pruebas en segundo nivel».". Y le permitió concluir que, "*la falta de sustentación en segunda instancia acarrea la declaratoria de desierto del recurso de alzada".*

Téngase en cuenta, además, que, si bien la apelante afirmó que "no accedí a la información en tiempo", refiriéndose a la admisión de la apelación de la sentencia, lo cierto es que no se demostró algún error o irregularidad que impidiera la debida notificación de esa providencia, por el contrario, de la cadena de comunicaciones remitidas por la secretaría se observa que fue enterada sin contratiempos. De alli la protesta de la parte contraria que solicitó declarar desierto el recurso.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, el 23 de enero del 2023.

SEGUNDO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL

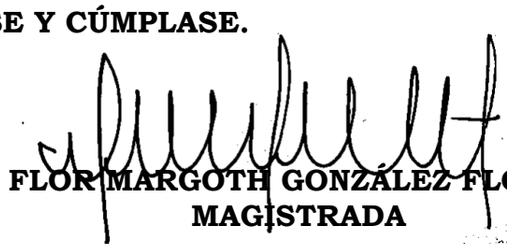
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-035-2021-00009-01
Demandante: CONSORCIO BIC LA MERCED
Demandado: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

De conformidad con lo normado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, y comoquiera que la parte apelante no sustentó el recurso dentro de los cinco días siguientes a la notificación por estado del auto de fecha 31 de marzo de 2023, se declara **DESIERTO** el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá.

Por Secretaría, **DEVUÉLVANSE** las presentes actuaciones a la dependencia de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

R.I. 16265

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-036-2020-00318-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, se evidencia que el término para proferir la sentencia, está próximo a fenecer, de conformidad, con lo normado en el inciso 4° del artículo 121 del Código General del Proceso se **RESUELVE**:

PRIMERO: PRORRÓGUESE por única vez, hasta por el término de seis (6) meses el plazo de duración de la presente instancia, contabilizado desde el 30 de mayo de la presente anualidad.

SEGUNDO: Por secretaría contrólese el término para proferir la decisión de segunda instancia en este proceso, el que en ningún caso debe sobrepasar del 30 de noviembre del 2023.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
Magistrada

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9cb558cf2955cdc63df3e4e09470f3acf02c679cc528dffdca7b8e812aa41423**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Proceso Ordinario de la señora María Cecilia Mejía Campuzano y otros contra Bloch Niño y Cía S. en C. y otros.

Rad. 37 2001 01048 02

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en providencia de 22 de octubre de 2021, corregida 12 de septiembre de 2022, en la que resolvió casar parcialmente la sentencia proferida por esta Corporación el 9 de septiembre de 2016.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo, atendiendo que no hay actuación pendiente de agotar por esta sede.

Notifíquese,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

Firmado Por:
Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ecd1b200e0c942ee7b26cd301b177c879ecfdf16e1d25230cf42ab6fc0d3d7aa**
Documento generado en 28/04/2023 03:19:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16314

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-037-2018-00270-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Finalmente, los escritos presentados por las partes apelantes se agregarán a los autos y se tendrá en cuenta en la oportunidad procesal correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ae93800fbf17c951568e642231232587cb9478701c40249bece3cae112ab95fd**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Proceso:	Verbal
Radicado N°:	11001310303720200009501
Demandantes:	Martha Elena Ramírez Sánchez y otros
Demandada:	Agrupación de Vivienda La Cancioneta P.H. y otro

1. ASUNTO A RESOLVER

Sobre la solicitud de pruebas presentada por el apoderado de la parte demandante.

2. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

El artículo 327 del Código General del Proceso establece:

"Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.

2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.

3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.

5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior".

Revisada la solicitud de pruebas presentada por el apoderado de la parte demandante, se advierte que la misma está llamada al fracaso, por cuanto no se reúnen los presupuestos establecidos en el artículo 327 del Código General del Proceso.

Frente a la declaración del testigo técnico Jorge Hernan Mogollón, véase que, mediante proveído del 16 de junio de 2021, el Juzgado ordenó su citación para el 3 de agosto de ese año, en virtud de la petición realizada por la parte demandada en el escrito de contestación. Como la prueba no se recaudó en esa oportunidad, se fijó nueva fecha para el 21 de septiembre de 2021, según auto del 3 de septiembre, en el que se advirtió lo siguiente: "*se requiere la colaboración de las partes para que hagan comparecer a dichos peritos en las fechas mencionadas*".

En la audiencia desarrollada el 22 de septiembre de 2021, la apoderada de la parte demandada señaló que no tenía conocimiento de la ubicación del testigo; seguido de ello, el apoderado del extremo convocante indicó que contactó al señor Mogollón, quien le manifestó que no había recibido ninguna notificación, por lo que solicitó al Juzgado el envío de una citación o el señalamiento de otra fecha para recaudar la prueba. Tal pedimento se resolvió desfavorablemente, porque ya se había programado la diligencia en varias oportunidades y la carga de la prueba no le competía al Juzgado sino a la parte.

Al respecto, debe decirse que, contrario a lo afirmado por el memorialista, la prueba en cuestión no fue decretada de oficio, sino a petición de la parte convocada, como se desprende de la solicitud probatoria realizada en el escrito de contestación y el auto por el cual se decretaron las pruebas. Luego, entonces, la petición únicamente podía pedirla en esta instancia la parte que la solicitó, siempre que no tuviera responsabilidad en la no práctica de la misma, conforme lo establece el numeral 2º del art. 327 del C.G.P. según el cual es viable ordenar la prueba "*Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar* ***sin culpa de la parte que las pidió***".

Con todo, se advierte que si la parte demandante se encontraba interesada en la práctica de la prueba debió comunicar al testigo técnico la programación de la misma con suficiente anticipación, sin embargo, en el expediente no hay prueba sobre esa actuación. Recuérdese que la ley procesal consagra en el artículo 78 numeral 8 del C.G.P. que es deber de las partes "*prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias"*.

En lo relativo a la prueba documental, se solicita tener en cuenta la "*certificación expedida por el Registro Abierto de Avaluadores del día 20 de septiembre de 2021 mediante la cual se acredita que el perito REINEL ROJAS BERNAL, quien realizó la estimación de los daños y perjuicios aportada con la demanda, se encuentra inscrito en las 13 categorías para la práctica de avalúos*". No obstante, se observa que sobre esa misma solicitud el Juzgado se pronunció de forma negativa en la audiencia del 22 de septiembre de 2021, y frente a esa decisión el apoderado no formuló ningún mecanismo de impugnación. Tal situación deja ver la improcedencia de la prueba, pues el peticionario no controvirtió la determinación en su oportunidad, de modo que esa omisión no puede ser subsanada en segunda instancia.

Por otra parte, no es viable la inspección judicial solicitada, por tratarse de una prueba denegada en primera instancia, con sustento en que "*lo que se pretende demostrar con ello se puede probar con los videos, fotos y dictámenes periciales aportados y pedidos en este asunto*", decisión que tampoco fue controvertida por el interesado. Y frente a las fotografías allegadas, nótese que estas no tienen como propósito demostrar la ocurrencia de un hecho nuevo, sino insistir en el estado en que se encuentra el inmueble y su afectación, de lo cual ya obran conceptos técnicos en el expediente.

A pesar de lo anterior, se ordenará al juzgado de origen la remisión del expediente físico, en aras de apreciar las fotografías incorporadas en el curso de la primera instancia, dado que las obrantes en el archivo digitalizado no cuentan con buena resolución.

En torno al decreto oficioso de un nuevo avalúo pericial de daños y perjuicios, en el evento que esta Corporación no tenga en cuenta el avalúo efectuado por el perito Reinel Rojas Bernal, basta indicar que es improcedente que las partes soliciten pruebas de oficio, pues dicha facultad sólo le corresponde al juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del estatuto procesal. A más de lo anterior, no puede olvidarse que las partes cuentan con las oportunidades

probatorias previstas por el legislador para solicitar el decreto y práctica de pruebas en el proceso, al tenor del canon 173 ibídem. La misma suerte corre la petición de incorporar oficiosamente la prueba documental consistente en el Diagnóstico Técnico expedido por el IDIGER, aunado a que dicho escrito fue presentado de forma extemporánea al no haberse radicado dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, como lo ordena el art. 327 del C.G.P.

Por último, a fin de continuar con el trámite correspondiente, se ordenará al apelante que, en firme esta decisión, proceda a sustentar el recurso interpuesto contra la sentencia de primer grado, escrito del cual se correrá traslado al extremo no recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala Civil de Decisión,

3. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de pruebas presentada por la parte demandante.

SEGUNDO: OFICIAR al Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá, para que, de manera inmediata, allegue el expediente físico a esta Corporación.

TERCERO: CONCEDER al recurrente el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que proceda a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formuló ante el Juez *a quo*; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

CUARTO: Cumplido lo anterior, **INGRESAR** inmediatamente el expediente al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a931684d07bc0c4319a56ee12306c877740fa36334d912d54a67bb18c366751e**

Documento generado en 28/04/2023 05:57:37 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Verbal
Radicación N°: 11001310303820200020601
Demandante: Milton Julio Riaño Pérez
Demandados: Edgar Orlando Ballén y otros

ADMITIR el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2023 por el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** al recurrente el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que proceda a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formuló ante el Juez *a quo*; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir al recurrente que, en ese **lapso y en esta instancia deberá sustentar los reparos concretos que formuló ante el *a quo*, o manifestar si se tiene como sustentación el escrito que presentó ante el juez de instancia, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **de7729c92c2e34b0f07cfeeb29b9418b1ff13bdc6c0a2483b58d95a9c43e9f4d**

Documento generado en 28/04/2023 04:33:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO: VERBAL (REINVINDICATORIO CON DEMANDA DE RECONVENCIÓN) DEL SEÑOR JOSE ELISEO QUINTERO QUINTERO CONTRA BLANCA CECILIA RICO GÓMEZ.

Rad. 40 2019 00527 03

SE ADMITE en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante, al cual se adhirió el apoderado de la parte demandada, contra la sentencia que profirió el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá el 30 de marzo de 2023, dentro del presente asunto.

La parte apelante deberá tener en cuenta lo establecido en el inciso 3º del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes"*, vencidos los cuales la contraparte deberá descorrer, si a bien lo tiene, el correspondiente traslado; términos que comenzaran a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Concurrente con lo antes señalado, los profesionales del derecho deberán dar estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

A su turno, las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE este proveído en la forma establecida en el artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

Cumplido lo anterior, ingresen las presentes diligencias **inmediatamente** al despacho con informe pormenorizado de Secretaría, para proveer lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Magistrada

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8423588912dd826c62a71716aec16152ed8d6698b12ed37d363861e638e8f83a**

Documento generado en 28/04/2023 03:20:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrado sustanciador Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal
Demandante	Fredy Wilson Parraga Rodríguez
Demandado	Sonia Julieth Velásquez Pabón
Radicado	110013103 **042 2019 00656 02**
Instancia	Segunda
Decisión	Confirma auto

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá[1] en providencia del 23 de agosto de 2021 y modificada en auto del 30 de septiembre del mismo año, en el asunto en referencia, por medio de la cual se ajustó y aprobó la liquidación de costas dentro del presente trámite.

ANTECEDENTES

1. Mediante Sentencia del 6 de abril de 2021, el *a quo*, entre otras decisiones, condenó en costas a la parte demandada y fijó como agencias en derecho la suma de $10.000.000.

[1] Repartido para trámite de apelación de auto, el 15 de diciembre de 2022.

2. Por auto de 23 de agosto de 2021, se aprobó la liquidación de costas efectuada por Secretaría, la que arrojó un total de $10.940.637 de los cuales correspondían como agencias en derecho el monto arriba señalado.

3. Frente a ello, el apoderado de la demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la referida providencia, el que a la postre fue resuelto por auto de 30 de septiembre de 2021, que resolvió modificar lo decidido y ajustar y aprobar el valor de la liquidación de costas en lo atinente al valor de las agencias en derecho a la suma de $5.770.000 correspondientes al 3% de las pretensiones concedidas en primera instancia.

Para sustentar dicho porcentaje refirió que *"si bien el máximo porcentaje por concepto agencias en derecho en procesos declarativos de primera instancia de mayor cuantía es del siete punto cinco por ciento (7.5%), éste está reservado para: i) aquellos procesos cuyo valor de las pretensiones es muy bajo según el límite de la mayor cuantía, y ii) para aquellos que presentaron variadas y exigentes contingencias procesales, que requirieron de una considerable calidad, duración y gestión del apoderado, que amerite una retribución económica equivalente, reflejada en el monto de las agencias en derecho. Resáltese aquí que a mayor valor de las pretensiones, proporcionalmente menor el monto de las agencias en derecho y viceversa, siempre dentro del tope"*, conforme al Parágrafo 3° del artículo 3° del Acuerdo PSAA16-10554.

4. Luego, el extremo pasivo se mostró inconforme con tal monto con sustento en que, si bien la actora determinó que la cuantía de su demanda era de $192.251.088, logró probar que ella era desproporcionada y por eso se decidió que la condena sería de solo 40 smmlv ($36.341.040) a favor del actor, por lo que las agencias en derecho se deben tasar de acuerdo a estas y no sobre las pretensiones, máxime cuando las expensar deben ser fijadas como una utilidad razonable y proporcionada.

5. En consecuencia, el *a quo*, al interpretar el anterior escrito, concedió el recurso de apelación interpuesto por considerarlo el procedente.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde establecer si se ajusta a derecho la decisión de modificar las agencias en derecho dentro del auto que ajustó y aprobó la liquidación de costas.

2. El apoderado de la parte recurrente funda la alzada en que el valor de las agencias en derecho debe ser tasado conforme a las condenas impuestas y no en atención a las pretensiones de la demanda, pues pudo demostrar en el proceso que eran en gran parte imprósperas.

3. El artículo 280 en concordancia con el artículo 361 y el numeral 4° del artículo 366 C.G.P. dispone que la sentencia deberá incluir las costas, de las que hacen parte las agencias en derecho por lo que en tal providencia deberá fijarse el *quantum* por dicho concepto, conforme a las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura y *"si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente,* ***la cuantía del proceso*** *y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas".*

Asimismo, en sus numerales 1° y 2° advierte que *"el secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla"* y *"al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso".*

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que *"aunque las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien,* ***de manera discrecional****, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil* [hoy 366-4 del Código General del Proceso]*"*[2].

---

[2] CC, Sentencia C-539 de 1999, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por tanto, como quiera que el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura establece en su artículo 5° que para los procesos declarativos en primera instancia y de mayor cuantía, las tarifas de agencias en derecho son *"entre el 3% y el 7,5%* ***de lo pedido****"* (se resalta).

En armonía con ello, dispone el artículo 3° *ídem que "cuando las agencias en derecho correspondan a procesos en los que se formularon* ***pretensiones de índole pecuniario****, o en los que en la determinación de la competencia se tuvo en cuenta la cuantía, las tarifas se establecen* ***en porcentajes sobre el valor de aquellas o de ésta****"* (se resalta).

Deviene de lo anterior, que el monto fijado es tasado a partir de las pretensiones de la demanda y no en las condenas impuestas, por lo tanto, el auto apelado está conforme a las normas que regulan la materia, imponiéndose su confirmación, puesto que se aplicó el tope mínimo fijado en Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura sobre el valor determinado como cuantía del proceso, que es el parámetro previsto en el numeral 4 del artículo 366 del C.G.P.

Si la condena en costas ordenada en la sentencia de primera instancia, no fue dispuesta en forma parcial, sino de manera completa, no se puede en esta oportunidad entrar a valorar una posible aplicación del numeral 5 del artículo 365 del C.G.P., en razón a que dicho tópico es propio del fallo.

El auto que aprueba la liquidación de costas no es el escenario para valorar si se debía o no condenar a las mismas en forma completa. Si la parte no estaba de acuerdo con la condena en pleno en costas, debía apelar la sentencia en tal sentido.

Como el problema jurídico se circunscribe a la determinación del parámetro legal para la fijación de las agencias en derecho, se impone confirmar el auto, pues se reitera, a riesgo de fatigar, el Juez de primera instancia aplicó el rango permitido sobre la cuantía del proceso como se lo impone el legislador a su criterio y razonabilidad judicial.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Confirmar la decisión proferida por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá en providencia del 30 de septiembre de 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE

Firma electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f6063f3a8383e4695eecb394b682bb33ed7501955096cbeab56961b18aa5e965**
Documento generado en 28/04/2023 11:54:47 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

042 2021 00411 01

Revisadas las presentes diligencias, se advierte que a través de proveído de 16 de marzo anterior, notificado por estado al día siguiente, se dio trámite al recurso de alzada por la senda establecida en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 y se determinó que una vez ejecutoriado el mismo, correría el término de cinco (5) días para que la apelante lo sustentara.

Cumplido ese lapso se advirtió que no fue aportada una argumentación que respaldara el mecanismo vertical formulado por Nydia Paola Mora Díaz contra la sentencia de 31 de enero de 2023, proferida por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá D.C., como tampoco ante el juez de primer grado, en virtud a que en esa oportunidad únicamente invocó cinco motivos de reparo, pero sin explicar las razones de su inconformidad[1].

[1] PDF 0032RecursoApelacion.

No obstante, no puede pasarse por alto que la Oficina de Reparto de la Sala Civil de esta Corporación, incurrió en un error al momento de radicar el proceso de la referencia pues indicó un número de juzgado diferente del que provenía el mecanismo vertical.

Bajo ese norte, resulta incontestable que le fue cercenado el derecho de defensa a la apelante y, por consiguiente, debe notificarse en debida forma el auto proferido el 16 de marzo de 2023, esto es, bajo la radicación No 11001310304220210041101.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.**, **en Sala Civil de Decisión**,

RESUELVE:

1. Ordenar que se efectúe en debida forma la notificación por estado del proveído de 16 de marzo de 2023, el cual corresponde al expediente con radicación No 11001 31 03 042 2021 00411 01.

2. Por secretaría, dese cumplimiento a lo previsto en la citada decisión.

NOTIFÍQUESE,

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

(2)

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **59d86b963e7cb749af02373659838ab1d613c5fbd06db51ce0dd80aa63ee9856**

Documento generado en 28/04/2023 04:46:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

KATHERINE ANDREA ROLONG ARIAS

Dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

042-2021-00411-01

Se admite, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia anticipada de 31 de enero de 2023, proferida por el Juzgado 42 Civil del Circuito de esta ciudad.

Téngase en cuenta que el presente trámite se rige por la Ley 2213 de 2022[1], por lo que, ejecutoriada la presente providencia, comenzará a correr el término de cinco (5) días para que sea sustentado, so pena de declararlo desierto.

---

[1] Artículo 12: "*El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así: Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.*

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicarán, se escucharán alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso.".

Vencido ese plazo y cumplida la carga anotada, se correrá traslado a la parte contraria por el mismo lapso, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de dicha normativa.

NOTIFÍQUESE

KATHERINE ANDREA ROLONG ARIAS
Magistrada

Katherine Andrea Rolong Arias

Firmado Por:

Magistrada

Sala 008 Civil

Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **36e8c763e830ec76ecfffe30cfd27d4f43b9c07cdfea8221d501a6b458684efa**
Documento generado en 16/03/2023 04:09:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-042-2021-00492-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Revisada las actuaciones en el expediente digital aportado, el Despacho **DISPONE:**

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de apoderado judicial, contra la sentencia proferida el 15 de febrero de 2023, por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad.

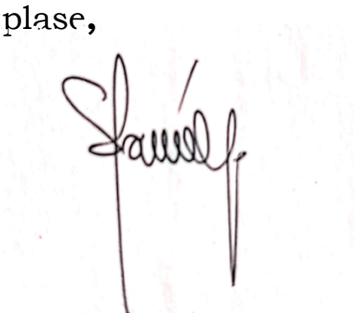
SEGUNDO: IMPRIMIR a este proceso el trámite consagrado en el artículo 12 de la ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la apelación instaurada contra el fallo de primer grado.

TERCERO: De conformidad con el inciso 2° del artículo 12 *ibídem,* se corre traslado por el término de cinco (5) días al apelante para que sustente los reparos que, de manera concreta formuló contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Una vez presentado el escrito, córrase traslado al extremo contrario por el término antes indicado.

CUARTO: Por secretaría, contrólese los mencionados términos, para que vencidos, se ingrese el expediente al Despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase**,**



STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **255665e037799daf432c038ff3f77f8dae33c7977835aee1377c117251a63f17**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16253

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-043-2015-00712-02

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, se evidencia que el término para proferir la sentencia, está próximo a fenecer, de conformidad, con lo normado en el inciso 4° del artículo 121 del Código General del Proceso, se **RESUELVE**:

PRIMERO: PRORRÓGUESE por única vez, hasta por el término de seis (6) meses el plazo de duración de la presente instancia, contabilizado desde el 15 de mayo de la presente anualidad.

SEGUNDO: Por secretaría contrólese el término para proferir la decisión de segunda instancia en este proceso, el que en ningún caso debe sobrepasar del 15 de noviembre del 2023.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
Magistrada

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3d8b170f6b161aed9163b34df90b5c4b85a2c0a9ffd20f3d70669a3b0e72bbad**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16176

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

REF: PROCESO VERBAL DE NATHALIA XIMENA PALACIOS ACUÑA CONTRA MARÍA INÉS PALACIOS RUBIANO.

RAD. 11001310304320210030801

Magistrada Sustanciadora: **STELLA MARÍA AYAZO PERNETH**

I.- ASUNTO

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra el auto de 2 de diciembre de 2021 pronunciado por el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá D.C., por medio del cual se negó la nulidad alegada.

II.- ANTECEDENTES

1. La convocada María Inés Palacios Rubiano, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado, por configurarse la causal contemplada en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso y en el inciso 5° del artículo 8° del Decreto 806 de 2020.

2. Como sustento del anterior pedimento se expuso que: (i) *"la parte activa pretendió realizar la notificación del proceso a través del envío de la comunicación y aviso de que trata el C.G.P."*[1] en desconocimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, pues remitió a su correo electrónico una notificación *"personal"* y *"por aviso"* durante el mes de septiembre de 2021; (ii) Lo anterior, *"causa confusión respecto del momento en que efectivamente se entendió realizada la notificación personal para así proceder a contar los términos para presentar los mecanismos respectivos de defensa"*[2]; y (iii) En las mentadas comunicaciones se omitió remitirle el traslado de la demanda.

3. La parte actora se opuso al incidente, manifestando que se remitió la demanda a la convocada *"con un enlace al final del correo donde se tenía acceso a la documentación concerniente del expediente y que incluía tanto la demanda y anexos correspondientes como las posteriores actuaciones procesales"* y en consecuencia, la notificación del auto admisorio de la demanda se surtió en debida forma el 10 de septiembre de 2021.

4. Mediante proveído del 2 de diciembre de 2021,[3] el juez de primer grado negó la nulidad solicitada.

Como sustento de su decisión comenzó por advertir que a la señora María Inés Palacios Rubiano se le tuvo por notificada por conducta concluyente, según lo dispuesto en el artículo 301 del Código General del Proceso, toda vez que *"el diligenciamiento arribado por el extremo demandante no cumplió con los requisitos que da cuenta el Decreto 806 de 2020 ora el Código General del Proceso."*[4]

---

[1] Archivo: 01IncidenteNulidad.pdf
[2] Ibidem.
[3] Archivo: 03AutoResuelveNulidad.pdf
[4] Ibidem.

Agregó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 806 de 2020 *"si el togado consideró que no se puso a su disposición algún anexo que considerare indispensable para ejercer la defensa de su representada, cierto es que tal eventualidad debió exponerse oportunamente al Juzgado a fin de remitirle el link del expediente."*[5]

5. Inconforme con la anterior determinación, la pasiva interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación aduciendo, en lo medular, que el juez de primer grado *"no se pronunció de fondo sobre si se realizó de forma adecuada la notificación ni tampoco hizo referencia a la notificación por aviso remitida a mi poderdante, ni mucho menos si se hizo de manera correcta o no dicha notificación conforme a la reglamentación del Decreto 806 de 2020"* y que se generó una *"notoria confusión respecto del momento que efectivamente se entendió realizada la notificación personal para así proceder a presentar los mecanismos respectivos de defensa con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y contradicción."*[6]

6. A través de providencia del 19 de abril de 2022[7], el juzgador de primera instancia mantuvo incólume su decisión y concedió la alzada.

III.- CONSIDERACIONES

Atendiendo los reparos que realizó la parte demandada a la decisión fustigada, de entrada ha de decirse que la misma se confirmará, por los motivos que a continuación se exponen:

No se discute que nuestra Carta Política ha elevado a la categoría de fundamental el derecho al debido proceso (Art.29), definido como

---

[5] Ibidem.
[6] Archivo: 21RecursoDeReposicióYSolicitudDeAdición.pdf
[7] Archivo: 04AutoResuelveReposición.pdf

la suma de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, las cuales le aseguran una recta y cumplida administración de justicia, lo que se logra notificando a las mismas en debida forma; por ello, nuestro legislador dispuso en el art. 290 del C.G.P., que ese acto deberá realizarse, en principio, personalmente respecto del auto que admite la demanda o libra mandamiento ejecutivo, pues de esta manera el demandado tiene pleno conocimiento de la existencia de la demanda contra él instaurada, brindándole la oportunidad de proponer la defensa que juzgue más adecuada.

Es por ello que el artículo 133 del C.G.P., en su numeral 8° consagra que el proceso será nulo, "*Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado",* defecto que se corrige practicando "*la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código",* causal que se apoya en el derecho fundamental del debido proceso, que tiene por finalidad amparar los intereses de las partes, garantizando su libre acción y contradicción dentro de parámetros ciertos y precisos.

A su turno, según el artículo 8° del Decreto 806 de 2020 -artículo 8° de la Ley 2213 de 2022- *"Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. (…)*

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso."

Ciertamente al revisarse la actuación se advierte que, distinto a lo afirmado por la demandada, el juzgado de conocimiento se pronunció expresamente sobre las comunicaciones que le fueran remitidas por correo electrónico, obsérvese que, mediante proveído del 2 de diciembre de 2021,[8] resolvió no tener en cuenta dicha documental tras considerar que no cumplía con los presupuestos contemplados por el Decreto 806 de 2020 y en su lugar, la tuvo como enterada por conducta concluyente.

Siendo, así las cosas, ninguna confusión existe sobre el momento en que se surtió la notificación personal, toda vez que según el artículo 301 del Código General del Proceso *"La notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal. (…) Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personería antes de*

[8] Archivo: 19AutoResuelveSolicitudes.pdf

admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte será notificada por estado de tales providencias."

Y en el asunto que ocupa ahora la atención de la Sala, la demandada María Inés Palacios Rubiano acudió al juicio constituyó apoderado judicial, según consta en el archivo *"13ConstanciaNotificaciónApoderadoDemandado.pdf"*

Además, impetró incidente de nulidad e interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio en el que puso de presente que el Juzgado 43 Civil del Circuito de esta ciudad, le remitió el auto admisorio de la demanda el 13 de octubre de 2021, afirmación de la que se desprende que conocía del mismo.

Así, a juicio de esta Corporación la notificación de María Inés Palacios Rubiano se surtió en debida forma por conducta concluyente, lo que deja sin sustento su solicitud de dejar sin valor y efecto las notificaciones "personal" y "por aviso" remitidas el 10 y 21 de septiembre de 2021.

Puestas, así las cosas, se impone la confirmación del auto apelado, como en efecto se dispondrá.

III. DECISIÓN

Por mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto apelado de fecha 2 de diciembre de 2021 por el Juzgado 43 Civil del Circuito de esta ciudad, por los argumentos expuestos en la parte motiva.

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte demandante. En esta instancia se señalan como agencias en derecho la suma de $1.000.000.

TERCERO.- Devuélvanse las diligencias al Juzgado de origen para lo de su trámite y competencia.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5ed077c8278ff32467c529859ad53aeaa7d7a154c17d3c901b94073cc10f72d2**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Ref: VERBAL de PERTENENCIA EXTRAORDINARIA de CHRISTOPHER BLIAN MARTIN´S MORALES contra ELULALIA PONCE DE RAMÍREZ, ABDA HASWLEYDI MARTÍNEZ BULLA y demás personas indeterminadas. Exp. 044-2019-00533-03.

MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS.

Discutido y aprobado en Salas de Decisión celebradas el día 15 de febrero y 19 de abril del 2023.

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el extremo actor contra la sentencia de 25 de octubre del 2022, proferida en el Juzgado 44 Civil del Circuito de la Bogotá, por el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.- El 30 de julio del 2019 (pág. 200, archivo 01DemandaAnexos) CHRISTOPHER BLIAN MARTIN´S MORALES, actuando mediante procurador judicial, convocó en demanda verbal a ELULALIA PONCE DE RAMÍREZ (titular de usufructo), ABDA HASWLEYDI MARTÍNEZ BULLA (nuda propietaria) y demás personas indeterminadas, para que previo los trámites legales se declare que adquirió, por suma de posesiones, el dominio pleno y absoluto por prescripción adquisitiva extraordinaria sobre el inmueble ubicado en la calle 24 Sur No. 12-25 de Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50S-1072248 y, en consecuencia, se inscriba la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y se condene en costas al convocado (pág. 210, ib).

2.- Las súplicas se apoyan en los hechos que a continuación se sintetizan (págs. 208 a 209. ib):

2.1.- Refiere que llegó a vivir en el inmueble a la edad de 5 años, junto con su progenitor, Belisario Martínez, quien para dicha época sostenía una relación sentimental con Eulalia Ponce, titular del derecho de dominio del predio materia de usucapión.

2.2.- Belisario Martínez era poseedor desde el año 1957 y su hijo, aquí demandante, continuó en esa condición después de la muerte de aquel, ejerciendo actos propios de su señorío como pago de impuestos, disposición del bien para arrendarlo, mejoras, pago de servicios públicos.

2.3.-En total, el demandante cuenta con 37 años de posesión, por lo que ha adquirido el derecho de obtener su favor la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por suma de posesiones.

3.- La demandada ABDA HASWLEYDI MARTÍNEZ BULLA se notificó personalmente y oportunamente formuló las excepciones de "ausencia de causa petendi e inexistencia del derecho reclamado"; "falta de requisitos legales para que opere la prescripción"; "inexistencia del término exigido legalmente para usucapir"; "temeridad y mala fe proveniente de la parte demandante" y la genérica (págs. 426 a 459. ib).

3.1.-A su turno EULALIA PONCE DE RAMÍREZ se tuvo por enterada del libelo por conducta concluyente, presentando contestación al mismo sin elevar defensas de mérito (archivo 15AutoResuelve).

3.2.- El curador ad-litem de las personas indeterminadas contestó la demanda y frente a las pretensiones sostuvo que "se atiene a lo que resulte probado" (Archivo 23. ib).

4.- Surtidas las etapas de rigor, se dictó sentencia que finiquitó la instancia, oportunidad en la que se denegaron las pretensiones, decisión que no compartió el actor por lo que interpuso la alzada que ahora se analiza (archivo 194SentenciaPrimeraInstancia).

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO ATACADO

5.- Inicia la Jueza a-quo su fallo refiriéndose a los presupuestos procesales los cuales encuentra cumplidos a cabalidad, así como la ausencia de irregularidades que comprometan la legalidad de la actuación, posteriormente hace referencia a los requisitos que debe acreditarse para obtener la prescripción adquisitiva extraordinaria de

domino, luego de lo cual, refiere que no se probó la condición de poseedor proclamada con el libelo porque si bien, el actor realizó algunos actos que pudieran considerarse de quien ostenta un señorío, el mismo en diversas actuaciones confiesa su condición de mandatario y administrador del bien.

Así, las probanzas que estimó pertinentes fueron la escritura pública No. 4768 del 28 de diciembre de 2017, por medio de la cual Eulalia Ponce de Ramírez, le confía la gestión y administración dentro del giro ordinario y extraordinario de sus negocios por tiempo "indefinido" al aquí demandante; el acta de audiencia de fallo proferida por la Comisaria 18 de Familia el 11 de mayo de 2018 dentro de la medida de protección 355 de ese mismo año, en la que el mismo demandante declara que los arriendos los recibe de acuerdo a un documento que le hizo Eulalia Ponce, quién es la "usufructuaria" del inmueble y un memorial presentado ante el Juzgado Primero de Familia de Bogotá dentro del proceso de interdicción de Eulalia Ponce de Ramírez, de calenda 6 de julio de 2019, por medio del cual en virtud al poder general conferido por la señora Ponce, el mismo demandante manifiesta además de ser su cuidador, ser el administrador del inmueble y el encargado de arrendarlo, de velar por las reparaciones locativas, pagar los servicios que genera el mismo, y en fin ejercer todo tipo de actividad tendiente al bienestar tanto de la usufructuaria como del mismo bien raíz.

De lo anterior, coligió que las actuaciones como instalación de mejoras y demás, se hicieron en calidad de administrador del bien, en virtud al poder conferido por la usufructuaria. Añadió que, tampoco logró acreditarse el momento en que mutó esa calidad a la de señor y dueño, porque a lo sumo, podría entenderse que esa condición a poseedor se configuró apenas con la presentación de esta demanda (30 de julio de 2019). Así mismo, aseveró que, no hay forma de sumar la posesión a la se dijo inició Belisario Martínez.

III. EL RECURSO

6.- La parte actora apeló la decisión objeto de controversia, en síntesis, reclama que se dejaron de valorar sendas probanzas en las que se demuestra cómo el demandante asume desde el año 1993, cuando alcanzó su mayoría de edad, el rol de señor y dueño el bien, ello con el consentimiento del señor Belisario Martínez y su señora madre EULALIA PONCE, como esta última lo declaró en acta extra proceso, indicando que su hijo venia ejecutando actos de señorío hace más de 25 años.

Además, sostiene que se omitió la valoración de varios documentos como facturas de pago de servicios públicos, mejoras contratos de arrendamiento y pagos de impuestos prediales en un periodo de 24 años de manera ininterrumpida. Estos actos se realizaban de manera

conjunta con su progenitor, Belisario Martínez. De tal modo, si bien es cierto Eulalia Ponce tenía el dominio del predio desde el año 1993 aquella transferencia se trató de una formalidad con el señor Belisario Martínez, quien era el verdadero dueño y se encargaba de todo su mantenimiento.

Agregó que en la sentencia se pasó por alto que HASWLEYDI MARTÍNEZ BULLA, quien actualmente funge como propietaria del bien, dejó de acreditar haber pagado el precio por la presunta venta; que el contrato de arrendamiento entre la citada convocada y Olga Parada es nulo y solo apareció como prueba sobreviniente, encontrándose incluso vencido el término para contestar la demanda de pertenencia y que si bien es cierto suscribió un convenio de mandato general para administrar los bienes de Eulalia Ponce, tal acto se dio por presión de la señora Abda y su apoderado quienes intentaron arrebatarle la posesión al actor, pero jamás se utilizó para celebrar algún negocio jurídico. En este último tópico, resaltó que la sentencia le dio un sentido distinto del que realmente quiso utilizar el demandante con el término "administrador", pues como éste lo explicó en su declaración de parte, se refería a manejar sus propios recursos desde el contexto de señor y dueño.

Finalmente, insistió en la presencia de la suma de posesiones que se configuró con el señor Belisario Martínez, de la que dieron cuenta los testimonios de Rolando Morales, María Cadena y Marco Reina. Al respecto, insistió que, a partir del fallecimiento del citado Martínez, en el año 2014, ha actuado como señor y dueño del bien, sin interrupción alguna.

7.- Así mismo, por auto adiado 8 de febrero de la presente anualidad se ordenó correr el traslado previsto en el inciso 3° del artículo 12 de la Ley 2213 del 2022.

7.1.- Aunque el apelante no sustentó ante esta instancia el recurso vertical, puesto que el escrito presentado ante el juez a-quo cumplió a cabalidad con la exposición y desarrollo de los reparos, se resolverá de fondo, postura que ha sido aceptada en numerosos fallos de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, como son demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer y competencia concurren en la litis, además como no se observa causal de invalidez que anule la actuación se impone una decisión de mérito.

2.- Con miras a desatar la apelación formulada por el extremo actor, debe decirse que este recurso se endereza a que el Superior revise la actuación del juzgador de primera instancia, pero inmerso siempre dentro del criterio dispositivo, por lo que es al apelante a quien le corresponde determinar el ámbito dentro del cual ha de moverse el ad-quem al momento de tomar la decisión.

3.- Desde esta perspectiva el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar en primer lugar, si en verdad al interior del proceso aparecen plenamente acreditados los elementos esenciales de la posesión determinantes para adquirir por suma de posesiones la prescripción extraordinaria el dominio del inmueble objeto de usucapión y, en segundo término, si la juez a quo incurrió en una indebida valoración probatoria ya que de las recaudadas se establece con total claridad la ocurrencia de los actos de señor y dueño que ejerció CHRISTOPHER BLIAN MARTIN´S MORALES o, si por el contrario, tales aspectos no encuentran estructuración.

4.- La figura de la prescripción cumple dos funciones trascendentales en la vida jurídica, una adquisitiva y otra extintiva, según lo pregona el artículo 2512 del Código Civil; la ***adquisitiva*** *es un modo de adquirir la propiedad de los bienes ajenos que se encuentran en el comercio, por haberse poseído conforme a las exigencias legales; mientras que la* ***extintiva*** *es una forma de extinguir los derechos o acciones de otra persona, pero por no haberse ejercido durante cierto tiempo y siempre que se den los restantes requisitos de ley.*

5- Cuando se promueve la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, el actor se encuentra en el imperativo de acreditar los siguientes supuestos: ***1) Posesión material en el demandante; 2) que la posesión se prolongue por el término del artículo 2532 de Código Civil modificado por la Ley 791 de 2002 art. 6° -; 3) que la posesión se cumpla en forma quieta, pacífica, continua e ininterrumpida; y, 4) que la cosa o el derecho sobre el cual se ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse por ese fenómeno.*** *Estos elementos deben ser concurrentes, lo cual se traduce en que la ausencia de uno de ellos elimina la estructuración de dicha figura jurídica.*

En lo que atañe al tema de la prescripción, establecía el artículo 2532 del Código Civil, antes de la reforma del artículo 6º de la ley 791 de 2002, que: "[e]l lapso de e tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción, es de 20 años contra toda persona, y no se suspende a favor de los enumerados en el artículo 2530.", presupuesto jurídico aplicable al caso concreto, habida cuenta que el demandante, por suma de posesiones, se reputa señor y dueño desde el año 1982, al paso que, en los fundamentos normativos no se hizo alusión a la modificación de la citada ley para reducir el término. (hecho 1° pág. 208 pdf derivado 01).

Además, cuando se trata de sumar su posesión a la de otros, ha sostenido la jurisprudencia que la carga probatoria que pesa sobre el prescribiente no es tan fácil, ya que debe ser «contundente en punto de evidenciar tres cosas, a saber: Que aquéllos señalados como antecesores tuvieron efectivamente la posesión en concepto de dueño pública e ininterrumpida durante cada período; que entre ellos existe el vínculo de causahabiencia necesario; y por último, que las posesiones que se suman son sucesivas y también ininterrumpidas desde el punto de vista cronológico»[1].

En ese orden de ideas, toda vez que la demanda que aquí se estudia se radicó el 19 de julio del 2019, la prosperidad de la apelación está supeditada a que el actor hubiera demostrado que la cadena de posesiones de la que quiso prevalerse, se extendió, en forma ininterrumpida, por lo menos desde el 19 de julio de 1999.

Posesión material en la demandante y término de prescripción

6.- La posesión puede definirse como el poder de hecho que tiene una persona sobre una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. Esta se encuentra integrada por dos elementos, ***el corpus y el animus****; el primero se trata del elemento externo, material y objetivo que se traduce en hechos positivos tales como el corte de madera, construcción de edificios, cerramientos, plantaciones o sementeras, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión -artículo 981 del C.C.-; mientras que el segundo es el intencional, subjetivo, interno o acto volitivo que escapa a la percepción de los sentidos pero que se puede presumir ante la existencia de los hechos externos que son su indicio.*

7.- Al proceder a examinar la Corporación las pruebas arrimadas al plenario, esto es, las documentales, los interrogatorios y las declaraciones acopiadas en la primera instancia, de manera anticipada se arriba a la conclusión que la sentencia debe confirmarse, comoquiera que en este asunto no se acreditó, con suficiencia, desde que época inició la alegada calidad de poseedor del demandante o siquiera si ella tuvo lugar, ya que en varias actuaciones ha reconocido dominio ajeno, tal como lo aseguró la sentencia objeto de censura.

Así mismo, resulta inviable asegurar que existió la suma de posesiones alegada tanto en la demanda como en la alzada, porque al actor le incumbía acreditar con nitidez los lapsos de posesión que pretende

---

[1] *G. J. Tomo CCXXII, 19, sent. de 22 de enero de 1993. reiterado en CS Sent. jul 21 de 2004, Rad. n. 7571, SC16992-2014 de 12 de dic., Rad. 2010-00166-01.*

añadir a la suya, cosa que no ocurrió en el sub-examine, debido a las sendas imprecisiones que impiden tener certeza sobre el tema.

7.1.- En efecto, nótese que la demanda -posteriormente subsanada- que dio origen a este litigio se aseguró (hechos2°, 3° y 4°, pág. 208, derivado 01) que Belisario Martínez fungió como poseedor del inmueble desde el año 1957 y que al fallecer este, en agosto del 2014, el actor continuó con los actos de señorío; a su vez, en el escrito de apelación, se asegura que "el demandante asume desde el año 1993, cuando alcanzó su mayoría de edad, el rol de señor y dueño el bien", al paso que, en su declaración de parte, el señor Martin´s sostuvo que antes de fallecer su papá (Belisario) "que hacía todo lo de la casa" y él era la persona que lo ayudaba a cobrarle a los arrendatarios o a pagar recibos, haciéndose "cargo de algunos".

Las reseñadas contradicciones no favorecen los fines que busca el recurrente, porque, ciertamente, ni siquiera de su propio dicho puede establecerse, sin hesitación, a partir de qué momento inició su intención de ser dueño o animus domini, elemento esencial que no puede suplirse con los simples actos materiales o mera tenencia, o con el solo hecho de vivir en el predio.

Pero si lo anterior fuera poco, observa el Tribunal que en este asunto no logró probarse con la solidez requerida para la suma de posesiones, que Belisario Martínez ostentó la posesión ininterrumpida, exclusiva y excluyente del predio desde el año 1957 hasta su muerte en el año 2014, porque según se infiere del análisis conjunto del material suasorio recaudado, el inmueble objeto de usucapión era de propiedad de Eulalia Ponce de Ramírez, compañera sentimental de Belisario Martínez, luego aquella, como dueña que además vivía en el bien, también ejercía actos de señorío sobre el mismo, desprendiéndose de tal hecho que la ocupación del predio se dio en conjunto entre los compañeros.

7.2.- Ahora bien, aun cuando se hiciera caso omiso a lo expuesto y de algún modo se aceptara que Belisario Martínez fue poseedor exclusivo del bien hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 16 de agosto del 2014, ha de verse que, como lo concluyó la primera instancia, los actos de señor y dueño del pretenso adquirente desde la época del deceso de su progenitor no son claros y, por el contrario, develan que únicamente fungía como mero tenedor.

Al respecto, se avizora que son inequívocas las probanzas que se analizaron por la juzgadora a-quo, en las cuales, no solo en una, sino en varias oportunidades, Cristhopher Martin´s se reconoce a sí mismo como administrador del inmueble, sin que pueda aceptarse las excusas que presenta en la apelación, relativas a que con esos actos pretendía defender su posesión o que se malinterpretó sus palabras, ya que

quien se considera dueño cuenta con diversos mecanismos judiciales para proteger su patrimonio, distintos y más eficaces que la celebración de actos jurídicos en los que expresamente reconoce dominio ajeno.

Nótese que mediante escritura pública 4768 del 28 de diciembre del 2017, el aquí demandante se constituyó como mandatario -apoderado general- de Eulalia Ponce de Ramírez quien para esa época ya era usufructuaria del bien, en tal acto se le otorgaron facultades expresas de administrar los bienes de la citada titular del derecho real, arrendar los mismos. Y en consonancia con el citado apoderamiento, el demandante aseguró ante la Comisaria 18 de Familia el 11 de mayo del 2018 que recibe los arriendos de las rentas "de acuerdo a un documento que ella [Eulalia] le hizo" (pág. 397 a 408, ej).

Además, ante el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, el actor presentó memorial en el mes de julio del 2019 en el que, anunciándose como apoderado general de Eulalia, señaló que "en la actualidad yo me encuentro administrando el inmueble, soy la persona encargada de arrendarlo, de velar por las reparaciones locativas, pagar los servicios que general el mismo y en fin ejercer todo tipo de actividad tendiente al bienestar tanto de la usufructuaria como del mismo bien raíz"; así mismo, consignó en el documento que "vive hace más de 30 años en el inmueble" tiempo en el que ha cuidado y acompañado a Eulalia y a Belisario (pág. 395, ib).

Aunado a todo lo expuesto, en el interrogatorio de parte absuelto en este proceso, el demandante aseveró que cuando se anunció como administrador en el juzgado de familia, lo hizo porque en ese momento no tenía la pertenencia y había varias personas que querían arrebatarle los dineros que recibía; que él era la persona de confianza de Eulalia y que si bien se hizo un poder este nunca se utilizó (Archivo 68, audienciaparte1).

Vale la pena anotar que, ante la contundencia de las pruebas reseñadas, poca relevancia tiene el análisis de los testimonios de Rolando Morales, María Cadena y Marco Reina, o los de los documentos como facturas de pago de servicios públicos, mejoras contratos de arrendamiento y pagos de impuestos prediales, pues al margen de las conclusiones fácticas que pudieran extraerse de esos medios de prueba, las declaraciones del propio actor, son suficientes para reconocer que los actos por el realizados y que se aseguran fueron producto de su ánimo de señor y dueño, en realdad estaban basados en un mandato.

Sobre el tópico, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha sido enfática en reconocer que "el animus es el elemento característico y relevante de la posesión y si (…) ***de las propias palabras de los demandantes se infiere que dicho elemento no existió en un principio,***

inútil será rebatir tal aseveración con las declaraciones de terceros, pues es apenas natural que éstos no podrán saber más en el punto que la parte misma*; los terceros, en efecto, no han podido percibir más que el poder de hecho sobre la cosa, resultando en tal caso engañados por su equivocidad y suponiendo de esta suerte el ánimo contra lo que permite deducir lo que fuera expresado por la parte actora; es en el sujeto que dice poseer en donde debe hallarse la voluntariedad de la posesión, la cual es imposible adquirir por medio de un tercero, cuya sola voluntad resulta así, por razones evidentes, ineficaz para tal fin. Así resulta apodíctico que nadie puede hacer que alguien posea sin quererlo"*[2] .

Para cerrar este tema, el Tribunal estima necesario aclarar que poco importa si el contrato de mandato que celebró el demandante con la usufructuaria del bien se utilizó o no para la finalidad convenida, ya que, la sola manifestación de voluntad al aceptar administrar los bienes de la señora Eulalia Ponce, aunado a los posteriores actos que desplegó y que ya quedaron anotados dejaban claro que el aquí apelante, reconocía mejor derecho en su poderdante, circunstancia que descarta la prosperidad de la acción invocada.

Añádase a lo expuesto que, como quedó visto, no fue solo en el interrogatorio de parte que el actor se proclamó administrador, sino en varios actos, coligiéndose que no fue la indebida interpretación de la juzgadora lo que llevó a la conclusión, como lo quiere hacer ver la censura.

7.3.- Finalmente, en el escenario atrás configurado, resulta inoficioso hacer mayores elucubraciones acerca de la idoneidad, eficacia o cumplimiento del contrato de venta de nuda propiedad sobre el inmueble objeto de pertenencia celebrado en el año 2014 entre Eulalia Ramírez y la señora Abda Haswleydi Martínez Bulla, pues la discusión que pudiera generarse en torno a tal negocio jurídico y el acatamiento del mismo, corresponde a las partes que lo celebraron en un asunto totalmente ajeno al que ocupa la atención de esta Sala, relativo, exclusivamente, a la demostración de la calidad de poseedor del demandante.

8.- En estas condiciones el comportamiento del demandante en el predio es de tenedor nunca de poseedor y, así haya permanecido en él por varios años, ese largo transcurrir del tiempo no trocaba esa mera tenencia en posesión por así disponerlo el artículo 777 del Código Civil.

9.- Desde esta perspectiva es innegable para la Sala que no se presentaron las condiciones para la alegada suma de

---

[2] *CSJ, sents. de noviembre 18 de 1999, exp. 5272; noviembre 5 de 2003, exp. 7052; julio 15 de 2004, exp. 7513, y diciembre 19 de 2008, exp. 2003 00190 01, entre otras.*

posesiones, ni tampoco se acreditó que después del fallecimiento de Belisario Martínez, el aquí demandante tuviera el ánimo de señor y dueño, ya que inclusive días antes de formular la demanda de pertenencia, incorporó un memorial en el Juzgado Primero de Familia de Bogotá en el que se anunció como administrador del bien inmueble.

10.- Así las cosas, los argumentos que vienen de exponerse son suficientes para colegir que en este asunto no se estableció de manera fehaciente el requisito de la posesión en cabeza del demandante por el tiempo exigido por la norma sustantiva civil en la temática de la prescripción extraordinaria de dominio, razón que conduce a confirmar la decisión objeto de censura, habiendo lugar a la condena en costas, conforme el numeral 1° del artículo 365 del C.G.P.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

***1.- CONFIRMAR** la sentencia dictada 25 de octubre del 2022, proferida en el Juzgado 44 Civil del Circuito de la Bogotá, por las razones expuestas al interior de esta determinación.*

***2.- CONDENAR** en costas a la parte demandante.*

***2.1.-** De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5º del AcuerdoPSAA16-10554 de 2016, en la liquidación de costas causadas en esta instancia, inclúyase como Agencias en Derecho el monto correspondiente a $1.000.000.oo. Para la elaboración de esta síganse las reglas previstas en dicha norma.*

NOTIFÍQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADA

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7cd254365efc4cd297fc1785d988787f9efbe78fbde4167868c88063d6af3721**
Documento generado en 28/04/2023 02:12:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023).

MAGISTRADO PONENTE:	**JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**
RADICACIÓN:	**11001 31 030 44 2021 00287 01**
PROCESO:	**VERBAL**
DEMANDANTE:	**JAIRO FRANCISCO RODRÍGUEZ POTES Y MARÍA NINFA ESCOBAR VIUDA DE IGLESIAS**
DEMANDADO:	**HÉCTOR JAVIER LÓPEZ BENAVIDES**
ASUNTO:	**APELACIÓN AUTO**

Procede el Tribunal a dirimir el recurso de apelación interpuesto por Héctor Javier López Benavides contra el auto del doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se rechazó la demanda de reconvención formulada al interior del asunto del epígrafe.

ANTECEDENTES

1. Encontrándose en curso la acción de simulación absoluta de la compraventa instrumentada en la escritura N° 1004 de 2018, que fue instaurada por Jairo Francisco Rodríguez Potes y María Ninfa Escobar Viuda de Iglesias, frente a Héctor Javier Arango Hoyos, éste, junto a la contestación del libelo presentó demanda de reconvención contra los inicialmente nombrados, deprecando que se "(...) *declare civil y extracontractualmente responsable de los daños y perjuicios que el demandado en reconvención* (...) *Jairo Francisco Rodríguez Potes* (...) *ha ocasionado a* (...) *Héctor Javier López Benavidez, al haber iniciado en manifiesto abuso del derecho de acción y actuando como temeridad y mala fe sin legitimación alguna, y en abuso del oficio de curador de la interdicta María Ninfa Escobar Viuda de Iglesia, al someterla a las*

consecuencias de las resultas de unos procesos sin causa alguna ha iniciado para causar daños y perjuicios (...)*".*

2. Mediante la providencia confutada, la directora del proceso rechazó la reconvención impetrada, tras considerar que "[s]*i bien se presentó demanda de reconvención por parte del demandado Héctor Javier López Benavides, se advierte que las súplicas corresponden a un asunto de responsabilidad civil y extracontractual con ocasión a los daños y perjuicios que, alude, se le han causado con ocasión a las actuaciones que ha elevado la parte demandante principal ante los Juzgados 29 Civil del Circuito, Juzgado 10 Penal Con Función de Control de Garantías Municipal y Juzgado 6 Civil del Circuito de esta ciudad, demanda que, si bien, en estricto corresponde a un proceso verbal, también lo es que, no resulta correlativo con el proceso de simulación absoluta que aquí se adelanta, en tanto su reclamo, en estricto, como se señaló lo es por actuaciones adelantadas con ocasión a procesos que cursan o cursaron en otros juzgados. De manera que, cualquier resultado de aquél no dependería de lo que aquí se defina."*

3. En desacuerdo con tal determinación, el reconviniente interpuso recurso de reposición, y, en subsidio, apelación, porque "(...) *la demanda de reconvención presenta las características propias de admisión, en tanto que se reúnen los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, y que en lo que tiene que ver con la acumulación de pretensiones, la* (...) *reconvención reúne los requisitos del artículo 88 de la misma obra. Además, téngase en cuenta que en esta demanda de reconvención se tiene identidad de partes, porque mi mandante demanda al ahora actor, recae sobre el mismo objeto y causa, por ser de este hilo la discusión de la comunidad y la supuesta simulación, y los daños que han provocado tales mezquinas y temerarias manifestaciones que sin cepo eleva el señor Jairo Francisco Rodríguez el demandante principal. Adicional con lo anterior, es usted competente señor Juez, porque tanto las pretensiones de la* (...) *reconvención como las de la supuesta simulación son del orden declarativo, que no tienen trámite especial y que usted puede conocer, porque no existe tarifa legal o norma que haya reglado a ciertos tipos de procesos y sus antípodas, porque en técnica procesal ambas demandas, la principal y esta de reconvención, son causas declarativas de mayor cuantía. De igual manera, el Juzgado tampoco ha tenido en cuenta lo que dispone el inciso 2° del Artículo 90 del estatuto procesal, porque tampoco se han configurado tales figuras para rechazar la demanda."*

3. La funcionaria *a quo,* al resolver la herramienta horizontal, mantuvo la decisión y concedió la alzada interpuesta, lo que explica las diligencias en este Tribunal.

CONSIDERACIONES

1. De acuerdo con las previsiones del canon 371 del C. G. del P., el demandado "(…) *podrá proponer la de reconvención contra el demandante si de formularse en proceso separado procedería la acumulación, siempre que sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a trámite especial. Sin embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial*".

Bajo esa orientación normativa, la doctrina nacional ha enseñado que para la viabilidad de la mencionada figura procedimental deben reunirse los siguientes requisitos: **i)** que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones; **ii)** que éstas sean susceptibles del mismo trámite; y **iii)** que exista relación entre las pretensiones o hechos de la demanda inicial y los aludidos en la reconvención; último aspecto sobre el cual mencionó que "(...) *es a todas luces el más importante* (...) *pues carece de objeto adelantar en forma acumulada dos acciones que no guardan en lo que a sus pretensiones y hechos se refiere, ninguna vinculación, pues tal proceso traería confusión en el análisis de los hechos y las pruebas. Lo que pretende la reconvención es precisamente que haya pruebas comunes para una y otra pretensión, con el fin de que la aportación y práctica de aquellas se realice en un solo proceso y con única sentencia se decidan las mutuas pretensiones".*[1]

2. En el contexto legal y doctrinal descrito en precedencia, con prontitud se advierte que la alzada interpuesta carece de vocación de éxito, pues, a pesar de que la juzgadora de conocimiento sería la competente para adelantar las acciones de marras, éstas se encuentran sometidas a la misma ritualidad y, además, comparten como protagonistas los sujetos procesales aquí enfrentados, la conexión de la *causa petendi* del reclamo indemnizatorio elevado en reconvención se echa de menos respecto de la simulación absoluta incoada de forma principal; conclusión a la que se arriba sin mayores esfuerzos, teniendo en cuenta que, mientras en una se busca probar la falsedad de un negocio jurídico en específico, en la otra se procura

[1] López Blanco Hernán Fabio. Código General del Proceso Parte General. Pag. 594. 16ª Edición.

la indemnización por el abuso del derecho, con fundamento en las múltiples demandas judiciales que Rodríguez Potes a iniciado en contra de López Benavides y que han sido infructuosas, objetos pretensivos que, ciertamente, carecen de ese enlace que justifique su adelantamiento conjunto.

Así las cosas, ante la imposibilidad de concretar esa sólida vinculación entre las acciones en comento, que permita relacionarlas, de alguna manera, en el ámbito factual o probatorio, la decisión recriminada merece ser ratificada, sin que haya lugar a condenar en costas a la parte recurrente por no aparecer causadas (regla 8ª, artículo 365 del C. G. del P.)

En mérito de expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.**

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFIRMAR el auto del doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022), conforme a las razones esbozadas en el cuerpo motivo de esta providencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO.- Ordenar la devolución del expediente al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE,

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado
(44 2021 00287 01)

Firmado Por:
Juan Pablo Suarez Orozco
Magistrado
Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **032f0e84993d73477446e03f8c6e8464effdc67bab11dfd997b46aea5b00540a**
Documento generado en 27/04/2023 03:27:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: RICARDO ACOSTA BUITRAGO

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Gustavo Adolfo Granados Ortega
Demandado	Carlos Eduardo Caycedo Ramírez
Motivo	Apelación de auto.

ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación instaurado por la parte demandada en contra del auto proferido el 23 de agosto de 2022, por el Juzgado 44 Civil del Circuito de la ciudad, mediante el cual negó la nulidad formulada.

EL RECURSO

El apoderado censor alegó que: (i) no es cierto que la notificación del mandamiento de pago y su corrección se realizara a través del correo electrónico, porque el art. 82 del C.G.P. impone al demandante la obligación de indicar tanto *"la dirección electrónica y la que conozca del extremo pasivo de modo que no se trata de voluntad o facultad en proporcionar esa información, es un deber en el ámbito jurídico",* (ii) para que las notificaciones electrónicas produzcan efecto debe *"recepcionarse acuse de recibo"* u otro medio de prueba que dé cuenta que el ejecutado realmente se enteró o recibió la comunicación; (iii) su poderdante nunca recibió las notificaciones y el demandante al descorrer el traslado de la nulidad *"confiesa no haber notificado el auto de corrección del mandamiento de pago"*; y (iv) el demandante no aportó prueba sumaria que demuestre que el correo electrónico que enunció es del demandado o el que eventualmente utiliza[1].

[1] Cfr. Carpeta "03IncidenteDeNulidad", archivo "12RecursoApelacion"

El 20 de septiembre de 2023 la juez de primera instancia concedió la alzada en el efecto devolutivo[2]. El asunto se radicó en el Tribunal en una primera oportunidad el 5 de octubre de 2022, pero mediante auto de 21 de noviembre se ordenó su devolución para surtir el traslado previsto en el art. 326 del C.G.P.

Cumplido lo anterior, el expediente se recibió el 27 de febrero de 2023.

CONSIDERACIONES

El desarrollo normal del proceso judicial impone la necesidad de que las reglas fijadas en la ley para su impulso y resolución no puedan ser desatendidas por las partes ni por el funcionario judicial a quien se le ha encargado dirimir el litigio. La inobservancia de esas formas procedimentales preestablecidas acarrea, en ciertos casos, el decreto de la nulidad como una medida con la cual un acto, o una serie de estos, cumplidos de manera irregular, quedan privados de los efectos que normalmente producirían.

El demandado fundamentó su solicitud de nulidad (núm. 8° art. 133 del C.G.P.) en el hecho de que las notificaciones efectuadas en la calle 131 No.78ª -61 torre 2 apartamento 601 de la ciudad de Bogotá no concuerdan con su domicilio y residencia, pues desde hace tres años se trasladó al sector Bosque de Piedra en el Municipio de Madrid – Cundinamarca. Agregó que es propietario de un apartamento ubicado en la referida nomenclatura que se encuentra desocupado desde hace 2 años, razón por la cual no conoció oportunamente el proceso. solo hasta el 5 de abril de 2022, se acercó al inmueble le fue entregado el aviso previsto en el art. 292 del C.G.P. en el cual no se hizo mención de la fecha de la providencia a notificar, ni del auto que corrigió la orden de pago, lo que vulneró su derecho a la defensa[3].

Para desestimar la nulidad planteada el *a quo* consideró que el recurrente solo atacó la notificación que se surtió en la dirección física, pero nada dijo de la electrónica - carloscaycedor@gmail.com - que se realizó de

[2] Ib. Archivo “15AutoConcedeApelacion_2022-09-20_13-00”
[3] Ib. Archivo “01EscritoNulidad”

conformidad con el Decreto 806 de 2020, que fue a través de la cual se le tuvo por notificado[4].

Entonces, en punto de los reparos del apelante, debe decirse que no se configuró la nulidad planteada, según pasa a exponerse:

Sea lo primero indicar que la irregularidad fue alegada en el lapso establecido en el inciso 3° del art. 134 del C.G.P. sin que se hubiere configurado saneamiento alguno como lo prevé el art. 135 *ibidem*, pues la primera intervención del ejecutado fue la de proponer el trámite objeto de estudio.

En cuanto, al reclamo en torno a que el demandante no indicó la forma como obtuvo el correo electrónico y que este no corresponde a la persona demandada, se advierte que dicha situación no tiene el alcance para enervar la acto de notificación, pues es una omisión que no repercute en una indebida notificación si se tiene en cuenta que en título valor – factura electrónica de venta[5], cuya ejecución se pretende, se señaló como e-mail del cliente – deudor el mismo que se refirió para efectos de notificación en el libelo de conformidad, con el núm.. 10° del art. 82 del C.G.P. en concordancia con el art. 6° del Decreto 806 de 2020, información que se entiende suministrada bajo la gravedad del juramento.

Ahora bien, al revisar el expediente se observa que el 22 de febrero de 2022[6], se realizó la remisión del citatorio (art. 291 C.G.P.) a la dirección física señalada en el libelo, por intermedio de la empresa de mensajería Interrapidisimo, pero no fue acogida por el juez de primera instancia para efectos de notificación, ya que, el 15 del mismo mes y año, se despachó mensaje de datos en los términos del Decreto 806 de 2020 con la notificación al demandado, junto con la certificación expedida por *"e-entrega"* donde se plasmó como fecha de acuse de recibo el 15/02/2022 hora 22:03:00, como el ejecutante lo puso en conocimiento del *a quo* en memorial de 25 de febrero de 2023. Además, a la notificación se acompañó la copia de la demanda, el

[4] Ib. Archivo "10AutoNiegaNulidad_2022-08-23_13-33"
[5] Cfr. Carpeta "01CuadernoPrinicipal", archivo "01DemandaAnexos"
[6] Ib. Archivo "16ConstanciaNotificacion"

auto que libró mandamiento de pago el 17 de agosto de 2021 y su corrección de 7 de diciembre.

Por lo tanto, si el correo se envió a la dirección adecuada, la notificación cumplió con los requisitos establecidos en la norma que el recurrente pretende objetar, no hay motivo para considerar que no lo recibió más que su propia manifestación. Así mismo, téngase en cuenta que, aunque el legislador no mencionó el acuse de recibo para que la notificación produjera plenos efectos, la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil ha dicho que:

"Es que considerar que el acuse de recibo es la única forma de acreditar que se realizó la notificación por medios electrónicos resulta contrario al deber de los administradores de justicia de procurar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con la finalidad de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, de acuerdo con el artículo 103 ibidem, pues se frustraría la notificación por mensaje de datos cuando no se cuenta con la confirmación de recepción por parte del destinatario, o cuando este señala fecha diversa a la que en realidad se efectuó el enteramiento. Vistas de esta forma las cosas, la Corte concluye que el enteramiento por medios electrónicos puede probarse por cualquier medio de convicción pertinente, conducente y útil, incluyendo no solo la presunción que se deriva del acuse de recibo (y que puede ser desvirtuada), sino también su envío, sentido en el que se precisa el alcance de las consideraciones plasmadas en CSJ STC13993-2019, 11 oct. 2019, rad. n.º 2019-00115 y STC690-2020, 3 feb. 2020, rad. n.º 2019-02319"[7].

En consecuencia, no se queda otro camino que confirmar la providencia censurada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

[7] Radicación No. 11001-02-03-000-2020-01025-00

Bogotá-Sala Civil,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 23 de agosto de 2022, por el Juzgado 44 Civil del Circuito de la ciudad.

SEGUNDO: Se condena en costas a la parte apelante. Se fija como agencias en derecho la suma de ½ salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: Devuélvanse las diligencias al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

R.I. 16182

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

REF: PROCESO VERBAL DE AURA CECILIA SÁENZ DE BENAVIDES Y OTROS CONTRA ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ Y OTROS.

RAD. 11001310304920220008301

Magistrada Sustanciadora: **STELLA MARÍA AYAZO PERNETH**

I.- ASUNTO

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 31 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado 49 Civil del Circuito de esta ciudad, por medio del cual rechazó la demanda.

II.- ANTECEDENTES

1. Aura Cecilia Sáenz de Benavides, Óscar Iván Benavides Sáenz, Javier Alexander Benavides Sáenz presentaron demanda declarativa de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio contra Óscar Gómez López, sobre el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-510813.

2. Mediante providencia del 11 de marzo de 2022[1], el juzgado de instancia inadmitió la demanda y requirió al extremo actor para que, entre otros, *"Aporte el avalúo catastral actualizado (Año 2022) del inmueble sobre el cual recaen los pedimentos formulados (Art. 26 del Código General del Proceso), máxime cuando es clara la norma procesal que la determina en razón del avalúo catastral el cual no es susceptible de ninguna estimación."*

3. Dentro del término concedido, la parte demandante manifestó que, el avalúo catastral únicamente se expide bajo solicitud del propietario por lo que no le fue posible allegarlo, sin embargo, puso de presente que con los anexos de la demanda se aportó el certificado catastral para terceros.

4. Por auto del 31 de marzo de 2022,[2] el *a quo* advirtió el incumplimiento de la parte actora a la orden impartida; por consiguiente, dispuso rechazar la demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 90 *ibidem*.

5. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, alegando, en síntesis, que como quiera que el avalúo catastral se expide únicamente a los propietarios de los inmuebles, la demanda se acompañó del certificado catastral para terceros y al escrito de subsanación se anexó la declaración de autoliquidación del impuesto predial unificado del año 2022.[3]

III. CONSIDERACIONES

Sea del caso recordar que, de acuerdo con el inciso final del

[1] Archivo: 03CuadernoPrincipal.pdf Fl. 22
[2] Archivo: 03CuadernoPrincipal.pdf Fl. 34
[3] Archivo: 03CuadernoPrincipal.pdf Fls. 44 a 52

artículo 90 del Código General del Proceso, la apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquél que la inadmitió, por lo que, al desatar el recurso, se debe examinar la procedencia de las razones por las cuales ésta se rechazó, pero en concordancia con las que se esgrimieron para inadmitirla, en cuanto atañe al asunto materia de la discusión. De ahí que los supuestos de hecho consignados en los siete numerales previstos en tal precepto, son los únicos que constituyen motivos de inadmisión de la demanda, sin que de manera alguna el Juez pueda ordenar direccionamiento con fundamento en causas distintas.

Así, el artículo 82 *ibídem* consagra los requisitos que en general toda demanda debe cumplir, sin perjuicio de aquellos que de manera adicional fueron previstos por el legislador para ciertos casos, sumados a los que el régimen procedimental estableció para cada trámite en particular.

Descendiendo al caso en examen, esta instancia avista la necesidad de revocar el auto apelado, por los motivos que a continuación se exponen:

Cierto es que el extremo actor no allegó el certificado catastral requerido por el juzgador de instancia en proveído del 11 de marzo de 2022. Sin embargo, obsérvese que, el defecto alegado no configura causal alguna de rechazo, según el artículo 90 del Código General del Proceso.

Lo anterior es así, porque si bien, según el numeral 3° del artículo 26 del Código General del Proceso, en los procesos de pertenencia la cuantía se determinará por el avalúo catastral de los bienes, lo cierto es que la misma puede acreditarse por otros medios de prueba, como ocurrió en el presente asunto.

Tengas en cuenta que, el certificado catastral no se encuentra enlistado dentro de los anexos de la demanda previstos en el artículo 84 del Código General del Proceso, ni es un requisito adicional de la misma a voces del artículo 83 *ibidem.*

Y en el caso que ocupa ahora la atención de la Corporación, se advierte que con la demanda se aportó la certificación catastral para terceros del bien objeto de litigio,[4] que, si bien no incluye el avalúo echado de menos, se acompañó de las facturas del impuesto predial para el año gravable 2019,[5] en el que consta como avalúo catastral la suma de $166.062.000. Así mismo, a folio 43 consta el correspondiente al año 2022 por valor de $201.193.000.

Es decir, dentro del expediente se encontraba acreditada la cuantía del asunto, con el avalúo catastral del predio, según lo exige el Estatuto Procesal, en consecuencia, si la consideración que lo llevó a rechazar la demanda fue que certificado echado de menos era *"requisito necesario para determinar la cuantía,"* una vez acreditada aquella debió imprimírsele el trámite legal correspondiente.

En casos similares ha dicho esta Corporación:

> *"(…) si la demanda de pertenencia debe acompañarse del documento en cuestión, que dé cuenta de los titulares de derechos reales principales sujetos a registro (CGP, art. 175, num. 5), y si la señora Santana está imposibilitada, por el momento, para aportarlo, no es posible impedir el ejercicio de su derecho de acción (C. Pol., art. 229) so capa de una exigencia que aparece cumplida respecto de los propietarios, aunque exista incertidumbre frente a otros titulares de derechos reales.*
> *Lo que corresponde hacer en estos casos es admitir la demanda y*

[4] Archivo: 05Anexos.pdf Fls. 5 y 6
[5] Archivo: 05Anexos.pdf Fl. 18

que la jueza, en uso de los poderes de dirección y ordenación del proceso (CGP, art. 42 y 43, num. 4), requiera al registrador para que expida el certificado que necesita, con fundamento en el cual, si fuere necesario, integrará el litisconsorcio necesario, según lo establecido en los artículos 61, 90 y 375, numeral 5, del CGP. No se olvide que cualquier duda en la interpretación de una norma procesal debe resolverse, por mandato del artículo 229 de la Constitución Política y del artículo 11 del Código General del Proceso, dándole prevalencia al derecho sustancial, favoreciendo el acceso a la justicia y facilitando el ejercicio de las garantías constitucionales."[6]

Finalmente, se dispondrá remitir el expediente al juzgador de origen para que, de no encontrar falencia alguna disponga la admisión de la demanda.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

***RESUELVE*:**

PRIMERO.- REVOCAR del 31 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado 49 Civil del Circuito de esta ciudad, por las razones anotadas en precedencia.

SEGUNDO.- ORDENAR la remisión del expediente al *a quo* para que proceda a pronunciarse conforme a lo descrito en la parte motiva y disponga lo pertinente.

---

[6] Auto del 28 de febrero de 2023. Exp. 050202200240 01. Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez.

TERCERO.- Sin costas en esta instancia, dada la prosperidad del recurso.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

MAGISTRADA

Firmado Por:

Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **06151cb6112f6ba8be64ac7e504c1188a57cf419eb9649aeed4c7dc4f8420ea2**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Ref: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL DE PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL contra LUIS EDUARDO CALA LÓPEZ Exp. 2023-00440-00.

MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS.

Discutido y Aprobado en Sala de Decisión del 22 de marzo del 2023.

Decide la Corporación el recurso de anulación interpuesto por el convocado LUIS EDUARDO CALA LÓPEZ contra el laudo arbitral calendado 12 de diciembre de 2022, proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado por PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1.- La persona jurídica PAREX RESOURCES COLOMBIA LTDA. SUCURSAL actuando por conducto de apoderado judicial, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá demanda pretendiendo principalmente que se declare que: i) LUIS EDUARDO CALA LÓPEZ en su condición de MANDATARIO, incumplió las obligaciones contenidas en el contrato de Mandato Sin Representación firmado el día 30 de marzo del año 2012 con PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL en su condición de MANDANTE. ii) la demandante cumplió sus compromisos en el citado convenio, por tal razón, esta legitimado para solicitar el acatamiento de las obligaciones en mora del mandatario conforme el artículo 1546 del Código Civil; iii) se condene al mandatario al pago de $1.759.841.693) o la suma que se demuestre en el proceso, a fin de dar cumplimiento a la cláusula segunda (2ª) numeral 7° y cláusula quinta (5°) del contrato de mandato sin representación firmado el día 30 de marzo de 2012. iv) más la suma correspondiente al 15% del valor total del contrato de compraventa subyacente al contrato de mandato sin representación del 30 de marzo de 2012, a título de la cláusula penal pactada, es decir, la suma de $595.974.398 o la suma que se demuestre en el proceso, v) así mismo, las sumas

de dinero que se demuestren en el curso de este proceso, y que correspondan a perjuicios adicionales que se hayan causado con el incumplimiento, más las costas y agencias en derecho que se causen en el presente asunto.

Subsidiariamente, solicitó que: se declare que el demandado incumplió las obligaciones contenidas en el contrato de Mandato, mientras que la demandante sí honró sus compromisos. En consecuencia, declare resuelto el negocio celebrado el día 30 de marzo de 2012 y se disponga la restitución de las prestaciones mutuas entre las partes. Esto es a pagar a la actora la suma $3.313.162.650 que esta le entregó el día 30 de abril del año 2012, de los cuales deberá deducirse $1.553.320.957 que PAREX ya ha recibido del MANDATARIO incumplido. Además, se condena al demandado a pagar la suma correspondiente al 15% del valor total del contrato de compraventa subyacente al contrato de mandato; más los rubros que se demuestren en el curso de este proceso, y que correspondan a perjuicios adicionales que se hayan causado con el incumplimiento, más las costas y agencias en derecho que se generen (archivo 01 Demanda inicial, cuaderno 01. Principal No. 1 Documentos virtuales radicación demanda).

2.-Las súplicas se apoyan en los fundamentos de facto que a continuación se sintetizan (págs. 1 a 11, ib):

2.1.- El 30 de marzo del 2012, las partes en litigio celebraron un contrato mandato sin representación para celebrar compraventa de bien inmueble. En el clausulado se acordó que el mandatario, Luis Eduardo Cala López, adquiriría el predio a favor del mandante, Parex, pero permaneciendo este último oculto de la negociación. Además, constituiría derecho real de usufructo a favor de Parex Resources y anualmente restituiría a favor de la persona jurídica el precio equivalente a setenta hectáreas, hasta completar el valor total del bien.

2.2.- El mandatario celebró contrato de promesa de venta con la sociedad Inversiones la Palmera de Corozito S. en C. sobre varios predios, cuyo precio se fijó en una suma aproximada a los $4.000.000.000, negocio jurídico que sirvió de sustento para la venta finalmente realizada el 2 de mayo del 2012, en adición se constituyó el usufructo pactado.

2.3.- No obstante lo anterior, el mandatario se abstuvo de honrar los demás compromisos convenidos, en especial, el establecido en la cláusula segunda, numeral 7 y quinta del contrato de mandato, que le imponían "adquirir las áreas de la porción del INMUEBLE que le corresponde al MANDANTE, de conformidad con la cláusula quinta", esta última en la que se pactó: "(…) EL MANDATARIO se obliga a adquirir anual y sucesivamente un área equivalente a 70 hectáreas o las que de común acuerdo entre las partes se acuerde por medio de un otrosi, de la porción del INMUEBLE que le corresponde al MANDANTE, hasta completar la totalidad del INMUEBLE, sin perjuicio de lo establecido en el ***PARÁGRAFO*** *de la presente cláusula QUINTA. El precio de adquisición que pagará EL MANDATARIO será el mismo que se pactó como aporte del MANDANTE de acuerdo con lo establecido en la cláusula TERCERA del presente contrato. Esta*

obligación se efectuará dentro del primer mes de transcurrido un año a partir de la fecha de la firma del presente contrato, y así sucesivamente".

2.4.- Tras varios acercamientos y compromisos para lograr el cumplimiento del negocio jurídico, finalmente el demandado continúa deshonrando sus deberes contractuales.

3.- El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante sorteo público designó los integrantes del Tribunal, el que luego de algunos retiros, quedó conformado por los árbitros Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Hernán de Jesús Sanín Posada y José Elías del Hierro Hoyos. El 16 de junio del 2021 se instaló el Tribunal y, posteriormente, en audiencia virtual celebrada el 25 de marzo del 2022, declaró su competencia para conocer y resolver en derecho las diferencias sometidas a su consideración. (Archivo 73. Acta 10. Autos 14, 15, 16 y 17).

3.1.- En réplica a la demanda arbitral, el convocado, formuló como mecanismo de defensa el que denominó: "INEFICACIA DE LOS HECHOS EN QUE SE BASA EL DERECHO QUE SE DEMANDA"; "EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIÓN [sic] POR HABER TRANSADO SUS DIFERENCIAS"; "AMBIGÜEDAD EN LAS CLÁUSULAS"; "ACTUACIONES SOTERRADAS POR PARTE DE PAREX QUE VIOLARON EL PRINCIPIO DE BUENA FE"; "NULIDAD ABSOLUTA DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO DE MANDATO POR FALTA DE CAUSA"; y "AUTONOMÍA DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA"

4.- Surtidas todas las etapas de rigor, el 22 de diciembre del 2022, el Tribunal emitió laudo arbitral que resolvió declarar no probadas las excepciones de mérito, así como el incumplimiento del mandatario y, en consecuencia, condenar a Luis Eduardo Cala López a pagar la suma $1.759.841.693, más la cláusula penal por $595.974.398.

4.1.- Dentro de la oportunidad prevista la parte convocada presentó recurso extraordinario de anulación del laudo, solicitando se declare la nulidad de la decisión proferida conforme a la causal prevista en el numeral 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

II. EL LAUDO RECURRIDO

5.- Inició el Tribunal de Arbitramento su fallo con la obligatoria síntesis de la demanda, su contestación y trámite procesal, encontrando presentes los presupuestos procesales y reiterando su competencia, posteriormente, realizó recuento normativo, jurisprudencia y doctrinal del contrato de mandato en el derecho colombiano, con especial referencia al no representativo u oculto.

Sobre el caso concreto, tras la alusión de las pruebas acopiadas y el devenir del litigio, analizó el negocio jurídico celebrado entre las partes, la existencia de una presunta transacción y finalmente el incumplimiento del mandatario que encontró acreditado. Por último, analizó las pretensiones de condena.

En síntesis, aseguró que se demostró el sistemático incumplimiento de las obligaciones dinerarias contraídas por el señor Luis Eduardo Cala López. Descartó, de otra parte, las excepciones de mérito propuestas, esencialmente, la presunta transacción porque aseguró que las partes no tenían la voluntad de arreglar o prevenir sus diferencias para evitar un futuro litigio, sino que se reunieron con la finalidad de "evaluar el estado de incumplimiento del contrato".

III. EL RECURSO DE ANULACIÓN

6.- El convocado Luis Eduardo Cala López, interpuso recurso de anulación en contra del laudo invocando como causal la prevista en el numeral 2º del artículo 41 de la ley 1563 de 20212 (archivo 163 Cuaderno Principal) bajo los siguientes fundamentos de orden fáctico, a saber:

***6.1.- Cargo único causal 2ª:** inicialmente resalta que se cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en la norma ibídem, toda vez que se interpuso recurso de reposición contra el auto mediante el cual el Tribunal asumió su competencia.*

Agrega que la decisión adoptada por los árbitros vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, por no tener en cuenta que las partes "habían purgado la mora, mediante la transacción del 28 de febrero del 2020".

En tal sentido, añadió que se desconoció el texto de la cláusula compromisoria del contrato de mandato de fecha 30 de marzo de 2012, porque en ella se estipuló que: "las diferencias que surjan entre las partes durante la ejecución de este contrato o al momento de su liquidación, que sean susceptibles de transacción, serán dirimidas directamente por las partes". No obstante, en el laudo se declaró el incumplimiento por parte del demandado por el no pago de la suma de $1.759.841.693, pretensión frente a la que el Tribunal carecía de competencia para pronunciarse, ya que, los contratantes transigieron el pago de tal rubro el 27 de febrero del 2020, de modo que el arbitraje no podía resolver nuevamente sobre ese tópico.

En el criterio del recurrente, el Tribunal se dedicó en 40 páginas a demostrar el incumplimiento de la transacción, cuando este particular contrato no fue sometido a control de legalidad, amén que su contenido resolvió exclusivamente sobre vicisitudes del mandato, de ahí que la desatención debía ser sometida a la justicia ordinaria.

Finalmente, expone varios argumentos que según su percepción revelan la indebida valoración probatoria plasmada en el laudo arbitral para declarar no probada la transacción que se elevó como fundamento de las defensas de mérito.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

1.- Corresponde a la Corporación conocer de este asunto por expresa disposición de la sección primera, capítulo IV, artículo 38 y siguientes de la Ley 1563 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones", ejercicio de la función jurisdiccional que se encaminará, en principio, a ejecutar control sobre la ocurrencia de vicios de procedimiento en que pudo incurrir el Tribunal de Arbitramento, alegados ellos a través de la invocación de causales expresamente previstas en la ley, enumeración cerrada que no admite extensiones para cobijar otros motivos, ni tampoco autoriza a introducir al amparo de la nominación formal de una causal, motivos propios del recurso de apelación.

2.- A efecto de arribar a una conclusión certera de si el Laudo Arbitral emitido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá está incurso en la causal de anulación esgrimida por el extremo convocado, la Sala estima necesario delimitar los aspectos focales del debate, advirtiendo que con el recurso de anulación no se abre de manera alguna la posibilidad al trámite de una segunda instancia, de ahí que se cierra, en principio, toda discusión orientada a examinar el fondo del asunto debatido respecto a la razonabilidad y juridicidad de los criterios expresados por el Tribunal Arbitral que sirvieron para fundar su decisión, pues esta Corporación Judicial en sede del recurso de anulación no funge como superior funcional, en razón a que el proceso arbitral es de única instancia, por lo que este recurso es un mecanismo excepcional instituido, en principio, sólo para corregir violaciones flagrantes al ordenamiento jurídico y, de manera excepcional, por vicios de juzgamiento, causales 8ª y 9ª de la Ley 1563 de 2012.

2.1.- De manera que, atendiendo la naturaleza del recurso extraordinario de anulación, de vieja data la jurisprudencia ha precisado insistentemente que la intervención judicial tiene por objeto únicamente el examen relacionado con la eventual contradicción en las decisiones tomadas en el Laudo de las cuales da cuenta el convocante o la parte convocada, en otras palabras, la decisión que se tome tendrá sólo como objeto el análisis de errores "in procedendo", en virtud a que el recurso en cuestión tiene por finalidad examinar exclusivamente la actividad formal o procesal del trámite a través de las causales previstas taxativamente en la ley, que tengan el mérito de anular el laudo, conforme lo enseña la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria- en providencia de 13 de junio de 1990,

cuando expresó:

"Más todavía: para poner a salvo la estricta observancia de toda esa actividad in procedendo, y garantizar subsecuentemente el superlativo derecho de defensa de las partes, la ley colombiana vigente previó positivamente la imposibilidad de impugnar el laudo, instituyendo al efecto el "recurso de anulación del laudo" (art. 2020 del Código de Comercio hoy 37 del decreto premencionado 2279 de 1989)".

"Acerca de este medio de impugnación es preciso señalar que su procedencia está restringida en gran medida, y de manera particular porque sólo es dable alegar a través de él las precisas causales que taxativamente enumera la ley con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jurídica especial así advertida, sube más de punto si se observa que a través de dichas causales no es posible obtener, stricto sensu, que la cuestión material dirimida por los árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnación. ***No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy fácil quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a ese tipo de administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado las partes****."*

"Por el contrario, las causales de anulación del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y están inspiradas porque los más preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación procesal del arbitramento."

"Ha de subrayarse entonces, que ***el Tribunal Superior a quien corresponde decidir el recurso de anulación del laudo, tiene en verdad una competencia específica, limitada y restringida, acorde justamente con la naturaleza indicada de la impugnación de que conoce****. En la sentencia con que decida el recurso, pues, normalmente debe declarar si él alcanza, o no, prosperidad, y en el primer supuesto, disponer lo que sea menester teniendo en mira lo que sobre el particular también dispuso expresamente la ley. Dicho en otros términos, en la sentencia debe haber un pronunciamiento acerca de si el laudo en verdad está afectado de nulidad, lo que sólo ocurrirá si a su turno se abren paso las causales legales invocadas; caso contrario, declarar infundado el recurso".*

En el mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado:

"El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso. La finalidad del recurso se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procediendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido

proceso. Mediante el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación errónea), ***ni plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios****. Tal como ya se indicó esta Corporación ha sostenido, que* ***el recurso de anulación tiene su centro sobre el principio cardinal de preservar la legalidad del procedimiento, razón por la cual, por regla general, sólo es posible examinar el laudo arbitral por la existencia de vicios de procedimiento (in procedendo) en los cuales haya podido incurrir el tribunal de arbitramento y de manera excepcional por vicios de fondo (in judicando)…"***[1]***.***

En suma, el recurso de anulación no es una oportunidad procesal adicional, complementaria o alternativa dentro del proceso arbitral, por lo que no viene a ser la vía para proponer una nueva lectura, desde cualquier otra perspectiva, del diferendo que suscitó la convocatoria de los árbitros, ni para relucir conclusiones probatorias más intrépidas que cambien el sentido del fallo, pues, se itera, el laudo es incontrovertible en su materia, efecto al que se atienen los particulares cuando renuncian a la jurisdicción estatal.

2.2.- Precisado el anterior norte jurisprudencial, importa advertir que, en estrictez no siempre el recurso de anulación tiene un sentido formal, habida cuenta que si hipotéticamente prospera una cualquiera de las causales de anulación contempladas en los numerales ***8º y 9º del Art. 41 de la Ley 1563 de 2012****, inexorablemente, le corresponde al Tribunal, en el control judicial que del laudo se haga, entrar por contera a corregir o adicionar el mismo, tal como lo señala el art. 43 ibídem, lo que de suyo implica inevitablemente considerar el fondo del asunto en forma excepcional y ello se configura cuando el fallo arbitral adolece de errores aritméticos que pueden variar la decisión de fondo, disposiciones contradictorias, haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido o no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.*

3.- Examinado el recurso que ocupa la atención de la Corporación a la luz de las anteriores directrices, ab-initio se establece que la causal esgrimida por el recurrente no puede abrirse paso porque el discurso argumentativo planteado por el censor contiene reproches en cuanto a la decisión de fondo que tomó el Tribunal Arbitral.

Cargo objeto de análisis

---

[1] *Cfr. C.E. Sección Tercera Subsección C. Sent. 10-09-2014. C.P. Olga Melida Valle de la Hoz. Exp. No. 11001-03-26-000-2014-00036-00.*

4.- Memorase que una de las causales invocada por el recurrente para atacar el Laudo Arbitral, es aquella señalada en el numeral 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que hace referencia a la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de ***competencia.***

Sobre el alcance de la citada causal y más exactamente a la falta de competencia del Tribunal de Arbitramento para emitir el laudo, la doctrina ha considerado que:

"La palabra jurisdicción proviene del latín 'iuris dictio' que etimológicamente significa imponer el derecho o declararlo.

En términos generales la jurisdicción es la función pública de administrar justicia, es decir, aplicar el derecho y resolver los conflictos o situaciones que se presenten conforme a los estrictos principios, procedimientos y reglas previstas en el ordenamiento jurídico para ello.

Ahora, si bien se ha considerado que la jurisdicción es una sola, esta se distribuye teniendo en cuenta los diferentes campos de conocimiento especialidades mediante la asignación de competencias entre las diferentes ramas, órganos del poder público o de particulares para resolver determinados asuntos.

Así las cosas, se entiende que el arbitraje como mecanismo alterno de solución de conflictos implica el ejercicio de una función jurisdiccional, ***pero en este caso no es ley la que le otorga competencia a los árbitros sino las mismas partes, mediante el pacto arbitral****.*

Por su parte, la competencia es la facultad que la misma ley le otorga a determinados órganos del poder público o a los particulares para que ejerzan la función de administrar justicia sobre ciertos asuntos determinados.

En otras palabras, la competencia es la atribución que la ley le otorga a un determinado sujeto ya sea éste un órgano público o particular para que ejerza determinadas funciones, adopte ciertas decisiones o profiera determinados actos, bajo las condiciones, reglas y procedimientos previamente fijados por ésta.

[…]

En este orden de ideas, se entiende que la jurisdicción es la función pública de administrar justicia, esto es, aplicar la ley a un determinado conflicto ***y la competencia es la facultad que le otorga a determinados órganos públicos o particulares para ejercer dicha función sobre ciertos asuntos o negocios determinados, es decir, ésta última es una parte de la jurisdicción.***

Al hablar de competencia en materia de arbitraje es necesario hacer referencia al principio de habilitación o voluntariedad, principio conforme al cual son las partes las que en ejercicio de la autonomía dispositiva le otorga la competencia a un juez arbitral para resolver las

controversias existentes o que surjan entre ellos, fijando mediante el pacto arbitral las reglas a seguir en cuanto al tipo de controversias que se someterán a la justicia arbitral, el procedimiento y la forma de designar los árbitros.

De esta forma, el Tribunal de arbitramento carece de jurisdicción cuando el pacto arbitral no existe o cuando el asunto materia que se somete a decisión de los árbitros no es de aquellos que autoriza la ley que sean resueltos en sede de arbitramento.

Po su parte, y en desarrollo del principio de habilitación que rige en materia de arbitramento, el Tribunal carece de competencia cuando se pronuncia sobre algún asunto que por voluntad de las partes no se encontraba sometida a su decisión"[2] (negrilla propio de la Sala).

4.1.- En este contexto, surge incuestionable que la falta de competencia en este particular evento se traduce en la falta de acuerdo entre las partes de someter la controversia a un tribunal de arbitramento integrado por particulares, pero facultados estos por el legislador para administrar justicia.

4.2.- Así mismo, nótese que en punto de esta especial causal de anulación el inciso primero del numeral 9º del canon 41 de la Ley 1563 de 2012, claramente prevé que: "Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia".

4.3.- Entonces, delanteramente advierte la Sala que el requisito de procedibilidad para que la Corporación estudie la causal invocada se encuentra satisfecho en la medida que a través de auto No. 14 adiado 25 de marzo del 2022 el Tribunal de Arbitramento asumió competencia para dirimir la controversia sometida a su decisión, determinación que no compartió el convocado por lo que interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido a través de proveído No. 15 del mismo mes y año ya reseñados, por el cual se confirmó la determinación objeto de censura, de tal modo, que nada impide a esta Corporación adentrarse en el estudio de la causal propiamente dicha (derivado 73, Acta 10. Autos 14, 15, 16 y 17).

4.4.- Para resolver la señalada causal, se tiene que la parte demandante fundamentó su libelo en el contrato suscrito con la convocada el día 30 de marzo del 2012, que en la estipulación décima tercera literaliza que:

"Las diferencias que surjan entre las partes durante la ejecución de este contrato o al momento de su liquidación, que sean susceptibles de transacción, serán dirimidas directamente por las partes, en caso de no lograr solución a las mismas, las someterán a consideración de un

---

[2] *BEJARANO GUZMÁN, Ramiro, CORCHUELO URIBE, Daniela, HERNÁNDEZ SILVA, Aída Patricia, MORENO CRUZ Pablo, NAIZIR SISTAC Juan Carlos, QUIROZ GUTIÉRREZ Marcos y RODRÍGUEZ MEJÍA Marcela. RECURSOS de ANULACIÓN de LAUDOS ARBITRALES, primera edición, editorial Universidad Externado de Colombia, pag 127-128. Bogotá -Colombia 2016.*

Conciliador en Derecho y en el evento de que no haya acuerdo conciliatorio, serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que estará integrado por tres (3) árbitros que designará la Cámara de Comercio de Bogotá. Este Tribunal de Arbitramento así constituido, fallará en derecho y funcionará en el Centro de Arbitraje y conciliación de la mencionada Cámara, todo conforme con las disposiciones legales que rigen éste sistema especial de solución de conflictos".

Por su parte, la recurrente sustenta la falta de competencia en que en dicho acuerdo se pactó la transacción como método inicial para dirimir las controversias suscitadas entre las partes, mecanismo al cual acudieron el 28 de febrero del 2020 para transigir varias cuestiones del contrato, algunas de ellas que se incluyeron como pretensiones en la demanda, tópico frente al cual el Tribunal de Arbitramento consideró que:

"(…) el estudio de la competencia se centra en las controversias planteadas por las partes, tanto en la demanda arbitral, como en la respectiva contestación y réplica respectiva, todas ellas con ocasión del ***CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA CELEBRAR LA COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE****, suscrito por* ***LUIS EDUARDO CALA****, en calidad de MANDATARIO, y* ***PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SURCURSAL****, en calidad de MANDANTE, de fecha treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), en cuya cláusula* ***DÉCIMA TERCERA****, se incluyó el respectivo pacto arbitral. Así las cosas, el análisis respecto de los planteamientos traídos a colación por el recurrente, en lo que resulte pertinente, serán examinados en la oportunidad procesal respectiva, esto es en el laudo arbitral, y no antes.*

Asimismo, debe advertirse que, si bien la parte convocada formuló la excepción de transacción, y sobre ella funda uno de los argumentos del recurso de reposición interpuesto contra el Auto 14 para advertir una presunta falta de competencia del Tribunal, debe señalarse que es en el laudo arbitral, luego de que se practiquen todas las pruebas, en donde debe resolverse si dicha excepción tiene o no vocación de prosperidad, por lo que adoptar una determinación en este estado del proceso, resulta prematura y, en consecuencia, no es procedente". (Pag. 5 ibidem).

4.5.- Así mismo, nótese que al decidir de fondo la cuestión planteada el Tribunal de Arbitramento después de hacer un recuento jurisprudencial y doctrinal de los requisitos para que la transacción nazca a la vida jurídica, concluyó que:

"(…) aquello que motivó a ***PAREX*** *a reunirse el día 27 de febrero de 2020 y a suscribir el Acta No. 4 Acuerdo de 'Transacción', no fue en ningún momento dar por terminado el contrato, ni extinguir obligaciones, ni mucho menos celebrar un contrato de naturaleza de transacción con sus ya conocidos efectos jurídicos.*

"Para ***PAREX*** *es inequívoco que esta cuarta reunión, aquella que está contenida en el Acta No. 4, solo tenía como finalidad*

*dejar en claro el estado de incumplimiento del contrato por parte del señor **LUIS EDUARDO CALA** y ver de qué manera podía ponerse al día con sus obligaciones dinerarias, como era el propósito de las otras tres reuniones que se hicieron en los años anteriores.*

"(…) de lo que se colige que los presupuestos genéticos anteriormente mencionados del contrato de transacción, no hicieron presencia en el presente asunto, primordialmente el elemento volitivo, en concreto, el encaminado a evidenciar el indispensable asentimiento de ambas partes en lo que atañe al deseo de terminar, finiquitar o extinguir la relación jurídica que los ligaba, en especial el de la parte Convocante. Y menos, el concerniente a la exigencia de las concesiones recíprocas, las que se echan de menos en este caso, y que no pueden ser sobrentendidas, o esbozadas sin la claridad y suficiencia necesarias.

*"Para este Tribunal, en consecuencia, es indudable que en ningún momento la intención de **PAREX**, así como la intención de cada uno de los funcionarios que asistieron a esas reuniones, se reitera, era modificar el contrato de mandato sin representación, o extinguir o novar las obligaciones allí contenidas*

*Agregando en otro aparte que "ninguna de las personas asistentes a la reunión del 27 de febrero del 2020, en la que supuestamente se llevó a cabo una transacción, ni eran representantes legales de **PAREX**, ni estaban facultados expresamente para celebrar este tipo de contratos.*

*"Con lo anterior, según ya se ha dicho, este Tribunal concluye que no se verificaron en este acto jurídico los elementos que según el artículo 1502 del Código Civil, entre otras normas concordantes, deben estar presentes para que una persona pueda obligarse a otra, como es la ausencia de capacidad de **PAREX** para haber podido celebrar válidamente esa transacción y así mismo la falta de una causa e intención común dirigida a celebrar dicho contrato extintivo y que produzca los efectos jurídicos que allí se señalaron, a lo que se suma la temática referente a la falta de acreditación en torno a las concesiones recíprocas efectuadas entre las partes, las que se también se echan de menos, se reitera" (Págs. 116 a 130, Archivo 153. Laudo Arbitral).*

4.6.- De lo hasta aquí expuesto, surge incuestionable que las controversias relacionadas con el contrato de mandato, por voluntad de las partes fue sometida a la justicia arbitral, tal como se desprende de la cláusula 13 de ese negocio jurídico y el alegato de la convocada conforme el cual se transigieron previamente algunos aspectos materia de diferencias en la ejecución de tal convenio, en estrictez no afecta el pacto compromisorio, pues como lo señaló el Tribunal esa es una cuestión de fondo del debate que en nada se relacionaba con la competencia. Véase en ese sentido que, en ningún otrosí o incluso en el mismo documento del 28 de febrero del 2020 al que hace alusión el recurrente se dejó sin efectos el pacto arbitral.

4.7.- Desde esta perspectiva, fácil resulta colegir que

la causal 2ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, no está llamada a prosperar, pues de un lado, es incuestionable que entre las partes existió acuerdo para someter sus diferencias a la justicia arbitral y, de otro, el Tribunal concluyó que los contratantes no celebraron negocio jurídico alguno encaminado a extinguir o modificar el mandato, aserto al que arribó tras el análisis extenso y riguroso de los medios de prueba aportados. Con esta orientación, debe precisarse que este Tribunal no puede indagar sobre la razonabilidad o no de aquella materia, habida cuenta que ello implicaría estudiar el fondo del asunto, esto es, si las partes involucradas hicieron concesiones recíprocas de sus derechos, y de ahí, si el objeto del contrato se resolvió, en todo o en parte. Una tarea de ese tipo, sin duda, excede el mero análisis formal característico del recurso extraordinario de anulación de cara a la causal invocada en esta ocasión, apunta a un aspecto propio de la ritualidad, como lo es la competencia del juez.

5.- Teniendo las cosas el cariz descrito, se impone como se puntualizó al inicio, negar la prosperidad del recurso de anulación, con la consecuente condena en costas a la parte recurrente.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

***1.- DECLARAR INFUNDADO** el recurso de anulación interpuesto por el convocado LUIS EDUARDO CALA LÓPEZ contra el laudo arbitral calendado 12 de diciembre de 2022, proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.*

***2.- CONDENAR** en costas a la parte recurrente Tásense.*

***2.1.-** De conformidad con lo previsto en el artículo 366 del C. G. del P., en la liquidación de costas causadas en esta instancia, inclúyase como Agencias en Derecho la suma de **cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes** atendiendo las previsiones del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. Por Secretaría, procédase a la elaboración de la misma.*

***3.-** Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.*

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADO

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0634ddc5a8b00ca4514f01d6982c6f73aa3278ca07ad9f799bbd29d2c765aa25**

Documento generado en 28/04/2023 02:13:07 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés

Proceso:	Anulación de laudo.
Demandante:	Organización Terpel SA
Demandado:	Inversiones Medrano O'Meara SAS
Radicación:	11001220300020230045800

Se fijan como agencias en derecho la suma de $3'000.000,oo. Inclúyase en la liquidación de costas.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:
Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **627cdd5b880120b7be20c7f70ab9c0007c62bafb0c3b03fc12bdb89a5dff57e2**

Documento generado en 28/04/2023 10:32:19 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés

Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil de Decisión, según acta de 15 de marzo y 26 de abril de 2023

Proceso:	Anulación de laudo.
Demandante:	Organización Terpel SA
Demandado:	Inversiones Medrano O'Meara SAS
Radicación:	11001220300020230045800
SC-018/23	

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte convocante contra el laudo arbitral proferido el 5 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Arbitramento.

ANTECEDENTES

1. Organización Terpel SA (en adelante Terpel) solicitó y obtuvo con la intervención de Inversiones Medrano O´meara SAS (en adelante IMOM), que un Tribunal de Arbitramento tramitara y decidiera la disputa surgida por la relación contractual *sub iudice* surgida entre esas sociedades.

1.1. Como pretensiones Organización Terpel SA reclamó, en resumen, i) declarar que entre las partes hubo un contrato de concesión y distribución del 15 de mayo de 2008; ii) que fue incumplido por la convocada, iii) en consecuencia, condenársele al pago el $635.579.967 por los perjuicios ocasionados, actualizados de acuerdo con la variación del IPC hasta la fecha en que se profiera la sentencia y, después de la ejecutoria de la decisión condenarla al reconocimiento de intereses moratorios.

2. La demanda se sustentó en los siguientes hechos:

2.1. El 15 de mayo de 2008, entre Terpel e IMOM se suscribió un contrato de concesión y distribución de combustible cuya duración sería de 13 años conforme a la cláusula 13.1, razón por la cual el mismo terminaría el 15 de mayo de 2021 o hasta que se adquirieran 5.460.000 galones de combustible, lo que ocurriera primero.

2.2. En virtud del contrato, Terpel le otorgó a IMOM licencia para uso de derechos de propiedad intelectual y, se comprometió a suministrarle una cantidad mínima mensual de combustible a la EDS Multiservicios.

2.3. Conforme al anexo 3 del contrato, IMOM se comprometió a adquirir una cantidad mínima de 29.500 galones mensuales de gasolina corriente; 2.450 galones mensuales de gasolina extra y 3.050 galones mensuales de ACPM.

2.4 El contrato fue ejecutado por las partes con relativa normalidad hasta el 30 de junio de 2016, ya que durante dicho lapso de tiempo IMOM adquirió de parte de Terpel los productos de gasolina corriente, ACPM y gasolina extra, pero, no en las cantidades establecidas en el convenio.

2.5. A partir de 1° de julio de 2016, IMOM incumplió totalmente las obligaciones contractuales al dejar de adquirir combustible de Terpel, por el contrario, lo empezó a adquirir por medio de terceros, situación que es conocida por Terpel y se lo hizo saber a través del comunicado del 10 de enero de 2017. A la presentación de la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento no se llegó a ningún acuerdo.

3. El Tribunal Arbitral se instaló el 8 de abril de 2020 y, en esa misma fecha, se admitió la demanda y se corrió traslado a la convocada Inversiones Medrano O'Meara SAS[1].

4. La demandada contestó oportunamente el libelo introductor y formuló las excepciones de *"Falta de jurisdicción o de competencia; La convocada no incumplió con la compra promedio mensual de combustible líquidos provenientes de la convocante a junio 30 de 2016; excepción de contrato no cumplido previamente por la convocante, en relación con la pretensión tercera; No es posible declarar hoy la resolución del contrato celebrado entre las partes en mayo 15 de 2008, en la medida que La convocante le dio terminado unilateralmente en septiembre 18 de 2018."*[2]

5. De igual forma, Inversiones Medrano O'Meara SAS -IMOM- presentó demanda de reconvención, en la que solicitó como pretensiones, en suma, i) declarar la existencia de un contrato de concesión y distribución del 15 de mayo de 2008 el cual fue suscrito como prolongación del negocio jurídico celebrado y ejecutado desde el 27 de julio de 2000 y hasta el 28 de noviembre de 2018; ii) que la convocada incurrió en prácticas abusivas en el mercado de combustible en Sincelejo en virtud del cual discriminó a la demandante frente a aquellas estaciones de servicio -EDS- que brindaban un precio de venta más bajo, por lo que la cláusula 5.11 no

[1] Archivo "*14. Instalación"*, cuaderno denominado "*02. 121145 CD Principal No. 1- Documentos virtuales_ instalación",* cuaderno denominado *"principal No. 1"*
[2] Archivo *"09 Folio 125-2012 121145 Principal No. 2 Actas 6 y 7 Contestación"* cuaderno principal No. 2, archivo *"01 principal"*

resultaba aplicable. iii) De igual forma, solicitó declarar que la suspensión unilateral del suministro por parte de la demandada fue violatoria del contrato y, como consecuencia, debe pagar $891.440.000 por concepto de perjuicios.

5.1. Fundó las pretensiones en los hechos que así se resumen:

5.1.1. La Organización Terpel SA ostenta una posición dominante en Sincelejo para el abastecimiento de líquidos derivados del petróleo y lubricantes. Aquella es propietaria del EDS Multiservicios ubicado en la calle 32 # 10-110.

5.1.2. Entre las partes se suscribió contrato de concesión y distribución el 15 de mayo de 2008; sin embargo, se trató de una prolongación de un negocio jurídico celebrado y ejecutado desde el 27 de julio de 2000 y hasta el 29 de noviembre de 2018.

5.1.3. La demandada de forma unilateral e injustificada el 28 de noviembre de 2018 terminó el contrato.

5.1.4. La demandada creó alrededor de la EDS de la actora, desde 2008, competencia adicional, lo que impactó negativamente los intereses de la demandante.

6. Organización Terpel SA contestó la demanda de petición de mutua y, planteó las siguientes excepciones de mérito *"Falta de competencia del Tribunal; prescripción de competencia desleal; prescripción de la acción ordinaria con base en la cual IMOM pretende alegar el supuesto incumplimiento contractual por parte de Terpel; suspensión del suministro de combustible se dio por causas justificadas; compensación"*[3].

[3] Archivo "27. Folio 508-578 121145 principal 2 Contestación Ref. reconvención"; carpeta principal No. 2.

7. Agotado el trámite de rigor, el Tribunal de Arbitramento emitió laudo en el que declaró que entre las partes se celebró un contrato de concesión y distribución el 15 de mayo de 2008, que fue incumplido por la convocada, por lo que Organización Terpel S.A. lo terminó unilateralmente con justa causa; condenó a Inversiones Medrano O'Meara S.A.S. a restituirle a Organización Terpel S.A. los bienes recibidos a título de comodato precario, así como a pagarle $197.285.969 como lucro cesante, valor actualizado monetariamente a la fecha del laudo, monto que causaría intereses comerciales moratorios a partir del quinto día siguiente a la ejecutoria del laudo. De igual forma, de oficio declaró la prosperidad de excepciones *"que se fundan en los hechos probados que enervan el éxito de la pretensión indemnizatoria del lucro cesante correspondiente a los ciclos del Contrato de Concesión y Distribución que iban del 26 de octubre de 2016 al 18 de septiembre de 2018 y de este día al 15 de mayo de 2021."*

Respecto de las pretensiones de reconvención se dispuso aceptar la pretensión 5ª, únicamente *"en el sentido del reconocimiento por parte de Organización Terpel S.A. de haber suscrito 'contratos de 'concesión y distribución 'abanderamiento' con cinco nuevas Estaciones de Servicio -EDS- en la ciudad de Sincelejo, sin que ello implique la declaración de que las referidas EDS estaban situadas en cercanías de la EDS Multiservicios de Inversiones Medrano O' Meara S.A.S"* y, negó las demás pretensiones.

No impuso sanción respecto del juramento estimatorio y, negó la condena en costas. Ordenó el registro del auto y la cancelación de las anotaciones de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados con posterioridad a la inscripción de la demanda en el registro de los bienes cautelados, y la cancelación de aquella medida. Finalmente dispuso lo relativo a los honorarios de árbitros y secretaria.

FUNDAMENTOS DEL LAUDO ARBITRAL

1. Respecto a la demanda inicial.

Argumentó que, sin lugar a equívoco el contrato nació a partir del 15 de mayo de 2008 con vigencia de 13 años, hasta el 15 de mayo de 2021 conforme a la literalidad del mismo, cláusula 13.1 del capítulo XIII.

Con base en el clausulado consignado en el contrato, en el artículo 83 de la Constitución Política, en los artículos1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, indicó que es un pilar fundamental no defraudar la confianza del otro y, del material probatorio recaudado concluyó que se demostró que los valores efectivamente consignados no guardan correspondencia con las cuantías mencionadas en los recibos de consignación, conducta que bien puede ser considerada como un atentado a la buena fe contractual y, consecuente incumplimiento de la obligación por lo que ninguna de pretensiones hallan fundamento en los hechos que narran tales sucesos, es decir, las pretensiones segunda y tercera.

Por el hecho de la alteración de los recibos de consignación, Terpel, optó por una autotutela privada, supuestamente contractual, consistente en dejar de suministrar combustible a IMOM, abandonando la alternativa de proponer una pretensión de incumplimiento del contrato fundada en tal hecho, dejando impune, por lo menos procesalmente tal circunstancia fáctica.

Respecto a los volúmenes de adquisición de combustible, dijo que la convocada al plantear la demanda de reconvención admitió haber adquirido menos del combustible pactado, al afirmar que Terpel abrió otros puntos lo que impactó

negativamente los intereses de IMOM y le generó una competencia adicional, imprevisible e irresistible.

Conforme a las expresiones de IMOM en la ejecución del contrato, resaltó dos periodos: uno, hasta el 26 de octubre de 2016 cuando alteró los recibos de consignación de Terpel por lo que decide quitarle el cupo a IMOM y, otro desde esa data, cuando Terpel considerando los incumplimientos decidió terminar el contrato el 18 de septiembre de 2018 y, en ambos tiempos la convocada acepta no haber cumplido con la obligación de adquirir los volúmenes de combustibles acordados.

Agregó, que el dictamen elaborado por el economista Luís Fernando Rodríguez Naranjo concluyó que en 101.5 meses, entre mayo de 2009 y octubre de 2016, equivalente del 65.1% del tiempo del contrato, IMOM adquirió un total de 3.073.969 galones de combustible, equivalente al 56.3% del volumen acordado; de donde infirió el incumplimiento contractual que fundamenta la pretensión segunda.

Añadió que, la convocada alegó que ese comportamiento obedeció a que Terpel abanderó e instaló EDS en el área de influencia de IMOM y, si bien se probó la instalación de aquellas; no obstante, no se acreditó que estuvieren en el mismo corredor de la EDS Multiservicios de la demandada. Por lo que no se podía tener como justificación del incumplimiento contractual.

Por consiguiente, dijo que estaba demostrado el incumplimiento de la obligación del primer periodo señalado, es decir, hasta el 26 de octubre de 2016, cuando Terpel decidió restringir el cupo a la convocada que trajo como consecuencia, dejar de suministrar combustibles que no fueran "*prepagados*".

Respecto al segundo período, del 26 de octubre de 2018 al 18 de septiembre de 2018, cuando Terpel decide dar por terminado el contrato, dijo que era justificable que la convocada en ese lapso no hubiera cumplido con los mínimos de adquisición, pues, con independencia de la razón por la que Terpel le quitó el cupo, lo cierto es que ese hecho modificó presupuestos convencionales, que sin duda alguna fueron determinantes para la definición de las obligaciones, porque se hizo una variación a la regla económica de la relación contractual que directamente incidían en la oportunidad y forma de cumplir la obligación de pagar el precio del combustible adquirido.

Concluyó que, para el segundo periodo la conducta de IMOM era justificable.

En cuanto a la adquisición de combustibles de proveedores diferentes a Terpel dijo que se probaron, conforme al testimonio de Manuel Antonio De La Hoz Palacio, conductor del vehículo de propiedad de IMOM; las compras de combustible por intermedio de la EDS Los Laureles, las ratificaciones de los testigos Angélica María de la Rosa Támara y Gisela Patricia Mercado Peñate; incluso, el peritaje hecho por Fernando Oquendo Ospina.

Indicó que, según lo da a conocer la prueba, con motivo de la alteración de los recibos de consignaciones hechas en el Banco Davivienda, dada la pérdida de confianza que guiaba la relación, Terpel decidió quitarle el cupo a Imon, razón por la que esta dejó de recibir combustible, pues a partir de ese momento, o sea del 26 de octubre de 2016, la única forma de adquirirlo era mediante el sistema de prepago. Ante esta negativa, la convocada acudió a los empresarios de las EDS Los Laureles para seguir vendiendo combustible de Terpel en el EDS Multiservicios, habida cuenta que como quedó claro con los testimonios y el dictamen pericial, Terpel le

suministraba combustible a la EDS Los Laureles, pero este era bajado para la venta a los consumidores de la EDS Multiservicios. De manera que para la época del contrato, el proveedor del combustible que se vendía en la EDS Multiservicios, era un tercero, concretamente los dueños o administradores de la EDS Los Laureles.

En todo caso, el combustible nunca se adquirió por cuenta de un tercero.

En tal virtud, prosperó la pretensión tercera, en el sentido que quedó verificado que IMOM incumplió la obligación de abstenerse de vender en la EDS Multiservicios, productos y/o combustibles diferentes a los suministrados por Terpel, por tanto, ésta terminó unilateralmente el contrato con justa causa.

Adquirtió que, en el contexto de lo probado, la terminación del contrato el 18 de septiembre de 2018, además de estar tutelada por el propio instrumento, *"resulta justificada a la luz de los artículos 870 y 871 del Código de Comercio, asociados con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, porque siendo el contrato es ley para las partes, el incumplimiento de una de ellas, con la significación que en el caso se demuestra, autoriza a la parte cumplidora para pedir de manera unilateral, que el negocio se resuelva o termine con las restituciones a que haya lugar y la indemnizacion de perjuicios a favor de esa parte que estuvo presta al cumplimiento, …"* para tal efecto citó a la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de junio de 1951.

Respecto de la restitución de los bienes entregados en comodato, dijo que conforme a los anexos del contrato, a la contestación de la demanda reformada, a los artículos 83 y 97 del Código General del Proceso, 2200 y 2219 del Código

Civil concluyó que el contrato de comodato se repite, por lo que le ordenó a la convocada restituir los bienes relacionados.

En cuanto a la pretensión indemnizatoria manifestó que, según el dictamen, la ejecución del contrato se dividió en tres tiempos distintos: i) desde que se celebró el contrato, mayo de 2008 hasta 26 de octubre de 2016, data en que le quitan el cupo a la convocada; ii) desde la última 26 de octubre de 2016 hasta el 18 de septiembre de 2018 cuando se da por terminado el contrato y iii) del 18 de septiembre de 2018 al 15 de mayo de 2021, fecha en la que se cumpliría el término del contrato.

Siguiendo la experticia elaborada por Luís Fernando Rodríguez Naranjo, entre el 15 de mayo de 2008 al 31 de octubre de 2016, con actualización monetaria asciende a un ingreso operacional neto faltante de $166.803.813.

Sobre los dos últimos periodos, IMOM no adquirió de Terpel ninguna cantidad de combustible, porque el que en estas etapas se distribuyó en la EDS Multiservicios, era adquirido por un tercero, la EDS Los Laureles. Seguidamente, hizo alusión a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, el artículo 1616 del Código Civil.

Similar decidió respecto la indemnización por lucro cesante, porque el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2018, cuando Terpel le comunicó a IMOM la terminación y el 15 de mayo de 2021 fecha en que vencía el contrato, durante ese lapso no adquirió ningún galón de combustible, posición que era tomada por la convocada desde 26 de octubre de 2016, cuando se le eliminó el cupo.

Actualizado el referido valor, arrojó que la demandada debía pagarle a Terpel $197.285.969.

2. Respecto de la contrademanda.

Sobre la terminación unilateral e injustificada del contrato de concesión y distribución, dijo que conforme al artículo 1621 del Código Civil y al recaudo probatorio, no obra elemento alguno que permita afirmar que IMOM antes de su iniciación hubiera hecho alguna manifestación de desconocimiento, inconformidad o desacuerdo con la estipulación que le negaba cualquier tipo de exclusividad y que, en sentido contrario, consagraba la libertad de Terpel para acudir al mercado en procura de los mecanismos para optimizar la red de distribución e hizo referencia a la sentencia SC13208 de 2015 y a otros laudos arbitrales proferidos en casos similares.

Todo ello para concluir que al señalamiento que, Terpel al abanderar las EDS mencionadas en los hechos actuó en forma contraria al principio de la buena fe, por supuestamente haber abusado de su posición dominante en el contrato, también carece de fundamento probatorio, razones por las cuales las pretensiones de la reconvención cimentadas en tal imputación no tenían vocación de éxito.

En lo concerniente a la suspensión unilateral del suministro de combustibles y lubricantes a IMOM argumentó, en suma, que, demostrado se encontraba que aquella incumplió con la obligación de cancelar el precio de combustible suministrado en el tiempo, lugar y forma convenida entre las partes, por lo que no se configuraba el incumplimiento de tal obligación que en este aspecto le endilgaba IMOM en la reconvención.

Apuntó que, con independencia del incumplimiento de la obligación de pagar el combustible, lo cierto es que la cesación del suministro del mismo estaba justificada para

Terpel, al verificar la alteración de los recibos de consignación al Banco Davivienda.

Además, los acuerdos celebrados por Terpel con los EDS más próximas a las EDS Multiservicios al amparo de la cláusula de exclusividad pactada a su favor, la que se califica como abusiva, no resulta como abuso de la posición dominante contractual por parte de Terpel, pues dicha cláusula es lícita y vinculante, se ajusta a la naturaleza del contrato y al marco normativo.

Como consecuencia, aceptó únicamente que, Organización Terpel SA suscribió contratos de concesión y distribución de cinco nuevas estaciones de servicio -EDS- en Sincelejo, sin que ello implique que estaban situadas cerca a la EDS Multiservicios de Inversiones Medrano O' Meara SAS.

EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN

El apoderado de Organización Terpel SA formuló recurso extraordinario de anulación e invocó la causal del numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

Sustentó su disenso en que a pesar de haber declarado que IMOM había incumplido el contrato, que la suspensión de combustible ocurrida el 26 de octubre de 2016 por parte de Terpel estaba justificada y, que la terminación unilateral del contrato ocurrida el 18 de septiembre de 2018 estaba justificada, el Tribunal de Arbitramento resolvió declarar, de oficio, que la pretensión indemnizatoria relativa al lucro cesante, correspondiente a los ciclos del contrato de concesión y distribución que iban del 26 de octubre de 2016 al 18 de septiembre de 2018 y, desde el 15 de octubre de 2021 no prosperaba. Consideró que la causa de esos perjuicios no era el incumplimiento de IMOM, sino de la

decisión de Terpel de suspender el suministro y posteriormente, terminar el contrato.

Así las cosas, el Tribunal de Arbitramento aplicó indebidamente el artículo 1616 del Código Civil, porque no estableció de manera correcta la diferencia o semejanza existente entre la hipótesis legal y el caso concreto. En los párrafos 288, 295, 296 y 321 de la decisión se reconoce que la eliminación del cupo del crédito, la consecuente suspensión del suministro y la terminación del contrato adoptadas por Terpel fueron justificadas por incumplimientos imputables a IMOM y, a pesar de ello, al momento de resolver sobre los perjuicios causados por el contrario, el Tribunal consideró que, conforme al artículo 1616 del Código Civil, no resultaba procedente la condena en perjuicios por los ciclos comprendidos entre el 26 de octubre de 2016 al 18 de septiembre de 2018 y desde este día, al 15 de mayo de 2021.

Por tanto, se presentó indebida aplicación del artículo 1616 del Código Civil y, profirió un fallo un equidad y no en derecho.

También existió erróneo entendimiento del artículo 870 del Código de Comercio.

Con esos reproches deprecó la anulación del laudo arbitral para que se le dé la posibilidad a Terpel de convocar otro tribunal arbitral en el que se resuelva nuevamente el tema de los perjuicios causados durante el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2016 y el 15 de mayo de 2021.

En el término de traslado la parte convocada guardó silencio[4].

[4] Archivo 79_Folio_627_631_Traslado recurso anulación laudo, carpeta principal No. 3, archivo digital 01. Principal.

CONSIDERACIONES

1. Previo a verificar el asunto en concreto, resulta de suma importancia, recordar la naturaleza jurídica y el alcance del recurso de anulación contra laudo arbitral, al ser una forma de impugnación extraordinaria contra tal providencia, enmarcada dentro del carácter excepcional, restringido y con fundamento en causales taxativas, establecidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

2. *En principio* el juez del recurso no puede examinar el fondo de la decisión arbitral, porque su competencia es limitada y específica, pues las causales consagradas en la ley se refieren solo a errores de procedimiento[5] más no a errores sustanciales.

La jurisprudencia vernácula ha señalado, con el propósito de establecer la esencia del recurso de anulación, que su procedencia *"está restringida en gran medida y de manera particular, porque sólo es dable alegar a través de él las precisas causales que taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jurídica especial así advertida, sube más de punto si se observa que a través de aquellas no es posible obtener, stricto sensu, que la cuestión material dirimida por los árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy difícil quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a ese tipo de administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado las partes. Por el*

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 08 de marzo de 1999, C.P: Juan de Dios Montes Hernández, exp. 13804; 26 de abril de 1999, C.P. Daniel Suárez Hernández.

contrario, las causales de anulación del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y están inspiradas porque los más preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación procesal del arbitramento"[6].

Lo anterior sin perjuicio, claro está, de que en el evento en que el ataque al laudo se edifique en las causales 8ª o 9ª del artículo 41 de la ley 1563 de 2012, y cualquiera de ellas resulte fundada, imperioso será para el Tribunal, cognoscente del recurso extraordinario, en el control judicial que del laudo se haga, proceder a corregir o adicionar el mismo, tal como lo señala el artículo 43 *eiusdem*, lo que de suyo implica inevitablemente considerar el fondo del asunto en forma excepcional y ello se configura cuando el fallo arbitral adolece de errores aritméticos que pueden variar la decisión de fondo, disposiciones contradictorias, haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido o no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

3. De lo anotado se colige que esta Colegiatura no tendrá como función el análisis de fondo del asunto sometido a arbitramento como si fuera una nueva instancia, sino que su función se circunscribe a vigilar la legalidad del laudo, verificando la estructuración de la causal alegada por el recurrente. Por eso la Sala no abordara el estudio del laudo en cuanto a la hermenéutica con la que se definió la controversia.

La Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha sostenido cuál es la función de este recurso, advirtiendo que sólo mira el aspecto procedimental, y así sostiene que las causales *"están inspiradas porque los más preciados*

[6] Corte Suprema de Justicia. Sentencia. Rev. 13 de junio de 1990. G.J. T.CC pág. 284. citada en la providencia de julio 25 de 2005. Exp. 2004-00034-01.

derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación procesal del arbitramento"[7].

Igualmente, se tiene que el recurso de anulación, por esa misma restricción, no admite ser atacado con cargos que acusen la violación sustancial del derecho, ya sea vía directa o indirecta, lo que excluye por lo tanto la posibilidad de abrir un debate sobre posibles errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, siendo de tal modo más limitado que el recurso extraordinario de casación. Así ha señalado que la anulación del laudo procede exclusivamente *"(...) si se pronuncia invocando un pacto arbitral inválido o lo hace por fuera de los extremos que delimitan la eficacia de dicho pacto; si no define todas las cuestiones sometidas por vía convencional a la jurisdicción de los árbitros o estuviere concebido su contenido decisorio en términos tan contradictorios que sea de imposible ejecución y, por último, si se omitieron ritualidades que siendo esenciales en el desarrollo del procedimiento arbitral porque así las conceptúa la ley, para el impugnante esa inobservancia produjo indefensión en el sentido estricto que esta expresión tiene en el lenguaje jurídico (...)"*[8].

Se itera, el artículo 43 *ídem*, al fijar los efectos de la sentencia que anula el laudo arbitral distingue según la causal que resulte exitosa: si se trata alguna de las previstas en los numerales *"1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará."*, por tanto, siendo fundada la causal 8ª y/o la 9ª, con el propósito de corregir o adicionar el laudo, no sólo es factible sino imperativo incursionar en el estudio de fondo de la controversia a que haya lugar.

---

[7] Sentencia del 13 de junio de 1990. MP Rafael Romero Sierra (Extractos de jurisprudencia. T. 2, 2o trimestre 1990)
[8] Corte Suprema de Justicia. Sentencia 20 de junio de 1991. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Gaceta Judicial. Tomo CCVIII No. 2447, pág.513.

4. Conservando la premisa antecedente, los poderes del juez del recurso de anulación están delimitadas por el principio dispositivo[9], conforme al cual es el recurrente quien con la formulación y sustentación del recurso fija el objeto que con él se persigue[10], por lo que en efecto las causales y su fundamentación deben estar contenidas en el escrito del recurso dentro de la oportunidad legal, so pena de su rechazo.

Ahora bien, la naturaleza de esta censura excepcional no da lugar a una instancia adicional en la que se pueda estudiar todo el proceso y el caudal probatorio obrante en él, dado que no entran en consideración cuestiones distintas a las atinentes a la materia que fije exclusivamente el recurrente, eso sí dentro del marco de las causales determinadas por el legislador.

Lo antedicho explica de manera incontestable que el asunto litigado no puede tener sino una instancia, porque no se trata de examinar la cuestión de fondo sino la regularidad formal a través de las causales expresamente previstas habida cuenta que no se trata de un recurso de apelación, como lo ha señalado la jurisprudencia: *"Reafirmase así que el recurso de anulación no comparte esencias con el de apelación, pues como se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte, mediante el recurso de anulación tan sólo se pueden controlar vicios de procedimiento en que pudieron incurrir los árbitros."*[11].

5. Precisado el precedente tópico y como quiera que se acusa el laudo por un único cargo, se impone el análisis correspondiente.

---

[9] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 10 de diciembre de 2014, MP José Alfonso Isaza Dávila, exp. 1690.
[10] Recurso de Anulación de Laudos Arbitrales. Aída Patricia Hernández Silva. Editorial Universidad Externado de Colombia. Edición 2016.
[11] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, julio 21 de 2005 (Recurso de Revisión). MP. Edgardo Villamil Portilla. Expediente 2004-00034-01.

ÚNICO CARGO

1. Se aduce la configuración de la causal 7ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, según la cual puede propiciarse el recurso de anulación por ***"7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo."***

En criterio de la parte recurrente, el laudo emitido por el Tribunal Arbitral fue en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, por cuanto al resolver sobre algunas pretensiones, concretamente sobre el reconocimiento de perjuicios, no se basó jurídicamente y careció de análisis probatorio, afirmó que hubo indebida interpretación y aplicación de los artículos 1616 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, habida cuenta que, al haberse encontrado justificada la terminación del contrato por parte de Terpel lo convierte en titular de exigir perjuicios, los que fueron negados por la indebida aplicación de las citadas normas y, terminó siendo un fallo en equidad y no en derecho.

2. Respecto de la causal analizada, advierte la Sala que la recurrente parte de un supuesto errado, consistente en suponer que a través de esta vía judicial resulta viable modificar las consideraciones que frente al fondo del asunto esgrimió en su decisión el Tribunal de Arbitramento, bajo el amparo de la causal séptima citada, cuya configuración, como se sabe y deviene del contenido mismo del texto que la consagra, exige que la adopción del fallo en conciencia o equidad y no en derecho, aparezca de forma clara **ostensible y palmaria**, en otras palabras, que resulte tan evidente que sea innecesario entrar a hacer elucubraciones o una auscultación minuciosa de la decisión adoptada, motivo por el cual su estructuración se predica

exclusivamente de aquellos casos en que los árbitros haciendo total abstracción de los elementos de convicción incorporados y de las normas jurídicas aplicables, resuelven el litigio bajo su íntima convicción, atendiendo exclusivamente el sentido común y la equidad, sin acudir a ninguna clase de argumentación jurídica.

En torno a esta causal, consagrada desde antes en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, la jurisprudencia tiene decantado:

> *"(…) que si en el laudo se hace la más mínima referencia al derecho, entendido en su más amplia acepción (normas de derecho positivo, principios generales, doctrina constitucional, o jurisprudencia) es calificable como en derecho y no en conciencia. El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico; toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propia conciencia, basado o no en el principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada*"[12].

Y en un pronunciamiento más reciente acotó:

> *"El fallo en conciencia, para que configure la causal de anulación del laudo, exige que "esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo" –art. 163.6, Decreto 1818 de 1998-, de modo que en virtud de este requisito el legislador impuso una exigencia superlativa para valorarlo. (…)* ***un laudo en conciencia debe ser evidente, es decir, no admitir duda sobre su carácter****. Si el laudo ofrece dudas respecto a su calidad no puede calificarse como dictado en conciencia. (…) la ley procesal establece una especie de presunción, por cuya virtud ha de entenderse que un laudo se dicta en derecho, pero si la parte lo pone duda debe recurrir para demostrar lo contrario, cuya apreciación exige un análisis simple. Si el estudio que se requiere es complejo, si la calificación admite dudas o debates, no es posible calificar la providencia como laudo en conciencia, porque*

[12] Consejo de Estado. Sección Tercera, febrero 8 de 2001, exp. 18411

el legislador exige una evidencia protuberante del vicio, que lo haga indiscutible"[13].

Sobre el laudo en derecho, el Consejo de Estado ha explicado:

"(…), un laudo será en derecho cuando en su parte considerativa exponga, analice o haga referencia a cualquier disposición de naturaleza jurídica, incluido el contrato que le sirve de base a la controversia. (…) Entender que la expresión derecho positivo se reduce a las fuentes normativas – Constitución, Ley y reglamento- desconocería que el ordenamiento jurídico no se reduce a los preceptos, porque constituye un sistema que combina de manera infinita la pluralidad de sus fuentes, para producir una decisión particular. De esta manera, derecho positivo, en su acepción amplia, se refiere a las fuentes del derecho explícitas; es decir, objetivas; es decir, existentes, bien en normas o bien en textos que forman parte del mismo derecho, como las que lo explican. Aquí se reencuentra esta noción con la que procede de manera más pura de la filosofía del derecho"[14].

Frente a este tema la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, evocó la distinción que entre el laudo en conciencia y el que debe proferirse en derecho puntualizó el Consejo de Estado:

"(…) El fallo en conciencia, para que configure la causal de anulación del laudo, exige que "esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo" –art. 163.6, Decreto 1818 de 1998-, de modo que en virtud de este requisito el legislador impuso una exigencia superlativa para valorarlo. Por esta razón, identificarlo no debería imponer mayores esfuerzos intelectuales, porque la ley exige que la circunstancia sea manifiesta, lo que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa –según la acepción apropiada a este contexto-: ". adj. Descubierto, patente, claro", de manera que un laudo en conciencia debe ser evidente, es decir, no admitir duda sobre su carácter. Si el laudo ofrece dudas respecto a su calidad no puede calificarse como dictado en conciencia. La Sala ya

---

[13] Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia 12 de febrero de 2014 exp. 11001-03-26-000-2013-00111-00(48117).
[14] Consejo de Estado, última providencia citada

ha destacado esta nota, porque "De la simple lectura de la norma transcrita emerge que la causal se estructura cuando se presenta la circunstancia de haber fallado en conciencia y este hecho resulta patente en el laudo, esto es, sin que se requiera de mayores argumentaciones para demostrar ese acontecimiento pues es ostensible." – Sección Tercera, Subsección C, sentencia de marzo 24 de 2011. Exp. 38.484- (…)".

"(…) En estos términos, la ley procesal establece una especie de presunción, por cuya virtud ha de entenderse que un laudo se dicta en derecho, pero si la parte lo pone duda debe recurrir para demostrar lo contrario, cuya apreciación exige un análisis simple. Si el estudio que se requiere es complejo, si la calificación admite dudas o debates, no es posible calificar la providencia como laudo en conciencia, porque el legislador exige una evidencia protuberante del vicio, que lo haga indiscutible. Esta Sección ya lo ha destacado -sentencia del 20 de junio de 2002, exp. 20.129-: "Para que se configure la causal segunda de anulación del laudo prevista en el art. 72 de la ley 80 de 1993 es necesario que la separación de los árbitros de la aplicación de las reglas de derecho 'aparezca manifiesta en el laudo', y en el que se examina no se evidencia tal despropósito de los árbitros (…)".

Por lo que *(…) la acreditación del laudo en conciencia no impone -ni puede hacerlo- un estudio profundo y detallado de carácter normativo o probatorio, sino uno externo y más superficial, sin que sea incompleto, que acredite que el laudo se dictó en conciencia sin mayores intervenciones conceptuales de fondo. Esta técnica de control al laudo, a través de esta causal, protege una elección que las partes del contrato hicieron cuando prefirieron la justicia alternativa a la natural: la decisión de única instancia. En estos términos, un laudo se dicta en conciencia cuando a prima facie, sin mayores esfuerzos de comprensión jurídica, se descubre que la decisión no se fundamenta en las normas y en el razonamiento jurídico en general, sino en la convicción íntima del juez, con independencia de las directrices y determinaciones que provienen del sistema jurídico (…)".* Y más adelante concluyó:

> *"(…) En este orden de ideas, para que un fallo sea considerado en conciencia, se exige que su contenido no se haya apoyado en el derecho objetivo que regula la controversia, y que por tanto sea producto de la libre apreciación del juez, sin consideración alguna a las normas del ordenamiento jurídico, además de que el aspecto probatorio debe guardar armonía con esta idea, en tanto que el sentido de la decisión debe ser expresión de las pruebas que obran en el proceso, y su valoración según las reglas de la sana crítica (…)"*[15]*.»*[16] (Negrilla fuera del texto)

En esa misma línea se ha pronunciado la doctrina al precisar los límites del estudio que tiene cabida en el recurso de anulación cuando se invoca esta causal, al confrontarlo con el que se esgrime en el escenario de la casación o la apelación, por ejemplo. En ese sentido ha expuesto:

> *"A diferencia del recurso de apelación, este recurso extraordinario de anulación no otorga competencia para revisar el aspecto sustancial del laudo, es decir, si hubo o no errores in judicando diferentes a los que se puntualizan en las cuatro últimas causales y tampoco para revisar el aspecto probatorio, es decir, si hubo o no errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, limita la competencia del juzgador al examen de las causales que el recurrente invoque, mientras que el de apelación la otorga para revisar in integrum la sentencia recurrida y revocarla o modificarla en cuanto no implique violación del principio de la no reformatio in pejus".*
>
> *Disparidad que igualmente se percibe con el recurso extraordinario de casación, a través del cual se ataca la sentencia por "errores en la aplicación de la ley sustancial, tanto por vía directa, como por consecuencia indirecta de errores en la apreciación de las pruebas o por falta de apreciación de éstas, al paso que la anulación del laudo no faculta para nada de esto"*[17] *Hernando Devis Echandía; El Proceso Civil Parte*

---

[15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 11001-03-26-000-2013-00111-00(48117)
[16] STC14794-2019 Radicación 11001220300020190162101. Bogotá, 30 de octubre de 2019
[17] Hernando Devis Echandía; El Proceso Civil Parte Especial, 7ª Edición 1991; Biblioteca Jurídica Dike; p. 1169.

Especial, 7ª Edición 1991; Biblioteca Jurídica Dike; p. 1169.

3. Evaluada en el *sub lite* la configuración de la causal, siguiendo los precedentes derroteros, se observa que el Árbitro estructuró la decisión en la ponderación respecto de lo solicitado, lo probado y las normas aplicables al caso.

Para tal efecto, hizo alusión al contrato de Concesión y Distribución, al clausulado que lo componía y los anexos, en especial al 5 en que el se pactó que IMOM se obligó a adquirir de Terpel, mensualmente 29.500 galones de gasolina corriente, 2.450 galones de gasolina extra y 3.050 galones de ACPM. Asimismo, resaltó que el dictamen allegado por la convocante concluía que galones adquiridos por mes era inferior al establecido en el contrato *"(…) equivalente al 13.25% de la cuota mínima de compra acordada".*

No obstante, se hizo mención a la forma como se ejecutó el contrato y como se abordó tal experticia, por lo que claramente dividió el pacto en tres tiempos: i) desde el inicio del convenio en mayo de 2008 al 26 de octubre de 2016, *"fecha en la cual Terpel decidió quitarle el cupo a la convocada";* ii) del 18 de septiembre de 2018 cuando Terpel decide dar por terminado el contrato de forma unilateral; iii) del 18 de septiembre de 2018 al 15 de mayo de 2021, data en que terminaría el contrato. Esos extremos temporales fueron analizados con base en los hechos relatados en la demanda, no se trató de un arbitrio del Administrador de Justicia.

Al citar la experticia como referente probatorio concluyó que entre el 15 de mayo de 2008 y el 31 de octubre de 2016, con actualización monetaria a octubre de 2020, el ingreso operacional faltante por parte de Terpel era de $166.803.813.

No ocurrió lo mismo respecto a los dos otros periodos bajo los cuales haría el análisis, habida cuenta que con dicho trabajo pericial que dedujo que, en ese tiempo IMOM no adquirió de Terpel ninguna cantidad de combustible porque dicho liquido era adquirido mediante un tercero y, el Tribunal dijo que el actuar de IMOM se desarrolló por la determinación de Organización Terpel de prepagar el combustible, decisión que fue unilateral por parte de aquella sociedad demandante y fue contraria a lo pactada en el contrato que se analizaba.

Partiendo de advertir que el contrato es ley para las partes, como lo pregona el artículo 1602 del Código Civil, y a la luz del artículo 1616 del Código Civil, utilizando como referente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 29 de octubre de 1945, dedujo la improcedencia del lucro cesante en los demás lapsos objeto de estudio en consideración de la ruptura de la relación de causalidad adecuada y necesaria entre la conducta imputable a la demandada y las ganancias dejadas de obtener por lo que estas, se ligaron a la exclusiva decisión de Terpel de dejar de suministrarle combustible a la demandada.

De la revisión del extenso laudo arbitral se observa claramente que se efectuó un análisis minucioso de la normativa reguladora de la controversia llevada a la jurisdicción y se examinaron de manera meticulosa y conjunta las pruebas recaudadas en este asunto, bajo las reglas de la sana crítica, al tenor del artículo 176 de la ley 1564 de 2012.

2.5. Puestas así las cosas, es innegable que el Tribunal de Arbitramento profirió una decisión que no puede calificarse

como fruto de la conciencia o equidad, por cuanto, se itera, se expresaron los fundamentos normativos y probatorios que dieron soporte a la determinación, lo que indica, sin lugar a duda, que se trató de una decisión en derecho.

Se destaca, resulta improcedente que el extremo recurrente busque a través de la herramienta extraordinaria revivir el debate fáctico y jurídico dirimido por los jueces arbitrales, a sabiendas de que este mecanismo excepcional de impugnación no fue establecido con esa finalidad; ni puede aspirar que a los preceptos jurídicos en que se erigió el laudo se le asigne la interpretación que conforme a su criterio conviene a sus intereses.

En consecuencia, tal como lo ha expresado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, si se encuentra que un laudo arbitral está fundado "*en las pruebas que se adujeron al juicio y, sobre todo, en las normas sustanciales relacionadas con controversias contractuales que contempla el ordenamiento colombiano, no es dable calificar dicha decisión como subjetiva, que lo lleve al extremo de ser en equidad, cuando expresamente las partes acordaron que fuera en derecho, o que no se hubieran aplicado las normas acordadas*" (sentencia SC5677-2018 del 19 de julio de 2018).

De ahí que, comoquiera que en este asunto se verificó que la decisión recurrida se soportó ampliamente en el acervo probatorio y la normatividad sustancial y adjetiva aplicable al caso, es improcedente que se etiquete como un fallo en conciencia o en equidad.

2.6. Por consiguiente, se declarará infundada la causal de anulación propuesta por la recurrente.

3. Puestas de este modo las cosas, se concluye que el Tribunal de Arbitramento no incurrió en la causal 7ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012; por lo que, en consecuencia, se declarará infundado el recurso de anulación; por consiguiente, se condenará en costas a la parte recurrente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de anulación formulado contra el laudo arbitral expedido el 5 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el cual se puso fin al proceso arbitral que cursaba entre Organización Terpel SA contra Inversiones Medrano O' Meara SAS.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente.

TERCERO: En su oportunidad, devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada
11001220300020230045800

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada
11001220300020230045800

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
Magistrado
11001220300020230045800

-2-

Tribunal Superior de Bogotá, D.C.

Firmado Por:

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c5c45da1363ccd028c3ae2f8c3e1a11237b068674bc883c8ba2a85735b0db820**
Documento generado en 28/04/2023 10:31:29 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: RICARDO ACOSTA BUITRAGO

Proceso	Verbal – RCC
Demandante	Verónica Ángel Sanabria y Henry Arévalo Huertas
Demandado	Liliana Huertas Viuda de Huertas
Motivo	Conflicto de competencia

Seria del caso decidir el conflicto que en torno a la competencia enfrentó a los Juzgados 9° Civil Municipal y 49 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta ciudad, para conocer el asunto de la referencia, de no ser porque se advierte que este Tribunal no es competente para su resolución.

Obsérvese que el art. 139 del C.G.P. en su inciso primero establece que *"siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común de ambos, al que enviará la actuación".*

Por lo tanto, pese a que los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple conocen asuntos en única instancia a nivel local y municipal según lo previsto por la Ley 270 de 1996[1], esta determinación los sitúa en una categoría inferior a la del juez del circuito, razón por la cual este último se considera como su superior, por lo tanto, en *stricto sensu* es el juez mencionado el superior funcional común de los despachos en contienda.

En consecuencia, se resuelve;

No avocar conocimiento del conflicto suscitado entre los juzgados 9° Civil Municipal y 49 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta ciudad. Por secretaría remítase el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito – Reparto para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE,

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

[1] *Art. 9: Parágrafo 1o. "La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local".*

RIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés

11001 2203 000 2023 00927 00

Ref. Recusación frente a la doctora Nancy Liliana Fuentes Velandia, Juez Quinto Civil del Circuito de Bogotá

Con soporte en lo que manda el inciso tercero del artículo 143 del C. G. del P., el suscrito Magistrado decide sobre la recusación que formuló el demandado Jorge Helí Gamba Martínez frente a la doctora Nancy Liliana Fuentes Velandia, titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso verbal (de nulidad de promesa de compraventa) que adelanta María Cecilia Bohórquez contra el ahora recusante, Rad. 11001 3103 005 2019 00103 00.

ANTECEDENTES

1. En audiencia de 24 de abril de 2023, el opositor en el proceso verbal al que se hizo alusión formuló la referida recusación, con soporte, según lo manifestó, en el artículo 121 del C. G. del P., esto ante el vencimiento del término de un año para dictar sentencia de primera instancia, sin que se hubiera proferido esa decisión de fondo.

2. La doctora Nancy Liliana Fuentes Velandia no aceptó la recusación. Señaló que "la solicitud no encaja en ninguna de las causales del artículo 141 del C. G. P., por ende se rechaza de plano por así autorizarlo el artículo 142, empero se tiene que el artículo 143 del C. G. P., señala que si no se acepta la recusación remitirá el expediente al superior".

CONSIDERACIONES

1. Ante las previsiones que contempla el inciso final del artículo 142 del C. G. del P., no se acogerá la causal de recusación que impetró el señor Gamba Martínez, demandado en el proceso verbal de la referencia.

La aludida circunstancia (haber vencido el término de duración del proceso previsto en el artículo 121 del C. G. del P., sin que se hubiera proferido sentencia), no corresponde a ninguna de aquellas hipótesis que, taxativamente, como causal de recusación prevé el artículo 141 del C. G. del P., o sus normas concordantes.

Memórese que "las causales de impedimento y de recusación **se rigen por los principios de especificidad y de taxatividad**, de ahí que al magistrado o juez, no le es permitido fundar un impedimento atendiendo circunstancias ajenas a los motivos previstos por el legislador"[1].

2. No se atenderá, entonces, la recusación en estudio.

DECISIÓN

Así las cosas, el suscrito Magistrado declara infundada la recusación que presentó Jorge Helí Gamba Martínez frente a la doctora Nancy Liliana Fuentes Velandia, Juez Quinta Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso verbal que adelanta María Cecilia Bohórquez contra el recusante, Rad. 11001 3103 005 2019 00103 00.

Devuélvase la actuación a la oficina de origen.

Notifíquese y cúmplase

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **200906815460ea8ca25f9d8e928626397a78ce2339dcc2b500c67db341ec2b9a**
Documento generado en 28/04/2023 03:29:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[1] CSJ., auto de 18 de diciembre de 2013, exp. 2010 01284 00

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

Radicado: 11001 22 03 000 2023 00930 00, **Recusación, proceso ejecutivo de Salazar Ingeniería S.A.S. contra Dent Holding S.A.S., radicado 11001 31 03 041 2018 00295 00**.

Se resuelve la recusación formulada por el apoderado de los demandados José Luis Pulido Martínez, María Claudia Ramírez Martínez y Carmen Elsy Martínez de Pulido contra la titular del Juzgado 41 Civil del Circuito.

ANTECEDENTES

1. En resumen, la recusación, que se formuló en audiencia celebrada el 21 de abril de 2023, se fundamentó en que el apoderado de la sociedad demandante radicó queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina judicial.

2. En decisión adoptada en esa misma diligencia, la Juez 41 expresó que no se configura la recusación alegada, comoquiera que la queja tendría lugar por cuenta del mismo proceso y porque aún no se la ha vinculado a la misma.

CONSIDERACIONES

1. La recusación formulada se decidirá de plano por el magistrado sustanciador, pues ni en el artículo 35 Cgp, ni en el 142 de la misma normatividad, se establece que la providencia mediante la cual se resuelve ese tipo de solicitud deba ser proferida en Sala de Decisión, cuando la definición corresponde a un órgano colegiado.

2. Despejado lo anterior, es necesario precisar que la competencia en materia de recusaciones se circunscribe a determinar si el funcionario judicial que conoce del proceso, en efecto, debe separarse del mismo por estar inmerso en alguna de los supuestos consagrados en el artículo 141 Cgp, específicamente en la invocada por la parte respectiva, haciendo total abstracción de cualquier consideración de fondo de la actuación subyacente. En otras palabras, ningún pronunciamiento respecto a la resolución de fondo del caso o acción judicial promovida puede efectuarse en esta sede.

3. Entrando en materia, debe decirse que con la finalidad de tramitar el proceso con la debida transparencia, el legislador determinó una serie de circunstancias en virtud de las cuales resulta viable que el conocimiento del asunto respectivo recaiga en un funcionario distinto del recusado, pues, según la situación de que se trate puede verse comprometida la imparcialidad que supone debe imperar en la actuación, y en ella, varios de los principios en que se sustenta el debido proceso y el derecho a la defensa.

4. Acá el apoderado de las personas naturales demandadas invocó, en últimas, la causal establecida en el numeral 7 del artículo 141 Cgp, porque el apoderado de la ejecutante radicó queja disciplinaria frente a la Juez 41 Civil del Circuito, como consta en la página de consulta de procesos.

Sin embargo, y sin que sea necesario entrar en mayores discernimientos, al rompe se observa que la situación fáctica y las razones aducidas no se enmarcan dentro del supuesto de hecho o hipótesis consagrada en la referida causal, pues la misma se presenta únicamente en el evento en que la denuncia penal o disciplinaria se *"refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado e halle*

vinculado a la investigación”, y acá, según se refirió en el curso de la audiencia de marras, la queja tuvo lugar por cuenta del proceso ejecutivo subyacente y en todo caso la Juez no ha sido vinculada ni notificada formalmente a ese trámite.

Cabe acotar, entonces, que la referida causal no se configura solo por el de la formulación de una queja o denuncia, pues deben cumplirse requisitos adicionales para que le sea dado separar al funcionario del conocimiento y resolución del asunto, esto es, que la queja **no** tenga relación con el proceso **y** que el juez hubiere sido vinculado al trámite respectivo, lo que no ocurre en el presente caso.

5. Por lo anterior, la recusación formulada carece de fundamento.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara **INFUNDADA** la recusación formulada dentro del trámite subyacente.

Devuélvase el expediente al Juzgado 41 Civil del Circuito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
El Magistrado,

GERMAN VALENZUELA VALBUENA

Firmado Por:

German Valenzuela Valbuena

Magistrado

Sala 019 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e4be0748af72ec99c0d16e181cff18553fbbccc1c444b350fde4035f01c23d12**

Documento generado en 28/04/2023 11:58:57 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-001-2017-00360-03
Demandante: FRANCISCO HENRY POVEDA TRIANA y otros.
Demandado: POLITÉCNICO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR y otros.

Se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por ambos extremos de la litis, contra la sentencia del 09 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, en el efecto **devolutivo** (artículo 327 del Código General del Proceso).

COMUNÍQUESE de esta decisión al juez de primera instancia y comoquiera que, según el párrafo anterior y en aplicación de la parte final del artículo 325 *ibídem*, se ajustó el efecto en que fue concedida la alzada, por no encuadrar la providencia atacada el segundo supuesto del numeral 3º inciso segundo del artículo 323 *ejusdem*.

Imprímasele a este asunto el trámite consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la alzada.

En firme este auto, la Secretaría **REINGRESE** el proceso al Despacho, con el fin de impartir el trámite que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Rad.No.110013199001**20199711**701

Visto el informe secretarial de ingreso[1], conforme a las documentales que obran y virtud al curso procesal, el Despacho DISPONE:

RESOLVER la solicitud de corrección de la cifra consignada en el apartado de la condena en costas "ACLARACIÓN DE SENTENCIA"[2], la cual fue proferida por esta sala el 7 de marzo de 2023, respecto a la cual el apoderado adujo que en la condena en costas se impuso la suma de quinientos mil pesos; "pero por error involuntario y aritmético del tribunal numéricamente consignaron $5.000.000. m/l. por lo que solicito se corrija el mismo"[3].

A estos efectos cumple precisar que el art.286 DEL Estatuto Procesal prevé que,

> "Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.
>
> Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.
>
> Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella".

[1] Del 26 de marzo de 2023.
[2] PDF.28 Solicita Aclaración y Adición. Cuaderno Tribunal
[3] PDF.28 Solicita Aclaración y Adición. Cuaderno Tribunal, fl.4-5

En el caso concreto, se puede leer en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia: "CONDENAR EN COSTAS de instancia a la apelante y al efecto fijar como agencias en derecho por la magistrada sustanciadora, la suma de Quinientos mil pesos ($5.000.000. oo) M/cte. Liquídense. (art.366 del C.G.P.)". Es evidente el *lapsus* en que se incurrió al expresar en cifras numéricas, lo que claramente se había dispuesto en la expresión alfabética de la cifra, por lo que sin duda hay lugar a corregir el valor como un simple error aritmético por el digito de más adicionado. (Todo esto es de auto de ponente).

En consideración a lo expuesto, la Magistrada Ponente, RESUELVE;

DECISIÓN

PRIMERO: **CORREGIR** en ordinal tercero de la sentencia, de acuerdo con lo expresado en la parte considerativa, el cual quedará así: "**CONDENAR EN COSTAS** de instancia a la apelante y al efecto fijar como agencias en derecho por la magistrada sustanciadora, la suma de Quinientos mil pesos ($500.000. oo) M/cte. Liquídense. (art.366 del C.G.P.)".

SEGUNDO: **ORDENAR** que, por secretaría se devuelva el expediente al despacho de origen y, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.



LUZ STELLA AGRAY VARGAS
Magistrada

Firmado Por:

Luz Stella Agray Vargas

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eb6cf80d57babc1c4dfca1358bdc0bd19dd344793cf67d941c9c14508d0929e4**

Documento generado en 28/04/2023 03:58:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
SALA CUARTA DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Magistrada Ponente:	Luz Stella Agray Vargas
Radicado:	No.110013199001**20199711**701
Primera Instancia:	Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio
Proceso:	Verbal de Protección al Consumidor
Demandante:	Lorena Margarita Andrade Maya
Demandada:	Urbanizadora Marín Valencia S.A. "MARVAL"
Asunto:	Solicitud de Adición y Aclaración de Sentencia

Procede la Sala a resolver sobre la solicitud formulada por el apoderado de la parte demandante de "ADICION Y ACLARACIÓN DE SENTENCIA"[1], la cual fue emitida por esta Sala el 7 de marzo de 2023, previos los siguientes;

I. ANTECEDENTES

1. Proferida la sentencia, antes de su ejecutoria, el apoderado de la parte actora radicó memorial en el que solicitó "ADICIÓN Y ACLARACIÓN DE SENTENCIA"[2], específicamente, referido a la adición sobre la pretensión de nulidad.

2. Plantea el apoderado que la honorable "JUEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA CUARTA DE DECISION CIVIL, omitió entre sus decisiones pronunciarse ante la PRETENSION # 3 de la DEMANDA INICIAL" en la cual se solicitó que se declarara la nulidad de la oferta de compraventa. Concreta su solicitud a que; "… la pretensión tercera de NULIDAD DE LA OFERTA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, firmada entre las partes como consecuencia de la oferta viciada hecha hacia mi mandante, sea llamada a prosperar"[3].

---

[1] PDF.28 Solicita Aclaración y Adición. Cuaderno Tribunal
[2] PDF.28 Solicita Aclaración y Adición. Cuaderno Tribunal, fl. 3.
[3] PDF.28 Solicita Aclaración y Adición. Cuaderno Tribunal, fl. 4.

II. CONSIDERACIONES

1. A efectos de resolver la solicitud impetrada, es del caso memorar que el art.287 del Código General del Proceso dispone que "[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad".

2. En la parte resolutiva de la sentencia materia de examen, en el ordinal primero, se dispuso "REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio el 23 de febrero de 2021, dentro del proceso verbal de protección al consumidor incoado por LORENA MARGARITA ANDRADE MAYA, contra URBANIZADORA MARÍN VALENCIA S.A., "MARVAL", y al efecto, modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia, para declarar la prosperidad de la pretensión cuarta. En lo demás, la sentencia queda incólume, conforme a las razones expuestas"[4].

3. Lo primero es advertir, que el recurso de apelación en nuestra ley procesal civil, prevé la revisión de la sentencia objeto de recurso a partir de unos reparos concretos elevados por el quejoso; es decir, no se hace una revisión panorámica del proceso, pues el objeto de la decisión recae específicamente sobre la sentencia de primer grado, para determinar si se revoca, modifica o confirma; en uno, algunos o todos sus puntos declarativos o de condenas.

4. Vista la parte resolutiva de la sentencia de esta Sala, refulge que se modificó el ordinal segundo del fallo proferido por la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para en su lugar, declarar la prosperidad de la pretensión cuarta. Y, memórese, el ordinal segundo del fallo de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales desestimó las pretensiones, segunda a octava de la demanda reformada.

5. Es evidente que lo hecho por esta Sala, según la resolutiva transcrita, fue modificar ese ordinal, no revocarlo. Las consecuencias de una y otras son distintas. Esa variación consistió en conceder la pretensión cuarta; esto es, "ordenar a la URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. la devolución del dinero cancelado por concepto de cuota inicial del proyecto por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($86.529.820) debidamente indexado con base en la variación del IPC". Sin embargo, claramente se expresó que, en los demás puntos, la decisión de primer grado permanecía inalterada; en decir, como no se revocó, es claro, como literalmente se expresó, que se confirmó la negativa de la pretensión tercera sobre la que ahora se solicita adición. Precisado lo anterior, refulge que no existe pretensión sin pronunciamiento, como lo quiere hacer ver el recurrente, lo cierto es que no se cumplen los presupuestos para acceder a la solicitud deprecada.

---

[4] PDF.27 Sentencia Revoca Parcialmente. Cuaderno Tribunal, fl 14.

6. Ahora, incluso si hipotéticamente se admitiera que falta pronunciamiento, es del caso advertir que en un camino procesal como el escogido por el actor, y ante la autoridad que lo hizo, la Superintendencia de Industria y Comercio en su faceta jurisdiccional, no resulta apto el estudio de tal pretensión, pues la habilitación de esa ruta de protección es dada por el Estatuto de Protección al Consumidor, que no dota de competencia para la declaración de nulidad de un negocio jurídico. Únicamente de forma ejemplificativa, incluso la Delegatura mencionada reconoce su falta de competencia en esos aspectos: "La solicitud de una declaración de nulidad de un acto o contrato en su totalidad debe hacerse a través de la acción ordinaria que busca la nulidad absoluta o relativa"[5].

Finalmente, en cuanto hace a la corrección del lapsus numérico que se advierte en lo relativo a las costas fijadas, ese aspecto será materia de decisión en auto separado de esta misma fecha y por la magistrada ponente.

En consideración a lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley RESUELVE;

III. DECISIÓN

PRIMERO: **NEGAR** la solicitud de adición a la sentencia por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: **ORDENAR** que, por secretaría se devuelva el expediente al despacho de origen y, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.



LUZ STELLA AGRAY VARGAS
Magistrada

AÍDA VICTORIA LOZANO RICO
Magistrada

CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA
Magistrada

[5] Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para asuntos jurisdiccionales. Sentencia No. 11003 del 20 de octubre de 2022, radicado interno 21-375720

Firmado Por:

Luz Stella Agray Vargas
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Aida Victoria Lozano Rico
Magistrada
Sala 016 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 268850ec1a8846006aa0b4f823ca314e5ead6a9885de9e7a1e4dc20ffd7675ba
Documento generado en 28/04/2023 04:18:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA
MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Proceso Verbal (Competencia Desleal) de la sociedad Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. contra la sociedad Partners Colombia S.A.S.

Rad. 01 2020 22558 05

El Despacho procede elevar la consulta obligatoria de interpretación prejudicial respecto de los artículos 134, 137, 155, 156, 157, 238, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000 ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en aplicación del artículo 33[1] del Tratado de Creación del citado Tribunal, en concordancia con el artículo 123[2] de su Estatuto, así:

I. Identificación de la causa que origina la solicitud.

[1] "***Artículo 33***.- *Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.*

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal".

[2] "***Artículo 123***. *De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal".*

Se trata de una acción por competencia desleal promovida por la sociedad Comcel S.A. contra la sociedad Partners Colombia S.A.S., por incurrir en actos de competencia desleal previstos en la Ley 256 de 1996, a partir, principalmente, del uso de la cuenta en redes sociales denominada *"@Clavostar".*

II. Informe sucinto de los hechos relevantes de la demanda y su contestación. Que pasan a exponerse así:

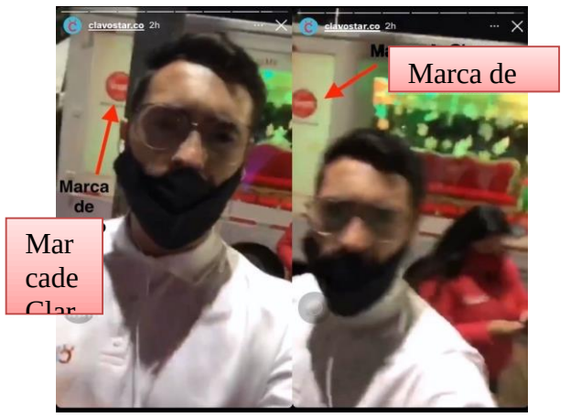
2.1. Aduce la demandante que la convocada materializa sus actos y conductas de competencia desleal, a través de la cuenta denominada "@clavostar" en redes sociales como Instagram, Twitter y Youtube, y a través de su contenido incentiva a los usuarios para portarse de operador a través de *"comentarios desleales, publicidad maliciosa, falsa y errónea, y contraria a las sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en materia industrial y comercial".*



Indicó que, además, la convocada solicitó el registro de la marca mixta *"clavostar" ("del acrónimo Claro y Movistar")* que para la fecha en que se promovió esta acción se encontraba bajo *"examen formal"* en la Superintendencia de Industria y Comercio. Aseguró que la marca pretende representar a sus competidores de forma maliciosa, especialmente a Comcel.

Lo anterior, por cuanto es notorio que la letra "C" de la primera sílaba alude a Claro y los cachos que obran encima de ella hacen alusión a un demonio que busca denigrar los servicios de Claro.

Además de lo anterior, aseguró que la convocada en varios eventos masivos y públicos, como el lanzamiento de la marca WOM, se refirió a la competencia como *"abusadores"* y *"mentirosos",* entre otros adjetivos, representándolos en globos en forma de *"bebes llorones",* aunado a la publicación de videos cortos que hacen alusión a la presencia de *"Clavostar"* en los citados eventos y en el que se advierten marcas y logotipos de Claro.



Informó que, entre otras conductas, su representada utilizó una campaña que denominó *"#MagíaYEspranza",* la cual fue utilizada en las redes sociales para continuar con el desprestigió y la convirtió *"MafiaYEsperanza"* para señalar que se cobran precios excesivos a los consumidores.

III. Actuación procesal.

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de primera instancia, en sentencia de 28 de octubre de 2022, resolvió:

> *"PRIMERO: PROHIBIR a Partners Telecom Colombia desplegar conductas constitutivas del acto desleal de descrédito previsto en el artículo 12 de la Ley 256 de 1996, el cual se materializa mediante el uso de contenido en redes sociales, específicamente en Twitter, y de publicidad, haciendo difusión de aseveraciones inexactas en contra de Comcel, donde se incluyan las expresiones "mafia" y "mermelada", en la forma que fue analizada en la presente providencia.*
>
> *SEGUNDO: ORDENAR a Partners cesar de manera inmediata la difusión de información inexacta sobre Claro, en los diferentes medios de comunicación y redes sociales en donde se incluyan las expresiones "mafia" y "mermelada", en la forma que fue analizada en esta providencia.*

TERCERO: ORDENAR a Partners Telecom Colombia que proceda a retirar, en el término de 10 días hábiles siguientes a la presente providencia, todos los mensajes publicados desde las cuentas en redes sociales, de titularidad de la demandada, con los cuales se haya dado respuesta a los mensajes de los usuarios de Comcel dirigidos a las cuentas oficiales de la demandante, a través de las redes sociales, desde el 4 de noviembre de 2020 hasta la fecha de la presente providencia donde se incluyan las expresiones "mafia" y/o "mermelada", en la forma como fue analizado en esta providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Para tal efecto se fijan como agencias en derecho la suma de 3 SMLMV, es decir, la suma de TRES MILLONES DE PESOS los cuales deberán ser reconocidos a favor de la demandante."

Para fundamentar su decisión, la funcionaria de conocimiento adujo que, de acuerdo con el acervo probatorio, se concluyó que a pesar de que la demandada arguyó que las expresiones *"mermelada"* y *"mafia"* tuvieron una connotación *"humorística y satírica",* las mismas sí fueron utilizadas de manera inexacta para desarrollar actos de descrédito de la demandante; y que varias manifestaciones o afirmaciones crearon un escenario potencialmente apto para desprestigiar a la demandante frente al mercado.

Agregó que la información no ha sido precisa, sino inexacta, en razón a que, si bien la demandada aseguró que la campaña se fundamentó en la sátira y humor, ello no se advirtió al público; además el hecho que las afirmaciones o aseveraciones se hubieren efectuado con tono humorístico, no le quita las afectaciones que puede tener el competidor en el mercado, máxime cuando son vistas y escuchadas directamente por el consumidor, es decir, por el mercado en general.

Con respecto a la utilización de signos y colores en la palabra *"Clavostar"* señaló que tales circunstancias, especialmente, la figura de los cachos encima de la letra C, no evocan en los consumidores la percepción que la compañía demandante sea *"diabólica o malévola",* sino que corresponde a una conjetura de la convocante.

Con relación a las demás pretensiones, encaminadas a declarar que existe una competencia desleal por actos de engaño o desviación de la clientela, entre otros, expresó que las pruebas no enseñan que ello no se

configuró a partir de la conducta reprochada a la demandada, puesto que la utilización de los signos como la sílaba *"cla"* y el color *"rojo",* no implica el engaño a los consumidores, ni la conducta tuvo la capacidad de inducir en error por objeto o por defecto al público consumidor con las manifestaciones efectuadas por la demandada, o que hayan tomado la decisión de portarse de operador.

IV. El recurso.

Ambos extremos procesales apelaron la anterior determinación.

La parte demandante entre sus argumentos esgrimió que los actos desleales de descrédito van más allá de lo concedido en la sentencia, en especial, sobre las expresiones *"mafia y mermelada",* además que la providencia no se refirió a otras igual de dañinas; indicó que la orden es general, abstracta e incompleta, razón por la cual la sentencia debe ser adicionada y modificada.

Por su parte, el apoderado de la sociedad convocada indicó que la funcionaria de conocimiento erró al concluir que las mencionadas expresiones fueron inexactas y que se debió advertir al público lo que se quiso significar con ellas al momento de su uso, pues antes de ello la compañía realizó un estudio con la asesoría de expertos para planear la estrategia de publicidad dirigido al *"consumidor medio".* Agregó que el juicio contenido en la determinación de decretar las medidas cautelares, *"no constituye respaldo suficiente para el acto de descrédito".*

V. La consulta. Con base en los antecedentes que vienen de reseñarse, se solicita al Tribunal Andino emitir interpretación prejudicial respecto de las normas en comento y, de ser posible, absolver los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cuáles son los criterios para considerar desleal un acto vinculado a la propiedad industrial y si éste es contrario a los usos y prácticas honestas, según lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta la estrategia publicitaria que se pueda hacer de un producto o servicio de telefonía móvil?

2. ¿Cuáles son los indicios o criterios para considerar si la solicitud de registro de la marca *"Clavostar"* se elevó para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, de acuerdo con el contenido del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000?
3. ¿Si la autoridad administrativa concede el registro de la marca, exime ello al juez que conoce de la infracción de competencia el análisis de los hechos soportado en su uso?
4. ¿Cuáles son los criterios, de acuerdo con el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2009, para distinguir si existe una pretensión clara de crear confusión, por medio de publicidad y contenido en las redes sociales, respecto de los servicios que presta un operador de telefonía móvil, como lo es en este caso, la demandante, al tenor de la publicidad que ha desplegado la convocada?
5. ¿Cuáles son los indicios para establecer si las aseveraciones través de una estrategia publicitaria pueden crear confusión, descrédito o inducción a error sobre las características y aptitud de los servicios del competidor, conforme a los literales a) y b) del artículo 259?
6. ¿Cuáles son los límites de la Sátira y/o el humor dentro de las campañas publicitarias que directa o indirectamente hacen referencia a la marca o el servicio que presta u ofrece un competidor? ¿Son admisibles?
7. ¿Son o no constitutivas de infracción, las campañas publicitarias que se hacen de un producto, marca o servicio, con utilización distorsionada de elementos, palabras, símbolos, colores que previamente ha utilizado el competidor dentro de las suyas?

En esos términos y cumplidas como están las exigencias formales de la solicitud de interpretación prejudicial obligatoria, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: **ELEVAR** ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consulta obligatoria de interpretación prejudicial de los artículos 134, 155, 238, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000, en los términos expuestos, dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: **SUSPENDER** el trámite del proceso hasta tanto se reciba la respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TERCERO: **ORDENAR** que la Secretaría de la Sala Civil de este Tribunal remita el oficio respectivo, **acompañado del enlace del expediente** al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para los efectos recuérdese que en anteriores oportunidades esa Corporación ha autorizado remitir vía correo electrónico las consultas prejudiciales y con esos fines proporcionó la dirección secretaria@tribunalandino.org y/o en su defecto remítase la solicitud a la sede de ese Tribunal, ubicado en la calle de Juan de Dios Martínez Mera N° 34-380 y Portugal, en la ciudad de Quito, Ecuador, PBX: (593-2) 3330610 P. O. BOX 17079054, **sin que resulte necesario para estos efectos adelantar el trámite de exhorto por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores**.

CUARTO: **INFORMAR** al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que podrá enviar la respuesta a esta solicitud a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sede en la Avenida calle 24 N° 53 – 28, Oficina 305 C, de la ciudad de Bogotá, Colombia, Teléfono: (57 1) 4233390 extensión 8349 y/o a la dirección electrónica que para esos efectos suministre la Secretaría de esta Corporación.

QUINTO: **COMUNÍQUESE** esta decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Magistrada

01 - 2020 – 22558 - 05

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **38c836f9dbf18cfd35bd3ce5e03ea9f163b9d0fdcb9012632d149b2c1a244b07**

Documento generado en 28/04/2023 10:23:17 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-002-2012-00579-01
Demandante: INGRID LORENA CADENA DÍAZ y otros.
Demandado: SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN y otros.

Para todos los fines legales a que haya lugar, téngase en cuenta que el señor **Édgar Mauricio Ramos Elizalde**, mandatario de la extinta Saludcoop EPS en liquidación y a quien se vinculó en providencia del pasado 31 de marzo de 2023, fue enterado de la existencia de este proceso el 10 de abril siguiente[1]. El intimado guardó silencio.

En firme esta decisión, **REINGRESE** el expediente al despacho con miras a proveer la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y cúmplase,

FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

[1] Archivo No. 06OficioC-0302.pdf.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Ejecutivo
Radicación N°: 11001310300220200004301
Demandante: Inversiones Caminos Inmobiliarios S.A. y otros
Demandado: Industrias El Tabor S.A.S.

ADMITIR el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia anticipada proferida el 17 de marzo de 2021 por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Bogotá, de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** al recurrente el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que proceda a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formuló ante el Juez *a quo*; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir al recurrente que, en ese **lapso y en esta instancia deberá sustentar los reparos concretos que formuló ante el *a quo*, o manifestar si se tiene como sustentación el escrito que presentó ante el juez de instancia, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **01cd6c7208a43ced2ca9206a7b50f736e826a294f735dd46960c7e4ae1795326**

Documento generado en 28/04/2023 04:33:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Magistrada Sustanciadora
MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto. Proceso Verbal (Desestimación de la persona jurídica) de la sociedad Grúas Pereira S.A. contra Sydelta S.A.S. ESP e Hidroturbinas Delta S.A.S.

Rad. 02 2020 00325 03

En razón a que la sentencia de primera instancia data del 14 de junio de 2022 fue repartida al Despacho el 15 de diciembre de 2022 para resolver el recurso de alzada, empero, en el mismo asunto, radicación 01, mediante auto de 19 de septiembre de 2022, se revocó la determinación de 17 de mayo de 2022, donde se negó el decreto y práctica de unos testimonios, y en tal sentido se accedió a ellos en esta sede, el Despacho

DISPONE:

PRIMERO. DECRETAR los testimonios de los señores Diego Cañas y María Isabel Aponte, solicitados por la parte demandante.

SEGUNDO. SEÑALAR la hora de las 9:00 a.m. del 24 de mayo de 2023, para llevar a cabo audiencia para recibir los testimonios señalados en el numeral anterior, la que se realizará de en una de las salas de audiencia de esta Corporación. Los enlaces de vinculación a los testigos y partes se enviarán a los correos previamente registrados. Quienes prefieran asistir presencialmente a las instalaciones del Tribunal, podrán hacerlo.

NOTIFÍQUESE,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **28dde0f097ae62c5f1dbe0e7301164fd1d2949a60850026cef58b033fb52259c**

Documento generado en 28/04/2023 10:19:08 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Rad. No. 110013199003**20210496**301

Visto el informe secretarial de ingreso[1], conforme a las documentales que obran y virtud al curso procesal, el Despacho DISPONE:

PRIMERO: **ADMITIR** en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia de 29 de agosto de 2022, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia.

SEGUNDO: **ADVERTIR** a la parte apelante que cuenta con cinco (5) días para sustentar el recurso de apelación tras la ejecutoria de este auto a través del correo electrónico de la secretaría del tribunal[2], enviando copia del memorial a la contraparte[3], quien tendrá cinco (5) días para pronunciarse. (art.12 de la Ley 2213 de 2022)

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

LUZ STELLA AGRAY VARGAS
Magistrada

[1] Del 17 de abril de 2023. La carga completa del expediente se realizó el 28 de abril de 2023.
[2] secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
[3] Num.14 del art.78 del C.G.P., y art.9 de la Ley 2213 de 2022.

Firmado Por:

Luz Stella Agray Vargas

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fe40f0bfa0075e36c6f1f4b9cbff0a4488c365b1620e77c9df585bbfceb87df7**

Documento generado en 28/04/2023 03:58:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Rad. No.110013199003**20220071901**

Visto el informe secretarial de ingreso[1], conforme a las documentales que obran y virtud al curso procesal, el Despacho DISPONE:

PRIMERO: **ADMITIR** en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia de 24 de enero de 2023, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia

SEGUNDO: **ADVERTIR** a la parte apelante que cuenta con cinco (5) días para sustentar el recurso de apelación tras la ejecutoria de este auto a través del correo electrónico de la secretaría del tribunal[2], enviando copia del memorial a la contraparte[3], quien tendrá cinco (5) días para pronunciarse. (art.12 de la Ley 2213 de 2022)

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

LUZ STELLA AGRAY VARGAS
Magistrada

[1] Del 29 de marzo de 2023. La carga completa del expediente se realizó el 28 de abril de 2023.
[2] secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
[3] Num. 14 del art.78 del C.G.P., y art.9 de la Ley 2213 de 2022.

Firmado Por:

Luz Stella Agray Vargas

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **be0531cd5d9b81506164afb3b5c5a22164da20d7602dfc07643f504c0e45c8d6**

Documento generado en 28/04/2023 03:58:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16248

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-99-003-2022-00958-02

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, se evidencia que el término para proferir la sentencia, está próximo a fenecer, de conformidad, con lo normado en el inciso 4° del artículo 121 del Código General del Proceso, se **RESUELVE**:

PRIMERO: PRORRÓGUESE por única vez, hasta por el término de seis (6) meses el plazo de duración de la presente instancia, contabilizado desde el 2 de mayo de la presente anualidad.

SEGUNDO: Por secretaría contrólese el término para proferir la decisión de segunda instancia en este proceso, el que en ningún caso debe sobrepasar del 2 de noviembre del 2023.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
Magistrada

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fbbcdc5090cc3e5513dc2c1f8263bcaf6ec2c8ebd4690376053b0b023cc6bb22**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-99-003-2022-01240-02
Demandante: CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A
Demandado: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el efecto **suspensivo** (artículo 327 del Código procesal).

Imprímasele a este asunto el trámite consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la alzada.

En firme este auto, la Secretaría **REINGRESE** el proceso al Despacho, con el fin de impartir el trámite que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-99-003-2022-01821-01
Demandante: CONSTRUCCIONES JL FABRIRIS S.A.S.
Demandado: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

Se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por ambos extremos de la litis, contra la sentencia del 23 de febrero de 2023, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el efecto **suspensivo** (artículo 327 del Código General del Proceso).

Imprímasele a este asunto el trámite consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la alzada.

En firme este auto, la Secretaría **REINGRESE** el proceso al Despacho, con el fin de impartir el trámite que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Proceso No.	11001310300420200008605
Clase:	VERBAL
Demandantes:	OLITOCOMPU LTDA.
Demandado:	JAIME VALDIVIESO CAMACHO, MARIO GERARDO VALDIVIESO CAMACHO y CORPORACIÓN DE CAPACITADORES NUEVO MILENIO LTDA.

El suscrito magistrado declarará inadmisible el recurso de apelación que la parte demandante impetró contra el auto que en audiencia de 7 de diciembre de 2022 profirió el Juzgado 4º Civil del Circuito de esta ciudad, mediante el cual negó el decreto de un dictamen pericial, pues dicho medio de impugnación deviene improcedente, como procede a exponerse.

En la actuación del epígrafe, el *a quo* al referirse a los medios suasorios deprecados por los extremos procesales, decretó entre otras pruebas solicitadas por la actora, el testimonio de los señores Mónica López y Juan López, y negó el dictamen pericial solicitado al descorrer el traslado de la demanda, toda vez que no fue aportado en la oportunidad contemplada en el artículo 227 del CGP.

Frente a dicha decisión, la parte demandante, de un lado, solicitó adición de la providencia para que se decrete el testimonio del señor Jaime Valdivieso; y de otro, interpuso recurso de reposición contra la negativa a decretar el dictamen pericial, sustentada en que al descorrer el traslado de la objeción al juramento estimatorio presentada por la pasiva, reprochó el incumplimiento a lo reglado en el articulo 206 del CGP, por lo que debe declarase infundada esa objeción, o decretarse la pericia deprecada para esclarecer los hechos de las demanda.

El juez de primer grado, al pronunciarse sobre esos pedimentos, en primer lugar, negó la adición del aludido proveído al estimar que es no es necesario convocar al señor Valdivieso, y en segundo lugar, al pronunciarse

sobre el referido recurso de reposición, confirmó la negativa al decreto del dictamen pericial porque al corrérsele traslado de la objeción, la actora no presentó ningún reparo, no existiendo ningún motivo que habilite la práctica de la pericia implorada, pues la sociedad demandante no la aportó en el momento procesal oportuno como le correspondía, según la norma procesal. Contra esas decisiones la parte actora impetró recursos de apelación, que fueron en su totalidad concedidos por el juez de primer grado.

No obstante, en virtud de lo reglado en el numeral 2° del artículo 322 del CGP, "[l]a apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición", por lo que si lo pretendido por la sociedad demandante era que esa determinación fuera también examinada por el superior jerárquico del *a quo*, debió haber interpuesto la alzada de forma subsidiaria, sin que así haya procedido, pues únicamente formuló recurso de reposición contra el auto que negó el dictamen pericial.

Y es que, no puede decirse que la resolución sobre la adición deprecada para que se decrete el testimonio del señor Jaime Valdivieso, habilitaba la interposición de la alzada en los términos a que se refiere el inciso segundo de la citada normativa[1], pues la decisión referente a la negativa de la pericia es independiente a que versa sobre la adición de la determinación que no decretó el testimonio del señor Valdivieso.

Bajo ese horizonte, deviene palmario que el recurso de alzada impetrado por la actora, contra el auto que en audiencia de 7 de diciembre de 2022 emitió el juez *a quo*, a través del cual al resolver el recurso de reposición que impetró contra el auto de pruebas que negó el decretó del dictamen pericial deprecado, deviene improcedente.

En consecuencia, como contra la decisión objeto de reproche no procede el recurso de apelación, el suscrito magistrado, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 326 *ídem*[2].

RESUELVE

Declarar inadmisible el recurso de apelación que la parte demandante impetró contra el auto que en audiencia de 7 de diciembre de 2022 profirió el Juzgado 4º Civil del Circuito de esta ciudad, conforme a lo expuesto.

---

[1] "Proferida una providencia complementaria o que niegue la adición solicitada, dentro del término de ejecutoria de esta también se podrá apelar de la principal. La apelación contra una providencia comprende la de aquella que resolvió sobre la complementación"

[2] "Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, así lo decidirá en auto; en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso. (…)".

NOTIFÍQUESE

El Magistrado,

Firmado Por:
Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8d14fe7bda2e9129b21f90b5572bc4209685c594838fd43557181bc51e5f311a**
Documento generado en 28/04/2023 03:43:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Proceso N.°	11001310300420220051601
Clase:	EJECUTIVO
Demandante:	RENTAHOUSE COLOMBIA S.A.S.
Demandada:	INVERSIONES FERMOSELLE Y CÍA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, ULPIANO PUENTE CRISTANCHO y MARGARITA ESTHER MORALES DE PUENTE.

Se resuelve la apelación que la parte ejecutante interpuso contra el auto de 1º de febrero de 2023 proferido por el Juzgado 4º Civil del Circuito de esta ciudad, con el que le negó el mandamiento de pago.

ANTECEDENTES

Rentahouse Colombia S.A.S. solicitó librar orden de apremio contra Inversiones Fermoselle y Cía. S. en C. - En Liquidación, Ulpiano Puente Cristancho y Margarita Esther Morales de Puente, por la suma de $140.000.000 por concepto de capital pactado en el contrato de corretaje para la promoción y venta del inmueble denominado "La Margarita" y de la edificación allí construida, que suscribió la señora Margarita Esther Morales "en su calidad de socio gestor y, por lo tanto, representante legal" de la aludida sociedad demandada, más los respectivos intereses moratorios de dicha suma de dinero.

El juzgador de primer grado, mediante proveído de 1º de febrero de 2023 negó el mandamiento de pago con sustento en que, de los chats de la aplicación WhatsApp aportados para sustentar su reclamo "no se desprende con claridad dicha suma ni se arrima prueba que estos provengan de la parte deudora, es decir no existe certeza de su autenticidad y proveniencia"; los que analizados de forma conjunta con el contrato de consignación de inmueble para corretaje inmobiliario adosado, no dan cuenta de la existencia de un título ejecutivo con los supuestos de que trata el art. 422 del CGP.

Inconforme con esa decisión, la compañía demandante formuló recurso de reposición y el subsidiario de apelación, con soporte en que impetró "una demanda ejecutiva compleja" y no una singular como señaló el juez de primer grado, y tras hacer un recuento de los documentos allegados a la actuación, señaló que constituyen un título ejecutivo complejo, pues el contrato de corretaje y la escritura de compraventa provienen del deudor, y las conversaciones vía WhatsApp con la parte que compró el inmueble "valorados en su conjunto" dan plena certeza del cumplimiento de sus obligaciones "y constituyen prueba idónea de la existencia de "una obligación clara, expresa y exigible a favor de la sociedad ejecutante"; por lo que pidió que se libre la orden de pago deprecada.

Resuelto en forma infructuosa el primero de tales embates mediante proveído de 6 de marzo de 2023, se procede a resolver el segundo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Sea lo primero advertir que la competencia del Tribunal, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, se circunscribe al análisis de la apelación formulada contra el auto que negó el mandamiento de pago, según lo permite el numeral 4° del artículo 321, *ibidem*.

Empero, con prontitud se advierte que la réplica no tiene acogida, por las razones que se exponen a continuación.

Se sabe que prestan mérito ejecutivo, las "obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley" (Artículo 422 *ib*).

Y es que "es principio del derecho procesal que en aquellos asuntos donde se persigue el cumplimiento forzado de una obligación insoluta, el auto de apremio está condicionado a que al juez se le ponga de presente un título del cual no surja duda de la existencia de la obligación que se reclama, por lo que es indispensable la presencia de un documento que acredite manifiesta y nítidamente, la existencia de una obligación en contra del demandado, en todo su contenido sustancial,

sin necesidad de ninguna indagación preliminar" (TSB. SC. 00446 01/2016 de 8 de septiembre)[1].

Al descender al caso en análisis, se evidencia que el 13 de septiembre de 2018 se suscribió entre Margarita Morales Puente, como "la propietaria", y Rentahouse Colombia S.A.S. como "la inmobiliaria", el documento denominado "contrato de consignación de inmueble para corretaje inmobiliario" sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 176 – 50205 de Tabio, Cundinamarca, en el que, en la cláusula tercera se pactó que, "la propietaria" pagaría a "la inmobiliaria" una comisión equivalente al cinco por ciento (5%), sobre el precio de compraventa del inmueble más IVA; y en la cláusula décimo segunda se estableció que, se honraría el pago de la comisión "si lleva a cabo cualquier tipo de negociación con clientes previamente presentados por la inmobiliaria".

Con sustento en dicho convenio, en la escritura pública n.° 1005 del 14 de abril de 2021, que da cuenta de la celebración de un contrato de compraventa por valor de $2.800.000.000 sobre el aludido predio entre el señor Ulpiano Puente Cristancho, obrando en nombre y representación de Inversiones Fermoselle y Cía. S. en C. en Liquidación, y, de otra parte, la señora Xiomara Carolina Guerrero Cuervo, obrando en nombre y representación de EB Cycling S.A.S., y en conversaciones que adujo, sostuvo a través de la aplicación WhatsApp con María Fernanda Gutiérrez Jiménez para que visitara el inmueble con Egan Arley Bernal Gómez, la parte ejecutante reclama el pago de la aludida comisión, pues alegó, que la mencionada venta se produjo con los mismos clientes a quienes ofreció el inmueble, y que el señor Egan Arley Bernal Gómez es socio de la sociedad EB Cycling S.A.S., a la que finalmente éste le fue vendido desconociendo el pacto de corretaje.

Puestas de ese modo las cosas, basta para confirmar la decisión del *a quo*, resaltar que no existe siquiera identidad entre las personas que según la demandante estaban interesadas en la compra del predio (María Fernanda Gutiérrez Jiménez y Egan Arley Bernal Gómez), y quienes suscribieron el mencionado instrumento público, máxime, cuando el contrato de consignación de inmueble para corretaje inmobiliario fue suscrito por Margarita Morales Puente, y no por Inversiones Fermoselle y Cía. S. en C. en Liquidación, compañía que celebró la aludida compraventa.

En ese orden de ideas, al no existir certeza de que la obligación que se reclama provenga de los deudores demandados, a saber:

[1] Auto de 8 de septiembre de 2016, exp. 012 2016 00446 01. M.P., Dr. Oscar Fernando Yaya Peña.

Inversiones Fermoselle y Cía. S. en C. en Liquidación, Ulpiano Puente Cristancho y Margarita Esther Morales de Puente y constituya plena prueba contra ellos, dicha circunstancia deja entrever la falta de claridad de la obligación en recaudo, de suerte que hizo bien él *a quo* en negar el mandamiento de pago implorado.

En conclusión, tras ser efectuada la correspondiente auscultación, los documentos aportados no cumplen con las formalidades legales que establece el Código General del Proceso para derivar el mérito ejecutivo que demanda el proceso coercitivo, por lo que el título puesto a consideración del despacho adolece de mérito para ser cobrado a la luz del canon 422 del Código General del Proceso.

Así las cosas, como el presente asunto no se cumplen los requisitos señalados líneas atrás para que procediera la orden ejecutiva, no queda camino distinto que confirmar la decisión criticada; no se impondrá condena en costas, por no aparecer causadas, conforme los lineamientos del artículo 365 del Estatuto Procesal Civil.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador,

RESUELVE

Primero. Confirmar el proveído de 1º de febrero de 2023 proferido por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas.

Segundo. Sin condena en costas por no aparecer causadas (artículo 365 del CGP).

Tercero. Secretaría en la oportunidad respectiva devolverá el expediente al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

El Magistrado,

Firmado Por:

Manuel Alfonso Zamudio Mora

Magistrado

Sala 005 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1636672e49e4d0e7ba633a088aa6d2a4db58d9a28b1e2fea3c2f4ff6470c7cb3**

Documento generado en 28/04/2023 02:52:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto. Proceso Verbal (Reivindicatorio con demanda de Reconvención – Pertenencia) promovido por los señores Mario Martínez y María Inés Ruiz Granados contra José Octavio Calderón Acosta.

Rad. 06 2017 00110 01

Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, cuyo proyecto se discutió y aprobó en sesión del 15 de febrero de 2023, según acta No. 5 de la misma fecha

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la apoderada judicial del demandante en reconvención contra la sentencia que profirió el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá el 21 de octubre de 2022.

I. ANTECEDENTES

1. Los señores Mario Martínez y María Inés Ruiz Granados promovieron demanda reivindicatoria contra el señor José Octavio Calderón Acosta, para que se declare que les pertenece el dominio pleno y absoluto de la totalidad del inmueble ubicado en la Carrera 118 B N°63L – 06 de esta ciudad.

En consecuencia, su apoderado pidió que se condene al demandado a restituir el *"primer piso del inmueble..., ya que el segundo piso está en posesión de los demandantes",* pagar el valor de los frutos naturales o civiles

percibidos y que hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado conforme a una justa tasación efectuada por peritos, desde que inició la posesión de mala fe, 24 de agosto de 2010, hasta el día en que se entregue en forma real y material todo el predio, al igual que el costo de las reparaciones que estimaron en 30 millones de pesos, más la suma mensual que el inmueble podía producir.

Así mismo, aseguró que sus prohijados no están obligados a indemnizar al demandado por ser *"poseedor de mala fe"*; que la restitución debe comprender *"las cosas que forman parte del predio, conforme a la conexión";* pidió que se ordene la cancelación de cualquier gravamen que pese sobre el inmueble; que la sentencia se inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria y que se le condene en costas al extremo convocado.

2. Como sustento fáctico de las anteriores pretensiones expuso, en síntesis, que sus mandantes adquirieron la totalidad del predio del señor Álvaro Peña Cortés, a quien le fue adjudicado en remate el 50% que pertenecía a José Octavio Calderón Acosta, aquí demandado, dentro del proceso ejecutivo que cursó en el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, y el 50% restante por compra a María del Carmen Algarra Vega, según escritura pública de 28 de julio de 2008.

Agregó, que el señor Peña Cortes les hizo entrega del inmueble, no obstante, los propietarios se encuentran privados de la posesión material del primer piso, en razón a que el demandado entró al mismo el 24 de agosto de 2010 *"mediante circunstancias violentas",* con fundamento en que ostentaba la calidad de poseedor para cuando se efectuó la diligencia de secuestro en el litigio ejecutivo.

Finalmente, resaltó que sus poderdantes pagan todas las obligaciones que genera el inmueble como impuestos, servicios públicos y mejoras, y que el señor Octavio está en *"incapacidad legal para ganar por prescripción..., ya que los demandantes lo usan para su ingreso al segundo piso..."*.

3. Una vez notificado personalmente del auto admisorio de la demanda, el convocado se opuso a las pretensiones y propuso varias

excepciones previas que fueron declaradas imprósperas en proveído de 18 de noviembre de 2021.

4. De igual manera, el demandado presentó oportunamente demanda de reconvención contra los señores Mario Martínez y María Inés Ruiz Granados, y solicitó que se declare que le pertenece por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el 50% del inmueble ya reseñado; que se ordene la inscripción de la demanda; y se condene en costas a los demandados en reconvención.

Como sustento relató que ostenta la posesión del predio en forma pública, pacífica e ininterrumpida desde el 23 de agosto de 1989, desde que lo compró cuando aún era un lote de terreno junto con quien fuera su esposa, señora María del Carmen Algarra; que luego de la liquidación de la sociedad conyugal en el año 1996 donde se le adjudicó el 50% del inmueble, empezó a construir en el lote y terminó de adecuar el primer piso en el 2000; que allí estableció su lugar de residencia con su compañera Beyanide Perdomo y dos hijos menores, y que luego de vender una finca invirtió en la construcción del segundo piso y terminó esa obra para el 2008.

Aseguró que ha sido poseedor del 50% reclamado desde 1989, conforme dan fe los vecinos y que ha defendido esa calidad de varias perturbaciones, no solo de la señora Algarra cuando le vendió el 50% restante a Álvaro Peña, sino dentro del litigio en el cual se adjudicó en remate el 50% de su propiedad. Por último, resaltó que el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá dispuso *"que se le devuelva el PRIMER PISO al incidentante señor José Octavio Calderón Acosta el día 13 de noviembre de 2014",* por ende, la posesión ha sido pacífica e ininterrumpida.

5. Notificados los demandados en reconvención, se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones de mérito que denominaron ***i)*** *"falta de legitimación en la causa por activa"* y, ***ii)*** *"falta de legitimación en la causa por pasiva".*

6. El curador ad litem designado para representar a los indeterminados contestó la demanda sin proponer excepciones.

7. Agotado el trámite de la instancia, la Jueza a quo negó las pretensiones de la demanda de reconvención, empero, accedió a las reivindicatorias y, en consecuencia, declaró que pertenece el dominio pleno y absoluto del 100% del inmueble ubicado en la Carrera 118 B Nº 63L - 06 de esta ciudad a los demandantes principales; ordenó al demandado la entrega real y material del primer piso, la inscripción de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo, así como la cancelación y levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

Finalmente, condenó en costas al demandado, y a pagar en favor de los demandantes principales los frutos civiles dejados de percibir en el tiempo de la ocupación, liquidación que deberá realizarse mediante el trámite incidental, de acuerdo al artículo 283 del Código General del Proceso.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Luego de señalar que se cumplen los presupuestos procesales y precisar sobre los elementos necesarios para la acción reivindicatoria y la prescripción adquisitiva de dominio ordinaria y extraordinaria, se pronunció sobre las pruebas oportunamente decretadas y practicadas en la demanda principal y de reconvención.

Resaltó que si bien el demandado José Octavio Calderón Acosta adquirió el dominio desde el año 1989 en compañía de la señora María del Carmen Algarra, y que tal calidad lleva inmersa la posesión, uso y usufructo del inmueble, lo cierto es que se despojó de las mismas en el momento en que el 50% del cual era propietario fue adjudicado en remate al señor Álvaro Peña Cortés, dentro del proceso ejecutivo que cursó en el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá.

Agregó que si bien la parte demandante reconoció la posesión del demandado principal del primer piso luego de perderla, ese aspecto no es suficiente para considerar la prosperidad de las pretensiones de la demanda

de reconvención, por cuanto además que ello lo fue desde el año 2010, de las pruebas no se logró concluir lo contrario.

Finalmente, indicó que si bien hay lugar a condenar al demandado, como poseedor de *"mala fe"* a pagar los frutos civiles y naturales del inmueble, la jueza de conocimiento dispuso liquidar tal cuantía mediante trámite incidental, porque aun cuando se aportó dictamen pericial para tales efectos no se permitió el ingreso al perito que lo realizó a la totalidad del inmueble, luego consideró que no cuenta con elementos de convicción suficientes para tasarlos.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante en reconvención la apeló y para ello reseñó que no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas en la demanda de reconvención.

Al sustentar la alzada en esta instancia, precisó que es bastante la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que ha dicho que la reivindicación resulta improcedente cuando el título por medio del cual se exige es posterior al que dio inicio a la posesión material, en este caso, del señor Octavio Calderón. También resaltó que la jueza *a quo* no tuvo en cuenta la orden judicial por medio de la cual se dispuso la entrega del inmueble al señor José Octavio, luego que el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de entrega N°2010-00923, mediante proveído de 28 de febrero de 2014.

Señaló que tampoco se consideró lo expuesto en los testimonios, en virtud de que demuestran el *"animus y el corpus"* en cabeza del demandante en pertenencia, en cambio, manifestó erradamente que los testigos no fueron contundentes cuando lo cierto es que son vecinos del sector.

También indicó que frente al argumento que no se cumplió con el tiempo de posesión por estar privado de la libertad por inasistencia alimentaria, dijo que no se demostró tal hecho como tampoco el periodo, lo

cual además resulta irrelevante, es innegable que el señor Calderón lleva mas de treinta años en posesión del inmueble.

Por último, con relación a los frutos afirmó que la condena por ese concepto además de ser improcedente de acuerdo con el caudal probatorio tampoco es conducente, debido a que el demandante en reconvención es *"poseedor de buena fe"*.

IV. CONSIDERACIONES

1. No hay duda de la configuración de los presupuestos procesales que permiten, no solamente dar inicio al proceso, sino también que culmine con una sentencia que resuelva sobre el fondo.

En efecto, se cumple con la jurisdicción y competencia en cabeza de los jueces civiles del circuito en primera instancia, tratándose de la acción reivindicatoria y, en este caso, con la demanda de reconvención; capacidad de los intervinientes para ser parte y comparecer al litigio y la demanda en forma. Además, no se observa vicio con identidad anulatoria, lo que admite proferir la decisión que de la segunda instancia se reclama, dentro de los límites de los reparos del apelante único, conforme lo impone el artículo 328 del Código General del Proceso.

2. De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, corresponde al Tribunal determinar si la decisión de primer grado contiene los yerros de valoración probatoria que se le endilgan, en el sentido de determinar si confluyen los elementos de la modalidad de la prescripción reclamada en la demanda de reconvención.

3. Para resolver, se debe tener en cuenta que el artículo 2512 del Código Civil define la prescripción adquisitiva como *"un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído la cosa y no haberse ejercitado dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo"*, y su consolidación, a voces del artículo 2531 de la misma codificación, requiere de una posesión no interrumpida por el

término de veinte años, que se redujo a diez en virtud de la modificación introducida por la ley 791 de 2002.

Pero el usucapiente que quiera beneficiarse de la reducción que consagró la precitada ley *"tiene que acreditar el señorío durante diez años iniciados a partir de la vigencia de la nueva ley el 27 de diciembre de 2002"*[1], exigencia que se acompasa con lo previsto por el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor*: "La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera ó la segunda, á voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir".*

De modo que, si quien demanda en pertenencia se acoge a la regulación actual, esto es la contemplada en la Ley 791 de 2002, deberá acreditar que ejerció la posesión por un período de diez años, contabilizados a partir del 27 de diciembre de 2002, empero, si decide acogerse a la norma anterior, tendrá que demostrar que dicha posesión la ha ostentando por un término mínimo de 20 años. Sobre el tema nuestro máximo Tribunal, en un asunto similar, señaló:

> *"En este caso, teniendo como punto de referencia tanto los hechos alegados por el demandante, las pruebas y las motivaciones del fallo de segunda instancia, no hay lugar a aplicar, como es la aspiración de Luis Arturo Gutiérrez, la "prescripción extraordinaria" adquisitiva de diez años, según la regulación de la Ley 791 de la anualidad mencionada, puesto que una persona que quiere beneficiarse de la disminución del "tiempo" de "usucapión" apenas lo completaría el 27 de diciembre de 2012"*[2].

En cuanto a la posesión material, dice el artículo 762 del Código Civil que es *"…la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño…"*, es decir, es una situación de hecho que exterioriza propiedad, es por ello que a voces del inciso segundo de la misma norma *"El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo";* pero para que el poseedor sea considerado dueño, es necesario que ejerza actos públicos de posesión, sin oposición de persona alguna; con ello se excluye que sea tenido como mero detentador del bien.

---

[1] *C.S.J. Cas Civ. Auto de 16 de septiembre de 2010, Exp.2004-00177-01*
[2] *CSJ, Cas. Civ. Ibídem*

La anterior es la razón por la cual, de antaño, la jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia, tiene sentado que *"La posesión no se configura jurídicamente con los simples actos materiales o mera tenencia que percibieron los declarantes como hecho externo o corpus aprehensible por los sentidos, sino que requiere esencialmente la intención de ser dueño, animus domini -o de hacerse dueño, animus rem sibi habendi-, elemento intrínseco que escapa a la percepción de los sentidos. Claro está que ese elemento interno o acto volitivo, intencional, se puede presumir ante la existencia de los hechos externos que son su indicio, mientras no aparezcan otros que demuestren lo contrario…"*[3].

En consecuencia, por ser la posesión una relación de dominio de hecho con la cosa deberá probarse, conforme lo preceptúa el artículo 981 del C.C., *"por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, plantaciones o sementeras, y otros de igual significación,…"*; precepto éste que ha conducido a la Corte a sostener que *"la posesión de bienes raíces que origina la presunción de dominio, es la material, comprobable con hechos positivos, conforme al artículo 981 del C.C.…."*[4].

De lo anterior, surge la diferencia entre la mera tenencia y la posesión, que es la que justifica que el artículo 777 del Código Civil señale de manera perentoria que *"El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión"*, pues para que ello ocurra es necesario que tenga lugar el fenómeno conocido como *"interversión del título"*, es decir, la mutación o cambio inequívoco pacífico y público de la condición de tenedor por la de poseedor material común, que:

> *"(…) 'bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener la persona del contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella'. (Sent. de abril 18 de 1989). En consecuencia, cuando se invoca la prescripción extraordinaria*

[3] *G.J. T LXXXIII Pág.776*
[4] *C.S.J., Cas Civ 31 de marzo de 1930; G.J. T XXXII Pág.493*

adquisitiva de dominio para que se declare judicialmente la pertenencia, el demandante debe acreditar, no solamente que la solicitud recae sobre un bien que no está excluido de ser ganado por ese modo de adquirir, sino la posesión pública y pacífica por un tiempo mínimo de veinte años ininterrumpidos. Pero además, si originalmente se detentó la cosa a título de mero tenedor, debe aportarse la prueba fehaciente de la interversión de ese título, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequívocamente, incluyendo el tiempo a partir del cual se rebeló contra el verdadero propietario y empezó a ejecutar actos de señor y dueño desconociendo su dominio, lo que debió ocurrir en un término superior a los veinte años, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido en la ley de posesión autónoma e ininterrumpida del prescribiente (casación de 29 de agosto de 2000, exp. No. 6254, sublíneas fuera de texto)' (Cas. Civ., sentencia del 24 de marzo de 2004, expediente No. 7292; se subraya)."[5]

Así mismo, en cuanto a los medios probatorios aducidos en el proceso con el fin de acreditar los elementos necesarios para adquirir un bien por prescripción, ha indicado la Corte Suprema[6] que:

"(...) deben venir, dentro de las circunstancias particulares de cada caso, revestidos de todo el vigor persuasivo, no propiamente en el sentido de conceptuar que alguien es poseedor de un bien determinado, pues esta es una apreciación que sólo al juez le compete, sino en el de llevarle a este el convencimiento de que esa persona, en realidad, ha ejecutado actos que, conforme a la ley, son expresivos de la posesión, lo cual, por supuesto, ha debido prolongarse durante todo el tiempo señalado en la ley como indispensable para el surgimiento de la prescripción adquisitiva del dominio, sea esta ordinaria o extraordinaria.

"Con apoyo en esos hechos, al juez debe quedarle nítidamente trazada la línea divisoria entre la posesión y la mera tenencia puesto que, al fin y al cabo, y sin embargo de que externamente sea percibible cierto paralelismo, que no confluencia, entre las manifestaciones de una y otra, de lo que se trata es de que aquel encuentre que en la primera, quien la hace valer, ha tenido con el bien objeto de la misma un contacto exclusivo, vale decir, no supeditado a la aquiescencia o beneplácito de otro, para que por tal vía pueda llegar a la conclusión que el suyo ha sido el comportamiento característico del propietario de la cosa."

4. Una vez establecido el marco teórico y jurisprudencial bajo el cual debe el Tribunal abordar el análisis del recurso de apelación interpuesto por el demandante en reconvención, es preciso, a la luz del acervo probatorio recaudado, determinar si resultó o no acertada la conclusión de la Juez *a quo* cuando estableció que en el *sub lite* no es posible acceder a las súplicas de la demanda de pertenencia, pese a que, en sentir de la apoderada del primero, las pruebas enseñan que se configuran los elementos constitutivos de la prescripción adquisitiva de dominio sobre el primer piso del inmueble objeto de la Litis.

---

[5] *C.S.J., Cas. Civ. Sent. 2000-01518, 30 de noviembre de 2010*
[6] *C.S.J., Sent 005 de 1999 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles*

En tal sentido, deviene importante empezar por reseñar la tradición del inmueble objeto de usucapión. Para tal efecto, ha de verse que conforme al certificado de tradición[7]: ***i)*** el predio fue adquirido en el año 1989 por los señores José Octavio Calderón Acosta y María del Carmen Algarra Vega y les fue adjudicado en la liquidación de la sociedad conyugal, cada uno, en el 50% para el año 1996; ***ii)*** que para el 2002, la proporción de propiedad de José Octavio fue objeto de embargo por el proceso ejecutivo que promovió la señora María del Carmen que cursó en el Juzgado 52 Civil Municipal; ***iii)*** que en el año 2008 y luego de la cancelación del embargo, se registró la adjudicación del citado porcentaje al rematante, señor Álvaro Peña Cortés; ***iv)*** que en el mismo año se inscribió el instrumento público por medio del cual el último compró el 50% restante del predio a la señora María del Carmen y, ***v)*** que para el 2014, en la anotación N°12 obra registro de venta del 100% de la propiedad de Peña Cortés a los señores Mario Martínez y María Inés Ruiz Granados, demandantes principales en este asunto.

De igual manera, se advierte que la diligencia de entrega con ocasión al remate ya reseñado tuvo lugar el 22 de octubre de 2009[8], donde se hizo *"entrega de manera simbólica del 50% al señor rematante, advirtiéndole a los habitantes del inmueble que desde ese momento deberán entenderse con el señor rematante en lo que se refiere a la administración del bien".* Posteriormente, y sólo hasta el 23 de enero de 2014[9], en una nueva diligencia se decretó el allanamiento *"y una vez abierto se procedió a hacer la entrega en forma real y material del mismo".*

Ahora bien, aquí es importante reseñar que con ocasión a la compra del 50% restante, tuvo lugar otra diligencia en virtud del *"proceso de solicitud de entrega 2010-923 de Álvaro Peña Cortes contra María del Carmen Algarra",* efectuada por la Inspección 10 C Distrital de Policía de Engativá y comisionada por el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá el 22 de septiembre de 2010, se plasmó que:

> *"El Despacho procede a trasladarse al inmueble objeto de la diligencia ubicado en la Cra. 118B N°63L-06 primer piso, tal como lo ordena el comitente. Una vez allí en el primer piso, el Despacho le es permitida la entrada por la señora Trifonia Castañeda Andrade, quien se niega a identificarse y que las llaves se*

[7] *Folios 153 a 155 01Cuaderno01.pdf*
[8] *Folios 286 a 288 01Cuaderno03Folio1-200.pdf*
[9] *Folio 311 01Cuaderno03Folio 1-200.pdf*

las entrega el dueño de la casa,... La señora Aura Trifonia Castañeda Andrade, manifiesta que por sus propios medios entrega el inmueble. Se deja constancia que la señora que atiende la diligencia está desocupando el inmueble por sus propios medios. Estando desocupado en su totalidad el inmueble del primer piso el Despacho procede a hacerle entrega real y material al señor Álvaro Peña Cortes, quien manifiesta: Recibo en forma real y material el primer piso de este inmueble en las condiciones que se encuentra. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se TERMINA y se firma por los que en ella intervinieron." (se subraya)

Y si bien, el juez de segunda instancia en el anterior litigio, mediante proveído de 28 de febrero de 2014[10], decretó la nulidad de todo lo actuado porque se configuró, en ese entonces, la causal 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, tal determinación no eliminó de la realidad la entrega real y material del inmueble, o parte del mismo, a quien lo compró, es decir, al señor Álvaro Peña, ni desapareció la venta que éste hiciera a los señores Mario Martínez y María Inés Ruiz, aquí demandados en reconvención.

En tal sentido, también ha de verse que en el plenario obra acta de una nueva diligencia de entrega que la Inspección 10 C Distrital de Policía de Bogotá efectuó con posterioridad, 13 de noviembre de 2014[11], comisionada por el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá y dentro del proceso de entrega Nº2010-00923, donde se plasmó: *"...una vez allí el Despacho es atendido por el señor MARIO MARTINEZ..., quien enterado de la presente diligencia manifiesta: El motivo de no haber desocupado es que yo tengo una fábrica y tengo empleados y tengo todos los papeles ya de acá, solicito un tiempo prudencial para subir la mercancía y los elementos que ahí aquí. El Despacho le corre traslado al apoderado en sustitución de la Dra. Luz Mary Rincón, apoderada del incidentante señor JOSE OCTAVIO CALDERÓN ACOSTA y que obra a folio 25, quien en uso de la palabra manifiesta: Con todo respeto le solicito al señor Inspector y le manifiesto a quien nos atiende la diligencia, que como se encontraba advertido y había solicitado un plazo para desocupar, y los muebles que se observan en el predio quedaba ser restituido en la posesión a mi mandante, se haga en el curso del día, es decir, antes de las cuatro de la tarde para que se verifique y se le entregue la posesión al señor JOSE OCTAVIO CALDERÓN ACOSTA, en la forma que fue ordenada por el comitente. Por lo tanto, ruego al señor Inspector suspender la presente diligencia para continuarla en la hora que el Despacho y de acuerdo a las diligencias programadas pueda continuar con*

[10] *Folios 312 a 315 01Cuaderno03Folio1-200.pdf*
[11] *Folio 322 01Cuaderno03Folio1-200.pdf*

la misma. El Despacho accede a la petición del apoderado en sustitución y suspende la diligencia hasta las 12 meridiano...", de lo que se sigue que fue entonces el 13 de noviembre de 2014 que el señor José Octavio ingresó nuevamente al inmueble.

Precisamente, lo anterior resulta concordante con el dicho del testigo, señor Oscar Amaya, quien manifestó que conoce a los demandados en reconvención hace 14 años en virtud a que trabajó con ellos, y que supo de la compra del inmueble en Engativá en el año 2014 porque trasladaron para allá la fábrica donde laboraba, empero, que unos meses después llegó el señor Octavio con autoridades judiciales y los hizo desalojar el primer piso, y allí empezó a vivir.

5. Sentadas las anteriores premisas normativas y jurisprudenciales y como la apelación de la sentencia se dirige a establecer si había o no lugar a declarar las pretensiones de usucapión elevadas por el demandante en reconvención, las pruebas reseñadas y los acontecimientos que éstas enseñan son suficientes para establecer, sin asomo de duda, que aun cuando le asiste razón a la apoderada recurrente que los demandados reconocen la posesión ejercida por el señor Calderón Acosta, no es posible considerar que ejerce tal calidad desde hace 30 años, porque vista la cadena de tradición es cierto que sí contaba con el dominio y, por ende, la posesión, uso y usufructo del inmueble desde el año 1989, y por tal razón todos los testigos lo han visto la mayoría del tiempo en la casa, empero, se desprendió o perdió esa calidad al momento en que fue adjudicado el 50% de su propiedad al señor Álvaro Peña, dentro del proceso ejecutivo que cursó en su contra, pues además que finalmente se materializó la entrega al último, no existió ninguna declaración judicial que decretara la nulidad de ese asunto.

Además, aun cuando el demandado aseguró la existencia de la posesión anterior al título de adquisición de los demandantes principales, lo cierto es que las pruebas practicadas y aportadas con la demanda y su contestación, al igual que los interrogatorios de parte y los testimonios, permiten arribar a la conclusión que, en verdad, la posesión que ahora reclama la ejerce desde el año 2014, habida cuenta que la ejercida con

anterioridad fue con ocasión al dominio que ejercía junto con quien fue su esposa y adquirió el inmueble en 1989.

Por consiguiente, el tiempo que transcurrió entre el momento en que el demandante en reconvención ingresó al inmueble y la radicación de la demanda resulta evidentemente insuficiente para considerar que pueden salir avante sus pretensiones, en la medida que no se cumple con el tiempo necesario para ganar el dominio de parte del inmueble por prescripción extraordinaria, conforme ya se explicó, pues del 2014 al 2017, año en el que se promovió la demanda, tan solo pasaron 3 años.

Igual acontece entonces con los demás argumentos del extremo apelante dirigidos, de un lado, a que la jueza *a quo* no tuvo en cuenta los 30 años que el señor Octavio ejerció posesión sobre el predio, luego resulta irrelevante el periodo que estuvo privado de la libertad por inasistencia alimentaria.

6. Ahora, con relación al reparo dirigido a que no resulta procedente condenar al demandado principal al pago de frutos civiles dejados de percibir en favor de los demandantes, es preciso recordar que el artículo 964 del Código Civil dispone que *"El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder"*; que *"Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción; se considerarán como no existentes lo que se hayan deteriorado en su poder"*; que *"El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda; en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores"*; y que *"En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos"*.

De igual manera, el canon 965 de la misma codificación, prevé que:

> *"El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las reglas siguientes: Si estas expensas se invirtieren en obras permanentes, como una cerca para impedir las depredaciones, o un dique para atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán al poseedor dichas*

expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias; pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución.

Y si las expensas se invirtieron en cosas que por su naturaleza no dejan un resultado material permanente, como la defensa judicial de la finca, serán abonados al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador y se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía."

E incluso, lo establecido en el artículo 966 de la misma normatividad, de acuerdo con el cual:

"El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda. Solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.

El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan, al tiempo de la restitución, las obras en que consisten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo.

En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá solamente los derechos que por el inciso último de este artículo se conceden al poseedor de mala fe.

El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla este artículo.

Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados.

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que en la decisión cuestionada no se advierte que la funcionaria de primer grado haya concluido, de manera equivocada, que sí hay lugar a ordenar al demandado a pagar los frutos dejados de percibir, empero, no desde la ocupación del inmueble conforme lo autoriza el inciso 1° del artículo 964 transcrito, sino a partir de la contestación de la demanda de acuerdo al inciso 3° de la misma norma, en razón a que se probó que el demandante en reconvención es poseedor de buena fe, pues ingresó al inmueble a partir de la orden judicial que en ese sentido dispuso el juzgado que conoció sobre el proceso de entrega del señor Álvaro Peña contra María del Carmen Algarra.

En cuanto a la tasación de valor por ese concepto, ha de verse que conforme lo dispone el artículo 283 del Código General del Proceso, *"la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados",* e igualmente que *"el juez de segunda instancia deberá extender la condena en*

concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado".

Siendo así las cosas, no resulta procedente considerar que el hecho que no se haya permitido el ingreso del perito a la totalidad del inmueble para establecer el valor de los frutos, si se tiene en cuenta que en el líbelo obran otras documentales, incluso la inspección judicial celebrada el 9 de agosto de 2022, en donde se llevaron a cabo no solo los interrogatorios de partes, sino la contradicción al dictamen presentado por los demandantes.

Entonces, como lo pretendido en este punto es establecer el valor de los frutos naturales y civiles, y conforme lo ha dicho la jurisprudencia[12], *"…los «cánones de arrendamiento», son considerados «frutos civiles», de conformidad al artículo 717 del Código Civil"*, es pertinente dilucidar cuál sería el canon de arrendamiento que se puede obtener del primer piso del inmueble objeto de este litigio, ante la falencia del dictamen en tal sentido, habida cuenta que no se le permitió el ingreso al perito encargado a la totalidad del predio.

Para tales efectos, ha de verse que en el folio 24 (01Cuaderno03Folio1-200.pdf), obra copia digital del avalúo catastral del inmueble correspondiente al año 2017 por $175.593.000 y, que conforme a la inspección judicial el inmueble consta de 4 pisos: el primero, pretendido por el demandante en reconvención donde se encuentra un garaje o bodega que se encuentra adecuado para la vivienda del señor Octavio, y del 2º al 4º donde se hallan cinco (5) aparta-estudios entregados en calidad de arrendamiento, de los cuales dos arrendatarios manifestaron pagar cánones a la señora María Inés $550.000 y $650.000 mensuales.

En esas condiciones necesariamente debe acudir la Sala al artículo 8º de la Ley 153 de 1887, que prevé que: *"Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho"*, norma que en primera parte consagra la analogía y que fue declarada ajustada a nuestro ordenamiento jurídico mediante sentencia C 083 de 1995.

---

[12] *C.S.J. Cas. Civ. Sentencia STC-1664-2019 de 14 de febrero de 2019*

Entonces, para establecer los frutos reclamados en este asunto, debe acudir el Tribunal por analogía a la norma que regula la forma de establecer los cánones de arrendamiento para vivienda urbana, Ley 820 de 2003 que en su artículo 18 al tratar sobre la renta de arrendamiento, dispone que *"El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo."* A lo que agrega que *" La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente."*

Establecido lo anterior, es necesario ahora resaltar que el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1450 de 2011 *"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014"*, prevé que: *"El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijados para los procesos de formación y actualización catastral a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor comercial"*[13], por ende, si se tiene en cuenta el avalúo catastral se tiene que incrementado éste en un 40%, se obtiene el siguiente valor comercial, así como el 1% para establecer el canon de arrendamiento, en principio, para la totalidad del inmueble.

AÑO	*VALOR CATASTRAL*	*VALOR COMERCIAL*	*1% DEL VALOR COMERCIAL*	*1% DEL VALOR COMERCIAL DE CADA UNO DE LOS 4 PISOS*
2017	$175.593.000	$245.830.200	$2.458.302	$614.575[14]

Ahora, con el fin de establecer el valor del canon correspondiente al primer piso, sobre el cual ejerce posesión el demandado y, por ende, se deben liquidar los frutos, desde el 31 de julio de 2017[15], fecha en que el demandado contestó la demanda, hasta la data en que se dicte la sentencia, tenemos que:

Periodo	*IPC Año anterior*	*Canon mensual + Inc IPC*	*Valor recibido por cada periodo*
01/08/2017 al 01/08/2018		$614.575	$7.374.900

[13] - El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.
[14] 2.458.302 / 4 pisos = $614.575
[15] Folio 163 01Cuaderno01.pdf

01/08/2018 al 01/08/2019	4.1	$639.772	$7.677.264
01/08/2019 al 01/08/2020	3.18	$660.106	$7.921.272
01/08/2020 al 01/08/2021	3.8	$685.190	$8.222.280
01/08/2021 al 01/08/2022	1.61	$696.221	$8.354.652
01/08/2022 al 01/03/2023	5.62	$745.759	$5.220.313
Valor Total			$44.770.681

7. En tal medida se modificará el numeral quinto de la sentencia de primer grado, en el sentido de establecer el valor de los frutos de forma concreta a la suma de $44.770.681, conforme se explicó, y para excluir del mismo la expresión *"cuya liquidación debe hacerse mediante trámite incidental, de conformidad con las previsiones del artículo 283 del CGP".*

8. Así las cosas, en razón a que no prosperan los reparos formulados por la parte apelante contra la decisión fustigada, se confirma, solo con la modificación a que se acaba de hacer alusión, circunstancia que amerita imponer la consecuente condena en costas a cargo de la recurrente, propósito para el que la Magistrada Sustanciadora fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente S.M.L.M.V., atendiendo lo previsto por el artículo 5º, numeral 1º, del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, del Consejo Superior de la Judicatura.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **MODIFICAR** el numeral **QUINTO** de la sentencia que profirió el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá el 21 de octubre de 2022, dentro de este asunto, en el sentido de **CONDENAR** al demandado principal, señor JOSÉ OCTAVIO CALDERÓN ACOSTA a pagar a los demandantes principales MARIO MARTINEZ Y MARÍA INES RUIZ GRANADOS, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($44.770.681), por

concepto de frutos civiles causados a la fecha de emisión de esta sentencia y atendiendo que la contestación a la demanda se verificó el 31 de julio de 2017, conforme se explicó, y para excluir del mismo la expresión *"cuya liquidación debe hacerse mediante trámite incidental, de conformidad con las previsiones del artículo 283 del CGP".*

SEGUNDO: **CONFIRMAR** en lo demás, la sentencia de fecha y procedencia precitadas.

TERCERO: **CONDENAR** en costas de esta instancia al extremo recurrente. Se señalan como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) S.M.M.L.V. El Juzgado de primer grado proceda a su liquidación de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,

MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS

RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5f64d60a27ff780d08e922836e4621bf612962c1250d8605037019a116534d14**

Documento generado en 28/04/2023 03:13:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO: VERBAL (NULIDAD ABSOLUTA) DE LA SEÑORA MEYRA FORERO BARRERA CONTRA PATRICIA PERDOMO RAMÍREZ Y OTROS.

Rad. 07 2017 00661 01

SE ADMITE en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del extremo demandado contra la sentencia que profirió el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá el 30 de marzo de 2023, dentro del presente asunto.

La parte apelante deberá tener en cuenta lo establecido en el inciso 3º del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes"*, vencidos los cuales la contraparte deberá descorrer, si a bien lo tiene, el correspondiente traslado; términos que comenzaran a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Concurrente con lo antes señalado, los profesionales del derecho deberán dar estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

A su turno, las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE este proveído en la forma establecida en el artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

Cumplido lo anterior, ingresen las presentes diligencias **inmediatamente** al despacho con informe pormenorizado de Secretaría, para proveer lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Magistrada

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5dd39a3bdad47eaec04707807165e19da2f51d31ffb682b8be478f70e237529a**

Documento generado en 28/04/2023 10:12:30 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

DEMANDANTE	:	DOLLY MARCELA, DEYSI TATIANA Y GUERRERO LÓPEZ, Y JUANA VALENTINA como sucesoras procesales de NELSON EDUARDO GUERRERO RODRÍGUEZ
DEMANDADO	:	TONY RAMÓN MONTES Y MARÍA MARTHA BUITRAGO OTALORA
CLASE DE PROCESO	:	Responsabilidad civil
MOTIVO DE ALZADA	:	APELACIÓN SENTENCIA

El inciso 3° del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, que rige el trámite de la segunda instancia, establece que "ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes... Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto".

Por lo tanto, para verificar si la alzada fue sustentada oportunamente se tiene que se admitió por auto del 15 de febrero de 2023, notificado por estado del día 16 siguiente a las partes, por lo que los tres días de ejecutoria de la citada providencia fueron 17, 20 y 21 de febrero; los 5 para sustentar transcurrieron el 22, 23, 24, 25 y 27 siguientes, sin que la parte apelante presentara escrito alguno en este Tribunal desarrollando los argumentos del recurso.

En aplicación de los principios de preclusión y eventualidad se declarará desierta la apelación, toda vez que "de los recursos únicamente podrá hacerse uso «dentro del marco temporal que les concede el ordenamiento jurídico, lo que impide la dilación injustificada de los pleitos y permite la ejecutoria de las providencias» (AC, 10 sep. 2013, rad. n° 2011-00111-01)"[1].

Estos principios tienen arraigo en los artículos 228 de la Constitución Política que establece que "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado" y el 117 del Código General del Proceso, según el cual «[l]os términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes… son perentorios e improrrogables».

[1] CSJ. SC. Auto del 27 de junio de 2017. AC4028-2017. Radicación nº 23001-31-10-003-2012-00348-01. Magistrado sustanciador: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

Sobre el punto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil[2] ha sostenido que “el legislador previó como sanción la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisión, al momento de presentar la impugnación en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia y (ii) cuando no se presente la sustentación de los mencionados reparos ante el superior.” -se subraya- . Aún más, la Corte Constitucional haciendo referencia al fallo anterior, afirmó *“En suma, la declaratoria de desierto del recurso surge como un castigo impuesto al apelante por no cumplir con una carga procesal de vital importancia, lo que trae como consecuencia no dar trámite al recurso vertical impidiéndose el conocimiento del asunto en segunda instancia”*[3]. Esto, claro está, sin perjuicio del deber del juez de interpretar la ley en el sentido más favorable con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia, en la medida que surjan dudas en la interpretación de las normas del código (art. 11 C.G.P.) y o cualquier vacío que deba suplirse con las que regulan casos análogos (art. 12 ib), situación que no se predica de la modificación introducida por el Decreto 806 de 2020 y ahora por la Ley 2213 de 2022, bajo la cual se debe surtir el trámite de la alzada en este caso concreto, pues claramente su artículo 12, para el evento específico de apelación de sentencias, impone el deber de presentar una sustentación como hecho habilitante de la competencia del Tribunal porque, sin convocar a audiencia para ese fin, "vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita”.

Pese a que, en pronunciamiento del 14 de octubre de 2021, la misma Sala, en sede de tutela, consideró que “aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentación del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que señala el canon 14 del citado decreto [actualmente artículo 12 de la Ley 2213 de 2022], no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelación, por lo tanto, resulta improcedente que se imponga como sanción la deserción del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la pérdida del derecho constitucional a impugnar la decisión que concluyó la primera instancia”, tal argumentación fue derruida por la Sala Laboral, en decisión reciente del 18 de enero de 2023 CSJ STL 0028-2023, reiterando las sentencias anteriores STL7317-2021, STL-11190-2022 STL12646-2022, STL12574-2022, al constituirse en juez de segunda instancia de tutela, donde afirmó: *“Adviértase como el fallador convocado empezó por indicar que el Decreto 806 de 2020 impone a la parte recurrente el deber de sustentar el recurso de apelación ante el juzgador de segundo grado, una vez ejecutoriado el auto que admitió la alzada. La*

---

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC11058-2016 de 11 de agosto de 2016, radicado 11001020300020l6-02143-00

[3] C. Const. T-195 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

omisión de dicha carga conlleva a la declaratoria de desierto, normativa que «guarda relación con el precepto 322 del CGP, eso sí, estructurándose ahora un trámite escritural en el evento de no ser necesario el decreto de pruebas en segundo nivel».". Y le permitió concluir que, "*la falta de sustentación en segunda instancia acarrea la declaratoria de desierto del recurso de alzada".*

Téngase en cuenta, además, que incluso a la fecha en que se profirió esta decisión la parte recurrente ha guardado silencio.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, el 7 de diciembre del 2022.

SEGUNDO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Radicación 110013103008 2020 00195 01

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, una vez ejecutoriado el auto que admite la alzada, **SE ORDENA:**

Correr traslado al apelante por el término de cinco (5) días para sustentar el recurso, so pena de declararlo desierto.

Vencido dicho lapso, si se satisface la carga procesal, se otorgará el mismo plazo a la parte contraria, para que se pronuncie al respecto.

Infórmese a los señores abogados que los memoriales deben dirigirse al correo institucional del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co -artículo 109 del Código General del Proceso-; remitiendo un ejemplar a los demás intervinientes en el juicio, según los lineamientos del artículo 78 numeral 14 *ídem,* en concordancia con el artículo 3 de la Ley en cita.

NOTIFÍQUESE.

Firmado Por:
Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f9cc14eda7ceae52d4e94f9e8583cac8eb4f1d4d1f169affa3bdc730fc7bc0b2**

Documento generado en 28/04/2023 10:53:33 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Ref: EXPROPIACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI- contra GONZÁLO RIAÑO VARGAS. Exp. 008-2020-00349-01.

MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS.

Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 26 de abril del 2023.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante contra la sentencia del quince (15) de junio del dos mil veintidós (2022), pronunciada en el Juzgado Octavo (8) Civil del Circuito de la ciudad.

I. ANTECEDENTES

1.- El 13 de agosto de 2018 (Pág. 3 archivo 001, Cuaderno C02ActuacionesJdo2CCTOCordoba) la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI- mediante apoderado judicial entabló demanda contra GONZÁLO RIAÑO VARGAS -titular del dominio- y DAVIVIENDA S.A. -acreedor hipotecario- pretendiendo se decrete la expropiación por motivos de utilidad pública e interés social de la franja de terreno identificada con la ficha predial No. VA-Z2-06_03-003, del Tramo Planeta Rica- Montería, con el área de terreno requerida de catorce mil ciento diez punto treinta y un metros cuadrados (14.110.31 m2) , determinada con la abscisa inicial km 24 + 801.60 D y abscisa final KM 25 +290.47D, del predio denominado de mayor extensión "Santa Mónica" ubicado en la vereda Patio Bonito del Municipio de Montería identificado con la cédula catastral No. 23001000200370076000 y matrícula inmobiliaria No. 140-91879 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería.

Consecuencia de lo anterior, se ordene al Registrador de Instrumentos Públicos abrir un nuevo folio de matrícula para la franja de terreno requerida, junto con la inscripción de la sentencia y el acta de entrega definitiva del inmueble. De igual forma pide se determine el valor de la franja de terreno requerida con sus anexidades, construcciones, cultivos y especies, la

cuales se encuentran avaluadas en la suma de $206.449.353, conforme al trabajo pericial elaborado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Montería (págs. 9 a 10, ib).

2.- El petitum se edifica en los fundamentos fácticos que a continuación se sintetizan (págs. 5 a 9, ej):

2.1.- La Agencia Nacional de Infraestructura es un establecimiento público del sector descentralizado del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, dentro de sus objetivos corresponde planear, estructurar, contratar, ejecutar, administrar, evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación pública privada para otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.

*2.2.- En curso la ejecución del proyecto vial "**Transversal de las Américas Sector No. 1**", la Agencia Nacional de Infraestructura requirió de la adquisición de una zona de terreno junto con sus anexidades y cultivos, misma descrita en las pretensiones del libelo, cuyo propietario es el demandado Gonzalo Riaño Vargas, quien adquirió el derecho real de dominio mediante compraventa protocolizada en escritura pública No. 1796 del 9 de julio del 2009.*

2.3.- El referido inmueble cuenta con un área total de 8 hectáreas más 7.5 metros cuadrados y el terreno requerido es de 14.110, 31 m2. Inicialmente, la franja se avaluó en $124.259.815, valor por el que se formuló oferta formal al propietario, quien manifestó desacuerdo con el avalúo. Por tal razón se realizó nuevo informe en el que se cuantificó la indemnización en la suma de $206.449.203.

2.4.- El predio además se encuentra hipotecado a favor del Banco Davivienda y sobre él pesa una medida cautelar decretada por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Montería. Por esa razón, ante la imposibilidad de efectuar una negociación voluntaria se expidió Resolución No. 0647 del 20 de abril del 2018, en la cual se dispuso el inicio del trámite judicial de expropiación. El acto administrativo quedó ejecutoriado el 26 de junio del 2018.

2.5.- Durante la etapa de enajenación voluntaria, la apoderada del titular del dominio autorizó la intervención del predio.

3.- Gonzalo Riaño Vargas se opuso al valor ofrecido como indemnización para lo cual aportó dictamen pericial en el que se tasó el valor del terreno, más otros conceptos en la suma de $1.452.126.224 (págs. 359 a 368, ib).

3.1.- El Banco Davivienda S.A. fue inicialmente emplazado, no obstante, acudió a la Litis y designó apoderado judicial, sin presentar oposición.

4.- Surtidas las etapas de rigor, la juez de primer grado finiquitó la instancia con fallo del 15 de junio del 2022, oportunidad en la que accedió a las pretensiones de la demanda, decretando la expropiación de la zona de terreno solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura. No obstante, tuvo como valor de la indemnización la suma de $1.452.126.224, por lo que ordenó a la demandante consignar el saldo pendiente en un término máximo de 10 días, decisión que no compartió la actora por lo que interpuso la apelación que ahora se revisa.

II. ARGUMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

5.- Luego de sintetizar las pretensiones y los hechos de la demanda, verificó los presupuestos procesales y no encontró irregularidad que acarree la nulidad de lo actuado. Enseguida, realizó un marco normativo del proceso de expropiación y descendió al caso concreto para colegir que tal figura es procedente pues se requiere por motivos de utilidad pública una franja de terreno para el proyecto vial Transversal de las Américas.

Sobre la indemnización y tras hacer alusión a la normatividad que regula los avalúos de los bienes inmuebles para la adquisición por expropiación por vía judicial, señaló que el avalúo elaborado por la demandante no podía tenerse en cuenta, pues el mismo perdió vigencia desde el año 2014, esto es, 4 años antes de la presentación de la demanda; así mismo, porque la aplicación de los métodos utilizados, es decir, las encuestas y el de reposición no encuentran soporte, lo cual impide comprobar su idoneidad para justipreciar el bien.

En ese sentido, concluyó que el dictamen además de no encontrarse vigente para la fecha de presentación de la demanda y no cuantificar ningún tipo de compensación, tampoco contiene los soportes vigentes, datos y aclaraciones para que pueda determinarse la pertinencia de los métodos utilizados para el establecer el valor que le asignó a la franja de terreno. Así mismo, no fue posible absolver las dudas respecto de tal experticia porque el perito que la elaboró se abstuvo de concurrir a la audiencia pública, pese haberse convocado en más de una oportunidad. De ese modo, conforme el artículo 138 de la Ley 388 de 1997, sostuvo que es viable tener en cuenta un valor distinto al estimado por la actora.

En esa dirección, examinó el dictamen arrimado por la demandada al presentar la oposición, trabajo que encontró ajustado a la reglamentación del caso, habida cuenta que el mismo versó sobre la franja del inmueble objeto de expropiación; que se analizaron las características del sector, la ubicación del predio, las actividades predominantes, las vías de

acceso, el entorno, el nivel socioeconómico, entre otras; que se indicó la topografía del predio; que se aplicó el método de comparación del mercado, aplicando índices y moderaciones estadísticas para llegar al valor total y, en general, cumplió con los supuestos contenidos en el artículo 10 de la Resolución 620 del 2008, pues se hizo mención explícita al medio por el cual se obtuvo la información y la publicación.

Adicionalmente, se reconoció el daño emergente y lucro cesante, este último, obtenido por el valor comercial del bien antes de la afectación, más los rendimientos financieros con el interés bancario corriente. Por último, se dio cumplimiento a los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, razones que conllevaron a adoptar como valor de la compensación el monto de $1.452.126.224.

III. EL RECURSO

6.- El recurrente atacó exclusivamente lo relacionado con el valor de la indemnización ordenada, porque en su sentir, el avalúo acogido no está ajustado a derecho, ni a los lineamientos técnicos establecidos para ese tipo de estimaciones.

Al respecto, señaló que se tuvo una inadecuada aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y, en esa dirección, se omitió la valoración del uso del suelo del predio, aspecto en que se analizó "predios similares en otras ciudades del país, donde se encuentran corredores viales de primer y segundo orden", en contra del artículo 5 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, conforme el cual, el único elemento a tener en cuenta para la clasificación del suelo es el acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial. De este modo el perito incurre en un error al adoptar normativa de otros municipios.

Agregó que la investigación de mercado descrita en el avaluó aportado por la parte demandada no cumple lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución en cita, que ordena que al acudir a tal método es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su identificación posterior.

Pese a lo anterior, en el cuadro anexo en el respectivo informe se omite la información que permita la verificación de las ofertas relacionadas, salvo una del 2017 que no tiene mayor análisis, de ahí que se concluya que existe un error en el procesamiento de la muestra, es decir, "no se están realizando los cálculos matemáticos y estadísticos" que precisa el artículo 11 de la citada normatividad.

Finalmente, el avalúo calcula la afectación por obra pública que prevén los numerales 1, 2, 3 y 4 de la resolución 620 de 2008, sin

que haya lugar a ella en este caso concreto, ya que el bien no salió del comercio y la inscripción del trámite de expropiación solo tiene efectos publicitarios de acuerdo con el Artículo 19º del Decreto 2400 de 1989.

7.- Por auto del 27 de julio del 2022, el Magistrado Sustanciador, en vista de la falta de claridad del monto de la indemnización, decretó como prueba de oficio la práctica de dictamen pericial a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con miras a determinar el valor comercial del área de afectación del inmueble, esto es, 14.110,31m2, descrito en la Resolución No. 0647 del 20 de abril del 2018 incluyéndose en la tasación todos los aspectos regulados por el Decreto 1420 de 1998, en lo pertinente la Resolución No. 620 del 2008 y demás normas concordantes.

8.- Rendido el correspondiente trabajo, se puso en conocimiento de las partes y se citó a la audiencia de alegatos y fallo para el día 26 de abril del año en curso, oportunidad en la que se realizó la contradicción de la prueba de oficio conforme el artículo 231 del Código General del Proceso, seguidamente se escuchó a las partes en alegatos.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

1.- Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, como son demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer y competencia concurren en la litis, además como no se observa causal de invalidez que anule la actuación se impone una decisión de mérito.

2.- Desde la promulgación de la Carta Política de 1991, incluso en vigencia de la Constitución de 1886, en el Título II ***"De los derechos, las garantías y los deberes"****, Capítulo II* ***"De los derechos sociales, económicos y culturales"****, más precisamente en el artículo 58 se garantizó la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, pero también dijo que: "Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio".*

En desarrollo de esa preceptiva constitucional se promulgó la Ley 9ª de 11 de enero de 1989 "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones" y en su capítulo III trató "De la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y por expropiación", que comprendió los artículos 9 a 38; posteriormente se expidió la Ley 388 de 18 de julio de 1997

"Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones" y en el capítulo VII que modificó parcialmente el capítulo III de la ley 9ª de 1989 e hizo algunas al Libro Tercero, Título XXIV, arts. 451 a 459 del C. de P. Civil, se refirió a "Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial", pues en el art. 61 hizo ***"Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria"*** *y en el artículo 62 introdujo algunas adiciones al* ***"Procedimiento para la expropiación"****, de donde se deducen dos formas jurídicas: una denominada enajenación o venta voluntaria y otra titulada expropiación por vía administrativa regulada por el Capítulo VIII, artículos 63 y siguientes de la última ley citada.*

De igual forma, se tiene que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, definió como motivos de utilidad pública o interés social lo siguiente: "…la ejecución y/o desarrollo ***de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley,*** *así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política" (Énfasis de la Sala), normatividad aplicable a este caso concreto habida cuenta que precisamente el predio objeto de este litigio se requiere para construir el denominado proyecto "****Transversal de las Américas****".*

Igualmente, establece el canon 20 de esa misma normativa que: "La adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9ª. de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012. En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse las reglas especiales previstas en la presente ley."

Así que, las disposiciones aplicables en este asunto no son otras que una parte del Capítulo III de la Ley 9ª de 1989, arts. 13 y 14; el capítulo VII, artículos 58 a 62 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, la Ley 1682 de 2013 y las normas de procedimiento establecidas en el canon 399 del Código General del Proceso, siempre que no se opongan unas con otras.

3.- Bajo tales postulados descendiendo al caso concreto, como se anotó, la alzada se centra en el monto que se impuso pagar por la expropiación, por ello, el análisis de esta Sala se limitará a dicho tópico, sin perjuicio de resaltar que se cumplieron los requisitos generales para la declaratoria de expropiación como la expedición previa de la resolución administrativa, en la que se establece la necesidad de la franja de terreno, así como la presentación de la demanda judicial en término, misma que inicialmente correspondió conocerla al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería.

3.1.- Ahora bien, oportuno resulta acotar que la temática del avalúo se encuentra regulada en el artículo 23[1] de la Ley 1682 de 2013, el parágrafo 2º del artículo 24[2] de esa misma normativa, modificado por el artículo 9º de la Ley 1882 de 2018, así mismo establece el inciso 2º y 3º del artículo 37 de la regulación primeramente citada, modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, que en todo caso debe corresponder al valor comercial del bien, el cual se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, así como su destinación económica y de ser procedente la indemnización comprenderá el daño emergente y el lucro cesante.

3.2.- Con la demanda se adjuntó experticia que arrojó el valor comercial de la franja de terreno, mejoras y otros, en la suma de $206.449.353,oo. Puesto que el demandado se mostró inconforme con tal valoración, procedió conforme lo establecido en el numeral 6º del artículo 399 del C.G.P. y en esa dirección aportó dictamen elaborado por Humberto Zapata Gómez, en el que se tasó el valor del bien junto con los demás perjuicios en $1.452.126.224, suma esta que finalmente fue la acogida en la sentencia de la primera instancia, tras encontrar que la aportada pericia cumplía con todos los requisitos para este tipo de avalúos.

3.3.- Ante la ostensible diferencia entre uno y otro dictamen, el Tribunal decretó como prueba de oficio la elaboración de un nuevo trabajo que fue presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que se arrojó como valor a pagar la suma de $220.718.673, el cual se encuentra parcialmente ajustado a las circunstancias específicas del caso concreto, salvo

---

[1] *"artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, AVALUADORES Y METODOLOGÍA DE AVALÚO. El avalúo comercial para la adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.*
El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.
Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de transporte, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) tendrá como función adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) introducirá las modificaciones que resulten necesarias.
Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para los avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de transporte.
PARÁGRAFO. El retardo injustificado en los avalúos realizados es causal de mala conducta sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 18 de la Ley 1882 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> En las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que adopte e Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, no procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas, autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas en los términos del artículo 4o de la Ley 1228 de 2008."

[2] *"El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado, desde la fecha de su comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisión y/o, impugnación de este. Una vez notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para efectos de la enajenación voluntaria."*

en lo atinente a las denominadas construcciones anexas, como enseguida se expone.

*4.- Inicialmente, ha de recordarse que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 2008 la valoración de los daños en **cualquier proceso** que se surta ante la administración de justicia "…atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales".*

En tal sentido, cabe anotar que, al tener naturaleza indemnizatoria, la cuantía que se reconozca por expropiación no puede, en modo alguno, constituir una fuente de enriquecimiento para el propietario afectado, de manera que su tasación se hará en forma reflexiva por el juzgador conforme los elementos de juicio que para tal fin se encuentren en el expediente.

Sobre tal temática se ha pronunciado la jurisprudencia patria, para establecer en una misma dirección que:

"(….) el artículo 58 Superior no exige que quien sea expropiado reciba además de la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, también el pago de todos los costos adicionales que sean necesarios para adquirir un bien de las mismas características al expropiado y restituir al particular a condiciones similares a las que tenía antes de la expropiación. La indemnización en caso de expropiación no debe cumplir siempre una función restitutiva y, por eso, no tiene que ser integral. (Se resalta).

(…)

"De tal manera que el requisito constitucional de que la indemnización sea justa lleva necesariamente a no exigir que siempre responda integralmente a los intereses del afectado. En ciertas ocasiones dicha indemnización puede cumplir una función meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello sea necesario para garantizarle efectividad de derechos especialmente protegidos en la Carta …" (Sentencia C-1074-2002).

*Agregando en otra oportunidad que: (…) "**El desembolso máximo se activará cuando se requiere proteger los intereses de los afectados que tienen una especial protección constitucional, por ejemplo las madres cabeza de familia, los discapacitados, los niños o las personas de la tercera edad o se desea expropiar una vivienda sujeta a patrimonio de familia, siempre que esa condición o situación sea determinante para tasar el resarcimiento**. En eventos restantes, **la indemnización tendrá una función compensatoria**, escenario que se presenta cuando la autoridad después de ponderar los intereses en conflicto estima que su cuantificación responde al valor de la cosa perdida, sin reconocer otros perjuicios -daño emergente y lucro cesante-. La observancia de los parámetros descritos eliminará cualquier resquicio de confiscación de la medida expropiatoria" (Sentencia C-750-2015).*

Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que tratándose de decisiones en los que se involucra recursos de naturaleza pública, "los jueces deben realizar un estudio serio y juicioso, en controversias, que como la expropiación, involucran el interés general y los recursos públicos, reiterando la exigencia a los funcionarios de «ser dinámicos y proactivos en la averiguación de la verdad» (STC8027-2014, 24 jun 2014, 2014-00831-01).

*5.- En el asunto sub-examine, le asistió la razón a la primera instancia al descartar la validez del dictamen aportado por la Agencia Nacional de Infraestructura, pues a todas luces, el mismo no estaba vigente para el año en que se radicó el libelo -2018- al haberse elaborado con cinco años de antelación -15 de agosto del 2013- desconociendo con ello la orden del artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, a cuyo tenor**:** "los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación". Así mismo, la metodología para arribar al valor comercial de la franja de terreno correspondiente careció de solidez. Pero si lo anterior no fuera suficiente, obsérvese que el perito que elaboró tal dictamen, pese a haber sido citado insistentemente a absolver interrogatorio no asistió a la diligencia, y frente a esa renuencia, el artículo 228 del Código General del Proceso es claro al establecer que "**si el perito no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor**".*

No obstante lo anterior, considera esta Sala que tampoco había lugar a aceptar el avalúo que aportó el demandado Gonzalo Riaño, pues aunque ciertamente tal trabajo ofreció mayor detalle en ciertos aspectos, de igual forma, adolece de serias inconsistencias que pasaron inadvertidas por la juez a-quo.

*Y es que de la lectura de las normas que regulan la prueba pericial, artículos 226 a 234 del C. G. del P., es claro que el juzgador no puede someterse a los fundamentos y conclusiones del dictamen de manera ciega y sin ahondar en el examen de su contenido, pues de lo contrario caería en el absurdo que sería el perito el que fallara la litis; es que la función de dicho auxiliar es la de exponerle al juez sus opiniones personales acerca de las cuestiones que se le han planteado, por eso **el dictamen es una simple declaración de ciencia, cuyas conclusiones no son definitivas ya que pueden ser o no acogidas**; con apoyo en el artículo 232 C. G. del P., el fallador goza de la potestad de fijarle al peritaje el valor que en cada caso le merece teniendo en cuenta la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos y demás elementos probatorios obrantes en el proceso, lo cual indica que en esa apreciación ponderada que realice puede acogerlo o rechazarlo.*

*Sobre ello ha sostenido la H. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil que: "Es verdad consagrada la de que uno de los requisitos sine qua non, tiene dicho la Corporación, que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda ser admitido como prueba de los hechos sobre que versa, consiste en que **sea debidamente fundamentado; y que compete al juzgador apreciar con libertad esta condición, dentro de la***

autonomía que le es propia, no obstante que el dictamen no haya sido materia de tacha u objeción de las partes en el traslado correspondiente*…" Sentencia de 5 de abril de 1967.*

Conforme viene de exponerse, el trabajo pericial elaborado por el arquitecto Humberto Zapata Gómez que obra en el cuaderno que se tramitó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería (págs. 373 a 393) no podía ser aceptado sin reparar minuciosamente si sus métodos y conclusiones eran coincidentes con lo que revelaban los demás elementos de juicio, conforme lo ordena el artículo 176 del Código General del Proceso al establecer que : "las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos (…)".

Al respecto, obsérvese que se explica que se trata de un terreno en el que no existen construcciones, de tipo rural y cuyo uso actual es "explotación agrícola", sin embargo, el método de investigación del mercado se hizo respecto de otros predios "suburbanos sobre corredor vial de primer y segundo orden", arrojando un valor del metro cuadrado equivalente a $32.500, aclarándose además que no existía demasiada oferta de predios similares en el sector, por lo que "para verificar la consistencia" del resultado se procedió a realizar un ejercicio de actualización de la oferta con base en el IPC o los índices de valoración predial establecidos por el DANE y el Igac para inmuebles urbanos (cuadro 2).

Enseguida se dedica un capítulo para explicar cómo calcula el valor de las construcciones anexas, para lo cual se tomó "el valor de reposición a nuevo de cada una de las construcciones existentes" y se incluye "cerca de alambre 4 hilos", "estanque aguas lluvias", "estanque piscícola" y "tubería concreto 0,90 cms".

Lo hasta aquí reseñado revela varias inconsistencias, principalmente, en lo concerniente con el cálculo del valor del metro cuadrado, pues el método de comparación no luce sólido si se atiende que los inmuebles que se tuvieron en cuenta, según se consignó, se catalogan como "suburbanos", categoría definida en el artículo 34 de la Ley 388 de 1997[3], y que no fue asignada para el predio "Santa Mónica", pues ningún elemento de juicio

---

[3] **ARTICULO 34. SUELO SUBURBANO.** Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales.
Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.

refrenda esa situación, así como tampoco se advierte que se trate de áreas de expansión urbana[4]*.*

Sobre el tema, véase que conforme el artículo 14 numeral 4° de la citada ley, en el componente rural del plan de ordenamiento debe determinarse "la localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos (...)", sin embargo, para el caso del terreno que acá nos interesa únicamente se cataloga el mismo como rural localizado en áreas de actividad pecuaria y agrosilvopastoril, como se desprende del concepto del uso del suelo allegado por la Secretaría de Planeación de Montería (archivo 31, cuaderno Tribunal).

De igual forma, se pretendió soportar el avalúo del terreno con el índice de valorización predial, pero utilizando para ello un porcentaje previsto por el Dane y el Igac para inmuebles urbanos, apreciación que no viene al caso por la diferencia entre el tipo de terrenos. De ese modo, aplicar el método comparativo impone estudiar ofertas de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo, tarea que fuera inadvertida por el perito.

Pero si en gracia de la discusión pudiera aceptarse que el cálculo tuvo una adecuada fundamentación, no pasa desapercibido que tal como se aseguró en la censura, el dictamen omitió relacionar los medios que le sirvieron para enterarse de las ofertas con las cuales se realizó la estimación del metro cuadrado, conforme se ordena en el artículo 10 de la Resolución 620 del 2008, que prevé: "Método de Comparación o de mercado. Cuando para la realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, ***es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información*** *y la fecha de publicación, además de otros* ***factores que permitan su identificación posterior****".***

Contrario a ello, en el caso concreto, el dictamen se limitó a enunciar lo siguiente:

---

[4] ***ARTICULO 32. SUELO DE EXPANSION URBANA.*** *Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución.*
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social.
Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas.

Investigación de mercado. Valores en miles. Nov de 2018				
Item	**Oferta**	**Aera**	**Valor m2**	**Localización**
1	550.000,00	1.650.000,00	$ 3,00	Vda Sincelejo
2	30.000,00	800.000,00	26,67	Vda el Vidrial
3	40.000,00	1.200.000,00	30,00	Vda El Risueño
4*	15.672,50	626,90	25,00	Vda Puerto Rico
* Escritura 2019 de 01/12/2017. Notaría unica cerete. Avalúo enero 2014. Lonja Montería				

Es decir, se abstiene de exponer con exhaustividad, claridad y detalle las fuentes de donde se obtuvieron los datos que, además, puedan verificarse, así como de cumplir con el numeral 10° del artículo 226 del Código General del Proceso en cuanto a "relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen".

En adición a lo ya expuesto, por las reglas de la experiencia y con base en la sana critica, resulta extraño para este Tribunal que el área total del inmueble, esto es, 87.500 m2, fuera adquirido en el año 2009 por un valor total de $124.600.000, como da cuenta la escritura pública 1796 de la Notaría Segunda del Círculo de Montería, mientras que para el 2018 solo una franja de 14.110.31 se le asigne $458.585.075, sin que se acreditaran las razones por la cual se valorizó en tal forma el terreno.

5.1.-Ahora bien, en torno a las construcciones anexas se advierte que las medidas, cantidades e inventarios de "cerca de alambre 4 hilos", "estanque aguas lluvias", "estanque piscícola" y "tubería concreto 0,90 cms", fueron tomadas del informe inicial presentado por el demandante, no obstante, se adoptó el valor de reposición conforme la revista Construdata de noviembre del 2018. Tal estimación arrojó:

2*	Construcción cerca alambre 4 hilos	577,50	19.890,00	$	11.486.475
3**	Estanque aguas lluvias m3	16.535,60	18.300,00	$	302.601.480
**	Estanque piscicola m3	6.688,00	18.300,00	$	122.390.400
5***	Tubería concreto 0,90 cms diámetro M. lineal	8,00	65.113,95	$	520.912

5.2.- Cabe resaltar que en este dictamen tampoco se valoraron los cultivos y especies afectadas, lo que sí tuvo lugar con el trabajo aportado con la demanda, así como el decretado de oficio elaborado por el perito designado por el Instituto Agustín Codazzi.

Tal desatención va en contravía de lo ordenado por el artículo 29 de la Resolución 620 del 2008, que dispone que los avalúos en las zonas rurales, incluirán particularidades como cultivos: tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y cuando se refiera a bosques es necesario determinar claramente si éste es de carácter comercial cultivado o protector.

5.3. De otra parte, en el trabajo pericial se incluyó en la indemnización la suma de $556.541.883 por concepto de compensación

por afectación prevista en el artículo 21 de la citada resolución, conforme se expuso al descorrer el traslado de la demanda este valor se causó por "mantener fuera del comercio el inmueble y debido a la morosidad de la demandante para iniciar el trámite de expropiación". Salvo tales argumentos, la parte demandada se abstuvo de exponer y, lo que es más relevante, acreditar la necesidad de imponer la referida compensación.

Desde esa perspectiva, es claro que tal resarcimiento, precisamente por ostentar esa naturaleza, no opera automáticamente con la notificación de la oferta de compra y las consecuencias que ello acarrea sobre la disposición del dominio. La Corte Suprema de Justicia, sobre tal debate ha expuesto que el referido acto administrativo de ninguna manera impone el reconocimiento de la compensación, pues no ha sido la intención del legislador ya que: "…ello no solo iría en contravía de algunos principios fundantes del derecho probatorio[5]*, sino también de la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso".*

Agregó, además que "de haber sido esa la intención, así lo hubiese tenido que señalar el legislador en la ley, más no una resolución, que, se reitera, solo establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997, entre ellos, un método para calcular la compensación debida por la afectación a causa de una obra pública, más no su reconocimiento o procedencia, tarea que le corresponde al juez".

Porque en esa dirección: "el artículo 1° de la Resolución 898 de 2014[6]*, señala claramente que su objeto es «[f]ijar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración y actualización de los avalúos comerciales**, incluido el valor de las indemnizaciones o compensaciones en los casos que sea procedente**, en el marco del proceso de adquisición predial de los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley".*

En conclusión, se señaló que: "para que el juez de la expropiación reconozca las indemnizaciones y compensaciones a que haya lugar, es inexorable que el interesado(a) demuestre el daño sufrido o la afectación real producida a causa de la obra pública generatriz de dicha enajenación forzosa, pues, se recuerda, le «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen".

5.4.- Entonces, aplicado lo expuesto al caso bajo análisis, resulta patente que el extremo demandado dejó de acreditar las circunstancias particulares que conllevaran a la imposición de la compensación, por vía de ejemplo, pudo hacer un mayor esfuerzo para poner

---

[5] *CSJ. Sala de Casación Civil. STC1709-2021. MP. Álvaro Fernando García.*

[6] *"Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013."*

de presente en el litigio que la medida de expropiación frustró alguna negociación sobre el predio, que se limitó la explotación económica del bien u otra situación que permitiera al juzgador determinar la necesidad de tal condena, como así no lo hizo, siendo esa carga de su incumbencia conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, no había lugar al cálculo del emolumento en cita, de lo contrario, se avalaría un enriquecimiento sin causa a favor del particular y en contra de los recursos estatales.

Sumado a lo anterior, pasó inadvertido en la primera instancia que en las anotaciones 5 y 6 del folio de matrícula inmobiliaria del predio del señor Riaño Vargas se inscribió una hipoteca a favor de Davivienda, así como una medida de embargo por cuenta del Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, vicisitudes que ocurrieron desde el año 2011, esto es, 2 años previos a la inscripción de la oferta de la expropiación, y que por su naturaleza ya afectaban la negociabilidad del predio en el tráfico comercial, amén de constituir objeto ilícito, si hubiere ocurrido negocio jurídico en torno a ese bien raíz.

De ese modo, aunado a las circunstancias descritas, no es factible entender que la medida inscrita por cuenta de este litigio fue determinante para afectar la disposición del predio por parte del titular del dominio y, en ese sentido, carecería de sentido atribuirle a ese hecho la causación del perjuicio de compensación del que se viene hablando.

6.- Ahora, corresponde analizar el dictamen recaudado en esta sede, que fuera elaborado por el perito José Alberto Pacheco Echevarría designado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual, como se anotó cumple con los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso y <u>será en parte atendido</u> para la fijación de la indemnización, pues en general se encuentra ajustado a las circunstancias del caso, salvo una imprecisión que fuera advertida en la audiencia de sustentación (archivo 53AvaluoIGAC, Cuaderno Tribunal).

El referido trabajo reseñó la información básica o general del proceso y del predio o franja de terreno a expropiar, la información catastral resaltando que el avalúo de ese tipo (catastral) vigente de todo el inmueble asciende a $125.940.000.

Posteriormente, realizó una descripción general del sector, delimitando que se trata de un bien rural ubicado en la vereda Patio Bonito del Municipio de Montería, territorio conformado por predios dedicados en su mayoría a la explotación agropecuaria, desarrollando ganadería de doble propósito y cultivos variados como yuca, cítricos, plátano, ñame, maíz, papaya y maracuyá; de otro lado, identificó, entre otros aspectos, las vías de acceso, la infraestructura de servicios públicos, el nivel socio-económico, la situación de orden público, las perspectivas de valorización y la reglamentación del uso del suelo, tópico frente al cual destacó que de conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Montería (Córdoba) aprobado mediante el Acuerdo 003 de 2021 modificado y el certificado de uso firmado por la

Secretaria de Planeación Municipal el área se localiza en zonas de actividad rural como pecuaria y agrosilvopastoril.

6.1.- Enseguida se realizó la descripción del inmueble, con las características generales del terreno como ubicación, área afectada correspondiente a 14.110.31 m2, linderos y dimensiones, relieve y rango de pendiente, características climáticas, disponibilidad de recursos hídricos, estado de las vías, etc… En el mismo acápite resaltó que en el predio no existen construcciones y relacionó las construcciones anexas así:

ANEXOS			
	Descripción	Cant.	UN
C1	Cerca en horcones de madera burda de 3" X 3" a 1.00 metros de distancia entre estos, con 4 líneas de Alambres de Púas calibre 14 en buen estado.	74.00	ML
C2	Cerca de cerramiento pozo en madera burda con horcones de 3 X 3 a un metro de distancia entre horcones con hiladas de vareta de 6" X 1" en buen estado.	67.20	ML
C3	Cerca en horcones de madera burda de 4" X 4" a 2.00 metros de distancia entre estos, con 4 líneas de Alambres de Púas calibre 14 en buen estado.	31.50	ML
C4	Cerca en horcones de madera burda de 4" X 4" a 4.00 metros de distancia entre estos, con 4 líneas de Alambres de Púas calibre 14 en buen estado.	224.00	ML
C5	Cerca en horcones de madera burda de 4" X 4" a1.50 metros de distancia entre estos, con 5 líneas de Alambres de Púas calibre 14 en buen estado	181.30	ML
C6	Estanque para almacenamiento de aguas lluvias en terraplén de 1.80 metros de altura en buen estado.	7,830.00	M3
C7	Estanque para cultivos de peces con paredes en terraplén de 1.50 metros de altura, en buen estado	3,010.00	M3
C8	Tubería de concreto de 90 centímetros de ancho (usillos), en buen estado	8.00	ML

Algunas construcciones anexas no se encontraron en el momento de la visita las vamos a tener en cuenta
Nota: Las áreas esta sujetas a verificación por parte de la entidad peticionaria.

En este tópico, de las construcciones anexas, surgió la controversia en la audiencia de sustentación y fallo, asistiéndole razón al apoderado de la demandada cuando expuso que las cantidades de medida de los ítems c6 y c7 se hicieron por 7.830 y 3.010 metros cúbicos respectivamente, sin atender que la estimación con base en la cual se presentó el libelo (hecho sexto) calculó los estanques en las cantidades de 16.535,60 y 6.688,00 metros cúbicos, lo que deriva en que la indexación efectuada se hiciera sobre valores que, finalmente, no fueron aquellos que sirvieron de soporte para la oferta de la demanda correspondiente a $206.449.353.

En suma, se presentó un problema de lectura de las piezas procesales que generó confusión, pues con el libelo se acompañaron dos dictámenes (págs. 153 a 171. archivo 001, Cuaderno C02ActuacionesJdo2CCTOCordoba), pero solo uno de ellos (págs. 189 a 219 ib), fue el que se adoptó para la indemnización propuesta con la acción judicial y este último surgió con motivo de la protesta de la parte demandada sobre la valoración de las mejoras en la etapa prejudicial.

Puestas así las cosas, estamos frente a una inadvertencia en el trabajo encomendado, pero que en manera alguna descalifica la calidad y fundamentación del mismo, habiendo lugar por parte de esta judicatura a efectuar el ajuste respectivo en lo que corresponde a esos ítems, es decir, se procederá a indexar el valor de las construcciones anexas que arrojó el trabajo pericial visto en la páginas 189 a 219 del cuaderno principal, calculadas con las cantidades de 16.535,60 y 6.688,00 metros cúbicos, pues este fue el metraje definitivo para la oferta de la entidad pública.

En el citado trabajo se señalaron los siguientes datos:

Estanque para almacenamiento de aguas lluvias con paredes en terraplén 4,0 mts de altura y area superficial de 4133,9, en buen estado.	16535,60	M3	6.615,00	109.382.994,00
Estanque para cultivos de peces con paredes en terraplen a 4,0 mts de altura y area superficial de 1672 M2, en buen estado.	6688,00	M3	6.615,00	44.241.120,00

Entonces, los atrás reseñados montos se traerán al valor presente teniendo como fecha inicial el 15 de agosto del 2013 (fecha del informe de la ANI), en tanto que como fecha final, se tendrá en cuenta la variación del IPC reportada para marzo del 2023, ya que para el momento de la emisión de este fallo es el último reportado por el DANE[7]*.*

En claro lo anterior, es de advertir que para efectos de la indexación se utilizará la siguiente fórmula:

$$Vp = \frac{Vh \ x \ I.F}{I.I.}$$

En donde: Vp = valor presente; Vh = valor histórico o a indexar; I.F = índice final, se toma el valor del I.P.C. a la fecha de la indexación I.I. = índice inicial, se toma el valor del I.P.C. a la fecha en que se realizó el pago.

La actualización de la suma de ***$109.382.994***[8] *se discrimina así:*

$$Vp = \frac{\$109.382.994,oo \text{ x marzo del } 2023}{\text{Agosto del } 2013}$$

$$Vp = \frac{\$109.382.994,oo \text{ x } 131,77}{79,50}$$

Vp = $181.300.592,69

Por su parte, la actualización de la suma de ***$44.241.120***[9] *se discrimina así:*

---

[7] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

[8] *Que corresponde a estanque para almacenamiento de aguas lluvias.*

[9] *Que corresponde a estanque para cultivo de peces con paredes en terraplén.*

$$Vp = \frac{\$44.241.120,oo \text{ x marzo del } 2023}{\text{Agosto del } 2013}$$

$$Vp = \frac{\$44.241.120,oo \text{ x } 131,77}{79,50}$$

Vp = $73.328.960,78

En síntesis, el dictamen se ajustará en esos dos ítems, variando el monto calculado por el perito Pacheco Echeverría.

6.2.- Superado lo anterior, se advierte que el dictamen del IGAC describió los cultivos que se relacionaron conforme el avalúo inicial presentado por la entidad demandante, aclarándose que no se pudo evaluar el estado fitosanitario actual de los mismos porque en la visita al campo ya no se encontraban, lo que se estima lógico, debido a que el terreno fue intervenido desde el año 2013.

6.3.- También, en el acápite octavo del trabajo pericial se describieron los métodos de avalúo adoptados, siendo estos el de comparación o de mercado y el de costo de reposición regulados en los artículos 1° y 3° de la Resolución 620 del 2008, además se tuvo en cuenta, en el siguiente punto -9°- los antecedentes históricos del IGAC encontrándose una avalúo antecedente realizado en el año 2022 a un predio de titularidad del aquí demandado con condiciones comparables al inmueble "Santa Mónica", ambos ubicados en la ciudad de Montería.

De acuerdo con la metodología explicada, relacionó los datos de mercado encontrados en diferentes fuentes, 2 directamente en terreno y 2 en consultas realizadas en páginas especializadas de internet, los datos, se dijo, corresponden a inmuebles rurales localizados en el sector de ubicación y en sectores comparables. En esa dirección, se relacionaron las ofertas y consignaron antecedentes para consultar la procedencia de las mismas, conforme lo ordena el artículo 10 de la Resolución 620 del 2008.

Ahora bien, frente a la abismal diferencia ($35.000 vs $3.500) sobre la avaluación del metro cuadrado del terreno, cabe anotar que como con insistencia se ha consignado en el cuerpo de esta providencia, estamos frente a un predio rural que no cuenta con franjas que se puedan calificar como de expansión urbana o suelo suburbano, situación que debe ser mirada a la fecha de esta sentencia y soportada en el POT vigente para esa entidad territorial.

6.4.-Igualmente, explicó que se tomó en cuenta el avalúo suministrado por la concesión para el inventario de construcciones anexas y cultivos y/o elementos permanentes, los cuales se actualizaron a valor presente y para el cálculo del lucro cesante tuvo en cuenta las cabezas de ganado que podrían tenerse en la franja de terreno expropiada durante un periodo de 6 meses, dando cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del

artículo 399 del Código General del Proceso, a cuyo tenor: "para efectos de calcular el valor de la indemnización por lucro cesante, cuando se trate de inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos proveniente del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejaren de percibir hasta por un periodo máximo de seis (6) meses".

En esta última temática, cabe mencionar que, si bien en la audiencia de contradicción del trabajo pericial se aludió a la ausencia de valoración de lucro cesante por la actividad piscícola, lo cierto es que en el expediente no milita elemento de juicio que permita concluir que el terreno tenía explotación económica de ese tipo (ni ello fue alegado al contestar el libelo). En todo caso, como la indemnización en la expropiación, en lo posible debe ser integral, viene al caso la ilustración que el perito dio al respecto, en torno a un aprovechamiento de orden pecuario, sin que ello contravenga ni la vocación agrosilvopastoril del terreno, ni la norma atrás citada que establece un límite temporal para el cálculo de ese perjuicio.

6.5.- En definitiva, calculó el valor del terreno en $49.386.085, el de los anexos en $137.464.800, el de los cultivos en $33.471.500 y el del lucro cesante a seis meses como lo ordena la normatividad en $396.000, para un total por la compensación de $220.718.673, tasación que salvo la modificación atrás explicitada en torno a los estanques, luce acorde con las circunstancias del caso concreto y se considera equitativa, atendiendo que en las expropiaciones, como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil-, la indemnización no tiene por regla general un carácter restaurativo, pues se deben ponderar los intereses del propietario afectado con los de la comunidad y, en muchas ocasiones, la retribución puede ser reparatorio o meramente compensatoria.

Aunado a lo anterior, véase que en el asunto sub examine no se involucran derechos de sujetos o bienes especialmente protegidos; que no se acreditó que la franja de terreno expropiada tuviera condiciones particulares de explotación económica que hicieran imperioso acceder a un mayor valor y que la fijación del resarcimiento no puede estandarizarse para todos los eventos, sino que ese reconocimiento debe ser justo y, siempre, atendiendo principios de razonabilidad y proporcionalidad.

*7.- Puestas así las cosas, el avalúo total de la franja, con la modificación de los valores explicada en el numeral 6.1.- arroja un total de **$356.107.925**, en esa dirección se modificará los numerales 4° y 5° de la sentencia para fijar como indemnización la suma reseñada, debiendo el demandante consignar el saldo correspondiente a órdenes del juzgado de primera instancia, para que se dé cumplimiento al numeral 7° del fallo, además, no se impondrá condena en costas, ante la prosperidad de la alzada.*

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

***1.- MODIFICAR** los numerales 4° y 5° de la sentencia del quince (15) de junio del dos mil veintidós (2022), pronunciada en el Juzgado Octavo (8) Civil del Circuito de la ciudad. En su lugar se ordena:*

*FIJAR la indemnización a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- en la suma de **$356.107.925.** Puesto que ya se consignaron $206.449.353 por cuenta de la oferta inicial, se ordena a la demandante poner a disposición del juzgado el saldo correspondiente de $149.658.572. Lo anterior, en el término de 20 días siguientes a la ejecutoria de este fallo.*

En lo demás se confirma la sentencia.

***2.-** Sin **CONDENA** en costas.*

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADO

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: b74f60ccc2d6867c3c9cf5996191618c77a69af7635a4cfbd495f3dd135adb6e
Documento generado en 28/04/2023 02:13:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Proceso N.°	11001310300820210043801
Clase:	VERBAL -RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Demandante:	JOSÉ JAIRO SALINAS BUSTAMANTE y OTROS.
Demandada:	AR CONSTRUCCIONES S.A.S..

Se resuelve la apelación que la parte demandada interpuso contra el auto de 7 de diciembre de 2022 proferido por el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá, con el que rechazó el incidente de nulidad que formuló.

ANTECEDENTES

1. En el curso del proceso declarativo del epígrafe, el 28 de octubre de 2022, la sociedad AR Construcciones S.A.S. elevó solicitud de nulidad con soporte en la causal a que alude el numeral 8º del artículo 133 del CGP, con miras a que se invalide "el acto de notificación personal a la parte demandada efectuado en día 21 de octubre de 2022 a través de mensaje de datos enviado mediante correo electrónico", con fundamento en que:

(i) El 21 de octubre de 2022 recibió correo electrónico con el asunto "Certificado: Notificación Personal - José Jairo Salinas y Otros vs AR Construcciones S.A.S., proceso N.° 2021-438" al que se anexó un archivo en formato PDF, que al encontrarse en un enlace de Google Drive, y ser esa una carpeta digital, "puede ser eliminada o inclusive modificada por el remitente cuando aquel lo disponga", lo que a su juicio constituye "una irregularidad".

(ii) En ese archivo únicamente se incluyó el auto admisorio de la demanda que data 22 de julio de 2022, el libelo introductor y anexos, siendo que, debieron aportarse también "las múltiples versiones de demanda identificando la fecha de radicación de las mismas, la totalidad

de los autos proferidos por el juez para que el actor subsanara la demanda y los anexos conforme se enunciaron en el petitum", pues según la información obrante en el Sistema Siglo XXI se emitieron providencias adiadas 7 de diciembre de 2021, 8 de marzo y 7 de julio de 2022, que versaron sobre la inadmisión y subsanación del libelo, sin que de ellas se haya aportado copia alguna, luego no se tiene certeza sobre "si el demandante subsanó en debida forma la demanda y mucho menos se puede determinar a cuál versión de la demanda se hace referencia"; por lo que no puede considerarse que la notificación se surtió, pues, se desconoció el escrito de demanda sobre el que debía pronunciarse.

(iii) Los documentos que le fueron remitidos en el aludido correo electrónico "no concuerdan con los que el Juzgado consideró como demanda apta", por lo que su envío "no necesariamente implica el cumplimiento de una notificación en debida forma".

2. Mediante el proveído cuestionado, la juez de primer grado negó la aludida petición de invalidez, tras manifestar que el trámite de notificación sobre el cual se pretende la nulidad no fue tenido en cuenta "tal y como consta en auto del 14 de octubre de 2022, por lo que cualquier análisis sobre el particular resultaría innecesario".

3. Inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, con soporte en que la motivación del *a quo* "para rechazar la nulidad propuesta contra la notificación realizada el 21 de octubre de 2022, no puede ser que el trámite de notificación no fue tenido en cuenta en auto del 14 de octubre de 2022", por tratarse de actuaciones procesales diferentes y anteriores al acto cuya invalidez se pretende, y que en todo caso, no puede considerarse que se notificó por conducta concluyente, toda vez que "no se cuenta con la totalidad de piezas procesales que componen la demanda".

4. A través de proveído de 8 de marzo de 2023, la primera instancia confirmó la determinación recurrida, con soporte en que no se tuvo en cuenta ninguna notificación efectuada por la parte demandante, por el contrario, se tuvo por notificado al recurrente por conducta concluyente, de manera que "resulta innecesario hacer un estudio de fondo sobre la notificación que refiere".

Por lo tanto, se procede a resolver la apelación previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

La providencia recurrida debe confirmarse, por las razones que proceden a exponerse.

Efectuada una revisión del plenario se evidencian las siguientes actuaciones relacionadas con la censura del recurrente:

(i) Que en auto adiado 7 de diciembre de 2021, la juez de primera instancia inadmitió la demanda, allegándose el 12 siguiente, por la parte demandante la subsanación del libelo.

(ii) Que mediante proveído de 8 de marzo de 2022, se rechazó la demanda, determinación que fue impugnada por la actora, y que al desatarse el recurso de reposición y subsidiario de apelación, en auto de 7 de julio de la misma anualidad, se resolvió inadmitir nuevamente el libelo para que se allegasen los poderes otorgados por los demandantes de conformidad con el artículo 74 del CGP o con el artículo 5º de la Ley 2213 de 2022.

(iii) Que en providencia de 22 de julio de 2022, una vez se encontró subsanada la demanda en legal forma, la juez de primera instancia la admitió ordenando notificar al extremo pasivo "en los términos de los artículos 290 y siguientes del Código General del Proceso y/o conforme lo establecido en el artículo 8 del Decreto 806 de 2021".

(iv) Que el 23 de septiembre de 2022, la parte demandante allegó constancia de envió del correo electrónico titulado "Notificación personal - José Jairo Salinas y otros Vs AR Construcciones S.A.S., Proceso No. 2021- 438", que el 1° de agosto de 2022, remitió a la dirección electrónica de la demandada (dirjuridica@arconstrucciones.com), para que se la tuviera por notificada desde esa fecha.

(v) Que mediante proveído de 14 de octubre de 2022, tras efectuar una revisión del aludido acto de enteramiento, se requirió a la parte demandante para que procediera a notificar "en debida forma" a la demandada "bien sea por los lineamientos previstos en los artículos 291 y 292 del C.G.P. o por el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, itérese, sin unificar estas dos formas de notificación".

(vi) Que a través de memorial enviado el 28 de octubre de 2022, a la 1:00 p.m., la parte demandada presentó la antes referida solicitud de nulidad; y posteriormente, esto es, a las 4:32 p.m. de la misma fecha,

interpuso recurso de reposición en contra del auto adiado de 22 de julio de 2022, con miras a que se revoque la orden de pago proferida en su contra.

(vii) Que mediante proveído de 7 de diciembre de 2022, la juez de primera instancia tuvo por notificada a la parte demandada por conducta concluyente y advirtió que el término para contestar la demanda "empezará a contabilizarse una vez se resuelva el recurso de reposición en contra del auto admisorio"; determinación respecto de la cual la pasiva solicitó que se procediera con su aclaración o corrección, en razón a que "no resulta claro el momento y fecha exacta en que se entiende como notificado a [ese] extremo procesal por conducta concluyente".

(viii) Que en autos de 8 de marzo de 2023, la juez de primera instancia de un lado, negó la solicitud de aclaración de la recurrente, tras señalar que en el auto de 7 de diciembre de 2022 "se indicó que en virtud al recurso de reposición presentado por el actor en contra del auto admisorio, el término para contestar la demanda se contabilizaría una vez resuelto este"; y que a la luz de lo reglado en el articulo 301 del CGP "se entiende que la notificación del demandado se surtió el 28 de octubre de 2022"; y de otro, resolvió no revocar la orden de apremio y previno para qué comenzará a contabilizarse el término con que cuenta el extremo pasivo para contestar la demanda.

Del anterior recuento, deviene palmario que, aunque la pasiva pretendió la nulidad del acto de notificación personal "efectuado en día 21 de octubre de 2022 a través de mensaje de datos enviado mediante correo electrónico", dicho presunto enteramiento no fue tenido en cuenta por la juez *a quo,* pues a demás de que la actora no aportó a la actuación del epígrafe copia de aquella diligencia, en proveído de 7 de diciembre de 2022, se determinó que con ocasión de la intervención que la demandada efectuó el 28 de octubre de 2022, para de un lado, impetrar la aludida nulidad, y de otro, interponer recurso contra la orden de apremio, se notificó por conducta concluyente, según lo reglado en el artículo 301 del CGP.

Así las cosas, los reparos que la parte recurrente impetró contra el auto que rechazó la solicitud de nulidad que formuló están llamados al fracaso, pues aunque la pasiva adujo que la actuación cuya nulidad pretende (notificación a través de correo electrónico del 21 de octubre de 2021) es posterior al auto emitido el 14 de octubre de esa misma anualidad, en el que se desestimó el enteramiento que la actora efectuó a través de un correo electrónico enviado el 1° de agosto anterior, y que

por consiguiente, debía ser estudiada por la juzgadora de primer grado; lo cierto, es que aquella presunta notificación no fue aportada por la actora con miras a tener por enterado al extremo demandado, pues en el plenario tan solo obra un reporte de envío de aquel correo electrónico aportado por la demandada, mas no, se itera, por la demandante y de forma completa; por lo que tal como lo indicó la juez *a quo*, dicho acto no fue tenido en cuenta en esta tramitación, y por consiguiente no había lugar a efectuar un análisis sobre su validez, lo que imponía el rechazo de aquella petición de nulidad.

Ahora bien, en cuanto al reparo de la pasiva referente a que no puede considerarse que se notificó por conducta concluyente, toda vez que "no se cuenta con la totalidad de piezas procesales que componen la demanda", se observa que, además que dicho argumento no tiene relación alguna con la pretendida nulidad, que se itera, se restringe al presunto acto de enteramiento desplegado por medios electrónicos el 21 de octubre de 2022, si su descontento deviene de dicha determinación, debió, en la oportunidad procesal oportuna interponer los recursos procedentes contra las providencias en que aquella se adoptó, esto es el auto de 7 de diciembre de 2022, en el que se resolvió tener por notificada a la parte demandada por conducta concluyente y se advirtió que el término para contestar la demanda "empezará a contabilizarse una vez se resuelva el recurso de reposición en contra del auto admisorio"; y aquel de 8 de marzo de 2023, en el que se negó la solicitud de aclaración de la recurrente; por lo que dicha argumentación también esta llamada al fracaso.

Lo discutido es suficiente para confirmar el auto apelado; sin condena en costas por no aparecer probadas.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador,

RESUELVE

Primero. Confirmar el auto del de 7 de diciembre de 2022 proferido por el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo. Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Tercero. Devolver en oportunidad, las diligencias al estrado de origen.

NOTIFÍQUESE

El Magistrado,

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

Firmado Por:
Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **78522750e7ab838a7a6a67eed1e716a157784c0f9373e319e969de487f0b1245**
Documento generado en 28/04/2023 03:43:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-009-2020-00333-01
Demandante: DANIEL GONZALO HERRERA SALAZAR
Demandado: ROCÍO GUTIÉRREZ TÉLLEZ y otro.

Ejecutoriado como se encuentra el auto que dispuso la admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia calendada 15 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, sin que dentro del expediente se advierta solicitud probatoria alguna, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, se **REQUIERE** a la parte apelante para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, proceda a sustentar de manera escrita su alzada, advirtiéndole que ante su silencio, **se declarará desierto el mecanismo de impugnación**.

Notifíquese y Cúmplase,

FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	:	MARÍA NANCY LÓPEZ PEÑUELA LUCILA YARLEY BRAVO PEÑUELA, en nombre propio y en representación de sus hijos DIANA MARCELA DIOSA BRAVO y JUAN DIEGO DIOSA BRAVO. MARÍA FERNANDA DIOSA ARUBLA
DEMANDADO	:	JUAN DAVID CARDONA OSORNO, GERMÀN DAVID CANO CADAVID Y WILLY JACKSON CERTOCHE VALENCIA
CLASE DE PROCESO	:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
MOTIVO DE ALZADA	:	APELACIÓN SENTENCIA

Al realizar el examen preliminar el asunto se advierte que no es procedente admitir el recurso por la ocurrencia de un vicio procesal que ha de reconocerse.

Con miras a facilitar que las personas (determinadas o indeterminadas) se enteren de la existencia de procesos tramitados en su contra, o de su respectivo causante, el legislador previó tanto el mecanismo del emplazamiento como del Registro Único de Personas Emplazadas. Este registro, como otros que consagra la legislación procesal[1], son públicos y tienen la finalidad de permitir "la consulta de la información del registro" (art. 108 parágrafo 1).

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la trascendencia de emplazar en debida forma a un sujeto que debe comparecer al proceso (en nombre propio, en representación de un tercero, o de la sucesión de un causante), por cuanto con el mismo se "franquea la puerta al ejercicio del derecho de defensa, garantía constitucional que como componente fundamental del debido proceso se resiente en presencia de irregularidades en el trámite cumplido para lograr la comparecencia del demandado en el juicio. En ese contexto, la ley requiere que la primicia sobre la existencia del proceso deba darse al demandado cumpliendo a cabalidad las exigencias que ha puesto el

[1] Además, cuando se trata de acciones de pertenencia también se ordenó el registro de procesos para que todos los que se crean con derechos sobre el inmueble pretendido puedan conocer el bien de que se trata, dado el carácter *erga omnes* de la declaración de pertenencia.

legislador en tan delicada materia, todo con el fin de lograr el propósito de integrarlo personalmente a la relación jurídico procesal"[2].

En el Acuerdo No. PSAA14-10118 de marzo 4 de 2014, ("Por el cual se crean y organizan los Registros Nacionales de Personas Emplazadas, de Procesos de Pertenencia, Bienes Vacantes o Mostrencos, y de Procesos de Sucesión"), el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que "Los Registros Nacionales reglamentados mediante este Acuerdo estarán disponibles al público en general a través de la página web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co, para facilitar su acceso, consulta y disponibilidad de la información en todo momento" (art. 3).

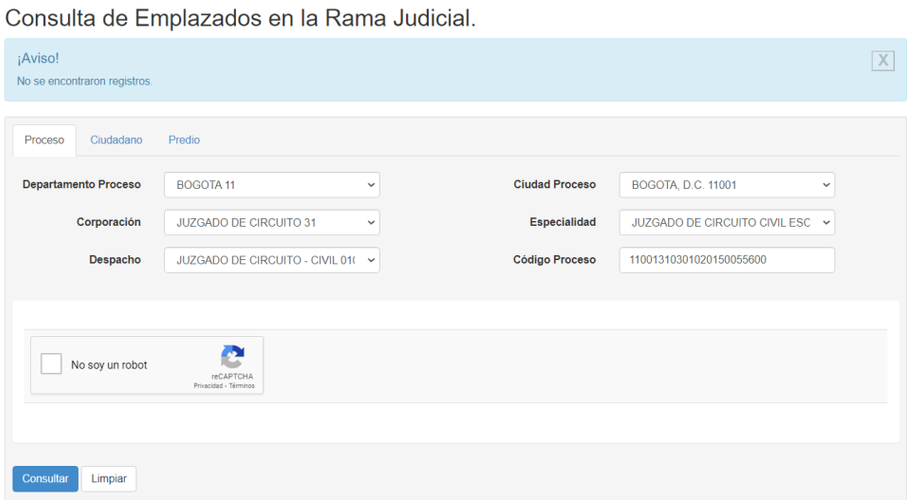
A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió los manuales "DE USO DE LOS REGISTROS NACIONALES (RN) PARA DESPACHOS JUDICIALES", y el "DE USO PARA LA CONSULTA DE PERSONAS EMPLAZADAS Y LOS REGISTROS NACIONALES (RN)", el 20 de febrero de 2015. El primero de ellos señala que el registro se compone de 4 secciones, en las que se quiere destacar la de "nuevo proceso" y la de "información del sujeto", donde van los "Datos del demandante(s), demandado(s) y/o emplazados"; además, otro aparte destinado a la "consulta del ciudadano" en el que expresamente se consignó que el ingreso "será por el portal de la Rama Judicial o a través del siguiente acceso: Portal web de la Rama Judicial en la sección de Ciudadano, el enlace: Consulta Personas Emplazadas y Registros Nacionales", con las siguientes opciones: "datos del ciudadano emplazado, identificación del bien, datos del proceso". El segundo indica que el ciudadano debe tener acceso a la consulta por "Datos del proceso, Datos del ciudadano emplazado...".

De esto se desprende que el mencionado registro lo gobiernan las características de publicidad y acceso a la información completa sobre el proceso, el sujeto emplazado, el despacho que lo requiere y las partes; acceso fácil a la plataforma en la que se encuentran esos datos y, lo más relevante, el ciudadano o los terceros emplazados puede ubicar directamente, desde cualquier lugar, el trámite en el que es convocado a juicio consultando, como en este caso por el nombre de su causante o su número de identificación, con lo que se le garantizan los derechos fundamentales a la contradicción y defensa (artículo 29 de la Constitución Política).

En este caso, en audiencia del 19 de septiembre de 2018, se ordenó la vinculación de la menor María Fernanda Diosa Arrubla, a través

[2] Rentencia de 24 de octubre de 2011, expediente 1969, reiterada en sentencia de 1° de marzo de 2012. Referencia: C-0800131030132004-00191-01.

de su madre, en calidad de litisconsorte necesaria del extremo actor (archivo CP_0919103445920 min. 1:28:35 a 1:30:00). Después, el 21 de mayo de 2019, se ordenó el emplazamiento de Noralba Arrubla Álvarez, en su calidad de representante legal de la menor mencionada y que, una vez realizada la publicación, la secretaría debía crear el proceso en el Registro Único de Personas Emplazadas. Realizada la publicación, el 26 de septiembre de 2019 se designó curador ad litem sin percatarse de haber dado cumplimiento a la otra orden (Archivo00C01Principal, Pág. 737 y 755) y sin que conste en el expediente la inclusión de la información en el Registro Único de Personas Emplazadas y una vez verificada la plataforma respectiva, se advierte que, en efecto, allí no se creó el proceso, por ende, tampoco se incluyó el emplazamiento ordenado. Que no tiene registro alguno en el sistema, se constata en la siguiente imagen, al no contar con la cédula de la señora Arrubla Arbeláez, se consultó solo con el número del proceso:



Esta situación ocasionó que el emplazamiento no se haya cumplido de la manera debida, pues la norma expresamente señala que solo "se entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro" (inciso 6° del artículo 108 del CGP), y que no se haya efectuado, efectivamente el registro requerido impide que la actuación haya sido pública.

Lo anterior estructuró la nulidad regulada en el artículo 133 (numeral 8) del CGP, por no practicarse en legal forma "**el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas**", la cual no puede tenerse como saneadas en la medida en que se refiere a los terceros que no han sido debidamente convocados y que por esa misma razón estarían en imposibilidad de alegarla o proponerla. En consecuencia, se impone declararla a partir del 26 de septiembre de 2019, fecha en que se dispuso la designación de curador *ad litem* y, en su lugar, se ordenará que se subsane lo atinente a la información echada de menos en el registro, de

modo tal que se realice conforme es exigido en la norma procesal y proceda a designar nuevamente al auxiliar en representación de la señora Arrubla Álvarez.

Por lo expuesto, el Tribunal, **RESUELVE:**

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir del 26 de septiembre de 2019, fecha en la que se ordenó la designación de curador *ad litem* de Noralba Arrubla Álvarez en representación de la menor María Fernando Diosa Arrubla y, en su lugar, el *a quo* dispondrá lo pertinente para que se cumpla con el registro público de personas emplazadas en la forma debida y proceder como se indicó previamente.

SEGUNDO. La prueba practicada dentro de esta actuación conservará validez y "tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla", tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 138 del CGP.

NOTIFÍQUESE



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Ponente

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	VERBAL
DEMANDANTE	PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL
DEMANDADO	ASURCONS LIMITADA EN LIQUIDACIÓN
RADICADO	11001310301020180015601
PROVIDENCIA	Interlocutorio nro. 10
DECISIÓN	**CONFIRMA**
FECHA	Veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Decide esta magistratura el recurso de apelación interpuesto por el incidentante contra el auto de fecha 14 de diciembre de 2022, mediante el cual el Juzgado Décimo Civil del Circuito. rechazó un incidente de regulación de honorarios.

2. ANTECEDENTES

2.1. El día 18 de octubre de 2022, el perito John Jairo Ardila radicó ante el Juzgado Décimo Civil del Circuito, memorial pretendiendo que sus honorarios fueran regulados, *"teniendo en cuenta que los gastos provisionales son muy precarios e insuficientes para la labor realizada y el complicado trabajo que se debió realizar sobre el predio" (SIC).*

2.2. El auto apelado. Mediante proveído adiado 14 de diciembre de 2022, el Juzgado cognoscente rechazó de plano el incidente propuesto, al considerar que la solicitud no fue presentada por un apoderado reconocido de las partes del proceso.

2.3. El recurso. Contra la anterior determinación, el incidentante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando que en el proceso se encuentra acreditada la gestión que realizó y que la Iglesia "La Laguna", es responsable del pago de sus honorarios, por ser la solicitante de la prueba. Aunado a ello, sostuvo que se deben regular su honorarios en atención a la complejidad del proceso, la cuantía de la pretensión, la duración del cargo y la naturaleza de los bienes inmuebles.

2.4. Auto concede apelación. En auto del 27 de marzo de 2023, el *A quo* mantuvo incólume su decisión y concedió el recurso de apelación para que la pugna fuera resuelta por esta magistratura.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Anticipadamente se advierte que no se abordará el análisis de fondo de la situación planteada, sino lo atinente al rechazo de plano del incidente, ya que se trata de dos situaciones jurídicas diametralmente distintas, pues la primera se refiere a cuando a la petición se le ha dado el trámite legal y se estudian los fundamentos de facto planteados, para concluir si le asiste o no razón al incidentante, en tanto que la segunda, se remite a cuestiones de forma que impiden la procedibilidad de dicho trámite accesorio.

3.2. Recuérdese que el Juzgador está facultado para rechazar todo incidente, únicamente, cuando se encuentre encasillado en cualquiera de las siguientes causales: a) que no esté expresamente autorizado por el Código General del

Proceso o la ley; b) el que se promueva fuera de término; y c) el que no reúna los requisitos formales.

3.3. Para desatar el caso concreto, se debe tener en cuenta el artículo 76 del Código General del Proceso, que establece que *"Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior".*

3.4. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Suprema de Justicia, en providencia SC AC4063-2019, se pronunció en el siguiente sentido:

> *"A partir de lo que disponía el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil en torno al finiquito del poder, que básicamente es similar a la regulación actual, la Sala ha expresado que la figura del incidente de regulación de honorarios está sometido a las siguientes directrices:*
> *a)* ***Presupone revocación del poder*** *otorgado al apoderado principal o sustituto, ya expresa, esto es, en forma directa e inequívoca, ora por conducta concluyente con la designación de otro para el mismo asunto. (…)* ***c) está legitimado en la causa para promover la regulación el apoderado principal o sustituto, cuyo mandato se revocó.*** *(…) (Negrilla fuera de texto)"*

Bajo esta óptica, aterrizados los anteriores planteamientos al caso *sub examine*, se observa que no se satisfacen los mencionados presupuestos, teniendo en cuenta que no obra poder conferido al perito John Jairo Ardila por las partes del proceso, y por ende, tampoco revocatoria expresa o tácita del mismo, lo cual descarta su condición de apoderado o mandatario de alguna de ellas,

3.5. Por lo anterior, se colige que el perito John Jairo Ardila, no se encuentra legitimado para solicitar la regulación

de honorarios al interior de este proceso, por lo que la decisión de rechazarlo de plano se encuentra ajustada a derecho. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda acudir ante el Juez laboral para exponer allí sus dolencias.

3.6. Sin más consideraciones, se confirmará la decisión recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído apelado, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: Oportunamente devuélvase la actuación al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Firmado Por:

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **211e5e619104b822d3425fb6c550c7327bb025242a27beec9be79846eb5f3472**

Documento generado en 28/04/2023 04:45:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16327

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-011-2019-00199-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **37ed1c207f29c9039643678b7b9237fb0aa708b4ff8a9bc92e1304a5b7bbefa4**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:25 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-012-2019-00350-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Revisada las actuaciones en el expediente digital aportado, el Despacho **DISPONE:**

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de apoderado judicial, contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2023, por el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad.

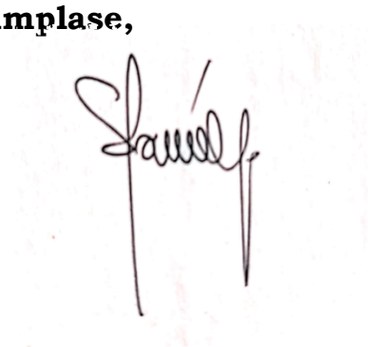
SEGUNDO: IMPRIMIR a este proceso el trámite consagrado en el artículo 12 de la ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la apelación instaurada contra el fallo de primer grado.

TERCERO: De conformidad con el inciso 2° del artículo 12 *ibídem*, se corre traslado por el término de cinco (5) días al apelante para que sustente los reparos que, de manera concreta formuló contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Una vez presentado el escrito, córrase traslado al extremo contrario por el término antes indicado.

CUARTO: Por secretaría, contrólese los mencionados términos, para que vencidos, se ingrese el expediente al Despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,



STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cfbd9024befa3dedc267fc2174c7fc77ffbba865e61686ca3e4ce0c3a7d72b90**
Documento generado en 28/04/2023 12:33:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Ref. Proceso ejecutivo singular de **FERNANDO VALBUENA BARRIOS** contra el **CONSORIO RÍO SECO**. (Apelación de auto). **Rad.** 11001-3103-012-2019-00433-02.

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO A RESOLVER

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto proferido el 12 de noviembre de 2022[1], por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, a través del cual negó el levantamiento de las cautelas, aumentando el monto de la caución que se debía prestar a $1.801.91305.581, para obtener su cancelación.

II. ANTECEDENTES

1. Por auto del 22 de febrero de 2021, se libró orden de apremio a favor de Fernando Valbuena Barrios en contra del Consorcio Río Seco[2]; en proveído del 12 de noviembre siguiente, fue admitida la reforma al libelo, incrementando las sumas objeto de recaudo, determinación que reprochada en reposición se mantuvo en providencia del 19 de octubre pasado.

2. A su vez, el 15 de abril de 2021[3], se fijó como caución para acceder al levantamiento de las cautelas, la suma de $1.335.354.000, otorgándole al

---

[1] Archivo *"0174AutoSuscribapolizayNiegaSolicitud"* del *"Cuaderno 004CuadernodeMedidasCauteares"* del *"Cdo01 C1era Instancia*".
[2] Archivo *"012AutoLibra1819Mandamientodepago2019-433"* del *"CuadernoUnoTomoIII"* del *"Cdo01 C1era Instancia"*.
[3] Archivo *"155AutoRechazaCaución"* del *"Cuaderno 004CuadernodeMedidasCauteares"* del *"Cdo1Instancia"*.

extremo pasivo el término de 10 días, pronunciamiento que se conservó el 26 de julio siguiente[4]; luego, el día 27 se allegó la póliza respectiva[5].

3. El 4 de octubre de 2021[6], la pasiva insistió en el levantamiento de las medidas consumadas, máxime cuando ascienden a más de $3.000.000.000; sin embargo, el 12 de noviembre posterior, no se accedió a su reclamo, sino que se incrementó el monto de la caución a $1.801.913.581[7].

4. Inconforme con esa determinación, el ejecutado interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, argumentando la suficiencia de la garantía otorgada, cuya cuantía fue determinada en una providencia que alcanzó ejecutoria, la cual en su concepto, debe ser honrada, sin que resulte viable incrementar ese valor, por cuenta de la reforma de la demanda, pues el pronunciamiento que la admitió no está en firme, ya que en su contra se interpuso el medio defensivo horizontal.

Adicionó que el precitado seguro garantiza el pago de la obligación cobrada y debe respetarse la igualdad y el debido proceso entre los contendores, ya que la cifra cobrada incluida en el mandamiento ejecutivo no puede ser incrementada, al no existir soporte para ello[8].

5. A su turno, el ejecutante se opuso a su prosperidad, exponiendo que debe acatarse lo dispuesto en el precepto 602 del C.G.P.[9]

6. El 19 de octubre de 2022, se mantuvo incólume la determinación adoptada, concediendo la alzada subsidiariamente interpuesta[10]:

---

[4] Archivo *"166AutoResuelveReposición"* del *"Cuaderno 004CuadernodeMedidasCautelares"* del *"Cdo1Instancia"*.
[5] Archivo "*170 Correo Allega Póliza", ibídem.*
[6] Archivo "*172 correo solicita desembargo", ejúsdem.*
[7] Archivo *"0174AutoSuscribapolizayNiegaSolicitud"* del *"Cuaderno 004CuadernodeMedidasCautelares"* del *"Cdo01 C1era Instancia".*
[8] Archivo "*176AEscritoRecursoReposición*" del *"Cuaderno 004CuadernodeMedidasCautelares"* del *"Cdo1Instancia*".
[9] Archivo "*177 Escrito Descorre Traslado Recurso", ibídem.*
[10] Archivo *"0186AutoResuelveRecurso", ibídem.*

III. CONSIDERACIONES

La suscrita Magistrada es competente para resolver la apelación de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 (numeral 1)[11] y 35[12] del C.G.P.; además, al tenor del numeral 8 de la regla 321 *ejúsdem*[13], resulta viable el estudio del memorado recurso contra el auto que fija la caución.

El canon 602 de la citada obra previene que "*el ejecutado podrá evitar que se practiquen embargos y secuestros solicitados por el ejecutante o solicitar el levantamiento de los practicados, si presta caución por el valor actual de la ejecución aumentada en un cincuenta por ciento (50%).*

En complemento, la regla siguiente establece que "*las cauciones que ordena prestar la ley o este Código pueden ser reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros, en dinero, títulos de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en instituciones financieras".*

Sobre el particular, la doctrina enseña:

> "*El Código General del Proceso regula de manera más sencilla, la facultad que tiene el ejecutado de ofrecer caución para garantizar las obligaciones demandadas, sin tener que soportar el embargo de sus bienes.*
> *(…)*
> *Con la nueva norma, se pueden deducir las siguientes particularidades:*
> *a) A diferencia de lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, el ejecutado podrá prestar la caución en el monto que el juez le señale, escogiendo el tipo o clase de caución que considere, independientemente de si con ella aspira a evitar embargos, o a desembargar bienes"*[14]*.*

Bajo ese marco normativo, es claro que el ejecutado está facultado para obtener la cancelación de los embargos, si ofrece garantía suficiente que respalde el cumplimiento de una eventual sentencia favorable al demandante, en específico, con el fin de obtener el pago del crédito y las

---

[11] *"Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil: 1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito".*
[12] *"El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión".*
[13] *"Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (…) 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla".*
[14] Forero Silva Jorge, Medidas Cautelares en el Código General del Proceso, Tercera Edición, Editorial Temis, 2020, página 91.

costas, sumado a lo cual esa fianza puede ser otorgada a través de caución prestada por una compañía de seguros, sin que sea viable limitarla únicamente a que sea proporcionada en dinero.

Entonces, es dable concluir que el extremo pasivo puede, como en efecto lo hizo, constituir el aval, mediante póliza de seguro, sin que con ello se afecten de algún modo los intereses de la parte actora.

Ahora, respecto al tópico sobre el cual gira la controversia, es decir, el incremento en el monto de la garantía, en modo alguno afecta las prerrogativas del ejecutado, sino que busca respaldar que la obligación cobrada encuentre apoyo, dada la cancelación de las cautelas y con independencia de la decisión que pueda adoptarse en el fallo.

Así, pese a que la providencia del 15 de abril de 2021 haya alcanzado ejecutoria, esa circunstancia no le impide al funcionario judicial negar el levantamiento de las medidas, pues al haberse incrementado el monto del crédito por cuenta de la reforma a la demanda, se imponía el aumento del seguro que debe prestar la pasiva, el cual debe cubrir el valor actual ejecutado aumentado en un 50%, en aplicación del inciso primero del canon 602 del C.G.P..

Y aunque esa última determinación no había cobrado firmeza, lo cierto es que, en providencia del 19 de octubre anterior, se mantuvo al desatar la reposición interpuesta en su contra, data en la que igualmente fue resuelto el medio defensivo horizontal contra la providencia que aumentó la cuantía de la garantía, pero en todo caso, con independencia de ello, no resultaba de recibo que aún a sabiendas de la alteración en el valor de la obligación, se conservara inerme aquella, a pesar de no respaldarla.

Es más, si se atendiera en estrictes a tal ejecutoria, la otra posibilidad que tenía el funcionario era decidir sobre el levantamiento una vez ello ocurriera, evento en el que igualmente debía actualizar el monto de la caución, pues se insiste en que la facultad conferida al ejecutado no puede,

bajo ningún pretexto, desconocer los derechos sustanciales del demandante.

Lo anterior, deja ver que el incremento que ordenó el *a-quo* está ajustado a la legalidad, ya que en realidad propendió por disponer una caución acorde con el valor por el cual se proseguiría la ejecución, el cual, en últimas no resultó afectado por el recurso del que se duele el censor, pues en el plenario se avizora que el auto que admitió la reforma se mantuvo incólume[15].

En consecuencia, se respaldará la decisión cuestionada, con la consiguiente condena en costas, a cargo del impulsor del remedio vertical.

IV. DECISIÓN

Por lo expuesto, la suscrita Magistrada de la **SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE

Primero. CONFIRMAR en lo que fue materia de la alzada, el auto del 12 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad.

Segundo. CONDENAR en costas de la instancia al extremo apelante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 850.000. Por la secretaría del *a quo*, liquídense en la forma establecida en el artículo 366 del C.G.P.

Tercero. ORDENAR devolver el expediente digital al juzgado de origen. Por la Secretaría ofíciese y déjense las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

---

[15] Archivo *"125AutoResuelveRecurso"* del *"CuadernoUnoTomoIII"* del *"Cdo1Instancia"*.

Firmado Por:

Aida Victoria Lozano Rico

Magistrada

Sala 016 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d5e9e915edee0d89c3ea9f852d4465b28ab73e8bb18cc61e26c13d36bff9391a**

Documento generado en 28/04/2023 11:48:47 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16252

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-012-2019-00791-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, se evidencia que el término para proferir la sentencia, está próximo a fenecer, de conformidad, con lo normado en el inciso 4° del artículo 121 del Código General del Proceso, se **RESUELVE**:

PRIMERO: PRORRÓGUESE por única vez, hasta por el término de seis (6) meses el plazo de duración de la presente instancia, contabilizado desde el 15 de mayo de la presente anualidad.

SEGUNDO: Por secretaría contrólese el término para proferir la decisión de segunda instancia en este proceso, el que en ningún caso debe sobrepasar del 15 de noviembre del 2023.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
Magistrada

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9c77363f75ae7c3ee3cf3e8c68c5baa85104bb5d310846b7bb7393b1cbfe32c3**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
Sala civil

Bogotá, veintiocho de abril de dos mil veintitrés

Ref.: Ej. Hip. Oscar León Arcila *vs* Leonardo Favio Bayona (1100131 12-2020-00242-01)

La apelación subsidiaria del actor, a manera de objeción a las agencias en derecho incluidas en las costas aprobadas, se basa en que, a decir del recurrente, el Acuerdo 16-10554 fijó los criterios a tener en cuenta en estos casos.

El impugnante aduce que en la ponderación de las agencias debe estimarse a más del capital, los intereses cobrados, y la duración del proceso y la calidad célere de la gestión adelantada, aspectos que dice no fueron tenidos en cuenta

Al resolver la reposición el a-quo no hizo referencia a los intereses echados de menos en la tasación, por lo cual dijo haber fijado un porcentaje no inferior al mínimo de la tarifa, a más de reseñar que no hubo oposición, que fue uno sólo el demandado y que la duración "no se extendió por un largo período de tiempo", por lo que, concluyó, "no se ameritaba" agencias más altas.

Para resolver ante todo debe descartarse que en esta instancia sea dado estimar los recibos acá allegados, por cuanto la competencia del tribunal está limitada en los términos del art. 328 cgp, concretamente en punto a las agencias en derecho.

Puntualizado lo anterior, se considera que si al tiempo de la tasación de agencias en derecho no se contaba con una liquidación del crédito aprobada, la única "suma determinada", como dice el Acuerdo, era el capital.

Ahora, como ante los extremos de la tarifa se debía apreciar la naturaleza, cuantía, calidad y duración de la gestión del apoderado, en este caso los actos profesionales desarrollados en este proceso, aunque no hubiera oposición, ameritaban un porcentaje mayor por agencias que se fija en un 4%.

Por consiguiente, se impone modificar la liquidación de costas por haber prosperado la objeción a las agencias en derecho, las cuales se tasan en $6.880.000, quedando aprobada la liquidación de costas en la suma de $6.917.500, como en efecto se decide.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

Firmado Por:

German Valenzuela Valbuena

Magistrado

Sala 019 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b48d7c89746ffcbf97ce9ed5427a01b6623fbfae738c0fd8b8e396a69b9e4caf**

Documento generado en 28/04/2023 10:19:36 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés

Proceso: Expropiación
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura
Demandado: Félix Francisco Paternita Espinosa y otra.
Radicación: 11001310301220210002801
Procedencia: Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá

Se fijan como agencias en derecho la suma de $1'000.000,oo. Inclúyase en la liquidación de costas.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

-2-

Firmado Por:
Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2bd7d98a28b7e4f151b6919b0843d1cd91a95defcb970f8122423be5c061e3f4**
Documento generado en 28/04/2023 10:35:51 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil veintitrés

Ponencia presentada y aprobada en Sala Civil de Decisión de 15 de marzo y 26 de abril de 2023.

Proceso: Expropiación
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura
Demandado: Félix Francisco Paternita Espinosa y otra.
Radicación: 11001310301220210002801
Procedencia: Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá
Asunto: Apelación sentencia
SC-019/23

Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación provocado por los demandados Félix Francisco Paternina Espinosa y Yadira del Rosario Espitia Petro, contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2022 en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, instauró demanda de expropiación por motivos de utilidad pública contra Felix Francisco Paternina Espinosa y Yadira del Rosario Espitia Petro en calidad de propietarios del bien inmueble con matrícula 143-32220, en la que planteó las siguientes pretensiones:

> "*Primera: Decrétese la expropiación por vía judicial a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura de:*
>
> *Un área requerida de terreno de (…) (2.053,44 m2), determinado por las siguientes abscisas: inicial KM 0+003,07D y final KM 0+*

171,87D, terreno denominado en mayor extensión "lote", ubicado en la vereda San Pelayo, del Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, identificado con cédula catastral No. 23686000100000005006800000000 y folio de matrícula inmobiliaria No. 143-32220 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté, zona de terreno y comprendida dentro de los siguientes linderos especiales, tomados de la mencionada ficha predial: Por el norte: con vía existente y predio restante de Félix Francisco Paternina Espinosa y otra, en longitud de 177,60 metros. Por el oriente: con predio de Efraín Espitia López y Gregoria María Abad Acosta, en longitud de 22,54 metros. Por el sur: con predio restante de Félix Francisco Paternina Espinosa y otra, en longitud 184,59 metros. Por el occidente: en punta con vía a Santa Lucía, en longitud 0,00 metros. A) las mejoras consistentes en:

DESCRIPCION DE LAS MEJORAS REQUERIDAS: DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCIONES:	CANTIDAD	UNID
C1. CERCA FRONTAL CON POSTES DE MADERA CADA 1,00mts, Y (4) CUATRO HILOS DE ALAMBRE		
DE PUAS, h=1,5mts.	131,25	ML

Inventario de Cultivos y Especies

CULTIVOS Y ESPECIES	CANT	UN
ROBLE Ø 10 cm	1	Und
JOBO Ø 20 cm	2	Und
ÑIPIÑIPI Ø 20 cm	1	Und
MATARRATON Ø 15 cm	1	Und
MORA Ø 20 cm	1	Und
ÑIPIÑIPI Ø 25 cm	1	Und
JOBO Ø 15 cm	1	Und
ÑIPIÑIPI Ø 15 cm	2	Und
ROBLE Ø 10 cm	8	Und
ROBLE Ø 40 cm	1	Und
ROBLE Ø 20 cm	8	Und
ROBLE Ø 25 cm	2	Und
JOBO Ø 30 cm	1	Und
JOBO Ø 10 cm	1	Und

Segunda: Para efectos de hacer efectiva la transferencia forzada de propiedad, ordénese registrara la presente sentencia, junto con el acta de entrega del inmueble a que se ha venido haciendo referencia, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, y se asigne un número de matrícula inmobiliaria al área expropiada, para lo cual se librarán las comunicaciones pertinentes.

Tercera: Que se condene en costas al demandado, incluyendo las agencias en derecho.

Cuarta: Que la sentencia por medio de la cual se decrete la expropiación contenga igualmente la cancelación de cualquier gravamen, embargo o inscripción que recaiga sobre el área requerida del bien anteriormente descrito, decretando igualmente,

el avalúo del bien expropiado y separadamente la indemnización a favor del interesado."

2. Como sustento fáctico se narró, en síntesis:

2.1. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en coordinación con Vías de las Américas S.A.S, en virtud del contrato de concesión número 008 del 2010, adelanta el proyecto vial denominado Transversal de las Américas sector N°1, como parte de la modernización de la red Vial Nacional.

2.2. El inmueble necesario para la construcción del proyecto Transversal de las Américas sector N°1, es el identificado con la cédula catastral número 23686000100000005006800000000 y folio de matrícula 143-32220 del cual figuran como propietarios Felix Francisco Paternina Espinosa y Yadira del Rosario Espitia Petro.

2.3. Se solicitó y obtuvo de Asolonjas, el informe técnico del avalúo comercial del predio antes descrito en el que se determinó que tenía un valor de $18.747.943, por tanto, se formuló a los propietarios una oferta formal de compra por esta suma, la cual se notificó de manera personal al apoderado de estos.

2.4. El 27 de julio de 2017, Vías de las Américas S.A.S suscribió promesa de compraventa con los propietarios del inmueble ya referido por $18.747.943, realizó un primer pago por $4.073.863, pero los titulares del predio incumplieron la cláusula décima de la promesa, siendo este el motivo de no poder llevar a cabo el pago del saldo y la culminación de la enajenación voluntaria.

2.5. Ante la imposibilidad de efectuar la negociación voluntaria la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, expidió la Resolución Número 0836 de 18 de mayo de 2018 en la cual se ordenó por motivo de utilidad pública e interés social iniciar el trámite judicial de expropiación del inmueble referido.

2.6 La anterior Resolución se notificó mediante aviso número 2018-606-020238-1, sin que los propietarios presentaran recurso, por consiguiente dicha quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2018.

3. Inicialmente, la demanda fue admitida por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Cereté en auto de 21 de enero de 2019[1]; pero en auto del 19 de marzo de 2020 se rechazó por falta de competencia y, ordenó remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá -reparto-[2].

4. El Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, el 4 de marzo de 2021 asumió el conocimiento del proceso[3].

5. En proveído de 14 de diciembre de 2021 se indicó que los demandados quedaron debidamente notificados por aviso el 15 de marzo de 2021 y, se reconoció al abogado Rafael Augusto Mendieta Bermúdez como su apoderado[4]; decisiones que quedaron en firme una vez resueltos los recursos interpuestos[5].

6. El 14 de septiembre de 2022 se definió la primera instancia mediante sentencia anticipada en la que se decretó la expropiación solicitada, tuvo como indemnización a favor de los demandados la suma de $18.747.943, ordenó la cancelación de la inscripción de ofertas de compra, así como el registro de la sentencia.

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En el análisis del caso en concreto se estableció que, (*i*) si había claramente una necesidad de la parte demandante de adquirir el inmueble objeto del proceso; (*ii*) se demostró el agotamiento previo de la etapa administrativa; (*iii*) con la demanda se allegaron todos los anexos que la ley señala cumpliendo cabalmente los presupuestos procesales; (*iv*) no había duda de la legitimación en la causa por activa y pasiva; (*v*) no se trataba de un bien de uso público.

Por tanto, se ordenó la expropiación a favor de la demandante, resaltando que el extremo demandado no contestó la demanda ni se opuso al avalúo, por tanto, se determinó como indemnización, la suma que arrojó el avalúo del bien objeto de expropiación aportado por la demandante,

---

[1] Folio 61, 005EscritoDemandaAnexos2.pdf, 01CuadernoPrincipal.
[2] Folio 18, 006EscritoDemandaAnexos3Autos.pdf, 01CuadernoPrincipal.
[3] Folio 1 a 2, 007AutoAsumeConocimientoEsteDespacho2021-00028.PDF, 01CuadernoPrincipal.
[4] Folio 1 a 2, 019AutoReconocePersyOtros2021-00028, 01CuadernoPrincipal.
[5] Folio 1 a 3, 024AutoResuelveReposicion2021-0028.pdf, 01CuadernoPrincipal.

es decir, la suma de $18’747.943 de la cual se acreditó haber pagado a los demandados su totalidad[6].

Por último, se ordenó el registro de la sentencia junto con el acta de entrega, una vez ejecutoriada, para que sirvan de título de dominio a la demandante.

LA APELACIÓN

Inconforme con la determinación de instancia, el extremo demandado apeló la decisión.

Argumentaron ante esta instancia que se tuvo por notificados a los demandados por aviso sin que se hubiera aportado la demanda para conocimiento de ellos y de su apoderado; además, que siendo personas que vivían en población del departamento de Córdoba era muy poco tener tres días para contestar la demanda.

Por último, enfatizó que hubo indebida aplicación a la indemnización establecida, porque la suma recibida por el contrato de transacción fue por un pago que hizo el concesionario, no la ANI, y fue por las construcciones, mejoras, cultivos y entrega anticipada del predio más no por el inmueble mismo, por tanto, no se ha recibido un peso de indemnización por el terreno expropiado. Con base en la sentencia C-0750 de 2015 se debe incluir un pago por la compensación que genera el predio fuera del comercio, desde que se registró la oferta formal en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cereté.

Finalmente, solicitó la indexación de la suma dinero adeudada, en caso de confirmarse la sentencia.

CONSIDERACIONES

1. La relación procesal se ha constituido en legal forma y no se observa vicio en la actuación, por tanto, no existe impedimento procesal para fallar de fondo.

[6] Folio 1 a 5, 006EscritoDemandaAnexos3Autos.pdf, 01CuadernoPrincipal.

2. Se advierte preliminarmente que la Sala de Decisión se pronunciará única y exclusivamente acerca de los reparos señalados por los apelantes en la primera instancia, sustentados en esta Sede, de conformidad con lo regulado en los artículos 320, 327 y 328 de la Ley 1564 de 2012.

3. El recurso vertical, plantea dos puntos de inconformidad, de una parte, la indebida notificación de los demandados; y de otra, que aportaron un dictamen que no fue tenido en cuenta en el proceso.

3.1. Sobre el primer aspecto debe decirse que la notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias que se produzcan dentro del proceso, tiene como fin garantizar los derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto del debido proceso. De suerte que, el enteramiento del proceso salvaguarda el derecho de defensa y contradicción.

Se vale el apelante en afirmar que, la notificación por aviso fue incompleta, habida cuenta que no se le anexó copia de la demanda, ante tal vacío el *a quo* claramente le hizo saber el apelante desde el 14 de diciembre de 2021[7] que se cumplió con los presupuestos de esa forma de enteramiento, así como en el auto del 14 de septiembre de 2022[8] que resolvió los recursos propuestos sobre esa temática; en ambas providencias se destacó el cumplimiento cabal de los presupuestos procesales conforme a los artículos 91 y 292 de la Ley 1564 de 2012.

Pero es que, además, si en alguna irregularidad se incurrió en el trámite de notificación de los demandados, ella fue saneada en la medida que intervinieron en el proceso sin proponer el incidente de nulidad respectivo.

Así las cosas, esta no es la oportunidad para debatir jurídicamente la sentencia por una supuesta indebida notificación, máxime cuando en primera instancia ello fue definido mediante proveídos que causaron ejecutoria, adquirieron firmeza procesal y fuerza vinculante.

Y, en lo que tiene que ver con el término para contestar la demanda, cabe precisar que se trata de un término legal,

[7] Archivo 019 Auto reconoce personería
[8] Archivo 024 auto resuelve reposición.

perentorio e improrrogable a voces del artículo 117 *eiusdem* en concordancia con el numeral 5º del artículo 399 *ídem*, normas de orden público y obligatorio cumplimiento que "*en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.*", artículo 13 *ibídem*.

En ese orden de ideas, dicho reparo no tiene vocación de prosperidad.

3.2. En lo que tiene que ver con el restante reproche debe recordarse que el artículo 173 del estatuto procesal vigente establece las oportunidades probatorias, las cuales son preclusivas, y prevé *"Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. (…)"*

A su turno, el artículo 399 *ibídem* advierte *"6. Cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por mayor valor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad raíz, del cual se correrá traslado el demandante por tres (3) días. Sino presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada."*

3.2.1. En el *sub lite*, lo primero que debe destacarse es que, como se dejó constancia en el auto del 14 de diciembre de 2021, los demandados se notificaron por aviso y, en el término legal no contestaron la demanda, siendo esta la oportunidad que tenían para, en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, aportar las pruebas que pretendían hacer valer, esto es, anexar otra justipreciación a fin de establecer si tenía anexidades que incrementaran el valor del predio o, si por el contrario, solo se valoraron aquellas más no el terreno expropiado.

La ausencia de contestación de demanda dentro del plazo legalmente previsto implica que no había lugar al decreto de pruebas a instancias de la demandada, cualquier objeción resulta inviable y, como consecuencia de ello la decisión judicial no puede erigirse en probanzas no decretadas (artículos 97 , 164 y 170 de la ley 1564 de 2012).

3.2.2. Además, el caudal probatorio acopiado revela:

3.2.2.1. Avalúo inicial expedido por la Asociación Nacional de Lonjas y Colegios Inmobiliarios –ASOLONJAS-[9] el 21 de febrero de 2017. en el que se cuantifica el valor del lote en $15.051.751.

3.2.2.2. Justipreciación comercial de la Asociación Nacional de Lonjas y Colegios Inmobiliarios –ASOLONJAS-[10] del 14 de julio de 2017, que estima el bien a expropiar en $18.747.943 Dicho incremento obedeció, conforme a los hechos de la demanda por «*requerimientos presentados por varios propietarios de la zona por medio del cual solicitan revisión del valor del metro cuadrado"* por lo que dicha sociedad expide un nuevo avalúo, en él se especifica que tuvo en cuenta mejoras, cultivos y el predio.

3.2.2.3. Contrato de promesa de compraventa[11] suscrita el 27 de julio de 2017 por la Concesionaria Vías de las Américas SAS como prometiente comprador y los demandados, representados por su abogado Rafael Mendieta Bermúdez, profesional que es el mismo que agencia sus derechos en éste trámite, en la que se especificaron varios aspectos: i) de una parte que aquél se celebrada considerando el contrato de concesión #008 del 06 de agosto de 2010 ajustado entre la mencionada concesionaria y el Instituto Nacional de Concesiones-INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura para el desarrollo del proyecto vial Transversal de las Américas, habiéndose delegado en la concesionaria la adquisición de los inmuebles requeridos; ii) el bien objeto de la promesa de compra concernía al *"terreno, las construcciones, mejoras y cultivos identificados en la Ficha Predial No. VA-Z2-05_00-102, las cuales están dentro del área requerida de DOS MIL CINCUENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (2053,44 m²), de terreno"* detallando los linderos, correspondiendo así al que aquí es materia de expropiación ; iii) se pactó en la cláusula séptima *"Valor del contrato: Para efectos legales y fiscales, el precio total y único del predio prometido en venta y las mejoras",* por $18.747.943,oo, cifra que se cancelaría así:

> *A) Un pago correspondiente a la suma de (…) ($4.373.863,oo) dineros que deberán ser consignados dentro de los 20 días siguientes a la firma de la presente promesa de compraventa por parte del vendedor y representante legal.*

[9] Folios 51 a 60 ibídem
[10] Folios 39 a 48 del archivo "004 escrito demanda Anexos 1"
[11] Folios 20 a 26 del archivo 005escritodemandaanexos2.pdf

> *B) Un segundo pago correspondiente a la suma de (…) ($14.374.080,00) moneda corriente, que se realizará dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la primera copia de la Escritura Pública de compraventa debidamente registrada y el Certificado de Tradición actualizado donde aparezca la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- como propietaria de la zona de terreno objeto de venta. En todo caso el desembolso de la suma antes dicha se hará previa constatación de que el predio se encuentra libre de cualquier clase de gravamen, servidumbre o limitación al dominio."*

3.2.2.4. Contrato de transacción suscrito por Vías de las Américas S.A.S. en calidad de cesionario y, Rafael Mendieta Bermúdez, abogado, en calidad de apoderados de Félix Francisco Paternina Espinosa y Yadira del Rosario Espitia Petro[12] de 27 de julio de 2017 en el que dejaron como consideraciones, entre otras,

> *"10. Deja constancia el propietario que no se encuentran de acuerdo con el precio ofertado por Vías De Las Américas S.A.S., por concepto del valor del metro cuadrado, que por ello aceptó parcialmente la oferta formal de compra en lo relativo a construcciones, mejoras y cultivos ubicados dentro del área requerida, por lo que Vías De Las Américas S.A.S. acepta que el valor final del inmueble será adoptado por el Juez de Conocimiento dentro del proceso de expropiación que se debe iniciar a su instancia y de acuerdo con las normas y procedimientos legales establecidos."*

Así, acordaron y se declaró que los demandados: *"3. Acepta por la entrega anticipada de predio un único valor de (…) ($14.374.080.00) moneda corriente, debidamente soportado por este documento. Costos que serán asumidos por la Concesión Vías De Las Américas S.A.S."* (Resaltado fuera de texto).

3.2.2.5. Permiso de intervención voluntaria y constancia de entrega real y material del 27 de julio de 2017, suscrita, por una parte, por Rafael Mendieta Bermúdez en calidad de apoderado de los aquí demandados y, de otro lado, Vías de las Américas SAS.

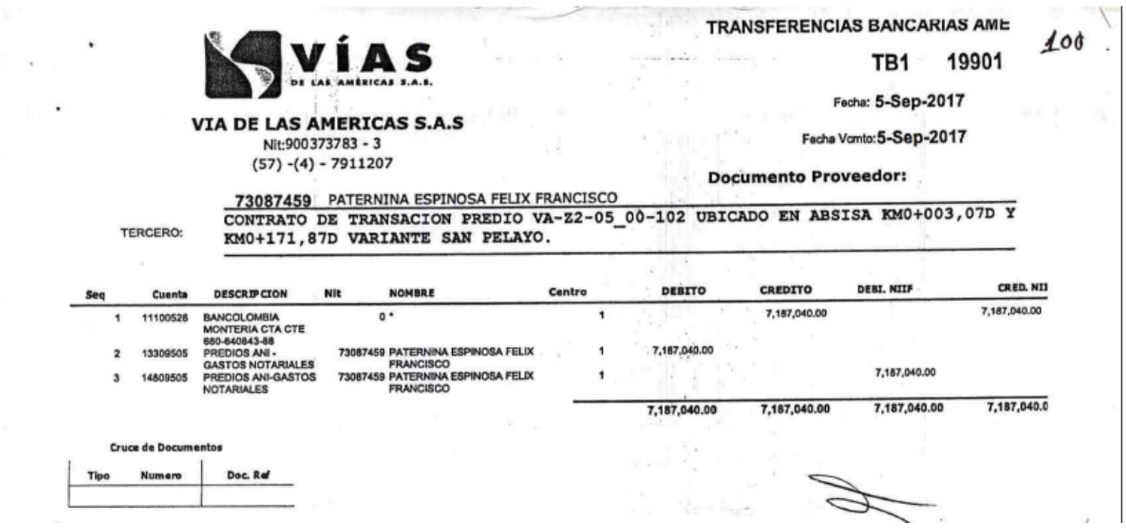
3.2.2.6. Comprobantes de egresos del 6 y 7 de septiembre de 2017, en el que se evidencian dos pagos, cada uno por $2.186.931,50, uno para Paternina Espinosa Félix Francisco y, otro para Espitia Petro Yadira del Rosario y, en dicho documento registra constancia de estado *"pagado"*.

3.2.2.7. Resolución 0836 del 18 de mayo de 2018 "*Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación de la*

[12] Folios 27 a 32 archivo 005 escrito demanda Anexo 2

zona de terreno requerida para la ejecución de proyecto vial Transversal de Las Américas Sector No. 1, tramo variante San Pelayo, ubicado en la vereda San Pelayo, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba"[13] y, constancia de notificación por aviso de la misma a los demandados, así como el enteramiento efectivamente realizado[14].

3.2.2.8. Copia del documento denominado *"transferencias bancarias Ame*" identificado con número TB1 19901 de fecha 5 de septiembre de 2017[15] en el que se deja constancia de un débito por $7.187.040 a favor de Paternina Espinosa Félix Francisco.



VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S.

VIA DE LAS AMERICAS S.A.S
Nit:900373783 - 3
(57) -(4) - 7911207

TRANSFERENCIAS BANCARIAS AME
TB1 19901
Fecha: 5-Sep-2017
Fecha Vcmto:5-Sep-2017
Documento Proveedor:

TERCERO: 73087459 PATERNINA ESPINOSA FELIX FRANCISCO
CONTRATO DE TRANSACION PREDIO VA-Z2-05_00-102 UBICADO EN ABSISA KM0+003,07D Y KM0+171,87D VARIANTE SAN PELAYO.

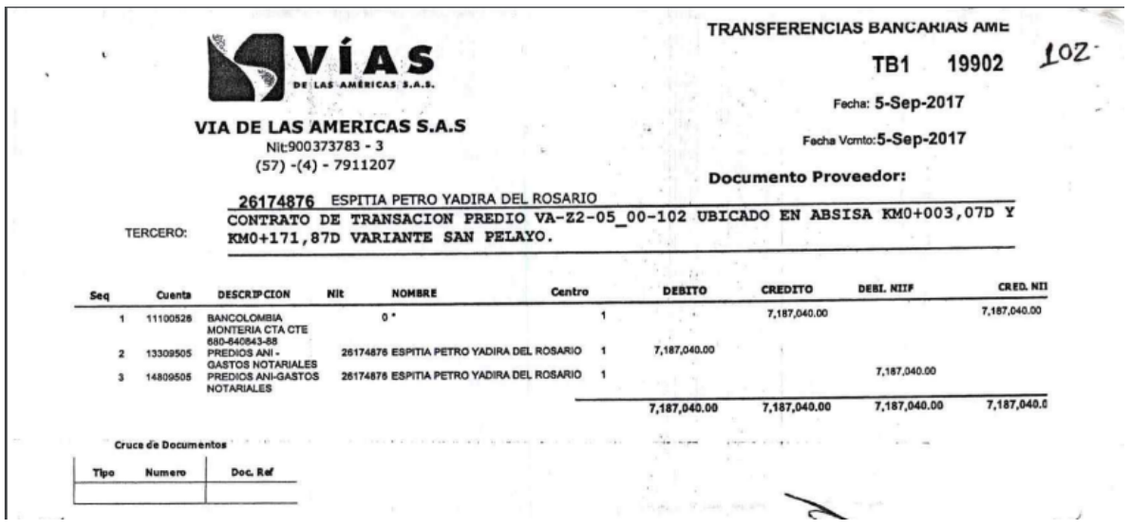
Seq	Cuenta	DESCRIPCION	Nit	NOMBRE	Centro	DEBITO	CREDITO	DEBI. NIIF	CRED. NII
1	11100528	BANCOLOMBIA MONTERIA CTA CTE 680-640843-88	0 *		1		7,187,040.00		7,187,040.00
2	13309505	PREDIOS ANI - GASTOS NOTARIALES	73087459	PATERNINA ESPINOSA FELIX FRANCISCO	1	7,187,040.00			
3	14809505	PREDIOS ANI-GASTOS NOTARIALES	73087459	PATERNINA ESPINOSA FELIX FRANCISCO	1			7,187,040.00	
						7,187,040.00	7,187,040.00	7,187,040.00	7,187,040.0

Cruce de Documentos

Tipo	Numero	Doc. Ref

3.2.2.9. Copia del documento denominado *"transferencias bancarias Ame*"[16] identificado con número TB1 19902 de fecha 5 de septiembre de 2017, en el que se deja constancia de un débito por $7.187.040 a favor de Espitia Petro Yadira del Rosario.

[13] Folios 41 a 47 archivo 005 escrito demanda Anexo 2
[14] Folios 55 a 60 ibídem.
[15] Folio 2 del archivo 006EscritodemandaAnexo3Auto.pdf
[16] Folio 4 del archivo 006EscritodemandaAnexo3Auto.pdf



VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S.

TRANSFERENCIAS BANCARIAS AME

TB1 19902 102

VIA DE LAS AMERICAS S.A.S
Nit:900373783 - 3
(57) -(4) - 7911207

Fecha: 5-Sep-2017
Fecha Vcmto: 5-Sep-2017

Documento Proveedor:

TERCERO: 26174876 ESPITIA PETRO YADIRA DEL ROSARIO
CONTRATO DE TRANSACION PREDIO VA-Z2-05_00-102 UBICADO EN ABSISA KM0+003,07D Y KM0+171,87D VARIANTE SAN PELAYO.

Seq	Cuenta	DESCRIPCION	Nit	NOMBRE	Centro	DEBITO	CREDITO	DEBI. NIIF	CRED. NII
1	11100526	BANCOLOMBIA MONTERIA CTA CTE 680-640843-88	0 *		1	-	7,187,040.00		7,187,040.00
2	13309505	PREDIOS ANI - GASTOS NOTARIALES	26174876	ESPITIA PETRO YADIRA DEL ROSARIO	1	7,187,040.00			
3	14809505	PREDIOS ANI-GASTOS NOTARIALES	26174876	ESPITIA PETRO YADIRA DEL ROSARIO	1			7,187,040.00	
						7,187,040.00	7,187,040.00	7,187,040.00	7,187,040.0

Cruce de Documentos

Tipo	Numero	Doc. Ref

Conforme al material probatorio, se observa que, el avalúo del lote objeto de expropiación[17], fue de $18.747.943 sin que medie otra prueba que permita inferir que el avalúo fuera mayor.

De igual forma, se demostró que efectivamente los demandados recibieron un primer pago por $4.373.863. como consta en el comprobante de egresos referido, en el que se registra constancia de estado *"pagado"* y, en lo que atañe al saldo, es decir, $14.374.080 se acreditó en el proceso que ciertamente fueron pagados a los convocados, si se tiene en cuenta lo dicho en el punto tres del contrato de transacción[18] del 27 de julio de 2017 en el que se consignó, se itera, que los titulares reales de dominio "*Acepta por la entrega anticipada de predio un único valor de (...) ($14.374.080.00) moneda corriente, debidamente soportado por este documento. (...)"*

Sumados ambos valores ascienden a $18.747.943, el cual corresponde a la justipreciación del predio objeto de expropiación.

También se evidencian los comprobantes de egresos denominados "*transferencias bancarias ame"*[19] expedidos por Vías de las Américas del 5 de septiembre de 2017; de igual forma obran documentos expedidos por Bancolombia[20] de fecha 6 de septiembre de 2017, en que se deja constancia de abonos a cuentas de los demandados, uno al Banco Caja

[17] Folio 48 archivo 004escritodemandaAnexos1.pdf.
[18] Folios 27 a 32 archivo 005 escrito demanda Anexo 2
[19] Folios 2 y 4 del archivo 006 escrito demanda
[20] Folios 3 y 5 del archivo 006 escrito demanda

Social y otra a Banco Davivienda cada uno por $7.187.040 que en conjunto alcanzan los $14.374.080.

En atención a lo referido, se encuentra probado el pago hechos por la actora a los demandados por concepto del precio del bien avaluado, $18.747.943, monto que igualmente corresponde al ofertado[21] antes de la presentación de la demanda.

Es de resaltar que dichos pagos se hicieron incluso antes de la presentación de la demanda, habida cuenta que la demanda fue admitida el 21 de enero de 2019 por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Cereté, por lo que no hay cabida a la indexación de moneda alguna, porque el dinero reconocido como indemnización en la sentencia estaba en poder de los demandados desde septiembre de 2017.

3.2.6. También es importante esclarecer que, la inscripción de la demanda no saca al bien del comercio, así lo dispone el artículo 591 *ejusdem* que dispone *"(…) El registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio pero quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 303. (…)",* por lo que la petición de incluir un pago por la compensación mientras estuvo registrada la demanda en el inmueble, no tiene soporte jurídico alguno.

4. Corolario de lo analizado, es que los motivos de la apelación carecen de la contundencia para enervar la decisión cuestionada, la que, por ende, deberá ser confirmada; y, en consecuencia, se condenará en costas de esta instancia a la recurrente, al tenor del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

[21] Folio 14 del archivo 005 escrito demanda anexo 2.pdf

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte recurrente.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada
11001310301220210002801

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada
11001310301220210002801

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
Magistrado
11001310301220210002801

Firmado Por:

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ea321a9eb840e307bda5cb1e12fc3a63a2901b63cb5764faa3668e0f666a8cde**
Documento generado en 28/04/2023 10:36:08 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Verbal
Radicación N°: 11001310301220210006601
Demandante: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Demandado: Edificio Marina del Rey P.H.

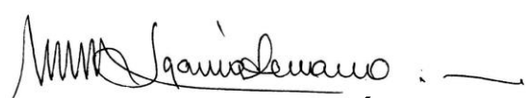
ADMITIR los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia proferida el 2 de marzo de 2023 por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** a los recurrentes el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que procedan a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formularon ante el Juez *a quo*; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tienen, efectúen la réplica.

Advertir a los recurrentes que, en ese **lapso y en esta instancia deberán sustentar los reparos concretos que formularon ante el *a quo*, pues en caso de guardar silencio, se declararán desiertos los recursos de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dca366d108d804a2438a5e4188d1c9c6ae8a3fa505db65b77950de28174fbe31**

Documento generado en 28/04/2023 04:32:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Radicación 110013103013 2017 000590 02

Mediante memorial adosado el 8 de febrero pasado, la abogada Jeimi Jacqueline Mahecha Ardila, actual apoderada judicial de los actores, manifestó que desistía del recurso de alzada planteado por sus asistidos Xiomara Teresa del Mar González Valenzuela, Diana Gladys y Carlos Hernando Valenzuela Zamora, comoquiera que ellos le manifestaron su *"…intención de no apelar la sentencia",* y que continuara con el trámite del propuesto por Martha Beatriz Amparo Valenzuela Zamora[1].

A la aludida profesional le fue sustituido mandato por el apoderado inicialmente designado por aquellos sujetos procesales, el abogado Jairo Enrique Blandón Rodríguez, quien manifestó que transmitía todas las facultades a él otorgadas[2].

El 2 de diciembre de 2022, le fue reconocida personería jurídica, por el *a-quo*[3].

Atendiendo lo previsto en el artículo 316 del Código General del Proceso, se dispone:

1. ACEPTAR EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto Xiomara Teresa del Mar González Valenzuela, Diana Gladys y Carlos Hernando Valenzuela Zamora, frente a la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2022, por el Juzgado 13 Civil de Bogotá, D.C.

---

[1] Folios 1 al 4 del archivo09DesisteYSustenta.
[2] Archivo 30SustituciónPoder - Folios 2, 3 y 8 del archivo01ExpedienteDigitalizado.
[3] Archivo 32AutoreconocePersonería.

2. **CONDENAR** en costas de la instancia a la actora. Liquídense conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Se fija como agencias en derecho la suma de $1.000.000.oo.

En firme el pronunciamiento ingrese el expediente nuevamente al despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE.

Firmado Por:
Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8d042e94da57c2b49193a9b5ea55545593949a1ab05f41c719fe7fb8c59d1bd2**
Documento generado en 28/04/2023 02:54:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16321

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-014-2021-00291-01

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dd49a78d098a53c968ba5a8e8c5db0a022e8d34c1fb5c4dc8fdc3eea2e677712**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Vínculo: 01. 110013103 015 2014 00542 01

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal
Demandante	Conjunto Residencial Caicú P.H.
Demandado	Construcciones Arrecife S.A.
Radicado	110013103 015 2014 00542 01
Instancia	Segunda

Se decide el recurso de queja formulado por el apoderado de la parte demandada contra el auto calendado 12 de marzo de 2020[1], por el cual el *a quo* denegó la concesión del recurso de apelación contra lo resuelto en el inciso segundo de los numerales 1° y 4° de la providencia del 12 de febrero de 2020.

I. ANTECEDENTES

1.El *A quo* mediante en auto del 12 de febrero de 2020,[2] resolvió entre otras determinaciones, negar la solicitud de librar oficio con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia, porque la etapa para pedir pruebas, se encontraba precluida y, dispuso en el numeral 4° del mismo proveído, correr traslado del dictamen pericial allegado por la parte demandada.

Oportunamente, el procurador judicial del extremo demandado interpuso

[1] Folios 422 a 423, cuaderno principal parte dos, Archivo 02, cuaderno juzgado
[2] Folio 413 y 415 cuaderno principal parte dos, Archivo 02, cuaderno juzgado

recurso de reposición en subsidio de apelación contra las anteriores decisiones, los cuales fueron desestimados en auto del 12 de marzo de 2020, porque según, el proveído es inapelable y se encuentra ajustado a derecho.[3]

2. Decisión que fue nuevamente impugnada en subsidio de queja, para lo cual adujo que, la negativa del decreto de la prueba derivado de la exhibición de documentos ocurrida en la audiencia del 24 de octubre de 2019, y de la que se corrió traslado, por lo que el 29 de octubre de esa anualidad, procedió a pedir pruebas para ejercer su derecho de contradicción.

En relación con la práctica de la prueba pericial, mencionó que también fue solicitada dentro de la oportunidad legal, porque el Juez de primer grado le otorgó el término de 45 días hábiles para la presentación del dictamen, actuación que adelantó con diligencia y dentro de la oportunidad señalada allegó al proceso, sin embargo, advirtió que reservaba el derecho de ampliar el dictamen, motivo por el que correr traslado resultaba prematuro.

Agregó que tampoco se tuvo en cuenta la suspensión de términos que hubo entre el 9 de diciembre de 2019 al 13 de marzo de 2020, por cierre extraordinario del despacho por paro judicial.

Manifestó que las anteriores decisiones son susceptibles de ser impugnadas ante el Superior funcional, porque así lo expresa el numeral 3º del artículo 321 del código de enjuiciamiento civil.

3. En proveído del 15 de noviembre de 2022[4] el Funcionario de primer grado mantuvo incólume las decisiones cuestionadas y concedió el recurso de queja.

4. Asignado por reparto, correspondió a esta Corporación decidir la queja.

---

[3] Folios 422 a 423, cuaderno principal parte dos, archivo 02, cuaderno juzgado
[4] Archivo 11, cuaderno juzgado

II. CONSIDERACIONES

1.El problema jurídico para resolver consiste en establecer si tiene el carácter de apelable el auto por el cual el *a quo* negó librar oficio a la Superintendencia Financiera de Colombia e incorporó en autos el dictamen pericial allegado por la parte demandada contenidas en el inciso segundo del numeral 1. y 4. del auto calendado 12 de febrero de 2020.

2. El objeto de la queja está circunscrito a indagar si se encuentra ajustada a derecho la negativa de la concesión de la apelación. Así las cosas, para que sea procedente el otorgamiento de la alzada, es necesario que la disputa sea susceptible del recurso de cara al principio de taxatividad, que sea interpuesto en la oportunidad establecida en la ley, que el apelante sea parte o tercero interviniente y que la providencia le cause un agravio o perjuicio, lo que se concreta en el interés jurídico para recurrir.

3. En el presente caso, se impone examinar si la concesión de la apelación es viable, para ello se precisa determinar: i) si concurre legítimamente el recurrente, ii) si la providencia cuestionada es susceptible de apelación y, iii) si el recurso fue propiciado oportunamente.

4. Se valora que las disposiciones del juez de primera instancia que se cuestiona estriban en la negativa del decreto de una prueba por informe y haber corrido traslado del dictamen pericial allegado por la apoderada de la parte demandada dentro de la lid que cursa en el Juzgado 48 Civil del Circuito con radicado 110013103 015 2014 00542 00.

Para esto, es preciso indicar que quien promueve el recurso se haya legitimado para controvertir la actuación, dada la calidad de parte e interés que le asiste en el particular.

Al contrastar el objeto de la queja bajo el rasero de las causales contempladas en el artículo 321 *ejusdem* se anticipa que i) la negación de decretar pruebas esta

prevista como susceptible de apelación y ii) correr traslado del dictamen, por el contrario, es una determinación que no goza de la doble instancia.

5. Del estudio de las decisiones objeto de disenso, se otea que en memorial del 29 de octubre de 2019[5], el apoderado de la parte demandada solicitó librar oficio a todas las entidades aseguradoras que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, con el fin de establecer la vigencia de una póliza de seguro, cuyo beneficiario sea el Conjunto Residencial Caicú, solicitud que fue desestimada y que fue apelada, petición que igualmente fue negada.

En orden, encuentra esta Sala unitaria, que el Juez de primer grado negó el decreto de un medio disuasorio, dejando de lado lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 321 del Código General del Proceso, la cual dispone que la negación de pruebas son susceptibles de apelación, sin que nada advierta sobre la oportunidad, por lo que era viable conceder el recurso de apelación en el efecto devolutivo, motivo por el que este Despacho avocará conocimiento del recurso vertical y se dispondrá comunicar esa determinación al *A-quo*.

6. Frente a lo decidido en el numeral 4º de la providencia del 12 de febrero de 2020, lejos se encuentra de encuadrar la censura, porque conforme a la regla restrictiva[6], toda vez que auto que corre traslado del dictamen que adosó como prueba y del que se corrió traslado es inapelable, pues se haya excluido de los que menciona el artículo 321 del C.G.P. o norma especial.

7. En conclusión, este Tribunal acogerá parcialmente los argumentos esgrimidos por el quejoso, como quiera que fue mal denegado el recurso de apelación en contra del inciso segundo del numeral 1º del auto calendado 12 de febrero de 2020.

---

[5] Folios 153 al 157, del cuaderno principal parte dos, archivo 02, cuaderno juzgado

[6] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Providencia AC3679-2019 del 04 de septiembre de 2019.
"Esa regla de procedencia (restringida) obedece a una razón elemental: solo pueden ser materia de apelación los autos que señale expresamente el legislador, además de las sentencias, siempre y cuando hayan sido dictados en primera instancia (artículo 321, Código General del Proceso), lo que excluye del control ordinario vertical a las providencias emitidas en el decurso de la única y de la segunda instancia."

Respecto de lo decidido en el numeral 4º, hizo bien el Funcionario en negar la apelación, como quiera esa determinación es inapelable.

8. No se impone la condena en costas de que trata el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, al no aparecer causadas, en concordancia con el precepto de la misma norma, en su numeral 8.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Declarar mal denegado el recurso de apelación en contra del inciso segundo del numeral 1º del auto calendado 12 de febrero de 2020, proferido por el Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogotá, D.C.,

Segundo. Admitir el recurso de apelación en contra de la anterior decisión en el efecto devolutivo.

Tercero. Declarar bien denegado el recurso de apelación en contra del numeral 4º del proveído de fecha y origen antes indicado.

Cuarto. Comunicar la presente decisión al Juzgado de origen, y en firme ingresen las presente diligencias a Despacho para resolver lo que en derecho corresponda frente al recurso de apelación anteriormente admitido.

Quinto. Por la secretaría del Tribunal verifíquese el cumplimiento de lo anterior ordenado.

Sexto. No condenar en costas, al no aparecer comprobada su causación.

Notifíquese

Firma electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7a271fbc3261500ddf60f37dbedd026ca21de6f23db612870b3e6a5645ab5eec**
Documento generado en 28/04/2023 12:07:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16318

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Rad. 11001-31-03-015-2017-00004-01

Bogotá D.C. veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Ingresadas las diligencias al despacho, de conformidad con lo normado en el inciso 2º del artículo 12 de la ley 2213 de 2022, se corre traslado por el término de cinco (5) a los apelantes para que sustente los reparos que, de manera concreta formularon contra la sentencia del *a quo*, so pena de declararse desierto.

Vencido el término antes mencionado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Secretaría controle los mencionados términos, para que vencidos, ingrese el expediente al despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
MAGISTRADA

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6e500ca33f5a792d1835663606c5b0ab5240c3a892058023e89a1c8c556d5cae**

Documento generado en 28/04/2023 12:33:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

042 2021 00411 01

Se advierte que en el acta de reparto y en la caratula de esta actuación se indicó erradamente el número de la radicación por cuanto la primera instancia fue tramitada por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá D.C., y no por su homólogo, el 41.

En consecuencia, se ordena a la Oficina de Reparto de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C., que proceda a su inmediata corrección.

CÚMPLASE,

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

(2)

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8bb2caf47272b61403aabec48ad12912d1b8c587b0313b2586264b988b5f38c7**

Documento generado en 28/04/2023 04:46:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

SALVEDAD DE VOTO

Exp. 11001-31-03-001-2021-00333-01

Muy respetuosamente discrepo de la decisión, por las siguientes razones:

a. La primera, porque si es cierto, como lo reconoce la sentencia, que la comunidad no da lugar a la obligación de rendir cuentas -así lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia-, la pretensión del demandante no podía concederse porque, si se miran bien las cosas, fue a partir de esa calidad de comunero que, en ultimas, la Sala y el juez decidieron abrirle paso a la rendición suplicada.

Que ello es así lo evidencia la orden impartida, consistente en presentar cuentas a partir de 18 noviembre de 2014, sólo porque el contrato de compraventa fue celebrado en esa fecha. También del hecho de ser copropietaria la sociedad demandante (Invames), pese a que el demandado, en forma repetida, afirmó que el negocio lo había hecho “con Don Edgar Cifuentes Espejo”. Luego, aunque la sentencia de la que me aparto afirma que la obligación de rendir cuentas no aflora de la comunidad, sino que requiere de un acuerdo previo, termina acudiendo a la fase genética del cuasicontrato, sin que se hubiere probado que hubo una convención especial -en esa época- de la cual surgió el deber de rendirlas. ¿Cuál es la prueba de ese acuerdo? La sentencia no la menciona, porque lo que reconoció el demandado fueron unos hechos vinculados a la producción del vehículo, que es cosa distinta, por cuanto atañe a frutos.

En este punto debo destacar que de la obligación de dividirse los frutos de la cosa común, a prorrata de sus cuotas -según lo establece el artículo 2328 del Código Civil-, no surge la obligación para los comuneros de rendirse cuentas. Ese deber de prestación es consustancial a la comunidad, pero a él no le sigue que si los condueños se distribuyeron frutos, fue porque hubo un acuerdo que impuso la obligación cuyo reconocimiento se hizo en el fallo confirmado. Creo, respetuosamente, que hubo una lamentable confusión en

lo que concierne a la fuente de la obligación: la de dividirse los frutos emana de la ley, no de una convención y, por lo mismo, de aquella no se puede inferir ésta.

b. La segunda, porque la Sala no reparó en que, según las pruebas allegadas, el vehículo sólo fue entregado al señor Ramírez en mayo de 2015. ¿Por qué, entonces, ordenarle que rinda las cuentas desde noviembre de 2014?

c. La tercera, porque si, en gracia de la discusión, se afirmara que el demandado aceptó que estaba obligado a rendir cuentas, también debió admitirse que lo hizo hasta el año 2016, como lo manifestó en su declaración de parte al referirse a la distribución de los frutos. La mayoría de la Sala sostuvo en el fallo que “eso no quedó acreditado para considerar excluido ese periodo”; sin embargo, esta afirmación pasa por alto que la confesión es indivisible, razón por la cual el Tribunal debía aceptarla con las modificaciones y aclaraciones concernientes al hecho confesado (CGP, art. 196).

Debió, entonces, revocarse la sentencia para negar las pretensiones. Como así no se hizo, debo hacer salvedad de mi voto.

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0e4a887827e26ce703499d26b8d7ec567ff79c058af7bd77b7c9b6b0fefd0b2f**
Documento generado en 28/04/2023 04:17:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica